

Universidad Autónoma de Madrid
Facultad de Derecho

Departamento de Derecho Público y Filosofía Jurídica
Área de Derecho Penal



Tesis doctoral

**¿Inoperancia del delito de acusación y denuncia
falsas?**

Estudio sobre la problemática en torno a la falsedad

Presentada por: D^a. Ana Lucía Heredia Muñoz

Director por: Prof. Dr. D. Manuel Cancio Meliá

Madrid, 2017

*A mis padres,
por su amor incondicional.*

Agradecimientos

En primer lugar, debo agradecer a mi Director de tesis, el Prof. Dr. Manuel Cancio Meliá porque desde el primer momento me brindó su apoyo incondicional para el desarrollo de esta tesis. Sus sugerencias y recomendaciones han sido fundamentales para la elaboración de la misma y con ello, la materialización de uno de mis anhelos académicos.

Al Prof. Dr. Luca Luparia Donati quien guio mi estancia de investigación pre-doctoral en la Università degli Studi Roma Tre.

A mis padres por ser mi ejemplo a seguir en el ejercicio de la abogacía, por su integridad, por la confianza depositada en mí, por ser mi soporte en los momentos de duda y por el gran amor que me demuestran siempre. A mis hermanos por el apoyo constante que me han brindado desde el momento en que decidí embarcarme en la aventura de realizar esta tesis doctoral.

Finalmente, a Carlos y a Gerson por la gran ayuda brindada, por los ánimos, por las sugerencias y la paciencia que han tenido conmigo, sobre todo en los últimos meses de desarrollo de la tesis.

LISTA DE ABREVIATURAS

a.C.	Antes de Cristo
art.	Artículo
arts.	Artículos
AAP	Auto de Audiencia Provincial
BOE	Boletín Oficial del Estado
CC	Código Civil
CE	Constitución Española
CENDOJ	Centro de Documentación Judicial
CGPJ	Consejo General del Poder Judicial
coord.	Coordinador
CoPP	Codice di Procedura Penale
CP	Código Penal
d.C.	Después de Cristo
DRAE	Diccionario de la Real Academia Española
Exp.	Expediente
fasc.	Fascículo
inc.(s)	Inciso(s)
INE	Instituto Nacional de Estadística
LECrim	Ley de Enjuiciamiento Criminal
LO	Ley Orgánica
MSPSI	Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad
núm.(s)	Número(s)
p.(p)	Página(s)
RAE	Real Academia Española
REJ	Revista de Estudios de la Justicia
ROJ	Registro Oficial de Jurisprudencia
RN	Recurso de Nulidad
s.	Siglo

ss.	Siguientes
SAP	Sentencia de Audiencia Provincial
STC	Sentencia del Tribunal Constitucional
STS	Sentencia del Tribunal Supremo
t.	Tomo
TC	Tribunal Constitucional
vol.	Volumen
UNIZAR	Universidad de Zaragoza
UNED	Universidad Nacional de Educación a Distancia

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	1
---------------------	---

PRIMERA PARTE:

Consideraciones generales

§ 1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL DELITO DE ACUSACIÓN Y DENUNCIA FALSAS	8
---	---

I.- INTRODUCCIÓN	9
------------------	---

II.- ANTECEDENTES REMOTOS	9
---------------------------	---

III.- LEGISLACIÓN PENAL ESPAÑOLA HISTÓRICA	14
--	----

1. El Fuero Juzgo	14
-------------------	----

2. El Fuero Real	16
------------------	----

3. Las Siete Partidas	17
-----------------------	----

4. La Novísima Recopilación de las leyes de España	21
--	----

5. El Código Penal de 1822	23
----------------------------	----

6. El Código Penal de 1848	26
----------------------------	----

7. El Código Penal de 1870	28
----------------------------	----

8. El Código Penal de 1928	30
----------------------------	----

9. El Código Penal de 1932-----	33
10. El Código Penal de 1944-----	35
IV.- LEGISLACIÓN VIGENTE-----	37
V.- RECAPITULANDO-----	41

§ 2. EL BIEN JURÍDICO PROTEGIDO EN LOS DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA----- 43

I.- CONSIDERACIONES PREVIAS-----	44
II.- CONCEPTOS VINCULADOS A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA-----	45
1. La Justicia-----	45
2. El Poder Judicial-----	51
3. La Potestad Jurisdiccional-----	57
III.- CONCEPTO DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA-----	61
IV.- BIEN JURÍDICO PROTEGIDO EN LOS DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA-----	65
1. Postura estática-----	65
2. Postura dinámica-----	66
3. Postura adoptada-----	71

§ 3. EL BIEN JURÍDICO PROTEGIDO EN EL DELITO DE ACUSACIÓN Y DENUNCIA FALSAS----- 74

I.- CONSIDERACIONES PREVIAS-----	75
II.- UNIOFENSIVIDAD DEL DELITO-----	76
1. Tesis Colectivista: protección exclusiva de la Administración de Justicia-----	76

2. Tesis Individualista: protección exclusiva del honor del sujeto falsamente acusado-----	84
III.- PLURIOFENSIVIDAD DEL DELITO-----	97
1. Tesis de carácter bifronte: protección de la Administración de Justicia y el honor del sujeto falsamente acusado-----	98
2. Tesis de carácter compleja determinable: protección de la Administración de Justicia, el honor de quien fue falsamente acusado y otros bienes jurídicos a determinar en el caso concreto-----	103
IV.- TOMA DE POSTURA-----	105

SEGUNDA PARTE:

La falsedad en el delito de acusación y denuncia falsas

§ 4. LA FALSEDAD TÍPICA EN EL DELITO DE ACUSACIÓN Y DENUNCIA FALSAS-----	114
I.- INTRODUCCIÓN-----	115
II.- LA FALSEDAD DE LA IMPUTACIÓN-----	117
1. Concepciones sobre la falsedad de la imputación-----	118
1.1. Concepción objetivista-----	120
1.2. Concepción subjetivista-----	124
1.3. Concepción mixta-----	129
2. Ubicación de la falsedad de la imputación dentro las categorías de la teoría del delito-----	131
2.1. Dentro de la tipicidad-----	131
2.1.1. Como elemento objetivo del tipo-----	132

2.1.2. Como elemento subjetivo del tipo-----	134
2.1.3. Como elemento objetivo y subjetivo del tipo-----	136
2.2. Dentro de la antijuricidad-----	137
3. Toma de postura-----	138
III.- ASPECTOS PROCESALES DEL TRATAMIENTO DE LA FALSEDAD DE LA IMPUTACIÓN-----	143
 § 5. EL CONOCIMIENTO DE LA FALSEDAD Y EL TEMERARIO DESPRECIO HACIA LA VERDAD-----	 151
I.- CONSIDERACIONES PREVIAS-----	152
II.- EL CONOCIMIENTO DE LA FALSEDAD-----	152
1. Como elemento subjetivo distinto del dolo-----	154
2. Como elemento integrante del dolo típico-----	157
3. Toma de postura-----	160
III.- EL CONOCIMIENTO POSTERIOR DE LA FALSEDAD-----	162
IV.- PRUEBA DEL CONOCIMIENTO DE LA FALSEDAD-----	165
V.- TEMERARIO DESPRECIO HACIA LA VERDAD-----	168
1. Como manifestación de un supuesto de imprudencia-----	171
2. Como expresión de un supuesto de dolo eventual-----	171
3. Toma de postura-----	173
 § 6. ASPECTOS PROCESALES-----	 177
I.- INTRODUCCIÓN-----	178
II.- CONDICIONES DE PROCEDIBILIDAD-----	178
1. Con relación al proceso anterior-----	179

1.1. Sentencia absolutoria firme-----	180
1.2. Auto de sobreseimiento libre o provisional firme-----	183
1.3. Auto de archivo firme-----	189
2. Con relación al inicio del proceso de acusación y denuncia falsas-----	192
2.1. A consecuencia de la deducción de testimonio por parte del Juez o Tribunal-----	196
2.2. A consecuencia de la previa denuncia del ofendido-----	200
 § 7. DERECHO COMPARADO-----	 203
 I.- INTRODUCCIÓN-----	 204
II.- ITALIA-----	204
III.- PERÚ-----	219

TERCERA PARTE:

El delito de acusación y denuncia falsas en la experiencia española.

¿Un delito con poca incidencia?

§ 8. ESTUDIO EMPÍRICO VINCULADO A LOS REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD-----	227
 I.- INTRODUCCIÓN-----	 228
II.- CON RELACIÓN AL PROCESO ANTERIOR-----	229
1. Datos obtenidos respecto a procesos fenecidos en el año 2011-----	230
2. Datos obtenidos respecto a procesos fenecidos en el año 2012-----	236
3. Datos obtenidos respecto a procesos fenecidos en el año 2013-----	241

4. Datos obtenidos respecto a procesos fenecidos en el año 2014-----	246
5. Datos obtenidos respecto a procesos fenecidos en el año 2015-----	251
III.- CON RELACIÓN AL INICIO DEL PROCESO DE ACUSACIÓN Y DENUNCIA FALSAS-----	257
1. Datos obtenidos respecto a procesos fenecidos en el año 2011-----	258
2. Datos obtenidos respecto a procesos fenecidos en el año 2012-----	262
3. Datos obtenidos respecto a procesos fenecidos en el año 2013-----	267
4. Datos obtenidos respecto a procesos fenecidos en el año 2014-----	271
5. Datos obtenidos respecto a procesos fenecidos en el año 2015-----	275
IV.- CONCLUSIONES-----	279
 § 9. PRINCIPALES DELITOS IMPUTADOS FALSAMENTE-----	281
 I.- INTRODUCCIÓN-----	282
II.- POSICIONES DOCTRINARIAS-----	283
III.- ESTUDIO EMPÍRICO-----	287
1. Con relación a procesos fenecidos en el 2011-----	288
2. Con relación a procesos fenecidos en el 2012-----	292
3. Con relación a procesos fenecidos en el 2013-----	295
4. Con relación a procesos fenecidos en el 2014-----	297
5. Con relación a procesos fenecidos en el 2015-----	299
6. Resumen de datos obtenidos-----	301
IV.- ANÁLISIS VALORATIVO-----	303
 § 10. SENTIDO DEL FALLO-----	307
 I.- INTRODUCCIÓN-----	308

II.- CON RELACIÓN A LOS SENTIDOS DE FALLO DE LOS PROCESOS FENECIDOS DURANTE LOS AÑOS 2011-2015-----	309
III.- CON RELACIÓN A LAS ABSOLUCIONES FIRMES DICTADAS-----	311
1. Datos obtenidos respecto a procesos fenecidos en el año 2011-----	312
2. Datos obtenidos respecto a procesos fenecidos en el año 2012-----	318
3. Datos obtenidos respecto a procesos fenecidos en el año 2013-----	322
4. Datos obtenidos respecto a procesos fenecidos en el año 2014-----	325
5. Datos obtenidos respecto a procesos fenecidos en el año 2015-----	329
IV.- ¿INOPERANCIA DEL DELITO?-----	333
 CONCLUSIONES -----	 337
BIBLIOGRAFÍA -----	345
ANEXO -----	376

INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN

La presente investigación tiene por objeto de estudio al delito de acusación y denuncia falsas.

En las últimas décadas se ha producido un boom informativo sobre una supuesta epidemia de denuncias y acusaciones falsas vinculadas, principalmente, a delitos de violencia de género¹.

A nivel doctrinario, este delito ha sido poco estudiado, con lo que las referencias a las supuestas cifras preocupantes de incidencia de denuncias falsas en general y, en específico, en materias como la antes mencionada, carecen de mayor refrendo que las que otorgan la mera percepción del sujeto que emite dicha opinión.

Frente a ideas como ésta, el Estado a través de distintos Grupos de Expertos en sus distintas dependencias ha publicado diversos informes realizados mediante valoraciones estadísticas en los que se sostiene que la incidencia de casos de denuncias falsas sobre supuestos delitos vinculados a la violencia de género es algo residual, es decir, insignificante frente al cúmulo del resto de denuncias emitidas por la comisión de ese tipo de ilícitos.

Así pues, ante la escasa producción científica vinculada a la investigación de este delito y la discrepancia entre el pensamiento colectivo sobre la epidemia de denuncias falsas y

¹ No sólo se ha destacado en los distintos medios informativos una mayor incidencia del delito estudiado sino también de otros delitos contra la Administración de Justicia como el falso testimonio, en donde, tal como ha sostenido Jiménez Gálvez, “las condenas a testigos por falso testimonio se han duplicado, prácticamente, desde inicios de la década”. JIMÉNEZ GÁLVEZ, *Diario El País*, núm. 14544, de fecha 3 de mayo de 2017.

los informes emitidos desde el Estado, surgió en mí el interés de realizar una investigación sobre este delito y su desenvolvimiento en la práctica judicial española.

La elaboración de esta investigación aportará, por primera vez, datos estadísticos desde la perspectiva del delito de acusación y denuncia falsas, lo que permitirá que se observe el verdadero desenvolvimiento de esta figura delictiva en España, al menos, la forma en la que se desarrolló durante el periodo comprendido entre los años 2011 y 2015.

Pues bien, la investigación se ha realizado en dos fases: la primera de ellas, mediante la recopilación de información doctrinaria sobre el delito estudiado y delitos afines, y, la segunda, mediante un análisis estadístico basado en una muestra de 542 sentencias firmes sobre este delito –obtenidas a través del buscador jurisprudencial del CENDOJ– emitidas durante los años 2011 al 2015.

Ambos estudios se encuentran íntimamente vinculados, pues a través del estudio empírico se ha podido confirmar y descartar, en diversos temas, lo que la doctrina sostiene.

El objetivo principal de este trabajo será determinar si en la práctica esta figura delictiva es inoperante en el sistema jurídico debido a la dificultad existente para perseguir este delito o si, por el contrario, existe una verdadera persecución de estas conductas delictivas.

Asimismo, se corroborará si las afirmaciones de la doctrina en cuanto a la admisión de los sobreseimientos provisionales y la perseguibilidad del delito previa denuncia del ofendido han tenido un efecto positivo o no en la práctica.

Y, se expondrán, acorde a los datos obtenidos de la revisión de las sentencias, los grupos de delitos usualmente se suelen denunciar falsamente, ello con el fin de poder comprobar si la inquietud de la sociedad –en cuanto a una supuesta epidemia de denuncia falsas de delitos de violencia de género– tiene algún tipo de asidero, o si, por el contrario, no es más que una especulación.

Para estos fines, se ha dividido la investigación en tres partes.

La primera parte de la tesis, compuesta por tres capítulos, se refiere a aspectos básicos y previos que deben tenerse en cuenta al realizar una primera aproximación a la figura delictiva estudiada.

El primer capítulo aborda un estudio sobre los antecedentes históricos del delito de acusación y denuncia falsas, pues es necesario conocer cómo se perseguía este delito en la antigüedad, sobre todo, en la legislación penal española histórica, visualizando especialmente la forma en la que poco a poco esta figura delictiva va logrando su independencia frente a la calumnia, así como, las modificaciones que ha sufrido la redacción del tipo penal a lo largo de la etapa codificadora.

El segundo capítulo se circunscribe a determinar el contenido del bien jurídico protegido en los delitos contra la Administración de Justicia, para ello, previamente se analizarán conceptos básicos como la justicia, el Poder Judicial, la potestad jurisdiccional, la función jurisdiccional y el concepto de Administración de Justicia que se adopta en este trabajo.

En el tercer capítulo se realiza un estudio sobre el bien jurídico protegido en el delito de acusación y denuncia falsas, se expondrán las posturas doctrinales sobre una posible pluriofensividad u uniofensividad de este delito, y posteriormente, se realizará una toma de postura al respecto.

La segunda parte de la tesis se encuentra compuesta por cuatro capítulos y su eje central gira en torno a la falsedad.

Como se adelantó, en este trabajo no se analizarán todos los aspectos dogmáticos vinculados a éste delito, sino más bien sólo aquellos que constituyen la parte esencial de esta figura delictiva, estos se encuentran referidos a la falsedad –tanto la objetiva como la subjetiva– de la imputación y a los requisitos de procedibilidad exigidos por el art. 456.2 CP.

El cuarto capítulo trata sobre la falsedad típica en el delito de acusación y denuncia falsa, la determinación de su esencia y su ubicación dentro de las categorías de la teoría

del delito. Asimismo, en él se realizan algunas precisiones en cuanto al tratamiento procesal que la falsedad de la imputación.

En el quinto capítulo se completa el estudio del binomio esencial de esta figura delictiva al analizar el conocimiento de la falsedad y el temerario desprecio hacia la verdad. En él, se determinará si el conocimiento de la falsedad es un elemento subjetivo distinto del dolo o si es un elemento integrante del dolo típico, se estudiará también el caso particular del conocimiento posterior de la falsedad y las implicancias que ello conllevaría, asimismo, se mencionarán algunos aspectos básicos a tener en cuenta sobre la prueba del conocimiento de la falsedad. En cuanto al temerario desprecio hacia la verdad, se determinará si éste debe interpretarse como un supuesto de imprudencia o si, por el contrario, como un supuesto de dolo eventual.

El sexto capítulo aborda un estudio sobre las condiciones de procedibilidad requeridas por el art. 456.2 CP, el estudio de estas exigencias es necesario, debido a que su inclusión restringe la posibilidad de persecución por este delito cuando no se cumplen con dichos requisitos. Así, por un lado, se estudia el primer requisito de procedibilidad referido a la exigencia de una sentencia absolutoria firme o autor también firme de sobreseimiento o archivo del Juez o Tribunal que haya conocido de la infracción imputada supuestamente falsamente. Por el otro, se estudia al segundo requisito exigido referido a la deducción de testimonio por parte del Juez o Tribunal cuando detecten indicios bastantes de la falsedad de la imputación y a la posibilidad de persecución de éste delito previa denuncia del ofendido.

El capítulo sétimo, con el que se da fin a la primera fase del estudio de esta tesis, abarca un breve estudio comparado de la regulación española con la italiana y la peruana. La realización de este estudio permitirá observar cómo en estos países se encuentra regulado este delito y las particularidades que poseen cada uno de ellos, para luego poder compararlas en la medida de lo posible con la española.

En la tercera parte de la tesis se plasma la segunda fase de esta investigación, la pragmática, así pues, a lo largo de tres capítulos se intentará aterrizar y contrastar la información obtenida a nivel doctrinario con la realidad.

En el capítulo octavo se realiza un estudio empírico vinculado a los requisitos de procedibilidad, en este capítulo, mediante el apoyo de gráficas se expondrán los datos obtenidos de la evaluación anual de las sentencias estudiadas para determinar aspectos tales como: ¿cuál es el tipo de resoluciones judiciales vinculadas a las causas principales que suelen dar lugar a más incoaciones de procesos penales –que culminen con la emisión de sentencias firmes– por el delito estudiado?, ¿realmente la mayoría de procesos penales instaurados por este delito que culminan con una sentencia iniciaron previa denuncia del ofendido?; entre otras cuestiones más.

En el noveno capítulo se expondrá mediante tablas cuáles son los grupos de delitos que más falsamente se suelen denunciar, claro está, la información obtenida aquí no implica que la mayoría de esos delitos, vistos desde la perspectiva de incoación de procesos penales por sus causas, sean en su mayoría falsas. Por el contrario, teniendo en cuenta que las imputaciones falsas perseguibles por el delito de acusación y denuncia falsas pueden referirse a cualquiera de los otros delitos estipulados en el CP, se parte de la premisa de que del total de denuncias y acusaciones que se producen respecto a todos los delitos contenidos en el CP, sólo un pequeño porcentaje constituyen acusaciones y denuncias falsas.

Finalmente, en el décimo capítulo se intenta incidir en los factores que más conllevan a la absolución por este tipo de delitos, los cuáles básicamente se centran en la dificultad de poder acreditar la falsedad de la imputación y el conocimiento que de aquella tenía el sujeto.

De este modo, mediante esta tercera parte se proporcionan datos objetivos en torno al delito estudiado, los cuáles permitirán que cada persona pueda por sí sola realizar una valoración de los mismos, pudiendo claro está, discrepar ésta de la realizada por la autora en esta investigación.

PRIMERA PARTE:

Consideraciones generales

**§ 1. ANTECEDENTES
HISTÓRICOS DEL DELITO DE
ACUSACIÓN Y DENUNCIA
FALSAS**

I.- INTRODUCCIÓN

Entender la dinámica actual de la persecución de una determinada conducta delictiva exige a veces la revisión de las regulaciones que le antecedieron. Este es el caso del delito de acusación y denuncia falsas, pues es necesario remitirse a los orígenes de punición de esta conducta ilícita –en general, y particularmente en España– para poder comprender a cabalidad la esencia de lo reprochable de este delito.

En este capítulo no se pretende realizar un estudio escrupuloso de corte histórico, pues éste no es su objetivo, sino más bien, se harán referencias a los antecedentes remotos más importantes vinculados al delito estudiado y a la legislación española derogada.

De la revisión de los antecedentes históricos del delito estudiado se obtendrán herramientas que permitirán, entre otras cosas: i) intuir el bien jurídico protegido en este delito –a tratar en el tercer capítulo–, y, ii) comprender la independencia entre el delito de calumnia y el delito de acusación y denuncia falsas.

II.- ANTECEDENTES REMOTOS

El nacimiento de la persecución del delito de acusación y denuncia falsas va de la mano con el de la calumnia, ya que ambos delitos nacen de un mismo tronco normativo, pero como se verá a lo largo del trabajo, cada figura delictiva tiene sus propios matices, pudiendo diferenciarse en la actualidad claramente a cada una de dichas conductas delictivas, sin dejar, claro está, aquel lazo de familiaridad que las vincula.

El antecedente histórico más remoto de la sanción de este tipo de conductas se remonta al Código de Hammurabi², en él se estipulaba que: “Si alguno en juicio se presenta como testigo acusador y no prueba lo que ha dicho, si el juicio es de pena capital, debe ser muerto”³.

² MAQUEDA ABREU, *Acusación y denuncia falsas*, p. 11.

³ MORALES ANDRADE, *El delito de acusación o denuncia calumniosa*, p. 14. Sobre el particular, cabe indicar que existen diversas traducciones de este Código, con lo cual, la traducción del contenido de cada ley varía un poco en cada una de ellas. Así pues, en la versión de este Código disponible en la página web de la UNIZAR, se señala que en la ley 1 se estipuló que: “Si un hombre acusa a otro y le

De dicha norma puede extraerse que lo que se buscaba sancionar no era estrictamente una acusación falsa sino más bien, una acusación no probada. Es importante destacar este aspecto, ya que una acusación no probada puede ser así porque a pesar de ser fundada en hechos verdaderos, estos no han sido probados, o, porque los hechos imputados al ser falsos no han podido ser acreditados; mientras que, una acusación falsa lo será así porque los hechos imputados son falsos.

Al castigarse la improbidad de la acusación que versaba sobre hechos que fueran sancionados con la pena capital se pretendía obtener un efecto disuasivo contra la realización de acusaciones falsas. Esta solución en contra de ese tipo de acusaciones traía aparejada a su vez dos consecuencias perjudiciales: la posibilidad de castigo de acusadores que no faltaron a la verdad pero que no pudieron probar su acusación, y, un desincentivo de formular acusaciones verdaderas por temor a no poder acreditarlas.

Ya en el Derecho romano –a fines de la monarquía e inicios de la república romana–, se produjo una especie de cambio del criterio antes mencionado mediante el incentivo a los ciudadanos de formular acusaciones permitiéndoles, sin necesidad de que existiese un motivo particular, la posibilidad de poder entablar acusaciones contra los presuntos culpables de delitos⁴.

El objetivo de la potestad otorgada era que las personas pudieran contar con un instrumento eficaz para la corrección de las costumbres, siendo cada quién un censor de su prójimo y fiscal acusador de sus delitos⁵.

Asimismo, cabe señalar, tal como lo ha expresado MOMMSEN, que las acciones penales presentadas ante el pretor de las *quaestiones* eran admitidas obligatoriamente,

imputa un asesinato pero no puede probarlo, su acusador será ejecutado”. Como es de observarse, esta disposición legal –cuya traducción de otros autores, FRANCO, *Revista de Ciencias Sociales*, vol. VI, núm. 3, 1962, p. 335, hace referencia al castigo que merece una persona cuando lanza un maleficio sin motivo alguno- no hace referencia propiamente a una acusación falsa sino más bien a una improbada. Véase: UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA, *Código de Hammurabi. Basada en la ed. de Joaquín Sanmartín, Trotta, Barcelona, 1999*, <http://www.unizar.es/hant/POA/hammurabi.pdf>.

⁴ Al respecto: DE CASTRO-CAMERO, *El crimen maiestatis a la luz del senatus consultum de Cn. Pisone Patre*, p.155.

⁵ MORALES ANDRADE, *El delito de acusación o denuncia calumniosa*, p. 17.

verificando únicamente el cumplimiento de los requisitos legales, no analizando si el contenido de la acusación carecía de sustrato o no⁶.

Así pues, para los romanos de ese entonces el acto de acusar no era mal visto, sino más bien era de cierta forma algo positivo, tan es así que se les elogiaba, otorgándoles inclusive unos incentivos o recompensas que podían verse representados en la posibilidad de que el acusador obtuviera parte de los bienes del condenado⁷.

Por su parte, en la Antigua Grecia –más precisamente en el 399 a. C.– tuvo lugar en Atenas uno de los primeros procesos de los que se tiene referencia que se produjeron en base a una acusación falsa, el famoso proceso contra Sócrates.

Sus acusadores –Meleto, Ánito y Licón– presentaron una acusación cuyo tenor era solicitar el castigo a Sócrates por corromper a los jóvenes y no creer en los dioses reconocidos por el Estado sustituyéndolos por seres demoníacos, pidiendo por la comisión de ese delito la imposición de la pena de muerte⁸.

Ante ello, Sócrates comenzó la intervención en el juicio que se instauró en su contra manifestando que él no solamente creía en los dioses sino que además, en su vida personal y pública obedecía a un mandato directo del mismo Apolo, el cual era promover el perfeccionamiento de los ciudadanos fomentando las virtudes de moderación, solidaridad social y trabajo⁹.

De esta forma, el ilustre filósofo se defendió de las acusaciones de impiedad y procuró poner de manifiesto el posible delito de acusación falsa cometido por Meleto, destacando la gravedad de este hecho de la siguiente manera:

“Dice Meleto que cometo delito por corromper a los jóvenes. Pues yo, atenienses, acuso a Meleto de cometer delito por tomar a broma asunto tan serio... para mí constituye un

⁶ MOMMSEN, *Derecho Penal Romano*, t. I, p. 229.

⁷ MORALES ANDRADE, *El delito de acusación o denuncia calumniosa*, pp. 16-17.

⁸ PLATÓN, *Obras completas*, p.44. Debe destacarse que la impiedad –el no creer en los dioses– era delito en la Grecia clásica. Véase: ROPERO CARRASCO, *Abusar de la Justicia. Dimensión del actual delito de acusación y denuncias falsas*, pp. 27-29.

⁹ Al respecto, véase: MARTÍNEZ HUERTA, *Ética con los clásicos*, p.79.

mal mucho mayor lo que Meleto está haciendo ahora: intentar que condenen a muerte a un hombre injustamente”¹⁰.

Lastimosamente, como se sabe, el proceso culminó con la condena del filósofo y su muerte subsecuente bebiendo cicuta.

De esta manera, este proceso, además de ser un claro ejemplo de la utilización abusiva de la justicia con fines políticos, nos sirve para ilustrar como señala ROPERO CARRASCO “las principales cuestiones, éticas y jurídicas, que se suscitan cuando se intenta perfilar la línea que separa el recurso legítimo a la administración de justicia del uso torticero y, por tanto, ilegítimo”¹¹.

Posteriormente, a mediados del s. I a. C. en Roma, se produjo un discreto avance en la persecución de estas conductas, ya que se empezó a castigar la acción consistente en acusar con falsedad a otro de un crimen, pero limitando el castigo a los casos en los que el sujeto hubiese obrado con dolo, no siendo relevante la acusación temeraria. Esta conducta era castigada mediante la ley *Remmia*, la cual permitía aplicar al calumniador la misma pena que debía de haberse impuesto al acusado si hubiera hallado culpable del delito falsamente imputado¹², esto claramente era un sistema talionar¹³, al que además de la pena antes mencionada, la acompañaba también la imposición de una marca en forma de K en la frente del falso acusador, la cual simbolizaba la palabra “*Kalumnia*”¹⁴.

Con los Edictos de Teodorico¹⁵ (s. VI d. C.) y Rotario¹⁶ (s. VII d. C.), así como también con las Capitulares de Carlomagno¹⁷ (s. VIII d. C.), se incluye a la acusación falsa

¹⁰ ROPERO CARRASCO, *Abusar de la Justicia. Dimensión del actual delito de acusación y denuncias falsas*, p. 30.

¹¹ ROPERO CARRASCO, *Abusar de la Justicia. Dimensión del actual delito de acusación y denuncias falsas*, pp. 28-29.

¹² FERRER SAMA, en *Homenaje a D. Nicolás Pérez Serrano*, t. II, pp. 335-336.

¹³ GARCÍA SOLÉ, *El delito de acusación y denuncia falsas*, p. 24.

¹⁴ CANTARERO BANDRÉS, *Administración de justicia y obstruccionismo judicial*, p. 16. Sobre la imposición de esta última pena, cabe señalar que en opinión de Mommsen, no existe prueba de que en Roma se aplicase dicha pena, indicando que, a su entender esa pena no encaja bien con el sistema romano, ya que las penas corporales tenían más bien un carácter de represión extraordinaria. Por ello, presume que la marcación prescrita por la ley *Remmia* –en caso de haberse aplicado– debió de haber caído muy pronto en desuso por la práctica de los tribunales. MOMMSEN, *Derecho Penal Romano*, t. I, pp. 312-313.

¹⁵ Entre otras disposiciones, en el capítulo 50 del Edictum Theoderici se estipula que: “*Ocultis secretisque delationibus nihil credi debet: sed eum qui aliquid defert, ad iudicium venire convenit; ut*

dentro del área de la “injuria”, lo cual denota que para los romanos este tipo de conductas poseían un carácter manifiesto de atentado contra el honor¹⁸.

Finalmente, dentro de este apartado, cabe destacar que en el Derecho canónico también existieron pronunciamientos en torno a la conducta estudiada. Así pues, a través de una Decretal de Inocencio III¹⁹ (s. XIII d. C.), se produjo un endurecimiento en la persecución de estas acciones, ya que antes de ella se requería que el sujeto hubiese actuado con dolo –ello independientemente de los fines que haya intentado alcanzar mediante la imputación falsa–, ampliando el castigo como calumniador a aquellos casos en los que un sujeto acusase a otro por hechos no cometidos, haciéndolo sobre meras

si quod detulit, non potuerit adprobare, capitali subiaceat ultioni.”, es decir, que las acusaciones secretas y ocultas no deben gozar de credibilidad, indicando a su vez que, si el sujeto no pudiera probar la acusación criminal realizada ante el juez, se le podrá castigar con la pena capital. Cabe mencionar que, en este dispositivo legal, lo que se sancionaba no era propiamente una acusación falsa sino más bien una improbada, la cual como se ha expuesto, puede tener su origen en hechos verdaderos o falsos. Al respecto, *in extenso*: LAFFERTY, *Law and society in the age of Theoderic the Great. A study of the Edictum Theoderici*, p. 101 y ss.

¹⁶ Sobre el particular, la ley 9 del Edictus Rothari, estipula que: “*Si quis qualemcumque hominem ad regem inculaverit quod animae pertineat periculum, liceat ei. qui accusatus fuerit, cum sacramentalibus satisfacere et se eduniare. Et si tales causa emerit et adest homo in praesenti, qui crimen mittat, liceat eum per camphionem, id est per pugnam, crimen ipsum de super se, si potuerit, eicere. Et si ei provatum fuerit, aut det animam, aut qualiter regi placuerit componat. Et si provare non potuerit, et cognoscitur dolosae accusassit, tunc ipse, qui accusavit et probare non potuit wergild suo componat, medietatem regi, et medietatem cui crimen iniectum fuerit*”. En este dispositivo legal se hace expresamente referencia a la expresión acusación dolosa. BLUME, *Edictus Ceteraeque Langobardorum Leges*, p. 14.

¹⁷ En la disposición IV del item uni supra de la Capitulare Triplex Anni DCCCVIII se estableció que: “*Ut nullus se periurare paesumat. El si fecerit, sicut in anterioribus Capitulis madatum, est, manum perdat aut redimat, Et hoc ómnibus adnuntiatum fiat, quid periurium aut falsum testimonium noceat*”; su traducción es aproximadamente la siguiente: “Que nadie cometa perjurio; si lo hiciere, pierda su mano o repare la falta, según lo ordenado en los artículos precedentes. Y a todos se les hará conocer qué daños les puede causar el perjurio y el falso testimonio”. CARLOMAGNO, *Las Capitulares de Carlomagno*, p. 52.

¹⁸ FERRER SAMA, en *Homenaje a D. Nicolás Pérez Serrano*, t. II, p. 336.

¹⁹ Algunas disposiciones del Derecho canónico referidas a la acusación calumniosa pueden encontrarse en el Corpus Iuris Canonici, un ejemplo de ellas se encuentra en el Título II del Libro V de la Decretal de Gregorio IX. En él, en el capítulo II se ha establecido que: “*Quum dilectus filius, magister scholarium Palentinus, ad sedem apostolicam accessisset, et de suo episcopo excessus varios nunciasset, examinationem commisimus excessuum obiectorum. Quum autem processum negotii examinaverimus diligenter, nec intelligere potuerimus, probatum esse sufficienter aliquid de praedictis, eundem episcopum absolvendum decernimus ab obiectis, vobis mandantes, quatenus memoratum magistrum scholarum, donec canonice suam purgaverit innocentiam, scilicet quod non calumniandi animo ad huiusmodi crimina proponenda processit, ab officio et beneficio suspendatis, ut ceteri, simili poena perterriti, ad infamiam suorum facile non prosiliant praelatorum*”. IGLESIA CATÓLICA, *Corpus Iuris Canonici*, vol. II, p. 712.

presunciones²⁰, es decir, se castigaba ya no sólo la conducta dolosa sino también la conducta “negligente”.

III.- LEGISLACIÓN PENAL ESPAÑOLA HISTÓRICA

El delito de acusación y denuncia falsas se ha castigado en España desde sus regulaciones más antiguas.

A continuación, se expondrá la forma en la que ha sido recogida la figura delictiva estudiada en los distintos dispositivos legales que ha tenido este país hasta antes de la entrada en vigencia del CP de 1995.

1. El Fuero Juzgo

En España, a mediados del s. VII d. C. regía el Libro de los Jueces, conocido como Fuero Juzgo.

En él, en la Ley 2 del Título I del Libro VI se preveía el castigo para la acusación falsa en los siguientes términos:

“Si en las cosas criminales non fueren meyoradas por algún recabdo, la maldat de los pecadores non seria refrenada, e por ende, si alguno quisier acusar a dalgun ome de nostra Corte, que fiziera alguna nemiga contral Rey, o contral pueblo, o contra la tierra, o omecio, primeramiente saba si lo podrá probar e depois lo pode acusar, e si lo podier probar, faga un escripto con tres testimonios, que meta so corpo a tal pena, como deve receber aquel a quien el acusa, si lo non pudier probar. Esi deve ser tormintado aquel que es acusado; ca si depoys salir de culpa aquel que lo acuso deve ser so siervo, assi que le non de morte, e faga del lo que quisier.”²¹.

Así pues, mediante dicha ley se impone a las personas una especie de deber de diligencia al momento de interponer una acusación en contra de alguien, ya que se les invocaba a que primero analizasen si podían probar la acusación para posteriormente recién poder acusar. Incluso, mediante dicha norma se establecía que las personas que formularan acusaciones contra otros, en caso

²⁰ FERRER SAMA, en *Homenaje a D. Nicolás Pérez Serrano*, t. II, p. 336.

²¹ VILLADIEGO VASCUÑANA Y MONTOLYA, *El Libro de los Jueces o Fuero Juzgo*, pp. 250-251.

de no poder probar su acusación, iban a ser sometidas a las mismas sanciones que deberían haberle sido impuestas al acusado, en caso de que se hubiese comprobado la realización de los hechos imputados.

Como es de observarse, la norma transcrita no hace referencia propiamente a un supuesto de acusación o denuncia falsa, sino más bien a uno de acusación improbadada, la cual, como se ha sostenido, no necesariamente implicaba que la acusación hubiese sido fundamentada en hechos falsos²².

Esta predilección por hacer referencia a acusaciones improbadadas y no acusaciones falsas es una constante en la etapa precodificadora –es decir, antes de la dación del primer CP español–.

Ahora bien, a pesar de reconocer la amplitud del término acusación improbadada frente a la acusación o denuncia falsa, para efectos didácticos –en lo concerniente a la mencionada etapa– se asimilarán en cierta medida ambos términos.

Asimismo, cabe resaltar que, en este cuerpo legal se estableció en la Ley 5 del Título I del Libro VII una referencia sobre la prueba de la inocencia del acusado de la siguiente manera:

“Si algun ome es acusado de furto, o que dio erbas, o venino a beber, o dotras tales cosas, el que acusa vaya antel señor, o antel juyz de la tierra que lo pesquira, e saba el fecho; e pois que lo sobier mandelo prender. E si la cosa es tal que non deve prender morte, fagal fazer emenda a aquel cuya era la cosa que furto, o a quien fizo el mal. E si non ouier onde faga emenda sea so servo daquel a quien lo fizo. E si se podier purgar sea quito, e aquel que lo acuso sofra la pena e el dano que este deuie recibir, si el pecado le fuesse probado por verdat. Mas el juez non debe penar nengun ome en ascuso, non lo deve penar ante quel fecho sea probado por algunas pruebas, o ante que aquel quel acusa meta su corpo a tal pena como aquel que es acusado debe recibir sil podier ser provado. E assi deve ser tormentado”²³.

²² Una acusación o denuncia falsa es aquella que encuentra su sustento en hechos falsos –esta condición se estudiará ampliamente en el cuarto y quinto capítulo del trabajo–, siendo de esta forma, el eje central de la conducta la falsedad del hecho, mientras que, una acusación improbadada tiene su eje en el aspecto probatorio de la acusación y no en los hechos imputados.

²³ VILLADIEGO VASCUÑANA Y MONTROYA, *El Libro de los Jueces o Fuero Juzgo*, p. 290.

Entre otras cosas, de dicha norma se desprende que, en caso de que el acusado demostrase su inocencia, el acusador sufriría las penas que aquél debía de haber sufrido en caso de que se hubiese acreditado la comisión de lo imputado, con lo que se continúa con la aplicación de un sistema talionar²⁴.

De esta forma, en virtud de las disposiciones antes trascritas, puede apreciarse que no existe un concepto genérico de acusación y denuncia falsa, ya que lo que se recoge en la norma son más bien las condiciones que debe tener en cuenta el acusador para realizar una acusación y las consecuencias que se derivarían del supuesto en que se comprobase la inocencia del acusado²⁵.

Para autores como APARISI MIRALLES, con el castigo de esta conducta lo que se intentaba era salvaguardar los intereses del “falsamente” acusado en detrimento de la recta Administración de Justicia, ya que –a su parecer–, lo que se buscaba con la persecución de esta conducta era evitar que las denuncias o acusaciones falsas produjeran daños en el honor, el patrimonio o la vida de las personas²⁶.

2. El Fuero Real

En el año 1255 se dictó el Fuero Real o el Fuero de las Leyes, en él, en el Título XX del Libro IV, se estipuló todo lo concerniente a las acusaciones y pesquisas.

En la Ley 7 se consignó que:

“Si el acusador no pruebe, haya la pena que habría el acusado si aquel probase”²⁷.

²⁴ MILLÁN GARRIDO, *Revista de Información Jurídica*, núm. 317, 1973, p. 16.

²⁵ APARISI MIRALLES, en *Estudios Jurídicos en memoria del profesor Dr. D. José Ramón Casabó Ruiz*, vol. I, p. 94.

²⁶ APARISI MIRALLES, en *Estudios Jurídicos en memoria del profesor Dr. D. José Ramón Casabó Ruiz*, vol. I, pp. 94-95.

²⁷ DE LA REGUERA VALDELOMAR, *Extracto de las Leyes del Fuero Real*, p. 318.

Al igual que con la normativa anterior, mediante la aplicación de un sistema talionar, se castigaba al sujeto que realizaba acusaciones que posteriormente quedaban improbadadas.

Sin embargo, la gran diferencia existente entre ambas regulaciones radicaba en la forma en la que dentro del texto punitivo se recogió el castigo a la mencionada conducta, y es que, la redacción del Fuero Real evitaba caer en el casuismo que caracterizaba a la regulación establecida en el Fuero Juzgo²⁸, consignando en una sola ley el castigo a recibir cuando no se lograra probar la acusación, mientras que, con la regulación anterior se mencionaba en distintas disposiciones el modo de proceder según el delito acusado.

De esta forma, puede observarse que con esta norma se produjo un avance importante, ya que al haberse simplificado su redacción se facilitó su comprensión y permitió a su vez, la identificación más clara de este tipo de conducta como un delito autónomo.

3. Las Siete Partidas

La regulación que se dio después del Fuero Real fue la de “Las Siete Partidas”. Ésta fue dictada por el rey Alfonso X “el Sabio” y tuvo gran influencia romana.

En la Séptima Partida, dedicada al Derecho penal y procesal penal, además de establecer el derecho que poseían todos los sujetos de poder acusar –salvo aquellos que se encontrasen dentro de las excepciones contenidas en la ley 2 del Título I–, estipulaba también, la forma en la que debía proceder el juzgador en ciertos supuestos en los que la acusación no pudiera probarse.

²⁸ APARISI MIRALLES, en *Estudios Jurídicos en memoria del profesor Dr. D. José Ramón Casabó Ruiz*, vol. I, p. 95.

Así, en la Ley 20 se estipuló que:

“Acusando un hombre a otro, diciendo que había hecho falsa la moneda del rey aunque no lo pueda probar, decimos que no debe tener pena por lo tanto, y esto mandamos, porque los hombres por miedo de pena, no dejan de acusar por tal error como este. Porque es cosa que podría acontecer daño a todos. Y por lo tanto tenemos por bien, que cada habitante del pueblo pueda acusar a tales falsificadores sin miedo de pena, porque no pueden ser encubiertos en ningún lugar”²⁹.

Como es de observarse, esta norma establecía la impunidad de las acusaciones por falsedad de moneda que quedasen improbadas. Siendo ello así, se entiende a tenor de la norma, que era preferible que los ciudadanos pudieran acusar a otros de la comisión de una falsificación de moneda, aun cuando esas acusaciones quedaran improbadas, a que evitarán acusar por miedo a una sanción en el caso de que éstas quedasen improbadas.

Por su parte, la ley 21 planteaba dos formas de proceder ante una acusación improbada de homicidio –por envenenamiento o lesiones que causaron la muerte– atendiendo a las características que reunía el heredero-acusador, de la siguiente manera:

“Quejándose alguno, diciendo que algún hombre le diera a comer o a beber hierbas o le dieron heridas por las que murió, ya lo diga en su testamento o de otra manera públicamente ante testigos, si aquel que es establecido por heredero de aquel que el finado nombró que se trabajara de su muerte poderlo allí hacer, aunque fuera extraño. Y si por casualidad, no pudiera probar la muerte, no le deben por lo tanto dar ninguna pena, Pero si el que hace el testamento no nombrara a aquel que se trabajara de su muerte, si el heredero no fuera pariente del finado y quisiera acusar alguno de muerte del que lo hiciera su heredero, lo puede allí hacer, pero si no lo pudiera probar caería en la pena que caería el acusado, si le fuese probada la muerte por lo que lo acusaron”³⁰.

De esta forma, si la sindicación inicial partía del sujeto muerto –mediante un testamento o de otra manera pública– y la acusación era llevada a cabo por su heredero, se consideraba que no era punible la acusación del heredero-

²⁹ COLEGIO DE NOTARIOS DEL ESTADO DE JALISCO, *Las siete partidas de Alfonso el sabio: Séptima Partida*, p. 46.

³⁰ COLEGIO DE NOTARIOS DEL ESTADO DE JALISCO, *Las siete partidas de Alfonso el sabio: Séptima Partida*, p. 46.

acusador en caso de que ésta quedase improbada. Mientras que, si el muerto no hubiese realizado ningún tipo de sindicación inicial en vida sobre el posible responsable de su eventual muerte y el heredero–acusador no fuese un familiar, podía este último acusar a otro por la muerte de aquél, pero con la salvedad de que, si su acusación quedase improbada, sufriría la pena que debía haber sufrido el acusado en caso de que hubiese sido acreditada su responsabilidad en la muerte imputada.

En ese sentido, la impunidad de la acusación improbada en la norma antes descrita no era plena, sino más bien, se circunscribía al cumplimiento de ciertos requisitos, los cuales en caso de no concurrir hacían merecedor al acusador de la misma pena que debería de haberse impuesto al acusado en caso de haberse probado la acusación –lo cual constituía un rezago del sistema talionar–.

Finalmente, la última disposición normativa a estudiar vinculada a nuestro objeto de estudio es la ley 26, la cual establece que:

“La persona del hombre es la más noble cosa del mundo, y por lo tanto decimos que todo juzgador que tuviera a conocer de tal pleito sobre que pudiese venir muerte o pérdida de miembro, que debe poner guarda muy ahincadamente que las pruebas que recibiere sobre tal pleito, que sean leales y verdaderas y sin ninguna sospecha, y que los dichos y las palabras que dijeren firmando, sean ciertas y claras como la luz de manera que no pueda sobre ellas venir ninguna duda. Y si las pruebas que fuesen dadas contra el acusado no dijeren, y atestiguaran claramente el error sobre que fue hecha la acusación, y el acusado fuera hombre de buena fama lo debe el juzgador quitar por sentencia. Y si por casualidad, fuese hombre mal difamado y además por las pruebas fallase algunas presunciones contra él, bien lo puede entonces hacer atormentar de manera que pueda saber la verdad de él. Y si por su conocimiento, ni por las pruebas que fueron presentadas contra él no lo hallare culpable de aquel error sobre que fue acusado, lo debe dar por libre y dar al acusador aquella misma pena que daría al acusado; excepto si el acusador hubiese hecho la acusación, sobre agravio que a el mismo fuese hecho o sobre muerte de su padre, de su madre o de su abuelo, de su abuela o bisabuelo o sobre muerte de su hijo o de su hija o de su nieta o de su bisnieta o sobre muerte de su hermano o de su hermana o de su sobrino o de su sobrina o de los hijos o de las hijas de ellos. Eso mismo sería, si el marido acusase a otro por razón de muerte de su mujer o ella hiciese acusación de muerte de su marido. Porque, aunque no la probase no le deben dar ninguna

pena en el cuerpo, porque estos a tales se mueven con derecha razón y con dolor a realizar estas acusaciones y no maliciosamente”³¹.

La norma en comentario, entre otras cosas, estableció que en caso de no encontrarse acreditada la acusación –que de serlo conllevaría a la imposición de la pena de muerte o pérdida de un miembro–, se le debía imponer al acusador la misma pena que debía de haberse impuesto al acusado de haberse acreditado la acusación, con la excepción de aquellas acusaciones formuladas por familiares de los difuntos, ya que se establecía que en esos casos la acusación improbadada no era sancionable, pues de cierta forma, se presuponía la falta de malicia, entendiendo que su accionar se encontraba gobernado por la derecha razón y el dolor ocasionado por la muerte de su familiar.

Así, esta norma estableció dos formas distintas de proceder en función de las cualidades de las personas que formulaban las acusaciones.

En resumen, como es de apreciarse, en cuanto a la claridad de la redacción de las normas, con este cuerpo normativo hubo un retroceso en comparación con la regulación anterior, pues se volvió a caer en un casuismo excesivo, recogiendo de manera confusa la forma en la que debía proceder el juez en el caso de encontrarse ante acusaciones improbadadas, castigando unas veces al acusador y otras no³².

De esta manera, se tenían dos formas de proceder ante una acusación improbadada. La primera de ellas era castigando al acusador con la pena del talión, es decir, con la pena que debería haber tenido el acusado si el hecho hubiese sido probado, mientras que, la segunda, al tener en cuenta las condiciones que concurrían en el imputador, estipulaba que aun cuando se encontrase improbadada la acusación, no debía de imponérsele pena alguna.

³¹ COLEGIO DE NOTARIOS DEL ESTADO DE JALISCO, *Las siete partidas de Alfonso el sabio: Séptima Partida*, pp. 49-50.

³² Así también lo ha comentado Morales Andrade, al señalar que: “[u]n sector de la doctrina llega a sostener que esta regulación debido a su excesivo casuismo constituyó un retroceso para este delito, convirtiéndose esta regulación en algo de cierta forma gaseoso”. MORALES ANDRADE, *El delito de acusación o denuncia calumniosa*, p. 30 .

4. La Novísima Recopilación de las leyes de España

En las Leyes IV y VI del Título VI del Libro XII de la Novísima Recopilación de las leyes de España se estipulaban las sanciones a imponerse a los delatores y testigos falsos, del siguiente modo:

Ley IV:

“Quando se probare, que algun testigo depuso falsamente contra alguna persona o personas en alguna causa criminal, en la qual, si no se averiguase su dicho ser falso, aquel ó aquellos contra quien depuso merecian pena de muerte, ó otra pena corporal; que al tal testigo, averiguándose como fué falso, le sea dada la misma pena en su persona y bienes, como se le debiera dar á aquel ó aquellos contra quien depuso, seyendo su dicho verdadero, caso que en aquellos, contra quien depuso, no se execute la tal pena, pues por él no quedó de dársela; la qual mandamos, que se guarde y execute en todos los cielos de qualquier qualidad que sean: y en las otras causas criminales y civiles mandamos, que contra los testigos, que depusieren falsamente, se guarden y executen las leyes de nuestros Reynos que sobre ello disponen”³³.

Ley VI:

“Experimentándose con reparable frecuencia la facilidad de incurrir en la exêcrable maldad de hacer falsas delaciones, y ser testigos contra la verdad, de que resulta á muchos inocentes la molestia, tal vez de dificultosa reparación en la honra, vida y hacienda, en ofensa, descrédito y escándalo de la justicia, que debo y deseo se distribuya y administre en mis Reynos y dominios, como principal obligacion que con la Corona ha puesto Dios á mi cargo; y reconociendo, que estos enormes y perniciosos abusos proceden de no practicarse con el vigor y puntualidad que conviene las penas prescritas y establecidas en las leyes, alentando la rara ó templada experiencia del castigo á la osadía, y á la temeridad de atropellar lo sagrado del juramento, y la inocencia descuidada en su propia seguridad; he resuelto, que con la mas rigurosa exactitud y observancia se executen las leyes, que hay contra testigos falsos y falsos delatores, en todo género de causas así civiles como criminales sin ninguna dispensacion ni moderacion. Tendrase entendido en el Consejo y Cámara para su exacta y puntual observancia; la qual encargo a su cuidado, con la especialidad que requiere materia de tanta gravedad y consecuencias; y que a las partes que conviniere, haga se participe esta mi Real orden para su indispensable y entero cumplimiento”³⁴.

³³ NOVÍSIMA RECOPIACIÓN DE LAS LEYES DE ESPAÑA, t. IV, p. 531.

³⁴ NOVÍSIMA RECOPIACIÓN DE LAS LEYES DE ESPAÑA, t. IV, p. 532.

De las prescripciones legales antes transcritas puede desprenderse que por primera vez se hace referencia expresa a las falsas delaciones³⁵, dejando de lado el empleo de la expresión acusación improbada, significando ello un progreso en cuanto a la identificación de la conducta mencionada como un delito autónomo que castiga una conducta manifiestamente dolosa.

Sobre el castigo de este tipo de conductas, se optó por continuar con el sistema talionar, lo cual hizo que dicha regulación no presentase algún tipo de innovación que representase un avance en cuanto a la persecución de la conducta delictiva objeto de nuestro estudio³⁶.

Partiendo del dato de la codificación, puede identificarse que con este cuerpo normativo se produjo un corte en la evolución histórica del delito de acusación y denuncia falsas, ya que a partir de la dación del primer Código Penal español se logró un avance en el recogimiento de esta figura delictiva y un desapego del sistema talionar con el que se venían sancionando este tipo de conductas.

Por ello, siguiendo a DÍAZ PITA se considera pertinente destacar –a modo general– algunos aspectos relevantes sobre la regulación de la conducta delictiva que se tenía en la etapa precodificadora:

- a) el casuismo manifiesto existente en los textos legales antes comentados –salvo el caso del Fuero Real– que dificultaba la comprensión de la conducta sancionada, pues dependiendo de algunas condiciones de las personas “acusadoras” se podía sancionar o no;
- b) la falta de definición de los conceptos de acusación y denuncia falsas, pues se prefería hacer referencia a expresiones como acusación improbada; y,

³⁵ Esa expresión también puede ser usada para hacer referencia al término acusación falsa.

³⁶ APARISI MIRALLES, en *Estudios Jurídicos en memoria del profesor Dr. D. José Ramón Casabó Ruiz*, vol. I, p. 97.

- c) la aplicación del sistema talionar, al prescribir imponer a los acusadores las sanciones que debían corresponderles a los sujetos que fueron acusados injustamente en caso de determinarse su culpabilidad respecto de las imputaciones realizadas³⁷.

5. El Código Penal de 1822

El inicio de la etapa codificadora se dio con el primer CP español. Éste fue decretado por Las Cortes el 8 de junio de 1822 y, sancionado por el Rey –Fernando VII– y mandado a promulgar el 9 de julio del mismo año.

En él, en los arts. 429 a 431 –ubicados al comienzo del Capítulo VII “De los acusadores, denunciadores y testigos falsos; de los perjurios, y demás que en juicio u oficialmente falten a la verdad” del Título V “De los delitos contra la fe pública”– se regula la acusación y denuncia falsa señalando respectivamente lo siguiente:

“Art. 429º.– Cualquiera que en juicio acuse a otro de algún delito o culpa, no pruebe completamente su acusación, aunque no resulte en ella malicia, será condenado no solamente a las costas, daños y perjuicios, sino a tanto tiempo de prisión como el que haya sufrido en ella el acusado. Pero si la acusación no probada resultare falsa y calumniosa, el acusador será infame por el mismo hecho, sufrirá la propia pena que se impondría al acusado si fuere cierta la acusación, y no podrá volver a ejercer el derecho de acusar sino en causa propia. Este artículo comprende a los fiscales, promotores fiscales y demás que por razón de su empleo ejerzan el cargo de acusadores públicos, los cuales por sus excesos y abusos serán responsables con arreglo al título sexto de esta primera parte”³⁸.

“Art. 430º.– El acusador que desampare su acusación, o se separe de ella después de formalizada en juicio, y empezados los procedimientos, quedará sujeto a las penas prescriptivas en el artículo precedente, si el acusado quisiere vindicar su inocencia, o si la causa fuere de las que se deben seguir de oficio, aunque no haya acusador particular. Pero si en causas de esta última clase intervinieren, para que el acusador desampare la acusación o cosa equivalente, uno y otro pagarán de mancomún una multa igual al tres tanto del precio que haya mediado en el concierto, se seguirá el procedimiento de oficio á costa de ambos y el acusador no podrá volver á ejercer el derecho de acusar como no sea en causa propia”³⁹.

³⁷ DÍAZ PITA, *El delito de acusación y denuncia falsas: Problemas fundamentales*, p. 13.

³⁸ CÓDIGO PENAL ESPAÑOL DE 1822, p. 87.

³⁹ CÓDIGO PENAL ESPAÑOL DE 1822, pp. 87-88.

“Art. 431º.– Los que sin constituirse acusadores denuncien un delito a las autoridades para que tomen las providencias convenientes, aunque no tendrán responsabilidad alguna por el solo hecho de no probarse el delito, sufrirán la pena de acusadores falsos, si resultare que hicieron su denuncia de mala fe y calumniosamente”⁴⁰.

De los preceptos normativos antes señalados se puede desprender que, estos constituyeron un gran avance en comparación con las regulaciones que le precedieron⁴¹, pues por primera vez se realizó una distinción entre lo que es una acusación de mala fe y calumniosa, y lo que es una simple acusación no probada.

En lo que respecta a las acusaciones que quedasen improbadas, pero de las que no resultase malicia en ellas, éstas eran sancionadas mediante la imposición al acusador del pago de las costas, daños y perjuicios, y de ser el caso, del mismo tiempo de prisión que haya sufrido el acusado.

La situación antes descrita podría interpretarse como una muestra de una especie responsabilidad objetiva, ya que la sanción se imponía como consecuencia directa de la realización de un acto que acarreó ciertos daños –tanto para el acusado como para la sociedad–, sin pasar a analizar otros aspectos⁴².

En cuanto a las denuncias improbadas que fueran hechas maliciosamente, se preveía como sanción –al igual en la etapa precodificadora⁴³ la imposición de la misma pena que, en caso de que la acusación hubiese sido cierta, debía de haber sufrido el falsamente acusado, aunándole a ella la consecuencia accesoria de infamia –prohibición del ejercicio del derecho de acusar–⁴⁴.

⁴⁰ CÓDIGO PENAL ESPAÑOL DE 1822, p. 88.

⁴¹ APARISI MIRALLES, en *Estudios Jurídicos en memoria del profesor Dr. D. José Ramón Casabó Ruiz*, vol. I, p. 98.

⁴² La malicia que no figura en este tipo de acusaciones era analizada en primera instancia para descartar que la conducta pudiera subsumirse en el segundo supuesto de la norma contenida en el art. 429º del CP de 1822.

⁴³ PALOMO DEL ARCO, en *Delitos contra la Administración de justicia*, p. 153.

⁴⁴ En ese sentido, véase: ORDEIG ORERO, *El delito de acusación y denuncia falsas*, p. 19.

En opinión de GARCÍA SOLÉ, el mantenimiento de la severidad de este castigo –mediante la aplicación del sistema talionar– se debe analizar teniendo en cuenta el contexto jurídico-procesal y constitucional del momento en el que se dictó este CP, el cual propugnaba un ensalzamiento de los derechos jurídicos individuales –que, como se sabe, se habían encontrado relegados hasta un par de décadas antes–, en este caso, los intereses individuales de la persona falsamente acusada, especialmente el honor.

Esta defensa de los intereses individuales se realizaba sin dejar de lado la protección de intereses de carácter colectivo, lo cual emerge de la ubicación de este delito dentro de la Parte Primera del CP, dedicada a los delitos contra la sociedad⁴⁵.

Asimismo, cabe señalar que con esta regulación se formuló una distinción entre acusador y simple denunciante. Se les castigaban de la misma forma en el caso de que las denuncias improbadas fueran hechas maliciosamente, y de diferente, en el caso de que no se acreditase esta última condición (malicia), castigando al acusador mediante la imposición de la sanción mencionada líneas arriba –pago de las costas, daños y perjuicios, y de ser el caso, del mismo tiempo de prisión que haya sufrido el acusado–, mientras que, al simple denunciante no se le imponía pena alguna, pues éste no incurría en ningún tipo de responsabilidad.

Cabe traer a colación que, como se ha indicado, la calumnia y el delito de acusación y denuncia falsas tienen un mismo “tronco normativo”, pero con las modificaciones sobre la regulación de estos delitos, el desarrollo de la doctrina y demás, se puede a la fecha identificar la singularidad de cada una de esas figuras delictivas.

⁴⁵ GARCÍA SOLÉ, *El delito de acusación y denuncia falsas*, p. 30.

Este proceso de evolución normativa se ha dado con los años, siendo que en el inicio de la etapa codificadora no se podía identificar una autonomía entre la acusación y denuncia falsas y la calumnia⁴⁶.

Tan es así que, APARISI MIRALLES comenta que, de la lectura del Diario de discusiones y Actas de las Cortes extraordinarias de 1821, se puede apreciar que el legislador entendía que la acusación falsa era una calumnia judicial⁴⁷. De ello, puede desprenderse que para los legisladores de aquella época el delito de acusación y denuncia falsas no era un delito distinto a la calumnia, sino una calumnia que tenía la particularidad de haberse realizado en el marco de un proceso penal.

6. El Código Penal de 1848

En el art. 241 del Capítulo VI –denominado “Del falso testimonio y de la acusación y denuncia calumniosas”– del Título IV –cuya rúbrica era “De las falsedades”– del CP de 1848 se regulaba expresamente lo concerniente a la acusación y denuncia calumniosas, de la siguiente manera:

“Art. 241: La acusación ó denuncia, que hubieren sido declaradas calumniosas por sentencia ejecutoriada, serán castigados con las penas de prisión menor cuando versaren sobre un delito grave; con las de prisión correccional si fue sobre delitos menos graves, y con las de arresto mayor si se tratare de una falta, imponiéndose además en todo caso una multa de 50 a 500 duros”⁴⁸.

El delito estudiado se encontraba configurado, tal como lo han señalado algunos autores, como una calumnia⁴⁹, con la salvedad de que la falsa imputación debía ser declarada calumniosa mediante sentencia ejecutoriada.

⁴⁶ En ese sentido, Maqueda Abreu sostiene que durante el inicio normativo de este tipo penal primó la perspectiva estrictamente personalista, la cual caracterizó su configuración típica próxima a la calumnia y orientada a la tutela de los intereses individuales del falsamente acusado. MAQUEDA ABREU, en *El nuevo Código Penal: presupuestos y fundamentos. Libro Homenaje al Profesor Doctor Don Ángel Torío López*, p. 824.

⁴⁷ APARISI MIRALLES, en *Estudios Jurídicos en memoria del profesor Dr. D. José Ramón Casabó Ruiz*, vol. I, p. 99.

⁴⁸ CÓDIGO PENAL DE ESPAÑA DE 1850, p. 81.

⁴⁹ En ese sentido, véase: IÑESTA PASTOR, *El Código Penal Español de 1848*, p. 667.

Lo cual, si bien es cierto, no permitía aún diferenciar por completo ambas figuras delictivas, constituía un gran avance⁵⁰ en cuanto a la identificación de la singularidad de éstas.

Respecto al bien jurídico protegido en este delito existió un gran debate, ya que, al encontrarse ubicado en el Título referido a las falsedades, se entendía que era un delito que afectaba a la fe pública, pero por la forma en la que se encontraba redactado el tipo penal, un gran sector de la doctrina lo identificaba como una modalidad de la calumnia, entendiendo que lo que primaba era la protección del honor del afectado, es decir, el interés del particular frente al de la fe pública⁵¹.

De todos modos, tanto con este CP como con el anterior puede observarse el viraje que se dio en torno a la concepción del bien jurídico protegido en este delito, ya que se pasó de una visión individualista –protección principalmente del honor en la etapa precodificadora– a una pluralista –protección tanto del honor como de la fe pública–.

Un aspecto importante a destacar, probablemente la más resaltante innovación que trajo consigo este CP, es la introducción de la exigencia previa de la declaración formal de calumniosidad o falsedad de la acusación o denuncia.

⁵⁰ Aparisi Miralles recuerda que: “[e]n opinión de dos tratadistas de la época, Tomás María Vizmanos y Cirilo Álvarez Martínez, este cuerpo legal supuso un gran adelanto porque hasta la publicación del Código, el individuo acusado calumniosamente apenas tenía seguridad de sus derechos en los Tribunales ni las penas que podía pedir contra el calumniador, no era posible calcular cual sería el fallo, si se reduciría a una pena pecuniaria o si se impondría al culpable una pena corporal. El juicio de los Tribunales, incierto siempre, e inseguro en materia criminal por efecto de la lucha permanente entre legislación y las costumbres, lo era mucho más tratándose del delito de acusación o denuncia calumniosa”. APARISI MIRALLES, en *Estudios Jurídicos en memoria del profesor Dr. D. José Ramón Casabó Ruiz*, vol. I, p. 100. Así también lo ha sostenido García Solé al expresar que: “... la inclusión del delito de acusación calumniosa en el Título IV, dedicado a las falsedades, marca un punto de inflexión en el desarrollo histórico del delito; en un contexto en el que constata, un aumento de las garantías de la persona sujeta a un proceso penal, el riesgo de condena a un inocente ya no es tan elevado y empieza a cobrar auge la dimensión social-falsaria que este delito incorpora”. GARCÍA SOLÉ, *El delito de acusación y denuncia falsas*, p. 32.

⁵¹ APARISI MIRALLES, en *Estudios Jurídicos en memoria del profesor Dr. D. José Ramón Casabó Ruiz*, vol. I, p. 102.

Así también, con este dispositivo legal se establece, por primera vez, una distinción en cuanto a las penalidades a imponerse teniendo como criterio a la gravedad del delito imputado⁵².

Otro aspecto importante de subrayar es que con la disposición legal antes comentada se introdujo la equiparación en el tratamiento de la acusación y la denuncia, pues con la regulación anterior, los que eran simples denunciantes tenían un trato distinto –y beneficioso– en los casos en los que las acusaciones quedaban improbadadas.

Finalmente, cabe acotar que, con esta regulación, la acusación y denuncia calumniosas reciben un trato favorable en comparación con el tratamiento del falso testimonio, ya que las penas de éste se castigaban con mayor dureza⁵³.

7. El Código Penal de 1870

En los arts. 340 y 341 del Capítulo VI –denominada “De la ocultación fraudulenta de bienes o de industria, del falso testimonio y de la acusación y denuncia falsa– del Título IV –cuya rúbrica es “De las Falsedades”– del Libro Segundo del CP de 1870, se tipificó por primera vez al delito de acusación y denuncia falsas en términos similares a los actuales⁵⁴.

La redacción de los artículos es la siguiente:

“Art. 340: Se comete el delito de acusación ó denuncia falsa imputando falsamente á alguna persona hechos que si fueren ciertos, constituirían delito de los que dan lugar á procedimiento de oficio, si esta imputación se hiciere ante funcionario administrativo ó judicial, que por razón de su cargo debiera proceder á su averiguación ó castigo.

No se procederá, sin embargo, contra el denunciador ó acusador sino en virtud de sentencia firme ó auto, también firme, de sobreseimiento del Tribunal que hubiere conocido del delito imputado.

⁵² FERRER SAMA, en *Homenaje a D. Nicolás Pérez Serrano*, t. II, p. 338.

⁵³ ORDEIG ORERO, *El delito de acusación y denuncia falsas*, p. 20.

⁵⁴ MUERZA ESPARZA, *La Ley. Revista Jurídica Española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía*, núm. 4, 1986, p. 1041.

Este mandará proceder de oficio contra el denunciador ó acusador, siempre que de la causa principal resultaren méritos bastantes para abrir el nuevo proceso.”⁵⁵

“Art. 341: “El reo de acusación ó denuncia falsa, será castigado con la pena de presidio correccional en sus grados medio y máximo, cuando el delito imputado fuere grave; con la de prisión correccional en sus grado mínimo y medio, si fuere el delito imputado menos grave, y con la de arresto mayor, si la imputación hubiese sido de una falta, imponiéndose además en todo caso una multa de 250 á 2500 pesetas”⁵⁶.

Con la prescripción legal prevista en este CP se produce un avance en cuanto a la distinción entre la calumnia y el delito estudiado, tan es así que se cambia el uso de la terminología “acusación y denuncia calumniosas” –empleada en los Códigos anteriores– por la de “acusación y denuncia falsas”⁵⁷.

Expresamente se señala que los hechos falsamente imputados deben constituir delitos que den lugar a la instauración de un procedimiento de oficio, esto, en principio haría entender que la imputación falsa de faltas quedaría excluida de este delito. Sin embargo, en el art. 341 CP se señala que si la falsa imputación fuera de una falta se impondría una pena de arresto mayor y una multa de 250 a 2500 pesetas, con lo cual se infiere que la referencia al término delito realizada en la primera de las normas reproducidas incluía también a las faltas.

Por otro lado, en el art. 340 CP se consigna por primera vez la exigencia de que la imputación falsa deba hacerse ante un funcionario administrativo o judicial que, por razón de su cargo debiera proceder a su averiguación o castigo.

Asimismo, estipulaba como condición *sine qua non* para poder perseguir este delito, tanto la exigencia de la existencia de una sentencia firme de absolución o un auto firme de sobreseimiento como que el Tribunal hubiese mandado a proceder de oficio contra falso acusador⁵⁸, excluyéndose de esta forma, la

⁵⁵ CÓDIGO PENAL REFORMADO DE 1870, p. 90.

⁵⁶ CÓDIGO PENAL REFORMADO DE 1870, p. 90.

⁵⁷ ORDEIG ORERO, *El delito de acusación y denuncia falsas*, p. 21.

⁵⁸ MORALES ANDRADE, *El delito de acusación o denuncia calumniosa*, p. 50.

posibilidad de incoar un proceso penal por este delito cuando no cumpliesen con las condiciones antes mencionadas⁵⁹.

Tal como lo ha sostenido un sector de la doctrina, la finalidad inicial del establecimiento de estas limitaciones procesales pretendía resolver la confusión hasta ese entonces existente en torno a cuándo y cómo debía procederse contra el falso acusador⁶⁰.

En cuanto al aspecto subjetivo del tipo que, cabe indicar que pesar de que la norma penal no exigía la concurrencia de un elemento subjetivo distinto del dolo, en la jurisprudencia del Tribunal Supremo se reiteraba que la comisión del delito se determinaba no sólo por la inexactitud ni por la falta de justificación de los hechos, sino más bien principalmente por el “ánimo deliberado de perjudicar al denunciado”⁶¹.

Sobre el bien jurídico protegido en este delito cabe indicar que, se continuó ubicando este delito en la rúbrica de los delitos vinculados a las falsedades, ello aunado a la redacción del tipo penal propuesta en este CP, permitía entender que el bien jurídico protegido en este delito era uno de carácter colectivo, diluyendo con ello de cierta forma, la protección del bien jurídico individual honor.

8. El Código Penal de 1928

Con el CP de 1928 aparece por primera vez –en el Título VI– el Título autónomo de los delitos contra la Administración de Justicia con la finalidad de asegurar el ejercicio de la función judicial⁶². Dentro de esta rúbrica, a lo largo de los arts. 494 a 497 se recogen las figuras al quebrantamiento de condena, evasión de presos y condenados, los desórdenes en las prisiones y

⁵⁹ PALOMO DEL ARCO, en *Delitos contra la Administración de justicia*, p. 154.

⁶⁰ ORDEIG ORERO, *El delito de acusación y denuncia falsas*, p. 32.

⁶¹ MORALES ANDRADE, *El delito de acusación o denuncia calumniosa*, p. 50.

⁶² APARISI MIRALLES, en *Estudios Jurídicos en memoria del profesor Dr. D. José Ramón Casabó Ruiz*, vol. I, p. 107.

establecimientos, y, el encubrimiento⁶³; delitos que con los anteriores Códigos Penales se encontraban diseminados en títulos diversos⁶⁴. Por desgracia, el delito aquí estudiado seguía encontrándose regulado en el título dedicado a los delitos de falsedades⁶⁵.

Así pues, en los arts. 403 al 406 del Capítulo VI –"De la ocultación fraudulenta de bienes o de industria, del falso testimonio y de la acusación y denuncia falsas"– del Título IV –"De las falsedades"– del CP se estipuló lo concerniente al delito de acusación y denuncia falsas, de la siguiente forma:

“Art. 403º: Se comete el delito de acusación o denuncia falsa imputando a alguna persona o entidad:

1º Hechos o participación en hechos que no han cometido, y que, de ser ciertos, constituirán delitos o faltas de los que dan lugar a procedimiento de oficio, si la imputación se hiciera ante funcionario administrativo o judicial que por razón de su cargo deba proceder a su averiguación y castigo.

2º Hechos o participación en hechos que no ha cometido, y que, de ser ciertos, constituirían delito no perseguible de oficio, cuando la imputación se haga por personas a quienes la ley reconoce el derecho a formularla.

Para la persecución de estos delitos es indispensable que la acusación o la denuncia haya sido declarada falsa en sentencia firme o auto también firme de sobreseimiento libre o definitivo, recaído en la causa sobre el delito imputado, o que tal declaración se haga después de ser firmes las resoluciones aludidas a instancia del Ministerio Fiscal o de quien sufrió la imputación”⁶⁶.

“Art. 404º: El reo de acusación o denuncia falsa será castigado con la pena de dos a seis años de prisión y multa de 1000 a 25000 pesetas cuando el delito imputado fuere grave; con la de dos meses y un día a dos años de prisión y multa de 1000 a 10000 pesetas si fuere el delito imputado menos grave, y con la multa de 1000 a 5000 pesetas si la imputación hubiere sido de una falta”⁶⁷.

“Art. 405º Si, por virtud de la acusación o denuncia falsa, se hubiere dictado sentencia condenatoria e impuesto pena al falsamente acusado o denunciado y esta falsedad se declara en juicio de revisión, el Tribunal, según la gravedad de la imputada a aquél impondrá a su prudente arbitrio al

⁶³ PÉREZ RÚA, *La acusación y denuncia falsas*, p. 23.

⁶⁴ CANTARERO BANDRÉS, *Administración de justicia y obstruccionismo judicial*, p. 15.

⁶⁵ ORDEIG ORERO, *El delito de acusación y denuncia falsas*, p. 22.

⁶⁶ CÓDIGO PENAL DE 8 DE SEPTIEMBRE DE 1928, p. 79.

⁶⁷ CÓDIGO PENAL DE 8 DE SEPTIEMBRE DE 1928, p. 79.

denunciador o acusador pena de prisión que no será inferior a dos años ni superior en duración a la que se impuso al denunciado y además multa de 1000 a 25000 pesetas”⁶⁸.

Art. 406: “En los delitos de falso testimonio y en los de acusación o denuncia falsas, los Tribunales, apreciando las condiciones personales del delincuente, el móvil del delito y demás circunstancias de hecho, podrán sustituir la prisión por la reclusión”⁶⁹.

Al igual que con el CP anterior, e incluso con mayor intensidad, se puede apreciar que se potencia la idea de la protección de los intereses públicos –la función judicial o la Administración de Justicia–⁷⁰ por sobre el honor⁷¹.

Por otro lado, se señaló expresamente que los hechos imputados, de ser ciertos, debían constituir delitos o faltas, a diferencia del CP anterior que sólo hacía referencia a los delitos.

Se mantuvo la exigencia de que la imputación se debía realizar ante funcionario administrativo o judicial que por razón de su cargo debía proceder a su averiguación y castigo.

Con esta regulación se amplió el campo de acción restringido en el anterior CP, al permitir la persecución del delito estudiado, ya sea de oficio o a instancia de parte⁷².

Sin embargo, a pesar de este avance, se seguía manteniendo como condición de procedibilidad, la necesidad de declaración de falsedad respecto de la acusación o denuncia⁷³. Con la salvedad de que mediante este CP se amplió la posibilidad de que esa declaración de falsedad además de hacerse mediante sentencia firme, o auto de sobreseimiento libre o definitivo, pudiera hacerse

⁶⁸ CÓDIGO PENAL DE 8 DE SEPTIEMBRE DE 1928, p. 79.

⁶⁹ CÓDIGO PENAL DE 8 DE SEPTIEMBRE DE 1928, p. 79.

⁷⁰ GARCÍA SOLÉ, *El delito de acusación y denuncia falsas*, p. 36.

⁷¹ APARISI MIRALLES, en *Estudios Jurídicos en memoria del profesor Dr. D. José Ramón Casabó Ruiz*, vol. I, p. 106.

⁷² PALOMO DEL ARCO, en *Delitos contra la Administración de justicia*, p. 154.

⁷³ MORALES ANDRADE, *El delito de acusación o denuncia calumniosa*, p. 51.

también después de que quedasen firmes las resoluciones antes mencionadas, eso sí, siempre y cuando fuera solicitada a instancia del Ministerio Fiscal o del falso acusado.

En cuanto al sistema de penas, éste es similar al de anteriores regulaciones, estableciéndose penas distintas en función de la gravedad del delito imputado. Cabe destacar que, se establece en el art. 405 CP un supuesto que previamente no se encontraba regulado, éste era el que preveía que el falso acusador sufriera pena de prisión y multa cuando se declarase la falsedad en un juicio de revisión que hubiere tenido lugar debido a la emisión de una sentencia condenatoria y la imposición de una pena en contra del falsamente acusado en primera instancia⁷⁴.

Finalmente, cabe indicar que, en el año 1931 el Gobierno provisional de la República –días después de la proclamación de la Segunda República española– publicó un Decreto por el que se derogaba el CP de 1928 y se restablecía la vigencia el CP de 1870⁷⁵, mientras que se elaboraba un nuevo CP que se ajustase a las nuevas directrices constitucionales.

9. El Código Penal de 1932

Con el CP de 1932 –de orientación marcada principalmente por el CP italiano, el suizo y el polaco⁷⁶–, se incorpora por primera vez al delito de acusación y denuncia falsas dentro del ámbito de los delitos contra la Administración de Justicia⁷⁷.

Siendo a partir de este CP que se empieza a hacer hincapié en la protección concreta y principalmente de la Administración de Justicia como bien jurídico

⁷⁴ GARCÍA SOLÉ, *El delito de acusación y denuncia falsas*, p. 35.

⁷⁵ GARCÍA SOLÉ, *El delito de acusación y denuncia falsas*, p. 36.

⁷⁶ APARISI MIRALLES, en *Estudios Jurídicos en memoria del profesor Dr. D. José Ramón Casabó Ruiz*, vol. I, p. 108.

⁷⁷ PALOMO DEL ARCO, en *Delitos contra la Administración de justicia*, p. 154. Así también véase: PÉREZ RÚA, *La acusación y denuncia falsas*, p. 19 y MUERZA ESPARZA, *La Ley. Revista Jurídica Española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía*, núm. 4, 1986, pp. 1041-1042.

protegido, sin dejar de lado claro está –y con mayor realce en los Códigos sucesivos–, la construcción dogmática que configura al delito estudiado como un delito pluriofensivo⁷⁸.

Y es que, tal como lo sostiene APARISI MIRALLES, con la inclusión de la acusación y denuncia falsa en el Título de los delitos contra la Administración de Justicia, el legislador pretendió destacar que con el delito de acusación y denuncia falsas fundamentalmente se infringía un ataque a la Administración de Justicia, y que esta naturaleza era la que generaba la facultad, en favor del Tribunal, de decidir la persecución o no del delito, al tratarse del principal perjudicado. Lo cual, a su entender, explicaba la imposibilidad en la que se encontraba el particular acusado de ejercer la acción penal por acusación falsa, facultad que como recordamos, sí se encontraba prevista en la regulación precedente⁷⁹.

Precisamente, en los arts. 331 y 332 del Capítulo I del Título V –dedicado a los delitos contra la Administración de Justicia– del Libro Segundo del CP se estipuló todo lo relacionado con el delito de acusación y denuncia falsas de la siguiente manera:

“Art. 331: Se comete el delito de acusación o denuncia falsa imputando falsamente a alguna persona hechos que si fueren ciertos constituirían delito de los que dan lugar a procedimiento de oficio, si esta imputación se hiciere ante funcionario administrativo o judicial que por razón de su cargo debiera proceder a su averiguación y castigo.

No se procederá, sin embargo, contra el denunciador o acusador sino en virtud de sentencia firme o auto, también firme, de sobreseimiento del Tribunal que hubiere conocido del delito imputado.

Este mandará proceder de oficio contra el denunciador o acusador siempre que de la causa principal resultaren méritos bastantes para abrir el nuevo proceso”⁸⁰.

⁷⁸ ORDEIG ORERO, *El delito de acusación y denuncia falsas*, p. 32.

⁷⁹ APARISI MIRALLES, en *Estudios Jurídicos en memoria del profesor Dr. D. José Ramón Casabó Ruiz*, vol. I, p. 109.

⁸⁰ GACETA DE MADRID núm. 310, de fecha 5 de noviembre de 1932, p. 842.

“Art. 332: El reo de acusación o denuncia falsa será castigado con la pena de presidio menor si se imputare un delito, y con la de arresto mayor si la imputación hubiere sido de una falta, imponiéndose, además, en todo caso una multa de 500 a 5000 pesetas”⁸¹.

Como se aprecia, la redacción de este tipo penal, supuso –en cierta medida– una vuelta a la redacción del CP de 1870. Teniendo como novedad lo previsto en el art. 332, pues se dejó de realizar distinciones entre delito grave, menos grave y falta –algo que sí sucedía con las anteriores regulaciones–, para pasar sólo a distinguir exclusivamente entre delito y falta⁸².

10. El Código Penal de 1944

Con este Código, la figura delictiva se consolidó como un delito contra la Administración de Justicia, lo cual demuestra la especial relevancia en la protección de la Administración de Justicia en este delito⁸³.

Así pues, el CP de 1944, reguló en el art. 325 perteneciente al Capítulo I –“De la acusación y denuncia falsas”– del Título IV –“De los delitos contra la Administración de Justicia”–, al delito de la acusación y denuncia falsas de la siguiente manera:

“Art. 325: Los que imputaren falsamente a alguna persona hechos que, si fueran ciertos, constituirían delito o falta de los que dan lugar a procedimiento de oficio, si esta imputación se hiciera ante funcionario administrativo o judicial que, por razón de su cargo, debiere proceder a su averiguación o castigo, serán sancionados:

1º Con las penas de prisión menor y multa de 100000 a 500000 pesetas, si se imputare un delito.

2º Con la de arresto mayor y la misma multa, si la imputación hubiere sido de una falta.

No se procederá, sin embargo, contra el denunciador sino en virtud de sentencia firme o auto, también firme de sobreseimiento del tribunal que hubiere conocido del delito imputado. Este mandará proceder de oficio

⁸¹ GACETA DE MADRID núm. 310, de fecha 5 de noviembre de 1932, p. 842.

⁸² GARCÍA SOLÉ, *El delito de acusación y denuncia falsas*, p. 36.

⁸³ GARCÍA SOLÉ, *El delito de acusación y denuncia falsas*, p. 38.

contra el acusador siempre que de la causa principal resultaren méritos bastantes para abrir el nuevo proceso"⁸⁴.

En líneas generales este precepto legal mantiene la redacción anterior, refundiendo en solamente un artículo los dos que se preveían en la CP de 1932. Con la diferencia de que la cuantía de las multas aumentó progresivamente⁸⁵.

Posteriormente, el 14 de setiembre de 1973 se publicó un texto refundido del CP. No trajo consigo modificaciones importantes en cuanto al delito que estamos estudiando, ya que lo único que varió fue el monto de la multa a imponer cuando el hecho imputado fuese delito, pudiendo ir éste de 30000 a 150000 pesetas.

Cabe señalar que, el hecho de que se consignase como requisito de procedibilidad la necesidad de tener una sentencia firme o auto firme de sobreseimiento emitido por el Tribunal que hubiere conocido del delito imputado –al falso acusado o denunciado–, generaba cierta polémica en la doctrina, ya que se discutía si el sobreseimiento podía ser provisional o si sólo podía ser definitivo.

Por ello, el Tribunal Constitucional mediante la STC nº 34/1983, de fecha 6 de mayo de 1983, tomó postura al respecto señalando en su tercer fundamento jurídico que:

“...el Código Penal –art. 325– establece como requisito de procedibilidad contra el denunciador o acusador la Sentencia firme o Auto de sobreseimiento también firme, lo que suscita el problema de interpretar si tal Auto firme puede ser el de sobreseimiento provisional.

Para resolver tal problema hemos de interpretar el mencionado precepto de conformidad con la C.E. En materia de derechos fundamentales, como reiteradamente ha señalado este TC, la legalidad ordinaria ha de ser interpretada de la forma más favorable para la efectividad de tales derechos, lo que conduce en este caso a la conclusión de que el Auto firme de sobreseimiento corresponde tanto al de carácter definitivo como al

⁸⁴ CÓDIGO PENAL DE 1944, p. 96.

⁸⁵ ORDEIG ORERO, *El delito de acusación y denuncia falsas*, p. 24.

provisional, pues firmes formalmente son los Autos de sobreseimiento, cuando ya no procede contra ellos recurso alguno, como sucede en el presente caso en que se ha pronunciado la Audiencia al respecto. De no darse esta interpretación resultaría que el Auto de sobreseimiento provisional vendría a impedir el ejercicio del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva que reconoce el art. 24.1 de la C.E., por lo que sería incompatible con la misma, al impedir al recurrente el ejercicio del mencionado derecho fundamental frente a acusaciones que califica de falsas, calificación sobre la que en definitiva deben pronunciarse los Tribunales”⁸⁶.

De esta forma, con la sentencia antes mencionada no sólo se declaró que el sobreseimiento provisional tiene también el carácter de firme, y que por tanto podía permitir perfectamente la creación de un proceso por acusación y denuncia falsa, sino que también se impulsó la comprensión del delito estudiado como un mecanismo de protección, esencialmente, del derecho a la tutela judicial efectiva del sujeto falsamente acusado⁸⁷.

Una vez derogado este CP entró en vigencia el CP de 1995, el cual aún rige el ordenamiento jurídico penal español.

IV.- LEGISLACIÓN VIGENTE

Con el CP de 1995 se incorporaron al Título dedicado a los delitos contra la Administración de Justicia a la prevaricación judicial y, los delitos de obstrucción a la justicia y deslealtad profesional –que antes aparecían entre los delitos cometidos por los funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos– y al encubrimiento –que deja su puesto ubicado en las formas de participación delictiva–.

Luego, a través de la LO 15/2003, de 25 de noviembre, se introdujo un nuevo Capítulo IX en el que se castigan los comportamientos contrarios a la Administración de Justicia de la Corte Penal Internacional⁸⁸.

⁸⁶ BOE núm. 120 –suplemento–, de fecha 20 de mayo de 1983, pp. 4-5.

⁸⁷ ROPERO CARRASCO, *Abusar de la Justicia. Dimensión del actual delito de acusación y denuncias falsas*, p. 19.

⁸⁸ JUDEL PRIETO/PIÑOL RODRÍGUEZ/SUÁREZ-MIRA RODRÍGUEZ, “Acusación y Denuncias Falsas”, en *Manual de Derecho Penal. Parte Especial*, t. II, p. 553. Como puede observarse, el contenido de los delitos contra la Administración de Justicia ha variado mucho, por ello se dice que su contenido está en permanente revisión. PÉREZ RÚA, *La acusación y denuncia falsas*, pp. 23-24.

Para MARES ROGER y MARTÍNEZ LLUESMA, siguiendo a Vives Antón, no parece que pueda afirmarse con total rotundidad que todos los delitos que se ubican dentro de la rúbrica de los Delitos contra la Administración de Justicia, afecten a los intereses del buen funcionamiento del Poder Judicial y del proceso, a no ser de un modo muy indirecto en alguno de ellos. Motivo por el cual, los mencionados autores consideran que debe estudiarse la forma particular de afectación del bien jurídico protegido en cada tipo penal contenido en ese grupo de delitos⁸⁹.

Siendo ello así, el que el delito de acusación y denuncia falsas se ubique en la rúbrica de los Delitos contra la Administración de Justicia conllevará a que se estudie el modo particular de afectación de este bien jurídico y es que, es evidente que si esta rúbrica agrupa un número importante de conductas delictivas no todas afectarán al bien jurídico de la misma manera. Este aspecto se estudiará en el segundo y tercer capítulo del trabajo.

Otro aspecto destacable es que en el Capítulo V –cuyo epígrafe es la acusación y denuncia falsa y de la simulación de delito– del Título XX –que recoge los delitos contra la Administración de Justicia– del Libro II del vigente CP se recoge en un mismo capítulo –por primera vez– a dos delitos que antes aparecían separados en el Código, figuras con trayectoria histórica diferente, pero que presentan en común la afinidad del bien jurídico protegido⁹⁰.

El art. 456 del CP, en su versión inicial, regulaba lo concerniente al delito de acusación y denuncia falsas de la siguiente manera:

“1. Los que, con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad, imputaren a alguna persona hechos que, de ser ciertos, constituirían infracción penal, si esta imputación se hiciera ante funcionario judicial o administrativo que tenga el deber de proceder a su averiguación, serán sancionados:

1.º Con la pena de prisión de seis meses a dos años y multa de doce a veinticuatro meses, si se imputara un delito grave.

⁸⁹ MARES ROGER/MARTÍNEZ LLUESMA, en *Delitos contra la Administración Pública, contra la Administración de Justicia y contra la Constitución*, p. 136.

⁹⁰ PALOMO DEL ARCO, en *Delitos contra la Administración de justicia*, pp. 151-152.

2.º Con la pena de multa de doce a veinticuatro meses, si se imputara un delito menos grave.

3.º Con la pena de multa de tres a seis meses, si se imputara una falta.

2. No podrá procederse contra el denunciante o acusador sino tras sentencia firme o auto también firme, de sobreseimiento o archivo del Juez o Tribunal que haya conocido de la infracción imputada. Estos mandarán proceder de oficio contra el denunciante o acusador siempre que de la causa principal resulten indicios bastantes de la falsedad de la imputación, sin perjuicio de que el hecho pueda también perseguirse previa denuncia del ofendido”⁹¹.

En cuanto a la redacción de este tipo penal, se producen algunas innovaciones importantes de mencionar.

Se reemplaza el término "falsamente" por "conocimiento de su falsedad o temerario desprecio a la verdad". En opinión de un sector de la doctrina, esta modificación tuvo como objetivo superar los diversos problemas que planteaba el requisito de falsedad, especialmente el referido a la falta de consenso respecto al carácter que tenía que tener la falsedad, ya que se discutía si éste era objetivo o subjetivo⁹². Así pues, con esta modificación se intentó superar la situación antes descrita al necesitarse para la consumación del ilícito penal no sólo la discrepancia objetiva entre lo manifestado y lo realmente acaecido, sino que además se necesitase que el sujeto tenga conocimiento de esa falsedad o que al menos actúe con cierto grado de temeridad⁹³.

Ahora bien, la inclusión del concepto temerario desprecio no fue del todo bien recibida en la doctrina, puesto que se cuestionó el contenido de esa expresión, no existiendo consenso respecto a si equivalía a un dolo eventual o a una imprudencia consciente –en el quinto capítulo de este trabajo se ahondará sobre esta problemática–⁹⁴.

Otro aspecto relevante de comentar, es que en la anterior redacción del tipo penal se expresaba que los hechos imputados, de ser ciertos, debían constituir delitos o faltas de

⁹¹ BOE núm. 281, de fecha 24 de noviembre de 1995, p. 34038.

⁹² APARISI MIRALLES, en *Estudios Jurídicos en memoria del profesor Dr. D. José Ramón Casabó Ruiz*, vol. I, p. 112.

⁹³ APARISI MIRALLES, en *Estudios Jurídicos en memoria del profesor Dr. D. José Ramón Casabó Ruiz*, vol. I, p. 112.

⁹⁴ PALOMO DEL ARCO, en *Delitos contra la Administración de justicia*, p. 156.

los que daban lugar a que se produjera un procedimiento de oficio, mientras que en la redacción del CP de 1995 se señala que los hechos imputados, de ser ciertos, deberían constituir una infracción penal. Es decir, se sustituye el constituir delitos o faltas por la expresión constituir infracción penal.

Si partimos de la premisa, de que a lo largo de la historia del delito estudiado, se produjeron situaciones de falta de coherencia normativa, reflejada en el hecho de que en algunos Códigos se consignó que sólo la imputación de un delito podía dar lugar a la apertura de un proceso de acusación y denuncia falsas, para luego, en los incisos en donde se detallaban las penas a imponer, establecer también una sanción cuando se imputaban faltas –lo cual es de cierta forma contradictorio–, nos parece comprensible la decisión del legislador de emplear el término “infracción penal” –el cual, en la redacción inicial del CP de 1995, hacía referencia tanto a los delitos como a las faltas– a fin de evitar cualquier tipo de discordancia que pudiera darse con el contenido establecido en los incs. del numeral 1.

Otra modificación producida en la actual regulación es la vinculada a la admisión de la persecución de este delito previa denuncia del ofendido. Con la inclusión de esta posibilidad, en opinión de un sector de la doctrina, se busca destacar la función de reparación de la situación de injusticia protegiendo el interés individual concreto del derecho a la tutela judicial efectiva –del acusado o denunciado falsamente⁹⁵. Otra lectura que podría darse a la inclusión de esta facultad podría ser que a través de ella se reconoce la importancia del honor como bien jurídico protegido en este delito y que por ello se destaca que la posibilidad de persecución de este delito previa denuncia del ofendido,

De esta modificación se puede desprender también que, la infracción penal falsamente imputada no necesariamente tenía que ser de aquellas que daban lugar a un procedimiento de oficio –situación que sí era requerida en las anteriores regulaciones–, sino que además de este supuesto, se admitía la posibilidad de que la imputación falsa

⁹⁵ En ese sentido véase: ROPERO CARRASCO, *Abusar de la Justicia. Dimensión del actual delito de acusación y denuncias falsas*, p. 19.

sea también de delitos privados, que como sabemos, son perseguibles a petición de parte⁹⁶.

En lo concerniente al sujeto ante el que se debía realizar la falsa imputación, se eliminó la referencia de que ésta se podía hacer ante el funcionario judicial o administrativo que por razón de su cargo debiera proceder al castigo del hecho imputado, bastando solamente con el hecho de que estos debieran proceder a su averiguación.

Sobre la penalidad, se introdujo el sistema de días–multa, y se estipuló una graduación de penalidades según si el hecho imputado hubiese sido un delito grave, uno menos grave o una falta⁹⁷.

Sobre la condición de perseguibilidad, al lado de la sentencia firme y el auto de sobreseimiento firme se admitió también al auto de archivo firme.

Cabe señalar que, con la reforma al CP de 1995 realizada por la LO 1/2015 se produjo tan sólo una modificación respecto al delito que estudiamos, ésta recayó en el inc. 3 del núm. 1, en donde se sustituyó el “si se imputara una falta” por el “si se imputara un delito leve, ello a fin de mantener una coherencia con la nueva clasificación de las infracciones penales⁹⁸.

V.- RECAPITULANDO

Tal como se estipuló en la introducción de este capítulo, el revisar los antecedentes históricos de la acusación y denuncia falsas permite que podamos intuir al menos cuál es el bien jurídico protegido en este delito.

Históricamente, con la persecución de estas conductas se ha intentado proteger el honor del falsamente acusado. Sin embargo, con el devenir del tiempo y con las diversas

⁹⁶ En ese sentido véase: RINCÓN HERRANZ, *Delito de acusación y denuncia falsas en el Código Penal español*, p. 103.

⁹⁷ APARISI MIRALLES, en *Estudios Jurídicos en memoria del profesor Dr. D. José Ramón Casabó Ruiz*, vol. I, p. 112.

⁹⁸ SANTANA VEGA, en *Comentarios al Código Penal LO 5/2010*, p. 1523.

regulaciones que se han dictado a lo largo de los años sobre la materia, se pasó de una protección individualista a una pluralista, ya que no sólo se demostraba el mantenimiento de la protección del honor, sino que a ella se le agregaba la protección de bienes colectivos como la Administración de Justicia, teniendo incluso esta última mayor preponderancia en la etapa codificadora.

En cuanto a la singularidad del delito de acusación y denuncia falsas, ésta fue alcanzada mediante las distintas modificaciones legislativas que se fueron suscitando, hasta llegar a la regulación vigente, la cual permite divisar claramente la autonomía del delito estudiado con respecto a la calumnia. Ambas figuras delictivas poseen una distinta ubicación en el CP; la primera se ubica dentro de los Delitos contra la Administración de Justicia y la segunda, dentro de los Delitos contra el honor.

El hecho de que un delito se encuentre en una determinada rúbrica del CP no necesariamente implica que esa ubicación sea la correcta. En el caso del delito de acusación y denuncia falsas, su ubicación es correcta, ya que la Administración de Justicia resulta –o puede resultar– afectada cuando, en forma de denuncia o querella, se vierte una acusación falsa ante un funcionario judicial o administrativo que tenga el deber de proceder a su averiguación, de modo tal que sea capaz de generar –en falso, en vacío– una actividad jurisdiccional⁹⁹.

Ahora bien, el que este delito se encuentre dentro de la rúbrica antes mencionada, no excluye la posibilidad de que afecte también a otros bienes jurídicos. Éste es el caso del delito estudiado, situación que se comentará ampliamente en el tercer capítulo de este trabajo.

⁹⁹ MAQUEDA ABREU, en *El nuevo Código Penal: presupuestos y fundamentos. Libro Homenaje al Profesor Doctor Don Ángel Torío López*, pp. 824-825.

**§ 2. EL BIEN JURÍDICO
PROTEGIDO EN LOS DELITOS
CONTRA LA
ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA**

I.- CONSIDERACIONES PREVIAS

La expresión “Delitos contra la Administración de Justicia” es de aparición temprana en el marco del movimiento codificador europeo¹⁰⁰, se empleó por primera vez en España en el CP de 1928¹⁰¹.

Bajo su rúbrica, el texto punitivo español vigente recoge una serie de tipologías aglutinadas –en el Título XX del Libro II del CP– en torno a la siguiente sistemática capitular¹⁰²:

- a) De la prevaricación.
- b) De la omisión de los deberes de impedir delitos o de promover su persecución.
- c) Del encubrimiento.
- d) De la realización arbitraria del propio derecho.
- e) De la acusación y denuncia falsas y simulación de delitos.
- f) Del falso testimonio.
- g) De la obstrucción a la Justicia y deslealtad profesional.
- h) Del quebrantamiento de condena.
- i) De los delitos contra la Administración de Justicia de la Corte Penal Internacional.

Este Título ha padecido una constante modificación de su contenido, pues continuamente se han incluido y sacado tipos penales. Por ello, se ha identificado al Título XX del Libro II del CP como uno permanentemente abierto debido a la movilidad de los tipos penales que se ubican dentro de este grupo de delitos¹⁰³.

La ubicación sistemática de los tipos penales dentro de los delitos contra la Administración de Justicia ha supuesto una tarea difícil, ya que ni la legislación

¹⁰⁰ GARCÍA SOLÉ, *El delito de acusación y denuncia falsas*, p. 39.

¹⁰¹ SERRANO BUTRAGUEÑO, en *Delitos contra la Administración de Justicia art. 325 a 338 bis del Código Penal (acusación y denuncia falsa, falso testimonio y otros delitos)*, p. 5.

¹⁰² BLANCO LOZANO, *Tratado de Derecho Penal Español*, t. II, vol. II, p. 543.

¹⁰³ GARCÍA ARÁN, en *Delitos contra la Administración de Justicia*, pp. 281-282.

comparada ni la doctrina ofrecen una clasificación incuestionable¹⁰⁴, ello debido a la escasa concreción alcanzada en etapas anteriores sobre lo que debía entenderse por “Administración de Justicia” como objeto de protección penal¹⁰⁵.

A continuación, se realizará un estudio sobre: algunos conceptos básicos vinculados a la Administración de Justicia para poder entenderla en toda su magnitud, el concepto de Administración de Justicia, la interpretación que tiene ésta en el Título XX del Libro II del CP y, finalmente, el bien jurídico protegido común en este grupo de delitos.

La información obtenida en el desarrollo de este capítulo permitirá iniciar el estudio sobre el bien jurídico protegido en el delito de acusación y denuncia falsas, pues una vez conocida de modo genérico la esencia de la Administración de Justicia, se puede delimitar cuál de todos sus matices se intentará proteger en concreto mediante la persecución del delito estudiado.

II.- CONCEPTOS VINCULADOS A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

A continuación, se desarrollarán tres conceptos vinculados a la Administración de Justicia que permitirán obtener la información necesaria para poder entender su contenido en toda su magnitud. Estos son los siguientes:

1. La Justicia

La palabra justicia proviene del latín *iustitia*, que a su vez se deriva de *iustus* y ésta de *ius*, que significa “justicia, equidad, conformidad con el derecho”.

Acorde al diccionario de la Real Academia de la lengua española, la palabra justicia puede tener diversos significados como: 1) una de las cuatro virtudes cardinales, que inclina a dar cada uno lo que le corresponde o pertenece, 2)

¹⁰⁴ SERRANO BUTRAGUEÑO, en *Delitos contra la Administración de Justicia art. 325 a 338 bis del Código Penal (acusación y denuncia falsa, falso testimonio y otros delitos)*, p. 8.

¹⁰⁵ GARCÍA ARÁN, en *Delitos contra la Administración de Justicia*, pp. 281-282.

Derecho, razón, equidad, 3) conjunto de todas las virtudes, por el que es bueno quien las tiene, 4) aquello que debe hacerse según derecho o razón, 5) pena o castigo público, 6) Poder judicial, 7) atributo de Dios por el cual ordena todas las cosas en número, peso o medida. Ordinariamente se entiende por la divina disposición con que castiga o premia, según merece cada uno, entre otros.

En principio, la justicia más que un concepto jurídico es uno filosófico, Platón la consideraba como la virtud principal fuente de todas las demás¹⁰⁶, como el principio ordenador de éstas¹⁰⁷. Similar postura asumió Aristóteles en la *Ética* a Nicómaco al entender que la justicia es la virtud perfecta porque el que la posee puede practicar su virtud no sólo consigo mismo, sino con referencia a su prójimo también; porque son muchos los hombres que pueden practicar la virtud en sus propios asuntos, pero no todos lo pueden hacer en sus relaciones con el prójimo¹⁰⁸. Asimismo, entiende que la justicia consiste en la medida de proporcionalidad de los actos, la cual representa el medio equidistante entre el exceso y el defecto¹⁰⁹.

También ha sido interpretada como sinónimo de todo aquello que constituye el orden a que pertenece, de este modo, se considera injusta aquella situación que vulnera o desequilibra tal orden¹¹⁰.

Por su parte, RECASÉNS SICHES, “la palabra ‘justicia’ ha sido usada en dos acepciones de diferente alcance y extensión: por un lado, la palabra ‘justicia’ se ha usado y se usa para designar el criterio ideal, la idea básica sobre la cual debe inspirarse el Derecho. Por el otro, la palabra ‘justicia’ ha sido empleada también para denotar la virtud universal comprensiva de todas las demás virtudes”¹¹¹.

¹⁰⁶ PERELMAN, *De la Justicia*, p. 15.

¹⁰⁷ GONZÁLEZ CRUZ, *Provincia Revista venezolana de estudios territoriales*, núm. especial, 2005, p. 22.

¹⁰⁸ SIMÓN ABRIL, *La ética de Aristóteles*, p. 99.

¹⁰⁹ GONZÁLEZ CRUZ, *Provincia Revista venezolana de estudios territoriales*, núm. especial, 2005, p. 22.

¹¹⁰ PÉREZ RÚA, *La acusación y denuncia falsas*, p. 28.

¹¹¹ RECASÉNS SICHES, *Tratado General de Filosofía del Derecho*, p. 479.

En atención a lo antes señalado, podemos observar en primera instancia una vinculación de la justicia con los valores, los cuales son representaciones sociales relativas y cambiantes acorde a la sociedad de cada país, en un momento determinado. Lastimosamente, dado que lo que entendemos por valor no es igual para todos, es imposible tener un concepto de justicia universalmente compartido¹¹².

Debido al marcado interés que el Derecho tiene por la justicia, la doctrina ha tenido que pronunciarse respecto a lo que entienden por ésta.

Es harto conocida la definición de Ulpiano sobre la justicia, quién entendía que ésta es la voluntad constante y perpetua de dar a cada uno su derecho, definición popular, pero que tal como lo han sostenido juristas como Kelsen, es una fórmula vacía puesto que no explica el significado de la justicia material¹¹³.

Este autor, en su ensayo ¿Qué es la justicia? entiende que ésta es “aquella bajo cuya protección puede florecer la ciencia y, con la ciencia, la verdad y la sinceridad. Es la justicia de la libertad, la justicia de la paz, la justicia de la democracia, la justicia de la tolerancia”¹¹⁴.

La idea de justicia –desde una perspectiva jurídica– contiene dos elementos: uno positivo que implica el reconocimiento del derecho de cada hombre a las actividades libres de toda traba, así como a los beneficios consiguientes; y otro negativo que implica el sentimiento consciente de los límites que imponen la presencia de otros hombres que gozan de derechos análogos¹¹⁵.

De esta manera, puede entenderse que la justicia es el valor moral y jurídico más importante.

¹¹² LOUSTEAU HEGUY, *Revista Perspectiva*, núm. 24, 2010, p. 77.

¹¹³ Kelsen, *¿Qué es la justicia?*, pp. 45-46.

¹¹⁴ Kelsen, *¿Qué es la justicia?*, p. 83.

¹¹⁵ SPENCER, *La Justicia*, p. 53.

Valor moral porque sirve como ideal de la conducta humana, ubicándose en el plano del deber-ser, y se expresa en la idea de lo justo –cualidad con la que se pueden identificar ciertos actos humanos–.

Como ideal, se asocia al principio de igualdad o de proporcionalidad. Correspondiendo aplicar la igualdad cuando en la relación concurren sujetos iguales en méritos y condiciones, mereciendo por lo tanto trato igual. Mientras que, si concurriesen sujetos desiguales en méritos y condiciones, la igualdad se transformaría en desigualdad y, consecuentemente, para equilibrar esa relación se aplicaría el principio de proporcionalidad.

Cabe destacar que, tiene la fuerza de un deber de la conciencia individual, y a su vez, la de un deber y una necesidad de la conciencia social; se ve representada en el acto libre y voluntario de toda persona de dar y respetar al otro lo que le es debido, entendiendo esto como una obligación de conciencia con miras a realizar el bien.

En cuanto valor jurídico, se la considera así porque implica la conformidad de los hechos jurídicos con lo establecido en el ordenamiento jurídico, es decir, a la aplicación de la norma existente, dando a cada quien lo suyo acorde a ella¹¹⁶.

Siendo ello así, debe destacarse que es necesario que se produzca un balance ideal entre el aspecto moral y jurídico de la justicia, ya que sólo mediante éste se podrá desarrollar la vida en sociedad de manera pacífica.

Esto último es compartido por la doctrina y jurisprudencia constitucionalista, al expresar que la justicia que proclama la norma constitucional no es un valor ajeno y contrario al ordenamiento positivo, sino uno de los valores superiores del mismo¹¹⁷.

¹¹⁶ RONDÓN DE SANSÓ, *Boletín de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales*, vol. 66, núm. 136, 1999, p. 125.

¹¹⁷ Véase: Cuarto fundamento jurídico de la STC nº 20/1987, de fecha 19 de febrero de 1987. BOE núm. 54 –suplemento–, de fecha 4 de marzo de 1987, p. 26.

Y es que, todo ser humano en su vida diaria no se vincula con una abstracción sino con una realidad experimentada de manera concreta; es decir, toma conciencia de un acto que puede sentirlo y calificarlo, en este caso, como justo o injusto.

En la regulación positiva, el art. 1.1 CE al consignar que “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político” permite inferir el carácter supraconstitucional que se le ha reconocido a la justicia como valor superior y, en consecuencia, su condición de fuente de inspiración y modulación del ordenamiento jurídico.

La justicia al ser un valor fundamental del Estado social y democrático de Derecho, es un presupuesto ético de la democracia que garantiza la convivencia pacífica y armónica¹¹⁸.

Asimismo, el art. 117.1 CE al establecer que “[l]a justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y magistrados integrantes del Poder Judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley” permite colegir que la justicia debe atender las necesidades del pueblo –en el que tiene además de su origen, su fin–, dando una respuesta clara, precisa, adecuada y oportuna a los conflictos interindividuales y a los colectivos¹¹⁹. A ello hay que agregar que, una resolución judicial no se hallará predeterminada solamente por su acomodación al ordenamiento jurídico, sino también, por su oportuna resolución en el menor tiempo posible¹²⁰.

¹¹⁸ OCANDO OCANDO/PIRELA ISARRA, *Frónesis*, vol. 15, núm. 2, 2008, p. 203.

¹¹⁹ SERRANO BUTRAGUEÑO, en *Delitos contra la Administración de Justicia art. 325 a 338 bis del Código Penal (acusación y denuncia falsa, falso testimonio y otros delitos)*, pp. 46-47. Véase también: NAMEN VARGAS, *Revista de la Corte Superior de Justicia de Colombia*, núm. 28, 2010, p. 10.

¹²⁰ GONZÁLEZ-TREVIJANO, *La España constitucional*, p. 214.

Acorde con lo antes mencionado, puede concluirse que un auténtico Estado de Derecho impone a los jueces y magistrados la obligación de resolver los conflictos con equidad y certeza.

Al respecto, el TC español, en el décimo segundo fundamento jurídico de la sentencia 181/2000, de fecha 29 de junio de 2000 ha manifestado que:

“El valor justicia del art. 1.1 CE no puede, pues, identificarse unilateralmente con particulares modos de entender lo justo, ni con una forma de fiscalización de la constitucionalidad de la ley en atención a los resultados. Más bien ha de ser considerado como un concepto tendencialmente abierto y plural. Por ello, este valor superior del ordenamiento operará como un canon complementario, en concurrencia con otros factores de ponderación y, muy especialmente, en relación con el principio de interdicción de la arbitrariedad...”¹²¹.

Ahora bien, en cuanto a la expresión “Administración de Justicia”, en primer lugar, debe señalarse que ésta se vincula intrínsecamente con el fin de la justicia. Ello en razón de que la mencionada expresión hace referencia a que la justicia debe de administrarse conforme a derecho, cumpliendo con el rol de protección de los derechos fundamentales e intereses legítimos de los sujetos. Bajo esos términos, todos aquellos delitos que atenten contra la Administración de Justicia buscan sancionar los hechos que entorpezcan el fin de la justicia —y, consecuentemente, que afecten la paz social y el bienestar común—¹²².

No puede olvidarse que, para impartir justicia adecuadamente es necesario: i) realizar una gestión idónea de los recursos físicos y humanos; ii) formar a los juzgadores y personal para que puedan desarrollar adecuadamente sus labores; iii) promover la accesibilidad a información veraz y comprensible, entre otras acciones, pues todas ellas permitirán elaborar el diseño e implementación de soluciones concretas con el fin de conseguir que la justicia sea más próxima, confiable y eficiente¹²³.

¹²¹ BOE núm. 180 —suplemento—, de fecha 28 de julio de 2000, p. 85.

¹²² GONZÁLEZ RUS, en *Manual de Derecho Penal. Parte Especial*, pp. 5-6.

¹²³ NAMEN VARGAS, *Revista de la Corte Superior de Justicia de Colombia*, núm. 28, 2010, p. 10. Así también: MARTÍN BERNAL, *Boletín del Ministerio de Justicia*, núm. 1313, 1983, p. 5.

Finalmente, debe hacerse hincapié que un Estado social y democrático como el español, tiene que garantizar a todos sus habitantes el acceso abierto a la justicia, sin tener en cuenta para ello ningún tipo de distinción basada en la edad, condición socioeconómica, nivel de escolaridad, etc. De esta forma, se asegura a los ciudadanos que los conflictos sociales serán resueltos mediante mecanismos institucionales y no a través de la venganza privada¹²⁴.

2. El Poder Judicial

Con el principio de separación de poderes, se promueve la existencia de tres poderes independientes entre sí, el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. A través de este principio se busca limitar el uso arbitrario del poder y consecuentemente salvaguardar la libertad y los derechos de los ciudadanos¹²⁵. Para ello, se exige que cada uno de los Poderes tenga atribuido un determinado núcleo funcional, impidiendo de esta forma, la intromisión de los otros dos en el desempeño de su rol esencial¹²⁶.

Esta división de poderes es fruto de la Revolución Francesa¹²⁷, en donde, poniendo en práctica las ideas de la Ilustración y del Iluminismo, se consiguió romper, entre otras cosas con los esquemas de poder propios de la monarquía absoluta, en la que el poder se concentraba en manos del monarca, quién detentaba el poder por mandato divino, para pasar a promover el poder a manos del pueblo, en el cual reside la soberanía¹²⁸.

¹²⁴ CARVAJAL PÉREZ, *Revista de Derecho*, núm. 8, 2004, p. 23. En similar sentido se han expresado Rueda Romero y Rueda Pinto al manifestar que la actividad primordial del Estado de resolver conflictos que le presentan los ciudadanos y declarar la voluntad de la ley priva a los individuos la posibilidad de hacerse justicia por sus propias manos. RUEDA ROMERO/RUEDA PINTOR, *Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas*, núm. 2, 2006, p. 156.

¹²⁵ FUENTES MARTÍNEZ, *Revista de Ciencia Política*, vol. 31, núm. 1, 2011, p. 48.

¹²⁶ LOSING, *Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano*, año XVII, 2011, p. 419.

¹²⁷ Cabe señalar que, en un inicio con la Revolución Francesa, al Poder Judicial se le consideró como una especie de falso poder no equiparable a los demás, ya que lastimosamente el Poder Ejecutivo se apoderó de éste, puesto que se consideraba que juzgar era parte de gobernar. GÓMEZ COLOMER [*et al.*], *Introducción al Derecho Procesal (Parte General del Derecho Jurisdiccional)*, p. 27. En ese sentido, véase también: ANDRADE UBIDIA, *FORO. Revista de Derecho*, núm. 7, 2007, p. 52.

¹²⁸ MORENO CATENA, “El Poder Judicial”, en *Introducción al Derecho Procesal*, p. 53. Así también: DÍAZ PITA, *El delito de acusación y denuncia falsas: Problemas fundamentales*, pp. 31-32.

El Poder Judicial es el tercer pilar del Estado que emana de la soberanía popular, el cual es independiente y autónomo de los otros dos, especialmente, del Ejecutivo¹²⁹.

Así, en la exposición de motivos de la LO 6/1985, de fecha 1 de julio de 1985, del Poder Judicial se señala que:

“El Estado de Derecho, al implicar, fundamentalmente, separación de los poderes del Estado, imperio de la Ley como expresión de la soberanía popular, sujeción de todos los poderes públicos, a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico y garantía procesal efectiva de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, requiere la existencia de unos órganos que, institucionalmente caracterizados por su independencia, tengan un emplazamiento constitucional que les permita ejecutar y aplicar imparcialmente las normas que expresan la voluntad popular, someter a todos los poderes públicos al cumplimiento de la ley, controlar la legalidad de la actuación administrativa y ofrecer a todas las personas tutela efectiva en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos.

El conjunto de órganos que desarrollan esa función constituye el Poder Judicial del que se ocupa el título VI de nuestra Constitución, configurándolo como uno de los tres poderes del Estado y encomendándole, con exclusividad, el ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, según las normas de competencia y procedimiento que las leyes establezcan”¹³⁰.

De esta forma, la autonomía del Poder Judicial se constituye como un medio para garantizar la independencia del juez individual, y también para garantizar una situación de paridad entre los poderes –evitando con ello una situación de superioridad de un poder sobre otro–, claro está, dentro del marco de la actuación que a cada uno le corresponde acorde a lo previsto en la CE¹³¹.

La promoción de dicha independencia puede desprenderse de lo prescrito en el art. 117.1 CE, ya que al estipularse que los jueces son independientes y que se encuentran sometidos únicamente al imperio de la ley, se busca destacar que

¹²⁹ DÍAZ PITA, *El delito de acusación y denuncia falsas: Problemas fundamentales*, p. 31.

¹³⁰ BOE núm. 157, de fecha 2 de julio de 1985, p. 20632.

¹³¹ MONTERO AROCA, “El gobierno del Poder Judicial”, en *Derecho Jurisdiccional I. Parte General*, pp. 130-131.

estos son inmunes a cualquier tipo de intento de intromisión política por parte de los otros poderes del Estado¹³².

Así pues, el Poder Judicial promueve una independencia en sentido amplio, una externa –de carácter político o funcional¹³³ y económico–¹³⁴ frente a los otros poderes del Estado, y una interna, referida a la que poseen los jueces de instancias inferiores frente a los jueces de instancias superiores y las partes del proceso¹³⁵.

Siendo ello así, los jueces no deben someterse ante nadie y menos a elecciones democráticas, ya que el Poder Judicial se rige por el principio del pleno sometimiento al imperio de la Ley y no por el principio de oportunidad política, de tal manera que, el mencionado Poder sólo se debe a la Constitución y a las leyes aprobadas democráticamente por los ciudadanos a través de sus representantes, radicando en esto la verdadera esencia de la libertad, intendencia y responsabilidad del Poder Judicial¹³⁶.

¹³² Sobre el particular, Andaluz Vegacenteno destaca que la eficacia del Estado de Derecho depende de sus tribunales, indicando que para cumplir con dicho objetivo deben darse las siguientes condiciones: i) independencia, especialmente del Poder Ejecutivo; ii) independencia de los jueces con respecto a los poderes públicos y los órganos internos del gobierno judicial; iii) respeto del principio de unidad jurisdiccional; y iv) sometimiento sólo al derecho positivo del sistema jurídico. ANDALUZ VEGACENTENO, *Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso*, núm. XXXV, 2010, p. 236.

¹³³ La independencia funcional se entiende como la libertad de criterio del juzgador, su actitud frente a influencias extrañas al derecho provenientes del sistema social, la forma en la que juzga desde la perspectiva del derecho –sin tener en cuenta ningún tipo de presiones o intereses extraños a aquél–, la no sujeción a ninguna orden o instrucción, salvo las que provienen de la ley. NADER KURI, en *La situación actual del sistema penal en México. XI Jornadas sobre justicia penal*, p.104. Esta independencia abarca aspectos tales como la génesis, organización, competencia, procedimiento e imperio de la magistratura, así como también la inamovilidad y responsabilidad de sus miembros. CEA EGANA, *Revista chilena de Derecho*, vol. 6, núm. 1-4, 1979, p. 298.

¹³⁴ RÍOS ÁVALOS, *Revista da EMERJ*, vol. 1, núm. 4, 1998, p. 193.

¹³⁵ Véase en extenso: MORA MORA, *Anuario Iberoamericano de justicia Constitucional*, núm. 3, 1999, p. 412.

¹³⁶ PAREJA VALLEJO, *El Poder Judicial y las Comunidades Autónomas. Especial Referencia a Andalucía*, pp. 20-21.

Es un Poder único pues al emanar de la soberanía popular, no puede existir más de un Poder Judicial en todo el territorio español, tan es así que, por ese motivo las comunidades autónomas no tienen un Poder Judicial propio¹³⁷.

Asimismo, es plural ya que cuenta con un gran número de órganos jurisdiccionales y también se haya compuesto por una serie de estructuras, instrumentos y órganos llamados a desempeñar funciones complementarias –de dirección, organización y asignación de medios– que no tienen carácter jurisdiccional¹³⁸. En ese sentido, puede sostenerse que el Poder Judicial se presenta como la unión de todos los organismos y la suma de todas las funciones y actividades que están destinadas a la tutela del ordenamiento jurídico, ya sea con respecto a los organismos públicos, o bien, con respecto a la actuación de los particulares¹³⁹.

Este Poder es ejercido por jueces y magistrados independientes que administran o imparten justicia, ellos, en cuanto estén desempeñando la titularidad de los distintos órganos jurisdiccionales, son los exclusivos depositarios de la potestad jurisdiccional (tienen su monopolio), es decir, de la potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, aplicando el Derecho a los conflictos y asuntos que se les sometan y para cuya resolución tengan competencia¹⁴⁰, sin que puedan ejercer más funciones¹⁴¹.

De este modo, la función principal del Poder Judicial se aboca a asegurar el cumplimiento de las normas que la sociedad ha dado por medio de sus representantes, con independencia de la voluntad individual de sus destinatarios y de sus condiciones particulares, según el principio de igualdad

¹³⁷ MONTERO AROCA, “Los principios políticos del Poder Judicial”, en *Derecho Jurisdiccional I. Parte General*, p. 83.

¹³⁸ AGUIAR DE LUQUE, en *El Poder Judicial. VI Congreso de la asociación de constitucionalistas de España*, pp. 25-26.

¹³⁹ RONDÓN DE SANSÓ, *Boletín de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales*, vol. 66, núm. 136, 1999, p. 135.

¹⁴⁰ SERRANO BUTRAGUEÑO, en *Delitos contra la Administración de Justicia art. 325 a 338 bis del Código Penal (acusación y denuncia falsa, falso testimonio y otros delitos)*, p. 20.

¹⁴¹ DEL TORO MARZAL, en *Delitos contra la Administración de Justicia art. 325 a 338 bis del Código Penal (acusación y denuncia falsa, falso testimonio y otros delitos)*, p. 342.

ante la ley¹⁴²; declarando de manera vinculante y previo proceso, cuál es el derecho en el caso concreto, ya sea en juicios entre particulares o entre particulares y entes públicos, pasando también por el ejercicio del *ius puniendi*¹⁴³.

Cabe destacar que, el Poder Judicial es un poder que carece de iniciativa propia, exceptuando, el orden penal, ya que el Juez puede actuar de oficio y no en virtud del principio de justicia rogada¹⁴⁴.

Es un poder difuso, ya que es predicable de todos y cada uno de los órganos jurisdiccionales del país cuando ejercen su función jurisdiccional, no existiendo jerarquización funcional u orgánica entre ellos¹⁴⁵ –entendida como subordinación o dependencia–, sino más bien una jerarquización estructural –entendida como sistema de jerarquía de contenidos basada en el sistema de recursos–¹⁴⁶, pero que permite que cada juzgado y tribunal mantenga su independencia¹⁴⁷.

Cada órgano jurisdiccional, cuando actúa, se considera parte indivisible del Poder Judicial y al mismo tiempo depositario de todo el Poder Judicial¹⁴⁸.

Los órganos jurisdiccionales que componen el Poder Judicial son los siguientes:

- a) el Consejo General del Poder Judicial –órgano de autogobierno del Poder Judicial–¹⁴⁹. Sus atribuciones se encuentran descritas en

¹⁴² RUIZ ROBLEDO, *Compendio de Derecho Constitucional Español*, p. 183.

¹⁴³ OTERO PRAGA, *Boletín de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago*, núm. 12, 1997, pp. 135-136.

¹⁴⁴ SERRANO BUTRAGUEÑO, en *Delitos contra la Administración de Justicia art. 325 a 338 bis del Código Penal (acusación y denuncia falsa, falso testimonio y otros delitos)*, pp. 17-18.

¹⁴⁵ PÉREZ RÚA, *La acusación y denuncia falsas*, p. 31.

¹⁴⁶ RIPOLLÉS SERRANO, en *Lecciones de Derecho Constitucional*, p. 233.

¹⁴⁷ MORENO CATENA, en *Derecho Procesal Civil. Parte general*, p. 24.

¹⁴⁸ SERRANO BUTRAGUEÑO, en *Delitos contra la Administración de Justicia art. 325 a 338 bis del Código Penal (acusación y denuncia falsa, falso testimonio y otros delitos)*, p. 17.

¹⁴⁹ PÉREZ RÚA, *La acusación y denuncia falsas*, p. 31.

el art. 107 CE, entre ellas se encuentra la inspección de juzgados y tribunales, selección, formación y perfeccionamiento, provisión de destinos, ascensos, situaciones administrativas y régimen disciplinario de jueces y magistrados, entre otros;

- b) las Salas de Gobierno del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional y de los Tribunales Superiores de Justicia, quienes ejercen sus atribuciones en dichos Tribunales, y en el caso de la Audiencia Nacional, ejerciéndolas también sobre los Juzgados Centrales de Instrucción; y,
- c) el resto de órganos jurisdiccionales con atribuciones gubernativas con respecto a su propio ámbito orgánico.

Por otro lado, es importante destacar que, el Poder Judicial al no ser un poder político, no le es exigible responsabilidad alguna de este tipo. Consecuentemente, tampoco se le ha encargado cumplir con la función política, de crítica de decisiones de esta naturaleza o de influencia en las diferentes formaciones que integran los partidos¹⁵⁰.

En síntesis, el Poder Judicial tiene como roles fundamentales garantizar su propia independencia e integridad orgánica, proteger los derechos y garantías fundamentales de los ciudadanos y, ejercer un control jurídico de los actos de la Administración¹⁵¹.

Ahora bien, a veces se suele utilizar indistintamente el término Administración de Justicia y Poder Judicial, sin embargo, tal como lo ha sostenido SERRANO BUTRAGUEÑO, puede determinarse una diferenciación entre ambos conceptos¹⁵².

¹⁵⁰ ASENCIO MELLADO, *Introducción al Derecho Procesal*, p. 46.

¹⁵¹ CORREA LABRA, *Revista Chilena de Derecho*, vol. 10, núm. 2, 1983, p. 386.

¹⁵² SERRANO BUTRAGUEÑO, en *Delitos contra la Administración de Justicia art. 325 a 338 bis del Código Penal (acusación y denuncia falsa, falso testimonio y otros delitos)*, p. 22.

Cuando se emplea la expresión Poder Judicial se hace referencia al aspecto orgánico del tercer poder del Estado, es decir a aquella organización compleja, compuesta por personas y órganos propios encargados de impartir justicia, de ejercer la jurisdicción, que van desde los Juzgados de Paz a las Salas de Justicia del Tribunal Supremo¹⁵³.

Mientras que, cuando se emplea el término Administración de Justicia se hace referencia al aspecto funcional del Poder Judicial, es decir, a la labor de juzgador y a la exigencia de la ejecución de lo juzgado según las normas de competencia y procedimiento que las leyes establezcan¹⁵⁴. Ello implica a su vez que, mediante el empleo de dicho término se haga referencia también al conjunto de medios personales y materiales y procedimientos para atender el desarrollo de la potestad jurisdiccional¹⁵⁵.

3. La Potestad Jurisdiccional

En cuanto a la potestad jurisdiccional, ésta es una potestad que proviene de la soberanía del Estado, es exclusiva del Poder Judicial y se ejerce a través de órganos competentes¹⁵⁶. Se encuentra basada en el derecho fundamental de los gobernados a la tutela jurisdiccional y en el deber del Estado de impartir justicia de manera imparcial, independiente y objetiva¹⁵⁷.

En el art. 117.3 CE se ha establecido que los jueces y magistrados se encargan de modo exclusivo del ejercicio de la potestad jurisdiccional, es decir, de la actividad consistente en juzgar y hacer ejecutar lo juzgado al caso concreto¹⁵⁸.

¹⁵³ MORENO CATENA, “El Poder Judicial”, en *Introducción al Derecho Procesal*, p. 60.

¹⁵⁴ SERRANO BUTRAGUEÑO, en *Delitos contra la Administración de Justicia art. 325 a 338 bis del Código Penal (acusación y denuncia falsa, falso testimonio y otros delitos)*, p. 22.

¹⁵⁵ RIPOLLÉS SERRANO, en *Lecciones de Derecho Constitucional*, p. 245.

¹⁵⁶ DÍAZ MORENO, *Opinión Jurídica*, vol. 12, núm. 24, 2013, p. 40.

¹⁵⁷ COLÍN GARCÍA/MONTERRUBIO CORDERO, *Ergo Sum*, vol. 17, núm. 2, 2010, p. 177.

¹⁵⁸ LORCA NAVARRETE, *Poder Judicial ¿garantía de la potestad jurisdiccional constitucional? ¿no invocar el Poder Judicial en vano!*, p. 3. La palabra juzgar debemos asimilarla a la operación de aplicar el derecho a unos hechos, mientras que, por ejecutar, debemos entender que hacemos referencia al acto de hacer real o efectivo el pronunciamiento o declaración que resulte de la operación de juzgar. ORMAZABAL SÁNCHEZ, *Introducción al Derecho Procesal*, p. 16.

De la disposición legal antes trascrita, puede desprenderse que el contenido esencial de la potestad jurisdiccional reside en la potestad de decisión, es decir, en la potestad de emitir resoluciones obligatorias¹⁵⁹ –basadas en la aplicación del Derecho–¹⁶⁰ que compongan de modo definitivo e irrevocable el conflicto, dando razón en todo o parte a alguno de los litigantes¹⁶¹. Hoy en día, ese contenido se ha ampliado, pues ya no se agota con la mera resolución judicial, sino que, además, abarca también la ejecución de esa resolución con el fin de hacerla efectiva –potestad de coerción–¹⁶².

Esta potestad corresponde exclusiva e íntegramente al Poder Judicial, no pudiendo ningún otro poder, ni ningún otro orden de funcionarios realizar dicha función¹⁶³, quedando su realización en monopolio de los jueces y magistrados el despeño de la potestad jurisdiccional por medio de los juzgados y tribunales¹⁶⁴.

El aspecto positivo de la exclusividad de la jurisdicción se identifica con el monopolio de la potestad jurisdiccional por parte de los jueces y magistrados y con la no atribución o ejercicio de la potestad jurisdiccional por parte de los otros Poderes del Estado¹⁶⁵, mientras que, el aspecto negativo se desprende de la prohibición de ejercer otras funciones no jurisdiccionales, salvo las que expresamente les sean atribuidas por ley en garantía de cualquier derecho –art. 117.4 CE–¹⁶⁶.

¹⁵⁹ JUSTICIA VIVA, *Manual del sistema peruano de justicia*, p. 64.

¹⁶⁰ DÍAZ PITA, *El delito de acusación y denuncia falsas: Problemas fundamentales*, p. 35.

¹⁶¹ Debe tenerse en cuenta que, para que el órgano jurisdiccional pueda ejercer la potestad jurisdiccional es necesario que exista previamente exista un proceso judicial, ya que, sin éste, ni el juez ni el magistrado podrán proceder a la resolución del conflicto inter partes. ZAVALA EGAS, *Iuris Dictio. Revista del Colegio de Jurisprudencia*, núm. 1, 2000, p. 20.

¹⁶² MORENO CATENA, “La jurisdicción y el Poder Judicial”, en *Introducción al Derecho Procesal*, p. 44.

¹⁶³ SERRANO BUTRAGUEÑO, en *Delitos contra la Administración de Justicia art. 325 a 338 bis del Código Penal (acusación y denuncia falsa, falso testimonio y otros delitos)*, p. 36.

¹⁶⁴ RIPOLLÉS SERRANO, en *Lecciones de Derecho Constitucional*, p. 233.

¹⁶⁵ ASENSIO MELLADO, *Introducción al Derecho Procesal*, p. 68.

¹⁶⁶ RUIZ ROBLEDO, *Compendio de Derecho Constitucional Español*, p. 187.

Así pues, lo que se busca es mantener la independencia en el ejercicio de esta potestad, ya que, en el caso de que se les permitiera a los jueces y magistrados poder asumir funciones que por su naturaleza no les correspondieran, se podría poner en peligro su imparcialidad¹⁶⁷.

Ahora bien, cabe mencionar que el monopolio del juzgamiento y ejecución de lo juzgado no impide que los sujetos en conflicto, en los casos en los que se discutan sobre derechos disponibles, acudan a un tercero para la resolución de su litigio, como ocurre en el caso del arbitraje¹⁶⁸.

Sin embargo, esto no debe llevarnos al error de entender que el arbitraje es una muestra de la potestad jurisdiccional, puesto que aquél se agota en la emisión del laudo, mientras que, como se ha señalado anteriormente, la potestad jurisdiccional alcanza incluso a la ejecución coactiva de la sentencia emitida por el órgano jurisdiccional¹⁶⁹.

Y es que, el hecho de que el Poder Judicial tenga el monopolio de la potestad jurisdiccional y con ello la misión de impartir justicia, no impide que éste posea un monopolio sobre la resolución de los conflictos que acontecen en el entorno social¹⁷⁰, puesto que, existen casos en los que el Estado admite la posibilidad de impartir justicia privada, como por ejemplo, en el caso de la conciliación¹⁷¹.

La potestad jurisdiccional es una sola, no se parcela¹⁷² ni se divide, pues cada juez y magistrado la poseen totalmente, repartiendo únicamente la competencia –entendida como parte de la función jurisdiccional encargada a

¹⁶⁷ ASENCIO MELLADO, *Introducción al Derecho Procesal*, p. 69.

¹⁶⁸ MORENO CATENA, en *Derecho Procesal Civil. Parte general*, p. 25.

¹⁶⁹ MORENO CATENA, “La exigencia constitucional del ejercicio de la jurisdicción: la exclusividad”, en *Introducción al Derecho Procesal*, p. 72.

¹⁷⁰ HERRERA VÁSQUEZ, *Función Jurisdiccional*, p. 38.

¹⁷¹ ZULUAGA GIL, *Revista Colombiana de Derecho Constitucional*, núm. 1, 1997, p. 117.

¹⁷² LORCA NAVARRETE, *Poder Judicial ¿garantía de la potestad jurisdiccional constitucional? ¿no invocar el Poder Judicial en vano!*, p. 30.

un determinado órgano jurisdiccional– en los distintos juzgados y tribunales existentes¹⁷³.

Al respecto, ASECIO MELLADO nos recuerda que “[s]i el Poder es predicable de la Jurisdicción en general, la potestad, por el contrario, lo es de cada uno de los órganos que lo integran, viniéndoles atribuida por la soberanía popular con total plenitud para que sea actuada con sujeción a la ley”¹⁷⁴.

En ese sentido, es pertinente destacar, que existe una diferencia entre la potestad jurisdiccional y la función jurisdiccional. Ambos conceptos son complementarios y no unívocos, pues se encuentran íntimamente vinculadas entre sí. Tal como se indicó, la potestad jurisdiccional al ser única, no puede dividirse ni repartirse, distribuyéndose únicamente la función jurisdiccional de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado entre los distintos órganos jurisdiccionales¹⁷⁵.

La función jurisdiccional es aquella actividad que dentro del régimen constitucional está encomendada y es desarrollada por los órganos jurisdiccionales¹⁷⁶. Ésta, se ve reflejada en la labor de decisión de controversias entre partes con fuerza de verdad legal, hecha por un órgano imparcial e independiente¹⁷⁷.

Los elementos de dicha función son los siguientes: i) la *notio*, entendida como el derecho que tiene el juez o magistrado de conocer una cuestión litigiosa

¹⁷³ GÓMEZ COLOMER, en *Derecho Jurisdiccional I. Parte General*, p. 185. Así también: ARMIENTA CALDERÓN, *Revista de la Facultad de Derecho de México*, núm. conmemorativo, 1991, p. 105.

¹⁷⁴ ASECIO MELLADO, *Introducción al Derecho Procesal*, p. 46.

¹⁷⁵ LORCA NAVARRETE, *Poder Judicial ¿garantía de la potestad jurisdiccional constitucional? ¿no invocar el Poder Judicial en vano!*, p. 35. Sobre el particular, Ortells Ramos señala que los órganos jurisdiccionales no sólo monopolizan una actividad o una función, sino de modo lógicamente previo, la aptitud jurídica para desarrollar una y otra, es decir, la potestad. En ese sentido, podemos desprender que para el citado autor la potestad jurisdiccional encomendada al Poder Judicial, legitima el desempeño de la función jurisdiccional a los órganos jurisdiccionales. ORTELLS RAMOS, *Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad de Extremadura*, núm. 3, 1984-1985, p. 418.

¹⁷⁶ ORTEGA MEDINA, *Revista de la Facultad de Derecho de México*, tomo XL, núms. 172-173-174, 1990, p. 131.

¹⁷⁷ GORDILLO, *Tratado de Derecho Administrativo y obras selectas*, t. I, p. IX-15.

determinada, ii) la *vocatio*, identificada como la facultad que poseen estos de obligar a las partes a comparecer dentro del término de emplazamiento, iii) la *coertio*, concebida como el empleo de la fuerza por parte de aquellos para el cumplimiento de las medidas ordenadas dentro del proceso, iv) el *iudicium*, o lo que es lo mismo, la facultad de dictar sentencia poniendo término a la litis con carácter definitivo, y, finalmente, v) la *executio*, vale decir, el imperio para la ejecución de las resoluciones judiciales mediante el auxilio de la fuerza pública¹⁷⁸.

Resumiendo, la potestad jurisdiccional se puede identificar con la facultad o poder que le pertenece al Poder Judicial de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, mientras que, la función jurisdiccional se identifica como la función o labor encomendada a cada órgano jurisdiccional de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado.

Ahora bien, habiendo desarrollado los tres conceptos antes estudiados puede procederse a realizar un estudio sobre el concepto de Administración de Justicia y su significado en el en el Título XX del CP.

III.- CONCEPTO DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

La Administración de Justicia puede entenderse de dos formas: por un lado, como *poder* –desde una perspectiva subjetiva, entendida como los órganos que ejercen la función jurisdiccional– y, por el otro, como *función* –desde una perspectiva objetiva, entendida como la actividad jurisdiccional–.

La Administración de Justicia en su primera acepción –es decir, como poder– hace referencia a los órganos jurisdiccionales como entes del Estado. En ese sentido, cualquier tipo de ataque a estos órganos podría suponer a su vez un ataque en contra de las instituciones del Estado¹⁷⁹.

¹⁷⁸ ZEPEDA SEGURA, *Revista Anales de Jurisprudencia*, núm. 234, 1998, p. 124.

¹⁷⁹ MORALES ANDRADE, *El delito de acusación o denuncia calumniosa*, p. 71.

De esta forma, un atentado a la independencia del Poder Judicial afectaría más allá de lo que estrictamente podría entenderse por Administración de Justicia, afectando propiamente el interés del Estado de proteger sus poderes e instituciones.

En cambio, en su segunda acepción, la Administración de Justicia es entendida como la función jurisdiccional del Estado a través de la cual se busca resolver los conflictos sociales, dando a cada uno el trato que le corresponde de acuerdo con las leyes y a través de las normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan¹⁸⁰.

De este modo, se identifica a la Administración de Justicia como el servicio público –prestado por el Estado mediante sus órganos jurisdiccionales–¹⁸¹ que tiene por objeto proveer justicia en forma permanente y continua cuando se haya tomado conocimiento de la existencia de conflictos jurídicos, los mismos que deberán de resolverse pacíficamente mediante la aplicación de las normas del derecho pertinentes¹⁸². y procurando la ejecución de lo juzgado por tribunales independientes e imparciales dentro del marco de garantías procesales previamente establecidas por el ordenamiento jurídico¹⁸³.

¹⁸⁰ GONZÁLEZ RUS, en *Manual de Derecho Penal. Parte Especial*, p. 2. Así también Álvarez García señala que: “La Administración, pues, de Justicia consiste en un constructo compuesto por el ejercicio de su monopolio, el deber de garantizar su realización, la puesta a disposición de los órganos para llevarla a cabo y del procedimiento para hacerla posible”. ÁLVAREZ GARCÍA, en *Tratado de Derecho Penal Español. Parte Especial III*, p. 763.

¹⁸¹ ARAUJO-OÑATE, *Revista Estudios Socio-Jurídicos*, vol. 13, núm. 1, 2011, p. 249. En igual sentido, González Rus al manifestar que: “... la Administración de Justicia debe enfocarse desde la perspectiva del servicio que sustancialmente presta y que no es otro que el de servir de garantía última de los derechos e intereses personales y sociales, resolviendo conflictos y preservando los derechos y los legítimos intereses de los ciudadanos, conforme a la ley, «juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado» (art. 117.3 CE)”. GONZÁLEZ RUS, en *Derecho Penal Español. Parte Especial*, pp. 939-940. En similares términos: CALDERÓN CEREZO/CHOCLÁN MONTALVO, *Derecho Penal*, t. II, p. 543.

¹⁸² Al respecto, véase: PRIETO-CASTRO Y FERRANDIZ, *Separata de El Estado y la Política*, vol. 3 de la España de los años 70, 1974, p. 373.

¹⁸³ Roperro Carrasco recordando lo expresado por Magaldi Paternostro y García Arán, expresa que, para las mencionadas autoras el significado de Administración de Justicia debe ser entendido como función jurisdiccional ejercida en un proceso rodeado de garantías. ROPERRO CARRASCO, *Abusar de la Justicia. Dimensión del actual delito de acusación y denuncias falsas*, pp. 105-106.

En tal virtud, quien lesione o afecte dicha función (la jurisdiccional) estaría afectando solamente a la Administración de Justicia. Así pues, esta última acepción, en comparación con la anterior, brinda un criterio más restrictivo¹⁸⁴.

En este trabajo, se ha considerado que la interpretación de Administración de Justicia que interesa para determinar el bien jurídico protegido en los delitos contenidos en el Título XX CP es la segunda, es decir, aquella que la entiende como la función estatal que les asiste a los integrantes del Poder Judicial de impartir justicia a través de los cauces del proceso¹⁸⁵.

Es pertinente destacar, que esta concepción de la Administración de Justicia implica un respeto a los siguientes presupuestos básicos: i) el impedimento de tomar la justicia por la propia mano, ii) la represión de los delitos más graves, iii) la evitación de que el sistema judicial se ponga en marcha de manera fraudulenta, iv) el cumplimiento de las obligaciones establecidas a efectos de coadyuvar con la emisión de una adecuada resolución judicial de los litigios, y, iv) el acatamiento de las condenas penales¹⁸⁶.

Ahora bien, cabe precisar que esta segunda acepción puede ser a su vez entendida en un sentido estricto o en uno amplio.

Acorde al primero de ellos, la Administración de Justicia hace referencia sólo a la función jurisdiccional propiamente dicha, es decir, a aquella que se encuentra reservada al Poder Judicial y que se concreta en las sentencias dictadas por jueces y magistrados independientes, inamovibles y sometidos únicamente al imperio de la ley.

Por su parte, en un sentido amplio, la Administración de Justicia debe ser entendida como aquella expresión que abarca además de la función antes señalada, la gestión de todos los recursos personales, materiales, financieros y tecnológicos puestos a su

¹⁸⁴ MORALES ANDRADE, *El delito de acusación o denuncia calumniosa*, p. 71.

¹⁸⁵ RODRÍGUEZ LÓPEZ/SOBRINO MARTÍNEZ, *Delitos contra la Administración de Justicia*, p. 17. En similar sentido, véase: DOMÍNGUEZ IZQUIERDO, *El falso testimonio de testigos, peritos e intérpretes*, p. 107.; y, SERRANO BUTRAGUEÑO, en *Delitos contra la Administración de Justicia art. 325 a 338 bis del Código Penal (acusación y denuncia falsa, falso testimonio y otros delitos)*, pp. 9-10.

¹⁸⁶ FIGUEROA NAVARRO/GARCÍA VALDÉS/MESTRE DELGADO, *Lecciones de Derecho Penal. Parte Especial*, p. 241.

disposición¹⁸⁷. De esta forma, mediante esta segunda interpretación se hace mención además de la función jurisdiccional, a las labores de auxilio y ayuda a los jueces para el cumplimiento de la función que les es encomendada, debiendo destacarse que aquellas labores no son realizadas únicamente por el Poder Judicial, sino que en algunos casos éstas también las pueden ser por las Comunidades Autónomas, quienes pueden asumir competencias sobre los medios materiales y personales de la Administración de Justicia sin que ello suponga una vulneración de las competencias estatales¹⁸⁸.

Siendo ello así, siguiendo a JUDEL PRIETO, PIÑOL RODRÍGUEZ y SUÁREZ-MIRA RODRÍGUEZ, se considera que el concepto de Administración de Justicia en este grupo de delitos debe ser percibido en un sentido amplio abarcando tanto la función jurisdiccional como también todas aquellas otras actividades que son complemento, presupuesto o condición de la potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado¹⁸⁹.

Lo antes sostenido emerge de la lectura de los comportamientos delictivos que se encuentran encuadrados dentro de la rúbrica estudiada, pues ella abarca un grupo de conductas que tienen una relación con la afectación del fin último de la justicia¹⁹⁰, claro está con excepción de aquéllas que, por su carácter genérico, son contempladas en los delitos realizados por los funcionarios públicos, como el cohecho y la prevaricación de esos funcionarios¹⁹¹.

¹⁸⁷ SERRANO BUTRAGUEÑO, en *Delitos contra la Administración de Justicia art. 325 a 338 bis del Código Penal (acusación y denuncia falsa, falso testimonio y otros delitos)*, p. 26.

¹⁸⁸ ACADEMIA FORO, *Auxiliares Administrativos de la Junta de Andalucía. Temario Área Jurídico Administrativa General*, vol. I, pp. 126-127. Sobre el particular, véase en extenso la STC nº 56/1990, de fecha 29 de marzo de 1990.

¹⁸⁹ JUDEL PRIETO/PIÑOL RODRÍGUEZ/SUÁREZ-MIRA RODRÍGUEZ, “Acusación y Denuncias Falsas”, en *Manual de Derecho Penal. Parte Especial*, t. II, p. 543.

¹⁹⁰ Cantarero Bandrés al sostener que: “[e]n el seno de este conglomerado se recogen no sólo figuras que implican la inobservancia de los pronunciamientos judiciales, sino también otros hechos que van mas allá de las actuaciones de los órganos de la Justicia, que se extienden a la esfera de los ciudadanos y que se significan como arbitraria asunción o dejación de poderes que están reservados activa u omisivamente al Poder Judicial”, muestra la amplitud de los diversos aspectos protegidos de la Administración de Justicia. CANTARERO BANDRÉS, *Administración de justicia y obstruccionismo judicial*, p. 26.

¹⁹¹ CONDE-PUMPIDO FERREIRO, *Contestaciones de Derecho Penal al Programa de Judicatura. Parte Especial*, p. 464. En igual sentido, Vincenzo Manzini entiende que el objeto genérico de tutela penal de este tipo de delitos se identifica con los intereses de la Administración de Justicia entendida en sentido latísimo, es decir, aquél que comprende todo lo que tiene una referencia cualquiera al fin último de la justicia. MANZINI, *Tratado de Derecho Penal*, t. 10, vol. V, p. 4. Así también: SERRANO BUTRAGUEÑO, en *Delitos contra la Administración de Justicia art. 325 a 338 bis del Código Penal (acusación y denuncia falsa, falso testimonio y otros delitos)*, pp. 10-11, CANTARERO BANDRÉS,

Como muestra de la amplitud del concepto, autores como CONDE-PUMPIDO FERREIRO han destacado que al lado de delitos que ofenden a la actividad judicial propia –comprensiva tanto de la facultad requirente como la inquirente–, aparecen figuras delictivas que implican inobservancia de los acuerdos judiciales, la realización arbitraria del propio derecho –en la que lo que se sanciona es la sustitución de la actividad de los órganos de justicia por la actuación personal–, demostrando con ello que la protección de la Administración de Justicia contenida en el CP no se limita a la función jurisdiccional en estricto sino más bien, abarca mucho más que ella¹⁹².

Una vez clara la extensión de la concepción de la Administración de Justicia en el grupo de delitos contenidos en el Título XX del CP sigue determinar con precisión el bien jurídico protegido en este tipo de delitos en el siguiente apartado.

IV.- BIEN JURÍDICO PROTEGIDO EN LOS DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

En cuanto al bien jurídico protegido en este grupo de delitos, existen diversos matices en las posturas expuestas en la doctrina. Podemos agrupar las posturas en dos grandes grupos, por un lado, se tiene a quienes sostienen que el bien jurídico protegido es la potestad jurisdiccional (postura estática) y, por el otro, a quienes entienden que lo es la función jurisdiccional (postura dinámica).

1. Postura estática

Se ha denominado a esta postura como estática, dado que, la potestad jurisdiccional al ser única, indivisible y exclusiva la poseen por igual cada uno

Administración de justicia y obstruccionismo judicial, p. 26, entre otros. Cabe mencionar que un sector de la doctrina ha entendido que no todos los delitos que se encuentran dentro del Título XX del CP tienen como principal objeto de protección a la Administración de Justicia –como por ejemplo, en el caso de la omisión de los deberes de impedir delitos o de promover su persecución (art. 450 CP)– y que no todos los delitos que afectan principalmente a la Administración de Justicia se encuentran contenidos en el Título XX, por ejemplo, éste sería el caso del delito de desobediencia y denegación de auxilio (art. 410-412 CP). BENLLOCH PETIT, en *Lecciones de Derecho Penal. Parte Especial*, pp. 337-338.

¹⁹² CONDE-PUMPIDO FERREIRO, *Contestaciones de Derecho Penal al Programa de Judicatura. Parte Especial*, p. 464.

de los órganos jurisdiccionales y, por tanto, permanece inmutable en su esencia.

Como representante de esta postura se tiene a DÍAZ PITA, quien considera que lo que se protege es la potestad jurisdiccional, entendiéndola como la capacidad detentada en exclusiva por los órganos integrantes del Poder Judicial para resolver conflictos sociales mediante la aplicación del Derecho objetivo¹⁹³.

2. Postura dinámica¹⁹⁴

Se la ha denominado dinámica, dado que, al hacer referencia a la función o labor encomendada a cada órgano jurisdiccional de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, se hace mención también a que cada órgano jurisdiccional realizará dicha función acorde a los parámetros fijados según su competencia, siendo esto último lo que determina la mutabilidad en la forma del ejercicio de dicha función, pues será distinta en función de la competencia de cada órgano. Así pues, por ejemplo, un juez penal y uno civil deberán juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, pero cada uno de ellos en función de la materia que les compete.

Esta postura es mayoritaria, quienes la defienden entienden que el bien jurídico protegido en este tipo de delitos es el correcto funcionamiento de la Administración de Justicia¹⁹⁵ en el ejercicio de la función jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado¹⁹⁶.

¹⁹³ DÍAZ PITA, *El delito de acusación y denuncia falsas: Problemas fundamentales*, p. 36.

¹⁹⁴ Algunos de los principales representantes de esta postura son: GARCÍA SOLÉ, *El delito de acusación y denuncia falsas*, p. 59; SANTANA VEGA, en *Derecho Penal. Parte Especial*, t. I, p. 765; GONZÁLEZ RUS, en *Manual de Derecho Penal. Parte Especial*, pp. 2-3, entre otros.

¹⁹⁵ Serrano Butragueño nos recuerda que una similar postura es sostenida por Luzón Cuesta, al manifestar éste que: “Con mayor o menor intensidad, todos los delitos comprendidos actualmente en el título tienen como nota común el afectar, de una u otra manera, negativamente, a una adecuada Administración de Justicia, bien impidiendo su actuación, provocándola cuando no proceda, entorpeciendo la función de juzgar o evitando que se cumpla lo juzgado”. SERRANO BUTRAGUEÑO, en *Delitos contra la Administración de Justicia art. 325 a 338 bis del Código Penal (acusación y denuncia falsa, falso testimonio y otros delitos)*, p. 28.

¹⁹⁶ SANTANA VEGA, en *Derecho Penal. Parte Especial*, t. I, p. 765. Cabe resaltar, tal como lo ha sostenido, Castillo González, esa Administración de Justicia debe entenderse como una de naturaleza

Es decir, mediante la persecución de este grupo de conductas delictivas se intenta velar por que el ejercicio de la actividad jurisdiccional realizada por todos aquellos órganos a quienes la Constitución les atribuye la potestad jurisdiccional pueda realizarse adecuadamente, y con ello, se pueda garantizar la resolución correcta de los conflictos sociales que se planteen mediante la aplicación del derecho objetivo que corresponda¹⁹⁷ –es decir, teniendo en cuenta las leyes, principios y respetando los derechos fundamentales–. Por ello, se busca perseguir aquellas conductas que puedan desviar o entorpecer el adecuado ejercicio de la función jurisdiccional.

En cuanto a la extensión del correcto funcionamiento de la Administración de Justicia, MORÓN LERMA apunta que ésta abarca tanto la tutela del proceso y la recta aplicación de las normas, como también, de forma refleja, los derechos individuales que se realizan en el proceso, es decir, las garantías procesales contenidas en el art. 24 CE, especialmente, el derecho a la tutela judicial efectiva¹⁹⁸.

nacional, es decir a la ejercida dentro del territorio geográfico de cada país. CASTILLO GONZÁLEZ, *Denuncia calumniosa, simulación y autocalumnia*, p. 36.

¹⁹⁷ GARCÍA SOLÉ, *El delito de acusación y denuncia falsas*, p. 59.

¹⁹⁸ MORÓN LERMA, en *Tratado de Derecho Penal Español. Parte Especial III*, p. 944. Este derecho complejo –continente de otros derechos como el derecho de acceso a la justicia y el derecho al debido proceso– es entendido como aquél a través del cual las personas pueden y deben ser protegidas y amparadas en el ejercicio pacífico de sus pretensiones ante la justicia, es decir, es entendido como el derecho de todas las personas a tener acceso al sistema judicial y a ejercer, en el seno del proceso todas sus facultades para que el órgano jurisdiccional estudie su pretensión y emita una resolución motivada, lo cual no quiere decir que la pretensión deba ser estimada favorablemente –es más, ni siquiera implica que la judicatura tenga el deber de admitir a trámite toda demanda– sino más bien, que debe ser resuelta su procedencia o no con arreglo a derecho y en un lapso de tiempo razonable, ello en el marco de un proceso en donde las personas intervinientes puedan alegar y probar lo pertinente a la defensa de sus respectivas posiciones. Este derecho se manifiesta procesalmente de tres maneras: el derecho de acción, el derecho de contradicción y a la obtención de una sentencia en un plazo oportuno, y, el derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales que han pasado en autoridad de cosa juzgada. En ese sentido véase: GONZÁLEZ PÉREZ, *El Derecho a la Tutela Judicial Efectiva*, p. 423; SANTANA ARTILLES, *La declaración del imputado como medio de prueba o medio de defensa en el proceso penal dominicano*, p. 123; LANDA ARROYO, *El derecho al debido proceso en la jurisprudencia*, vol. I, pp. 59-61; DE ROS CEREZO, en *Revista de Administración Pública*, núm. 98, 1982, p. 84; ALVARO DE OLIVEIRA, *Revista de Derecho*, vol. XXII, núm. 1, 2009, p. 191; AGUIRRE GUZMÁN, *Foro: Revista de Derecho*, núm. 14, 2010, pp. 9-10; ARAUJO-OÑATE, *Revista Estudios Socio-Jurídicos*, vol. 13, núm. 1, 2011, p. 266, entre otros. Asimismo, al respecto, la Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 2ª, en la sentencia nº 71/2013 de fecha 14 de febrero de 2013, en su segundo fundamento de derecho ha señalado que: “el derecho a la tutela judicial efectiva, que no solo supone el libre y flexible acceso a los órganos jurisdiccionales, sino que también se plasma en el derecho a obtener una respuesta motivada y fundada en los hechos aducidos y en el derecho aplicable, para con ello satisfacer la necesidad de justicia que debe otorgarse a todos los ciudadanos por los Órganos jurisdiccionales”. Cabe mencionar que, a las dos

El matiz propuesto por la citada autora, se apoya en el hecho de que, el Estado tiene la obligación a través del sistema judicial de implementar mecanismos que aseguren al ciudadano una tutela judicial efectiva de sus derechos¹⁹⁹.

Por ello, para que se produzca un correcto funcionamiento de la Administración de Justicia debe de verificar el respeto de las garantías procesales, con especial incidencia en la tutela judicial efectiva en razón de que ésta, permite a través del derecho de acceso libre a la jurisdicción que cualquier persona pueda ser parte de un proceso –que cuente al menos con las garantías procesales mínimas– y pueda promover en su marco la actividad jurisdiccional que desemboque en una decisión judicial sobre las pretensiones deducidas.

En ese sentido, la tutela judicial efectiva asegura al ciudadano el acceso a la justicia²⁰⁰, una pronta y expedita resolución de controversias, el derecho a un juez director e instructor y la igualdad material de las partes en el proceso, entre otros. Con lo cual, debe de verificarse, entre otras cosas, si efectivamente esta persona no se ha visto limitada en el ejercicio de su derecho a la tutela judicial efectiva y si no ha hecho un ejercicio abusivo de éste²⁰¹.

posiciones antes mencionadas podría agregarse una tercera expuesta por Serrano Butragueño quién en su opinión, el bien jurídico protegido en este grupo de delitos es la viabilidad del derecho a la tutela judicial efectiva, entendida ésta como el derecho a obtener una resolución fundada en Derecho y que sea congruente. SERRANO BUTRAGUEÑO, en *Delitos contra la Administración de Justicia art. 325 a 338 bis del Código Penal (acusación y denuncia falsa, falso testimonio y otros delitos)*, pp. 30-31.

¹⁹⁹ UNIVERSIDAD DIEGO PORTALES, *Informe anual sobre derechos humanos en Chile 2004. (Hechos 2003)*, mayo de 2004, p. 11.

²⁰⁰ El derecho de acceso a la justicia tiene como uno de sus componentes naturales al derecho a que se haga justicia. El derecho a la justicia implica que toda víctima tiene la posibilidad de hacer valer sus derechos beneficiándose de un recurso justo y eficaz, principalmente para conseguir que su agresor sea juzgado, obteniendo su reparación. Así pues, al derecho a la justicia corresponde el deber estatal de investigar las violaciones, perseguir a sus autores y, si su culpabilidad es establecida, asegurar su sanción. BERNAL SARMIENTO (coord.) *El proceso penal de justicia y paz*, pp. 168-170.

²⁰¹ El ejercicio del derecho de denunciar –recurriendo para ello a la tutela judicial efectiva– es una situación amparada por nuestro ordenamiento jurídico, siempre y cuando sea hecha de forma “legítima”, es decir, cuando lo hagamos contra quienes pensamos que han realizado un delito o falta y no de manera abusiva o irregular –como cuando se hace a sabiendas de la falsedad de las imputaciones, con temerario desprecio hacia la verdad o cuando ni siquiera exista motivo razonable para denunciar–.

Respecto a esto último, se debe acotar que para observar un ejercicio abusivo del derecho a la tutela judicial efectiva deberá de atenderse siempre a factores como la intencionalidad del sujeto, si el accionar supera o no los límites normales del ejercicio de ese derecho, entre otros.

Ello es así, en razón de que puede darse el caso de que una persona requiera al Estado la prestación del servicio de Administración de Justicia –es decir, el ejercicio de la función jurisdiccional por parte del Poder Judicial– pensando que su pedido es conforme a derecho, cuando en realidad no cuenta efectivamente con el derecho material que invoca en su pretensión²⁰². Debiendo en todo caso analizarse si se trata de un supuesto de abuso de derecho o no, ya que el mero hecho de que el órgano jurisdiccional no dé la razón al accionante no implica necesariamente que éste haya actuado de forma abusiva.

En materia penal, mediante la protección del correcto funcionamiento de la Administración de Justicia se busca perseguir a aquellas conductas que lesionan los presupuestos necesarios para el normal desenvolvimiento de la función jurisdiccional, dificultan u obstaculizan su correcto ejercicio, generando el peligro de que se vean infundadamente afectados derechos o intereses legítimos de los ciudadanos²⁰³.

El correcto funcionamiento de la Administración de Justicia en materia penal se vincula íntimamente con el respeto del principio de legalidad material y legalidad procesal, pues al encontrarse regulada ciertas conductas como delitos, el Estado tiene la obligación de perseguirlas, denunciarlas y sancionarlas²⁰⁴.

²⁰² AGUIRRE GUZMÁN, *Foro: Revista de Derecho*, núm. 14, 2010, p. 8.

²⁰³ GONZÁLEZ RUS, en *Manual de Derecho Penal. Parte Especial*, pp. 2-3.

²⁰⁴ ROJAS VARGAS, *Delitos contra la Administración Pública*, p. 10.

Siendo ello así, en los casos en los que se moviliza el aparato estatal de manera innecesaria por hechos no delictivos –no porque no tengan connotación penal, sino porque no se han cometido– se vulnera la función estatal²⁰⁵.

Y es que, la Administración de Justicia no puede ser un instrumento empleado para fines distintos de los que le son inherentes, debiendo ejercerse la actividad judicial –persecución y castigo de hechos delictivos– solamente en incidentes que hayan ocurrido en la realidad. Por tanto, teniendo en cuenta la importancia de esta actividad, su costo y el tiempo que se emplea en ella, no puede admitirse la idea de que este servicio sea realizado con el fin de satisfacer propósitos viles. Así pues, al prohibirse determinadas conductas que lesionan a la Administración de Justicia, se pretende, entre otras cosas, prevenir que se realicen actuaciones procesales montadas turbiamente en un vacío justificativo²⁰⁶.

Por otro lado, este sector doctrinario acota a su vez que, lo único que los delitos ubicados en el Título XX del CP encuentran en común es una vaga relación con el fin último de justicia, entendida a veces como función, a veces como realización de un ideal –que se alcance o no es otra cosa–, y a veces como deber de sumisión o de colaboración con ella²⁰⁷.

Así pues, los delitos contenidos en la rúbrica estudiada tienen la cualidad de afectar de manera distinta al bien jurídico tutelado, pues dependiendo del delito se afectará una determinada faceta del bien jurídico²⁰⁸.

A consecuencia de esa diversidad de posibilidades de afectaciones, es necesario que cuando se estudie uno de esos delitos se analice el aspecto específicamente protegido en dicha figura delictiva.

²⁰⁵ ROJAS VARGAS, *Delitos contra la Administración Pública*, p. 10.

²⁰⁶ SOTO NIETO, *Diario La Ley*, núm. 6400, de fecha 16 de enero de 2006.

²⁰⁷ QUINTERO OLIVARES, *Revista Jurídica de Catalunya*, vol. 79, núm. extraordinario, 1980, p. 194.

²⁰⁸ GARCÍA SOLÉ, *El delito de acusación y denuncia falsas*, p. 59.

GONZÁLEZ RUS ha ofrecido una agrupación de los delitos contra la Administración de Justicia en función de la faceta del bien jurídico afectada. De esta forma considera que: i) en los delitos de prevaricación judicial, falso testimonio, acusación y denuncia falsas el aspecto afectado será el relacionado con el ejercicio estricto de la función jurisdiccional; ii) en los delitos de encubrimiento, omisión del deber de impedir delitos o de promover su persecución el aspecto afectado será el vinculado a los presupuestos de la actuación de la función jurisdiccional; iii) en el delito de deslealtad profesional lo será aquél que se encuentra relacionado con su buen funcionamiento; y, finalmente, iv) en el delito de quebrantamiento de condena la faceta afectada será la vinculada a la ejecución de las sentencias y resoluciones²⁰⁹.

3. Postura adoptada

Acorde a los conceptos desarrollados y de la revisión de las posturas antes mencionadas, puede sostenerse que:

- a) La potestad jurisdiccional como tal no es lo que se pretende proteger con la punición de estos delitos, ya que la facultad encomendada exclusivamente al Poder Judicial no se ve afectada con la comisión de alguno de los delitos contenidos en este grupo.

La potestad jurisdiccional sólo podría verse lesionada o puesta en peligro cuando se estuviera ante supuestos en los que existiera intromisión de los otros poderes del Estado, situación que claramente no se produce con la comisión de los ilícitos penales contenidos en la rúbrica destinada a los delitos contra la Administración de Justicia, ello debido a la propia estructura que posee el Estado, basada en la separación de poderes²¹⁰.

²⁰⁹ GONZÁLEZ RUS, en *Derecho Penal Español. Parte Especial*, p. 940.

²¹⁰ Al respecto, cabe mencionar que, Serrano Butragueño entiende que la existencia de un grupo de delitos contra la Administración de Justicia implica tácticamente la aceptación de la separación de poderes. SERRANO BUTRAGUEÑO, en *Delitos contra la Administración de Justicia art. 325 a 338 bis del Código Penal (acusación y denuncia falsa, falso testimonio y otros delitos)*, p. 50.

- b) En ese sentido, lo que se intenta proteger mediante la persecución de las conductas contenidas en el Título XX del CP es la correcta Administración de Justicia vista desde una vertiente dinámica, es decir, en torno a su materialización a través del ejercicio de la función jurisdiccional mediante los distintos órganos jurisdiccionales.

Claramente, los delitos contenidos en la rúbrica estudiada de una u otra forma desvían y/o entorpecen el adecuado ejercicio de la función jurisdiccional.

- c) Un aspecto aparte que merece tenerse en cuenta referido a la protección penal de la Administración de Justicia es la indisponibilidad de aquel bien jurídico y con ello, la irrelevancia del consentimiento en la comisión de delitos que afectan al mencionado bien²¹¹.

Esto es importante, de cara a que muchos de los delitos que afectan a la Administración de Justicia, al ser pluriofensivos, afectan también otros bienes jurídicos²¹², algunos de ellos, bienes jurídicos individuales sobre los que vistos de manera aislada podría operar el consentimiento, pero que al afectar también al bien jurídico colectivo Administración de Justicia hace que la afectación de ésta prevalezca, no pudiendo operar la eximente del consentimiento debido a la indisponibilidad de este bien jurídico.

- d) En síntesis, la expresión que intitula este grupo de delitos tiene por objeto genérico o carácter común, un atentado contra el normal funcionamiento de la actuación judicial y el respeto

²¹¹ GUZMÁN DALBORA, en *La Administración de Justicia. En los albores del tercer milenio*, pp. 137-138.

²¹² SERRANO BUTRAGUEÑO, en *Delitos contra la Administración de Justicia art. 325 a 338 bis del Código Penal (acusación y denuncia falsa, falso testimonio y otros delitos)*, p. 27.

debido a las decisiones emanadas de los órganos jurisdiccionales²¹³.

En otras palabras, los intereses comunes en este grupo de delitos se vinculan al normal funcionamiento de la actividad o función jurisdiccional, al respeto de la autoridad de las decisiones judiciales y a la sujeción de los ciudadanos a la jurisdicción; todos ellos intereses que se garantizan con la punición de los hechos que intentan obstaculizar la autoridad judicial o que traten de eludir los pronunciamientos judiciales o desconocer el funcionamiento de la jurisdicción²¹⁴.

Ya habiendo estudiado el bien jurídico protegido común en los delitos contra la Administración de Justicia queda establecer en concreto cuál es el bien jurídico protegido en el delito de acusación y denuncia falsas. Ello será desarrollado en el siguiente capítulo.

²¹³ MARTÍN GONZÁLEZ, en *Delitos contra la Administración de Justicia art. 325 a 338 bis del Código Penal (acusación y denuncia falsa, falso testimonio y otros delitos)*, p. 305. En similar sentido se ha pronunciado García Arán al manifestar que: "...esta reagrupación de delitos antes desperdigados por el Código, tiene un claro denominador común: lo que les une es la aptitud de los comportamientos para afectar al desempeño de la función de administrar justicia como una de las actividades de prestación del Estado, concretada en un cauce legal exigible que es el proceso, fuera del cual no se administra justicia". GARCÍA ARÁN, en *Delitos contra la Administración de Justicia*, p. 283.

²¹⁴ CANTARERO BANDRÉS, *Administración de justicia y obstruccionismo judicial*, p. 26.

**§ 3. EL BIEN JURÍDICO
PROTEGIDO EN EL DELITO DE
ACUSACIÓN Y DENUNCIA
FALSAS**

I.- CONSIDERACIONES PREVIAS

Acorde con el principio de exclusiva protección de bienes jurídicos, sólo aquellos comportamientos que constituyan una lesión o puesta en peligro de un bien jurídico (penal) ameritarán la intervención del Derecho penal, en ese sentido, aquellas conductas que no logren incidir sobre el bien jurídico protegido de alguno de los tipos penales contenidos en el CP –sea mediante una lesión o puesta en peligro– carecerán de relevancia para el Derecho penal.

En el caso del delito de acusación y denuncia falsas, la discusión en torno a su bien jurídico protegido ha sido y continúa siendo una cuestión polémica, pues el hecho de que el CP vigente lo haya incluido entre los delitos contra la Administración de Justicia en nada ha contribuido a zanjar la discusión²¹⁵.

Por ello, en este apartado se estudiarán las dos posturas que se discuten en la doctrina sobre el bien jurídico protegido en este delito.

La primera de ellas considera que este delito es uniofensivo al afectar solamente un único bien jurídico²¹⁶, subdividiéndose esta postura en dos, puesto que un sector doctrinario propugna que el bien jurídico es la Administración de Justicia²¹⁷, mientras que el otro entiende que lo es el honor del falsamente acusado.

La segunda de ellas, defiende la tesis de que este delito es uno de naturaleza pluriofensiva pues afecta a una pluralidad de bienes jurídicos, subdividiéndose esta postura en dos en función de la cantidad y determinación de los bienes jurídicos que se consideran afectados

²¹⁵ PALOMO DEL ARCO, en *Delitos contra la Administración de justicia*, p. 159.

²¹⁶ Cabe mencionar que, dentro de las posturas que propugnan la uniofensividad del mencionado delito, existía a mediados de los años 90, un sector de la doctrina que entendía que este delito era uno de falsedad, y que por tanto lesionaba únicamente la fe pública pues lo determinante de esa conducta delictiva era que la falsedad se cometiera en perjuicio de las funciones del Estado, siendo el empleo de esta última un medio que permitía poner en ejercicio la acción de la justicia para la persecución de delitos imputados falsamente al denunciado. TABOADA TUNDIDOR, *Las denuncia y querrela delictivas*, pp. 94-95.

²¹⁷ POLAINO ORTS, *Revista Oficial del Poder Judicial*, año 4-5, núm. 6-7, 2010-2011, p. 374.

Siendo ello así, se procederá a realizar el estudio sobre dichas posturas en los siguientes apartados.

II.- UNIOFENSIVIDAD DEL DELITO

Quienes defienden esta tesis entienden que en este delito se protege únicamente un sólo bien jurídico, discutiendo si éste es la Administración de Justicia o el honor del falsamente acusado.

A continuación, se expondrán los argumentos principales esgrimidos en favor de cada una de esas posiciones.

1. Tesis Colectivista: protección exclusiva de la Administración de Justicia²¹⁸

Se la ha denominado tesis colectivista debido a que postula que el bien jurídico colectivo Administración de Justicia es el único bien jurídico tutelado en el delito de acusación y denuncia falsas.

En el capítulo anterior se estableció que el bien jurídico común protegido en los delitos contra la Administración de Justicia es el correcto funcionamiento de la Administración de Justicia vista desde una vertiente dinámica, es decir, referida a la función jurisdiccional ejercida por cada órgano jurisdiccional. Asimismo, se señaló que cada uno de los delitos contenidos en el Título XX del CP tenían la particularidad de lesionar de manera distinta el bien jurídico comentado, debiendo establecerse en función del delito, la faceta del bien jurídico afectada.

Así pues, el delito de acusación y denuncia falsas al encontrarse inmerso dentro de este grupo de delitos, tiene como bien jurídico protegido también al

²¹⁸ Los principales representantes de esta postura son: MAGALDI PATERNOSTRO/GARCÍA ARÁN, *Documentación Jurídica*, vol. 2, núms. 37-40, 1983, p. 1132; DÍAZ PITA, *El delito de acusación y denuncia falsas: Problemas fundamentales*, p. 61; MILLÁN GARRIDO, *Revista de Información Jurídica*, núm. 317, 1973, p. 32, entre otros.

correcto funcionamiento de la Administración de Justicia, pero claro está, tan sólo un aspecto concreto de éste vinculado al ejercicio de la función jurisdiccional en materia penal.

La faceta específica protegida de este bien jurídico no ha sido un tema muy explorado por la doctrina, ya que usualmente se suele hacer referencia al correcto funcionamiento de la Administración de Justicia en general. Para poder determinar el aspecto en concreto que se tutela, se debe previamente reflexionar sobre la esencia misma del delito estudiado.

El delito de acusación y denuncia falsas viene determinado fácticamente por el hecho de promover el nacimiento de manera indebida de un proceso penal sin objeto²¹⁹, es decir, por la motivación indebida de la intervención de los órganos integrantes del Poder Judicial ante un delito inexistente o no provocado por la persona a la que le es atribuida falsamente su comisión²²⁰.

Mediante la persecución de esta conducta delictiva lo que se busca es castigar la utilización perversa del proceso penal en perjuicio de terceros²²¹.

Esto último, en opinión de la doctrina, podría llevar a considerar que el aspecto concreto del correcto funcionamiento de la Administración de Justicia protegido en el delito estudiado sería el vinculado a la tutela judicial efectiva²²²—limitada a la actividad procesal penal—²²³, pues se busca evitar que

²¹⁹ RODRÍGUEZ LÓPEZ/SOBRINO MARTÍNEZ, *Delitos contra la Administración de Justicia*, p. 175.

²²⁰ DÍAZ PITA, *El delito de acusación y denuncia falsas: Problemas fundamentales*, p. 36. Sobre el particular, Roper Carrasco destaca que: "...la potestad o función jurisdiccional o el buen funcionamiento de la Administración de justicia, como actividad, representa según la doctrina mayoritaria el bien jurídico de carácter colectivo que directa y esencialmente se protege en el artículo 456 del Código penal: lo relevante es la Administración de Justicia, soporte de la actividad del Poder jurisdiccional, lo que hace concluir a un sector de la doctrina que el ataque se produce en la medida en que se utiliza indebidamente a dicha Administración de Justicia haciéndola actuar innecesariamente". ROPERO CARRASCO, *Abusar de la Justicia. Dimensión del actual delito de acusación y denuncias falsas*, p. 106.

²²¹ MORÓN LERMA, en *Tratado de Derecho Penal Español. Parte Especial III*, p. 944.

²²² SERRANO BUTRAGUEÑO, en *Delitos contra la Administración de Justicia art. 325 a 338 bis del Código Penal (acusación y denuncia falsa, falso testimonio y otros delitos)*, p. 32. Otros autores como Castillo González, entienden que el aspecto de la Administración de Justicia protegido específicamente es la actividad sancionatoria penal. CASTILLO GONZÁLEZ, *Denuncia calumniosa, simulación y autocalumnia*, pp. 21-22.

las personas hagan un ejercicio abusivo de ese derecho ya que, de hacerlo así, se podrían producir consecuencias perjudiciales en contra de los terceros falsamente imputados.

De este modo, a través de la protección del correcto funcionamiento de la Administración de Justicia en el delito de acusación y denuncia falsas se busca castigar el ejercicio indebido de la tutela judicial efectiva, pues éste podría ocasionar la generación de la posibilidad del dictado de resoluciones materialmente injustas que vulneren los derechos fundamentales del acusado falsamente, que deriven, por ejemplo, en una privación de libertad de aquél mediante la imposición de una medida cautelar personal²²⁴.

A favor de la protección exclusiva de la Administración de Justicia en el delito de acusación y denuncia falsas se ha postulado como fundamento principal la decisión del legislador de ubicar al delito de acusación y denuncia falsas dentro de los delitos contra la Administración de Justicia, argumentando que ella constituye un factor importante pues demuestra el interés o bien jurídico prevalente que aquél ha querido proteger a través de la tipificación de esa conducta delictiva, quedando fuera del marco de protección penal del referido delito ulteriores menoscabos que pudieran producirse²²⁵.

Bajo este razonamiento, al insertarse el delito estudiado dentro de la rúbrica del Título XX del CP, el bien jurídico protegido no sería otro que la actividad jurisdiccional concretizada en el proceso penal dirigido a sus fines legítimos,

²²³ La tutela judicial efectiva puede ser ejercida en distintos tipos de procesos (penales, civiles, etc.), por ello, aunque expresamente la doctrina no haya hecho referencia a esa limitación, deviene en necesario que se acote en este trabajo aquélla, pues a tenor de lo sostenido por la doctrina se desprende que lo que se intenta proteger es la tutela judicial –más precisamente su contenido referido al derecho de acceso a la jurisdicción–, pero limitada al proceso penal, pues cualquier otra afectación que sufra ésta en otro tipo de procesos carecerá de relevancia penal en relación al delito estudiado.

²²⁴ ROPERO CARRASCO, *Abusar de la Justicia. Dimensión del actual delito de acusación y denuncias falsas*, p. 178.

²²⁵ Véase: MAGALDI PATERNOSTRO/GARCÍA ARÁN, *Documentación Jurídica*, vol. 2, núms. 37-40, 1983, p. 1132 y MAGALDI PATERNOSTRO, *Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales*, fasc. 1, 1987, pp. 40-42. En esa misma línea de opinión, DÍAZ PITA considera que este delito protege de manera exclusiva la Administración de Justicia, no teniendo un papel preponderante el honor del sujeto falsamente acusado, aun cuando las consecuencias sufridas por éste hayan podido ser ponderadas por el legislador a la hora de señalar la pena asignada para este ilícito penal. DÍAZ PITA, *El delito de acusación y denuncia falsas: Problemas fundamentales*, p. 61.

los cuales podrían verse afectados si el proceso fuera activado en su mecánica procedimental sin un objeto real de litigio –debido a que los hechos fueran materialmente falsos– o si, existiendo un hecho posible objeto de aquél, fuera atribuido falsamente a una persona que no lo ha llevado a cabo puesto²²⁶.

De esta forma, la ilegítima puesta en marcha del proceso penal para que pueda lesionar al bien jurídico debe tener la cualidad de ser peligrosa para los fines del proceso, pues de lo contrario dicha conducta sería atípica, implicando únicamente una disfunción procesal²²⁷.

Algunos de los principales argumentos propuestos para descartar la idea de que se está ante un delito que protege otros bienes jurídicos –como por ejemplo, el honor del sujeto acusado falsamente– son los siguientes:

- a) Que, el delito estudiado no puede proteger el honor de las personas implicadas debido a que para proteger ese derecho fundamental a título individual ya existen los delitos comunes de calumnias e injurias, destacando que, una opinión contraria, sería disfuncional, en la medida en que no es técnicamente correcto –y, mucho menos, operativo en la práctica– pretender volver a proteger penalmente un interés ya protegido eficientemente, como es el caso del honor de las personas, de por sí ya ampliamente tutelado a través de las infracciones recogidas en el Título XI del Libro II del CP, y claro está, sin olvidar la extensa protección que en materia civil posee ese derecho²²⁸.
- b) Que, en la práctica, no siempre se lesionará necesariamente el honor del falsamente acusado o denunciado²²⁹ –pues se tendrían

²²⁶ MAGALDI PATERNOSTRO, *Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales*, fasc. 1, 1987, p. 47.

²²⁷ MAGALDI PATERNOSTRO, *Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales*, fasc. 1, 1987, p. 46.

²²⁸ CARMONA SALGADO, *Calumnias, injurias y otros atentados al honor. Perspectiva doctrinal y jurisprudencial*, p. 133.

²²⁹ Al respecto, Fernández-Espinar comentando la postura adoptada por la doctrina alemana, señala que para LANGER, la comisión del delito de acusación y denuncia falsas no tiene por qué conllevar indefectiblemente un embate al honor, sin embargo, destaca que existe un peligro potencial

que evaluar factores como: la publicidad mediática del proceso, el sentimiento del afectado, entre otros²³⁰, y por ello, intentar sostener una acumulación de objetos de protección –bien jurídico colectivo y bien jurídico individual– conllevaría algunas veces a la no comisión del delito estudiado cuando no se afectase al bien jurídico individual, consecuencia que es rechazada por este sector doctrinario²³¹.

- c) Que, para la comisión del delito de acusación y denuncia falsas no es necesaria la concurrencia de un ánimo en concreto, como sí se requiere en los delitos contra el honor²³².
- d) Que, a pesar de que la redacción del delito estudiado guarda similitud con el delito de calumnia e injuria, ello no debe llevar a pensar que se protege en este delito también al honor de quien es falsamente acusado, ya que esa lesión (al honor) es sólo un daño colateral y accesorio a la esencia del delito, quedando absorbido por el delito más grave, es decir, por el delito de acusación y denuncia falsas²³³.

subyacente manifestando que la afectación al honor se corporiza como el instrumento mediato utilizado por el sujeto activo para menoscabar a la Administración de Justicia. FERNÁNDEZ-ESPINAR, en *Revista Actualidad Penal*, núm. 28, 1997, p. 632. Como se verá en el apartado correspondiente a la toma de postura, el honor del falsamente acusado no es un instrumento mediato del cual se vale el sujeto activo para lesionar la Administración de Justicia, sino por el contrario, es un bien jurídico protegido en el delito estudiado, el cual junto con la correcta Administración se ve lesionado de manera simultánea ante la comisión de la conducta delictiva estudiada.

²³⁰ La valoración de la afectación del honor de las personas va en función de la concepción misma que de ese derecho se tenga, pues existen diversos tipos de posturas y la adopción de cada una de ellas conllevará a percibir de manera distinta ciertas actitudes, pudiendo ser consideradas como lesivas unas conductas que acorde a otra concepción serían valoradas como neutras. Así pues, pareciera que el argumento formulado se habría realizado partiendo de una concepción fáctica del honor, más precisamente, de aspectos vinculados al honor objetivo. En el apartado destinado a la “Tesis individualista: protección exclusiva del honor del falsamente acusado” se ahondará sobre las diversas concepciones que se tiene sobre el derecho al honor.

²³¹ CASTILLO GONZÁLEZ, *Denuncia calumniosa, simulación y autocalumnia*, pp. 21-22.

²³² MAGALDI PATERNOSTRO, *Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales*, fasc. 1, 1987, pp. 41-42.

²³³ FIGUEROA NAVARRO/GARCÍA VALDÉS/MESTRE DELGADO, *Lecciones de Derecho Penal. Parte Especial*, pp. 248-249. En igual sentido: MESTRE DELGADO, “Delitos contra la Administración de Justicia”, en *Derecho Penal. Parte Especial*, p. 682.

En otro orden de cosas, en cuanto a la forma de afectación del bien jurídico protegido existen dos posturas al respecto en la doctrina.

Por un lado, se tiene a quienes consideran que se trata de un delito de lesión y que, por tanto, la lesión efectiva al bien jurídico protegido se produciría con la sola puesta en funcionamiento de un proceso penal sin objeto²³⁴.

Mientras que, por el otro, se tiene a quienes consideran que se está ante un delito de peligro abstracto y que, en consecuencia, lo que verdaderamente se produce es una mera puesta en peligro del bien jurídico protegido²³⁵ que se vería reflejada en la posibilidad de emisión de una resolución injusta²³⁶ que podría vulnerar los derechos fundamentales del individuo acusado o denunciado falsamente²³⁷.

La jurisprudencia también se ha pronunciado sobre este tema, y en algunas sentencias expresamente se ha sostenido que en el art. 456 CP “[t]ipifica el Código un delito de peligro contra el bien jurídico protegido, la

²³⁴ Partidario de esta postura es Cuello Calón, quién tal como lo señala Morales Andrade, considera que el daño provocado a la justicia consiste en una verdadera “ofensa” a ella, obligándola a realizar actividades inútiles que dañan su normal funcionamiento. MORALES ANDRADE, *El delito de acusación o denuncia calumniosa*, p. 76. En igual sentido, Terragni sostiene que con la comisión de este tipo de delitos se ve engañada la Administración de Justicia ya que se la obliga a realizar un desgaste inútil, puesto que, por ejemplo, se investigan hechos que no han existido. TERRAGNI, *Tratado de Derecho Penal*, t. III, p. 347.

²³⁵ En ese sentido, véase: CASTILLO GONZÁLEZ, *Denuncia calumniosa, simulación y autocalumnia*, p. 23. Así también, Maqueda Abreu entiende que en cuanto a la afectación de la Administración de Justicia estamos ante un peligro abstracto, En ese sentido, la mencionada autora expresa que: “En este delito, pues, «la realización típicamente significativa» es el comportamiento del autor, esto es, la imputación falsa de un hecho constitutivo de infracción pena, sin que la producción de ningún resultado o de daño material alguno represente un elemento de valoración relevante para su injusto. Y, precisamente, porque es la amenaza abstracta que aquel comportamiento representa para la integridad del bien jurídico y no su concreta puesta en peligro o su efectivo menoscabo, lo que constituye, en este caso, la *ratio* de la intervención penal”. MAQUEDA ABREU, *Acusación y denuncia falsas*, p. 27.

²³⁶ Representante de esta postura es Millán Garrido, quien considera que la ofensa al bien jurídico consiste en la puesta ilegal en marcha del aparato represivo penal, siendo la Administración de Justicia inducida a engaño y desviada con el peligro de que se dicte una resolución injusta y, a veces irreparable. MILLÁN GARRIDO, *Revista de Información Jurídica*, núm. 317, 1973, p. 32. En ese mismo sentido, en cuanto al modo de afectación de la Administración de Justicia véase: GONZÁLEZ RUS, en *Manual de Derecho Penal. Parte Especial*, p. 8 y MORALES ANDRADE, *El delito de acusación o denuncia calumniosa*, p. 76.

²³⁷ ROPERO CARRASCO, *Abusar de la Justicia. Dimensión del actual delito de acusación y denuncias falsas*, 178. MORALES ANDRADE, *El delito de acusación o denuncia calumniosa*, p. 76.

Administración de Justicia, por el que origina la conducta delictiva, de que pudieran llegar a dictarse resoluciones injustas como consecuencia de la inculpación falsa efectuada”²³⁸.

Sin embargo, en otras (sentencias) –en menor cantidad– a pesar de no hacer mención a la consideración del delito como uno de lesión, ésta se desprende de la lectura de su contenido al expresar que el correcto funcionamiento de la Administración de Justicia “...se perjudica al verse en la precisión de llevar a cabo procesales penales basadas en hechos cuya falsedad consta desde el inicio a quien los pone en su conocimiento”²³⁹, algo que perfectamente encajaría en el marco de un detrimento o menoscabo del bien jurídico y no de una mera puesta en peligro.

Asimismo, desde esta perspectiva han manifestado que, como consecuencia de dicha afectación, la Justicia no sólo sufriría los efectos negativos de un esfuerzo injustificado –debido a que los delincuentes han hecho que la maquinaria judicial funcione en dirección errada, haciéndola trabajar inútilmente para fines distintos a los asignados por la ley–, sino que también se vería perjudicada en su prestigio en cuanto llegaría al conocimiento público que el Poder del Estado en ese ámbito ha sido engañado e incluso conducido a tomar decisiones injustas, aunque sean provisionales, al haberse basado en hechos falsos²⁴⁰.

Dado que el tema antes mencionado es discutido tanto por quienes sostienen la tesis colectivista de protección exclusiva de la Administración de Justicia –que postula la uniofensividad del bien jurídico– como por quienes sostienen la pluriofensividad de este delito –en sus dos sub-posturas–, se convierte en necesario sentar en este punto la postura que se tiene en este trabajo sobre el particular.

²³⁸ Así, véase: el segundo fundamento de derecho de la SAP de Murcia nº 00080/2012, de fecha 16 de octubre de 2012.

²³⁹ Así, véase: el primer fundamento de derecho de la SAP de Palma de Mallorca nº 8/2016, de fecha 12 de enero de 2016.

²⁴⁰ Así, véase: el sexto fundamento de derecho de la STS nº 1193/2010, de fecha 24 de febrero de 2011.

Puede intuirse que la postulación de cada una de las dos formas de percibir la afectación del bien jurídico parte de concepciones distintas en torno al bien jurídico protegido. Y es que, a pesar de que ambas hagan referencia al correcto funcionamiento de la Administración de Justicia, el contenido con el que dotan al mismo es distinto.

Pareciera que, quienes interpretan que nos encontramos ante un delito de lesión, parten de la premisa de que el bien jurídico protegido se identificaría principalmente con la tutela judicial efectiva, por ello, entienden que la realización de la conducta delictiva estipulada en el art. 456 CP conllevaría una lesión efectiva del bien jurídico protegido.

Mientras que, quienes interpretan que se trataría de un delito de peligro abstracto se enfocan en destacar que con la comisión de la conducta delictiva se pondría en peligro a la Administración de Justicia de emitir resoluciones injustas basadas en hechos falsos, destacando con ello, que la protección de la Administración de Justicia se produce con el fin de evitar la creación de ese riesgo, con independencia claro está, de que se concrete o no el daño –el dictado de la resolución injusta–.

Teniendo en cuenta los argumentos expuestos en ambas posturas, se ha optado en este trabajo por entender que el delito de acusación y denuncia falsas es uno de lesión, ya que, partiendo de la premisa de que la tutela judicial efectiva es el aspecto que concretamente se protege en el delito de acusación y denuncia falsas, se puede afirmar que mediante la realización de la conducta delictiva se menoscabaría la tutela judicial efectiva al haberse ejercido indebidamente el derecho de acceso de la jurisdicción a sabiendas de la falsedad de lo imputado a un tercero o con temerario desprecio hacia la verdad, haciendo que el Estado de manera innecesaria y llevado por error –entre otras cosas–, destine recursos tanto personales como económico con el fin de esclarecer hechos que, o bien no ocurrieron, o bien no fueron cometidos por la persona imputada, conllevando ello la posibilidad del dictado de una resolución materialmente injusta.

De este modo, la creación de la posibilidad de emisión de resoluciones judiciales materialmente injustas es consecuencia directa de la afectación a la tutela judicial efectiva, por ello se opina que, es esta afectación la que se castiga y no la creación del riesgo antes mencionado.

Tal y como se prevé, en virtud del principio de lesividad, debe de existir una afectación del bien jurídico protegido para considerar una conducta como delictiva. Siendo ello así, es necesario apuntar que la imputación falsa para afectar al bien jurídico debe de encontrarse dotada de cierto grado de verosimilitud²⁴¹, pues sólo de esta forma podría activarse la maquinaria jurídico-procesal.

2. Tesis Individualista: protección exclusiva del honor del sujeto falsamente acusado²⁴²

Para la lengua castellana la palabra honor hace referencia a la cualidad moral que lleva al cumplimiento de los propios deberes respecto del prójimo y de uno mismo²⁴³.

Jurídicamente se sostiene que el honor es un derecho natural de la persona, ya que tiene su origen en el mismo ser del hombre, nace de su propia naturaleza; por tanto, no es un bien creado por el Estado, ni una facultad que la sociedad otorga a los individuos²⁴⁴.

Respecto al contenido del honor y su afectación ante la comisión del delito estudiado, cabe hacer algunos comentarios. Si bien es cierto que la idea de honor ha estado presente en todos los pueblos desde el comienzo de la

²⁴¹ Esto se conoce como la idoneidad de la imputación falsa, se ahondará más sobre este aspecto en el capítulo cuarto del trabajo.

²⁴² La representante de esta postura es: ORDEIG ORERO, *El delito de acusación y denuncia falsas*, pp. 74-75.

²⁴³ TERRAGNI, *Tratado de Derecho Penal*, t. II, p. 349.

²⁴⁴ CENTRO INTERNACIONAL PARA LA JUSTICIA TRANSICIONAL, *Honor, verdad e información*, p. 27.

historia²⁴⁵, lo es también la evolución constante de su contenido. Ello motiva la necesaria y permanente reflexión jurisprudencial y doctrinaria de dicha entidad, máxime si se tiene en cuenta que la concreción de su contenido depende de las normas, valores e ideas sociales vigentes en cada momento²⁴⁶; factores importantes que servirán para determinar los mecanismos necesarios para proporcionar una protección efectiva y adecuada, así como los criterios de solución de los conflictos que se producen inevitablemente en relación con otros derechos²⁴⁷.

Asimismo, cabe destacar que la lesión del bien jurídico honor debe ser valorada teniendo en cuenta el contexto situacional en el que se ubica tanto el sujeto activo como el pasivo, ello debido al indiscutible contenido socio-cultural que representa la reputación o la buena imagen de la persona como objeto de tutela penal²⁴⁸.

Esta particular situación otorga a los órganos jurisdiccionales un margen de apreciación a la hora de determinar en cada caso en concreto qué tipo de acto puede considerarse como lesivo o no a ese derecho fundamental²⁴⁹.

El honor es un bien de gran importancia que goza de una triple protección: en la Constitución, en el Código Penal y en el ámbito civil.

En la Constitución²⁵⁰, en el art. 18.1 CE se encuentra reconocido como derecho fundamental perteneciente a todos los seres humanos por su condición

²⁴⁵ POLAINO NAVARRETE, en *Derecho Penal. Parte Especial*, t. I, p. 267.

²⁴⁶ CHARRUPI HERNÁNDEZ, *Revista de Derecho Privado*, núm. 10, 2006, p. 202. Así también MORETÓN TOQUERO, *Biblioteca Online Bosch*, p. 1. Cabe señalar que, en el sétimo fundamento jurídico de la STC nº 297/2000, de fecha 11 de diciembre de 2000 se ha destacado que: "... el honor es un concepto jurídico indeterminado cuya delimitación depende de las normas, valores e ideas sociales vigentes en cada momento. De ahí que los órganos judiciales dispongan de un cierto margen de apreciación a la hora de concretar en cada caso qué deba tenerse por lesivo del derecho fundamental al honor".

²⁴⁷ MORETÓN TOQUERO, *Biblioteca Online Bosch*, p. 1.

²⁴⁸ Así pues, véase la ejecutoria suprema RN nº 4165-96 Lambayeque (Perú) de fecha 1 de octubre de 1997.

²⁴⁹ CASTIÑEIRA PALOU, en *Lecciones de Derecho Penal. Parte Especial*, p. 148.

misma de persona, pero no se ofrece una definición²⁵¹. Asimismo, en el art. 20 CE se reconoce la limitación de este derecho, dejando en claro que puede ser abatido por el ejercicio legítimo de las libertades constitucionales de expresión y de información que son también derechos fundamentales, pero que, en caso de conflicto, prevalecen sobre aquél²⁵².

En el CP se protege claramente a través de la punición de los delitos de calumnia e injuria²⁵³, pero no se restringe sólo a estos delitos, ya que existen otros preceptos penales en los que también se protege el mencionado derecho fundamental.

Finalmente, en el ámbito civil se protege a través de la LO 1/1982 de 5 de mayo de 1982 sobre “Protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen”, la LO 62/1978, de 26 de diciembre de 1978 sobre “Protección jurisdiccional de los Derechos Fundamentales de la persona”, y los artículos del Código Civil pertinentes como el art. 1902 CC – referido a la responsabilidad extracontractual o aquiliana–, al que también en algunos casos puede acudir para tutelar el mencionado derecho²⁵⁴.

La interpretación del contenido del derecho al honor (regulado en el art. 18.1 CE) debe ser realizada teniendo en cuenta los valores superiores de igualdad, pluralismo y libertad, ello acorde con lo establecido en el art. 1.1 CE.

Cabe mencionar que, el honor tiene la particularidad de ser un bien de estimación relativa, pues no todas las personas lo valoran de igual modo,

²⁵⁰ La Constitución de 1978 fue la primera Constitución española en donde se consagró expresamente el derecho al honor.

²⁵¹ Al respecto, Abelardo Hernández Fernández destaca categóricamente que recién con la Constitución Española de 1978 se deja expresa constancia de que el honor es un derecho fundamental al incluirlo en la Sección 1ª del Capítulo Segundo del Título I, denominada “De los derechos fundamentales y de las libertades públicas”. Véase: HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, *El honor, la intimidad y la imagen como derechos fundamentales*, p. 63.

²⁵² MESTRE DELGADO, “Delitos contra el Honor”, en *Derecho Penal. Parte Especial*, p. 213.

²⁵³ CONDE-PUMPIDO FERREIRO, *Contestaciones de Derecho Penal al Programa de Judicatura. Parte Especial*, p. 152.

²⁵⁴ SERRANO GÓMEZ/SERRANO MAÍLLO, *Derecho Penal. Parte Especial*, p. 302. Véase también: CARMONA SALGADO, en *Derecho Penal. Parte Especial*, p. 391.

siendo así que para algunas personas su honor vale más que su propia vida a tal grado que no dudan en sacrificar ésta para defender aquél, como por ejemplo, en el caso del *seppuku* practicado por los samuráis; para otras en cambio no tiene un valor tan grande llegando incluso a sacrificarlo –en cierta medida– ante cualquier ventaja que pudiera obtener.

En la doctrina se ha propuesto diversas formas de concebir al honor, podemos agrupar dichas tendencias en tres grandes grupos: una concepción fáctica, una normativa y una mixta²⁵⁵.

- a) La *concepción fáctica* hace referencia a que la tutela penal de este derecho se realiza teniendo en cuenta únicamente los datos de la realidad –de carácter psicológico o social– vinculados al honor, sin necesidad de hacer un análisis ulterior de la fundamentación de estos.

Quienes sostienen esta postura destacan la existencia de dos vertientes, por un lado, el honor de tipo subjetivo –concepción fáctico-psicológica– y, por el otro, el honor de tipo objetivo –concepción fáctico-social–. El primero de ellos se identifica con la autoestima o sentimiento personal que tiene toda persona de sí misma, mientras que el segundo –considerado como heteroestima– lo hace con la fama, reputación o estimación de la que goza el sujeto en su propio contexto social²⁵⁶.

Bajo ese criterio, cuando la injuria o calumnia era percibida exclusivamente por el sujeto ofendido, lo único que se veía

²⁵⁵ BOLEA BARDÓN, en *Derecho Penal. Parte Especial*, t. I, p. 297.

²⁵⁶ En ese sentido, en el sexto fundamento jurídico del Acuerdo Plenario N° 3-2006/CJ-116 de Perú, se señala que: “[e]l honor es un concepto jurídico ciertamente indeterminado y variable, cuya delimitación depende de las normas, valores e ideas sociales vigentes en cada momento histórico, pero que en todo caso, desde una perspectiva objetiva, aluden a la suma de cualidades que se atribuyen a la persona y que son necesarias para el cumplimiento de los roles específicos que se le encomiendan. Desde un sentido subjetivo el honor importa la conciencia y el sentimiento que tiene la persona de su propia valía y prestigio; reputación y la propia estimación son sus dos elementos constitutivos”.

lesionado era el honor subjetivo, mientras que, cuando la ofensa era realizada frente a terceros, se afectaban ambos aspectos – honor subjetivo y objetivo²⁵⁷. Asimismo, la difamación por su propia característica afectaría al honor tanto en su vertiente objetiva como subjetiva.

El problema que surgía con esta interpretación es que, al atender exclusivamente a la realidad psicológica o social del individuo, se conducía a un estado de inseguridad jurídica en el primer caso y a la subjetivización de su contenido en el segundo. Ambas situaciones resultaban lesivas al principio de igualdad, puesto que –siguiendo estos criterios– la defensa de este derecho dependía de la autoestima o reputación del sujeto, pudiendo inclusive llegar a consecuencias aberrantes como negar la existencia de ese derecho a personas que no confiaran en su propia valía²⁵⁸ o a personas que no gozasen de una buena reputación social²⁵⁹.

En ese mismo sentido, CARMONA SALGADO nos recuerda que los partidarios de la protección del honor objetivo sostenían que no había tutela jurídico–penal cuando el sujeto afectado carecía de reputación social al no tener estimación pública de sus valores; y que, quienes entendían que el aspecto del honor a proteger era su vertiente subjetiva, se inclinaban por otorgar preferencia a la propia autoestima del individuo a efectos de protegerla, sin necesidad de exigencias ulteriores²⁶⁰.

En cualquier caso, y como ya se ha mencionado, la concepción fáctica acarrea muchos problemas al hacer depender la protección

²⁵⁷ BLANCO LOZANO, *Tratado de Derecho Penal Español*, t. II, vol. I, p. 350.

²⁵⁸ Cabe resaltar que, no existe ninguna persona en el mundo que se encuentre desprovista del sentimiento de honor, tan es así que, aun en el caso de que un sujeto repruebe su propia conducta, no por ello podría afirmarse que dicho sujeto carece de honor, sino más bien, lo tiene pero éste se encuentra menoscabado.

²⁵⁹ OTERO GONZÁLEZ, en *Derecho Penal Español. Parte Especial II*, p. 832.

²⁶⁰ CARMONA SALGADO, en *Derecho Penal. Parte Especial*, p. 391.

jurídica del honor según las variaciones de la propia estima o de la estima social. Una visión puramente objetivista podría conducir a soluciones pugnantes con el derecho a la igualdad ante la ley y la dignidad de la persona²⁶¹, mientras que, una visión puramente subjetivista podría llegar a colmar de nimiedades la actividad de la justicia penal²⁶².

- b) La *concepción normativa* constituyó un avance frente a la postura anterior, puesto que proponía interpretar el contenido del derecho al honor acorde a las valoraciones establecidas en diversos códigos valorativos.

Quienes mantienen esta postura entienden que el contenido del honor se encuentra vinculado al mundo de los valores, de manera que el honor deja de ser un dato puramente fáctico que el Derecho penal capta sin filtro alguno de la realidad social, para convertirse en una construcción normativa fundada en determinados códigos valorativos, sociales, éticos y jurídicos²⁶³.

Esta concepción se divide en tres vertientes: i) la concepción normativo-social, quienes sostienen esta postura atienden al hecho de si la persona merece una buena reputación o no de acuerdo con los criterios vigentes en la comunidad, y no a si en el plano de la realidad goza o no de buena reputación; ii) la concepción moral, los que defienden esta postura asocian la noción de honor a un código de carácter ético, usualmente religioso, y; iii) la concepción jurídica, quienes son partidarios de

²⁶¹ La dignidad debe entenderse como el derecho que tiene todo hombre a que se le reconozca como ser dotado de fin propio, y no como un simple medio para los fines de otros, constituyendo la dignidad el valor supremo del ser humano y que se sirve de base a todos los demás deberes que el hombre ha de cumplir y es de base primaria de su personalidad. Véase: DE COSSÍO MARTÍNEZ, *Derecho al honor. Técnicas de protección y límites*, p. 59.

²⁶² JUDEL PRIETO/PIÑOL RODRÍGUEZ/SUÁREZ-MIRA RODRÍGUEZ, “Delitos contra la Administración de Justicia: prevaricación”, en *Manual de Derecho Penal. Parte Especial*, t. II, p. 210. En igual sentido, véase: CARMONA SALGADO, en *Derecho Penal. Parte Especial*, pp. 391-392.

²⁶³ LAURENZO COPELLO, *Delitos contra el Honor*, p. 16.

esta postura entienden que el contenido del honor se puede encontrar en las valoraciones establecidas en el propio ordenamiento jurídico, partiendo básicamente de la idea de dignidad de la persona²⁶⁴, derecho fundamental que se encuentra constitucionalmente protegido a través del art. 10.1 CE, la cual opera como factor determinante de protección jurídica que sirve para enfatizar el hecho de que el derecho al honor corresponde a todos los sujetos por el hecho de ser seres humanos, desligándose en virtud del principio de igualdad, de concepciones aristocráticas, pantocráticas y meritocráticas²⁶⁵.

Las dos primeras vertientes fueron ampliamente criticadas. La primera de ellas debido a que al quedar la buena reputación sujeta a los criterios vigentes en la comunidad olvida que el Derecho no tiene por qué reconocer los criterios imperantes en la sociedad, por muy generalizados que se encuentren, sino que constituye una instancia crítica frente a ellos.

Por su parte, la segunda vertiente fue cuestionada al entenderse que ésta es incompatible con el reconocimiento del pluralismo ideológico²⁶⁶.

²⁶⁴ Teniendo en cuenta que el honor y dignidad se desenvuelven históricamente con independencia y que no existe una relación de identidad entre ambas figuras, puede sostener que, los delitos que atentan contra el honor no tienen como fin el proteger de forma directa e inmediata la dignidad, aunque claro está, ello no implica desconocer al honor como emanación de ella. ALONSO ÁLAMO, en *El nuevo Derecho penal español. Estudios penales en memoria del Profesor José Manuel Valle Muñoz*, p. 909. En similar sentido, González Pérez sostiene que a pesar de que el concepto de honor se construye con una estrecha vinculación a la dignidad de la persona, aquél no debe confundirse con ésta, ya que la protección del derecho al honor no puede limitarse a una protección de la dignidad de la persona como tal, aunque pueda incluirse ésta para suplir el vacío de las normas sobre protección jurisdiccional especial de los derechos al no incluirse entre ellos la de aquélla en sí misma considerada. En ese sentido, concluye el mencionado autor que, se pueden observar dos niveles del honor, el primero de ellos identificado con el propio de la naturaleza de lo humano, y el segundo, entendido como proyección de la virtud o buena reputación. GONZÁLEZ PÉREZ, *La degradación del derecho al honor (honor y libertad de información)*, p. 34.

²⁶⁵ CARMONA SALGADO, en *Derecho Penal. Parte Especial*, p. 392.

²⁶⁶ NAVARRO DOLMESTCH, *Ius et Praxis*, vol. 8, núm. 2, 2002, p. 230. Véase en extenso: en VIVES ANTÓN, “Lección XVI: Delitos contra el Honor”, en *Derecho Penal. Parte Especial*, p. 674.

Ahora bien, en cuanto a la tercera vertiente, ésta es la que goza de mayor aceptación. En virtud de ella, se propone que el honor deba ser entendido como la consideración de la dignidad personal que los demás tienen de un individuo, así también como aquel sentimiento interno que se traduce en la apreciación que el individuo tiene de sí mismo²⁶⁷. En ese sentido, se hace referencia a la existencia de un honor interno y uno externo, siendo el primero de ellos, ideal e intangible, identificado con la dignidad del ser humano, no dependiente claro está de ningún condicionante, y el segundo, referido al juicio que la comunidad realiza²⁶⁸ sobre la proyección psicológica –autoestima y reputación– de la dignidad del individuo²⁶⁹.

En cuanto al honor externo, la autoestima representa una mínima concreción psicológica de la dignidad que el propio sujeto suele proyectar hacia el exterior; mientras que, el aspecto propiamente externo del honor se halla constituido por la reputación o fama, esto es, por el juicio que la comunidad proyecta sobre el individuo²⁷⁰.

El engarce entre ambos aspectos del honor (externo e interno) se concretiza a través de la idea del libre desarrollo de la personalidad²⁷¹, entendido éste como espacio de libertad de autodeterminación –la cual se presenta como una consecuencia directa de la consideración de la persona como ser racional– que posibilita al individuo hacer o no hacer lo que considere conveniente.

²⁶⁷ CHARRUPI HERNÁNDEZ, *Revista de Derecho Privado*, núm. 10, 2006, p. 196.

²⁶⁸ SOTO RODRÍGUEZ, *Diario La Ley*, núm. 7990, de fecha 26 de diciembre de 2012.

²⁶⁹ JUDEL PRIETO/PIÑOL RODRÍGUEZ/SUÁREZ-MIRA RODRÍGUEZ, “Delitos contra la Administración de Justicia: prevaricación”, en *Manual de Derecho Penal. Parte Especial*, t. II, pp. 210-211.

²⁷⁰ VIVES ANTÓN, “Lección XVI: Delitos contra el Honor”, en *Derecho Penal. Parte Especial*, p. 293.

²⁷¹ OTERO GONZÁLEZ, en *Derecho Penal Español. Parte Especial II*, p. 833.

De esta forma, el respeto a la dignidad de las personas implica que las decisiones personales no deben lesionar ni la autoestima ni el aprecio de los demás ciudadanos²⁷².

- c) La *concepción mixta o normativa-fáctica* propone la combinación de las dos concepciones antes descritas. Esta postura atiende tanto al valor individual intrínseco de la persona, vinculado a la dignidad que posee por el hecho mismo de su condición de ser humano, como a la dimensión social del honor, resultado de la interrelación del individuo con los demás²⁷³. Y es que, postula que, aunque la dignidad sea única e igual para todos, las diferentes posiciones sociales y situaciones de los individuos hacen que el respeto a esa dignidad y los ataques a la misma requieran una determinación circunstancial. Siendo ello así, lo que puede ser lesivo para la dignidad de un particular puede no serlo para un personaje público²⁷⁴.

La concepción mixta se fundamenta en la idea de que existe un aspecto estático y dinámico del honor. Sosteniendo que, una vez que se haya garantizado el aspecto estático del honor –que deriva directamente de la dignidad respetando, y hace referencia a la idea de que todos los seres humanos poseemos al menos una cantidad mínima de honor debido a nuestra propia condición de seres humanos–, se deberá tener en cuenta la vertiente dinámica de la dignidad, –referida al libre desarrollo de la personalidad–, ya que ésta ayudará a graduar la intensidad de su protección en función

²⁷² SALINAS SICCHA, *Derecho Penal. Parte Especial*, p. 260.

²⁷³ ROPERO CARRASCO, *Abusar de la Justicia. Dimensión del actual delito de acusación y denuncias falsas*, p. 180. Cabe señalar que una postura similar es sostenida por Álvarez García quien, entiende que la dimensión externa del honor, se identifica con la capacidad de aparecer ante los demás en condiciones de semejanza, lo que permite, la participación en los sistemas sociales, destacando a su vez que, en su concepción del honor, el valor preferente corresponde a la persona en su libre autodeterminación, y no a los grupos sociales. Mientras que, respecto a la dimensión interna, el mencionado autor sostiene que ésta se encontraría constituida por las pretensiones mínimas de respeto que emanan de la persona por el mero hecho de serlo. ÁLVAREZ GARCÍA, *El derecho al honor y las libertades de información y expresión*, p. 44.

²⁷⁴ BOLEA BARDÓN, en *Derecho Penal. Parte Especial*, t. I, p. 297.

de la participación del individuo en la vida social o en función del grado de cumplimiento de los deberes ético-sociales imperantes en la comunidad con la consecuencia de identificar el honor tutelable penalmente con lo que cada uno merece en función de su conducta²⁷⁵.

En ese sentido, el derecho al honor se deriva de la dignidad de la persona y consiste en el derecho a ser respetado por los demás; pudiendo su ámbito de protección disminuir como consecuencia de una conducta del sujeto contraria a sus deberes jurídicos y, en general, a sus deberes ético-sociales, así como en relación con las concepciones sociales imperantes en un momento determinado. Así pues, la protección del honor puede disminuir, pero nunca desaparecer del todo, debido precisamente a su conexión con la dignidad humana, la cual pertenece a todo hombre por igual²⁷⁶.

De esta forma, las eventuales desigualdades en el tratamiento del honor de las personas responderían a la evaluación de los aspectos antes mencionados y no a criterios discriminatorios apriorísticos como por ejemplo, el estatus social, el sexo, etc.²⁷⁷.

²⁷⁵ OTERO GONZÁLEZ, en *Derecho Penal Español. Parte Especial II*, pp. 832-833. Así también, Carmona Salgado expone que quienes sostienen esta postura reconocen una cantidad mínima fija de honor a todas las personas en general, como elemento estático vinculado a su dignidad, junto a una «cantidad de honor variable», según diversos criterios fácticos conectados al principio de libre desarrollo de su personalidad. Destaca a su vez, que para los defensores de esta postura, la tutela del honor depende del grado de respeto que muestren las personas ante los valores sociales dominantes; es decir que, quienes de forma libre y voluntaria omitan dicho respeto o decidan ignorar, total o parcialmente, tales valores se harían merecedores de un menor grado de protección del mencionado derecho. CARMONA SALGADO, en *Estudios Penales en Homenaje a Enrique Gimbernat*, t. II, p. 1910.

²⁷⁶ VIDAL MARÍN, *El derecho al honor y su protección desde la Constitución Española*, p. 66.

²⁷⁷ Al respecto Serrano Gómez y Serrano Maíllo, sostienen que: “[t]odas las personas tienen honor y, por lo tanto, se encuentran protegidas por el Derecho, independientemente del mayor, menor o mínimo reconocimiento social o ético del que gocen. El honor se relaciona directamente con la dignidad humana, también reconocida en nuestra Constitución como derecho y fundamento «del orden político y de la paz social», en su artículo 10.1. En cualquier caso, la especial posición social, reputación o méritos del perjudicado puede en ocasiones tener una cierta importancia, por ejemplo en la individualización de la pena o en la reparación, al significar una mayor gravedad del delito, y sin que ello pueda suponer una infracción del principio constitucional de igualdad”. SERRANO GÓMEZ/SERRANO MAÍLLO, *Derecho Penal. Parte Especial*, p. 303.

Valorando los argumentos expuestos sobre las tres concepciones del honor, se ha optado en este trabajo por una interpretación mixta del honor, pues al ser éste un derecho innato²⁷⁸ se encuentra íntimamente vinculado con el respeto al derecho a la dignidad. De esta forma, se considera que todos los sujetos tienen derecho a recibir un trato conforme a su condición de seres humanos; pues, independientemente de la trayectoria vital, todos tenemos honor.

Consecuentemente, debe señalarse en cuanto a la intensidad de la protección de este derecho que, al optarse por la concepción mixta se asume que ésta es variable, pues dependerá de aspectos circunstanciales tales como, la participación de cada uno en la sociedad.

Ahora bien, teniendo en cuenta la postura adoptada y las implicancias que se derivan de ella, es pertinente reflexionar sobre la afectación del honor. El ordenamiento jurídico en distintas ramas ha regulado la protección de este derecho, pudiendo discurrir su afectación en el plano estrictamente civil²⁷⁹, o, de ser el caso, al desencadenar un ilícito penal²⁸⁰, puede dar inicio a un proceso penal. En ese sentido, debe subrayarse que no todas las agresiones a ese derecho merecerán una respuesta penal, ya que aquella debe reservarse solamente a los ataques más graves contra el honor²⁸¹.

Dado que la percepción del honor como un bien jurídico protegido en el delito de acusación y denuncia falsas es sostenida tanto por quienes postulan la tesis individualista de protección exclusiva del honor del sujeto falsamente acusado

²⁷⁸ Sobre el particular véase: LÓPEZ DÍAZ, *El derecho al honor y el derecho a la intimidad. Jurisprudencia y Doctrina*, p. 55.

²⁷⁹ Queralt Jiménez nos recuerda que se puede desprender que de la LO 1/1982, ampliada por la disposición final cuarta de la LO 10/1995, las controversias sobre los actos contra el honor se resuelven principalmente en el orden civil; ello se debe a diversas razones, principalmente, a la rapidez del procedimiento y de lo cuantiosas que pueden llegar a ser las indemnizaciones. QUERALT JIMÉNEZ, *Derecho Penal Español. Parte Especial*, p. 323.

²⁸⁰ CALLEJO CARRIÓN, *El derecho al honor. El honor como objeto del proceso civil de amparo especial*, p. 77.

²⁸¹ CALDERÓN CEREZO/CHOCLÁN MONTALVO, *Derecho Penal*, t. II, p. 168. Al respecto, Caruso Fontán entiende que: “la coexistencia de normas protectoras del honor tanto del Derecho civil como del Derecho penal se justifica, indudablemente, por el distinto objetivo que persigue cada uno de ellos; en un caso sancionatorio y en otro de reparación”. CARUSO FONTÁN, *El delito de calumnias y la protección del honor*, p. 204.

—que postula la uniofensividad del bien jurídico— como por quienes sostienen la pluriofensividad de este delito —en sus dos sub-posturas—, deviene en necesario sentar en este punto algunos aspectos afines a ambas posiciones.

Sobre la interpretación del honor en sentido penal, POLAINO NAVARRETE propone una de la siguiente manera:

“El honor en sentido penal es la dignidad personal, el derecho de toda persona a ser respetada y a no ser ofendida ni menospreciada en su cualidad humana, la facultad de respeto inherente a la personalidad que alcanza por igual a todos los seres humanos. No hay discriminación posible en la estimación del honor ante la ley penal. Todas las personas son portadoras de idéntico valor del honor que les confiere la condición humana sin distinción por causa alguna”²⁸².

Mediante la protección jurídica-penal del honor se busca que a su titular se le reconozcan las características necesarias para poder participar en la vida de relación social que le sea propia²⁸³.

De este modo, la protección penal del derecho al honor recae de forma inescindible sobre todos los aspectos del mismo, tomando como punto de referencia para la intervención, la afectación directa y constatable del aspecto social del mismo²⁸⁴.

Cuando se imputa a alguien un hecho deshonroso —que pueda constituir o no delito—, con independencia de que sea verdad o mentira, se lesiona efectivamente siempre el honor de la persona involucrada, dado que la imputación de ese hecho es susceptible de perjudicar las relaciones del imputado con el resto del colectivo al que pertenece. Pudiendo esa lesión ser típica, atípica o estar justificada, esto último, por ejemplo, en los casos en los

²⁸² POLAINO NAVARRETE, en *Derecho Penal. Parte Especial*, t. I, p. 268. Ugaz Sánchez-Moreno, citado por Ramiro Salinas Siccha, sostiene que, la doctrina mayoritaria considera que al derecho al honor como un derecho fundamental e inalienable de toda persona humana, el que, dada su trascendencia, ha sido elevado a categoría de bien jurídico penalmente protegido, es decir, ha sido reconocido como un valor de tal importancia, que merece ser protegido por las normas jurídicas de mayor intensidad que posee el sistema: las normas penales. SALINAS SICCHA, *Derecho Penal. Parte Especial*, p. 256.

²⁸³ QUERALT JIMÉNEZ, *Derecho Penal Español. Parte Especial*, p. 326.

²⁸⁴ COBOS GÓMEZ DE LINARES, en *Derecho Penal. Parte Especial*, t. II, p. 47.

que la imputación sea manifestación del ejercicio de la libertad de información dentro de los límites internos que otorgan carácter preferente a ésta²⁸⁵.

De esta forma y siguiendo al Tribunal Constitucional español, se puede señalar que el denominador común de todos los ataques o intromisiones ilegítimas en el ámbito de protección del honor es el desmerecimiento en la consideración ajena como consecuencia de expresiones proferidas en descrédito o menosprecio de alguien o que fueran tenidas en el concepto público como afrentosas²⁸⁶.

Así pues, con mayor razón, cuando se imputa falsamente a un sujeto la comisión de un delito, se lesiona efectivamente tanto el amor propio y dignidad personal, como la valoración y estima que otras personas le tienen al agraviado, obstaculizando de ese modo su libre desarrollo de la personalidad²⁸⁷.

Ahora bien, centrándose la discusión en la tesis individualista que propone la protección exclusiva del honor del sujeto falsamente acusado en el delito de acusación y denuncia falsas, debe señalarse que, el fundamento principal expuesto por ORDEIG ORERO –representante de esta postura– se basa en una diferenciación que realiza en torno a los términos objeto de protección y objeto de lesión.

Así pues, para la mencionada autora, el honor de la persona que ha sido injustamente acusada es en sentido técnico el verdadero objeto de protección, mientras que el objeto de lesión sería la Administración de Justicia, ello en razón de que el sujeto activo utiliza para llevar a cabo la falsa imputación un instrumento de agresividad suplementario: el temor a una condena injusta, siendo esto lo que asusta al sujeto acusado, afectando su tranquilidad personal y bienestar psíquico. En ese sentido, el sujeto activo estaría utilizando a la

²⁸⁵ MUÑOZ LORENTE, *Libertad de información y derecho al honor en el Código Penal de 1995*, p. 443.

²⁸⁶ Véase el tercer fundamento jurídico de la STC nº 223/1992, de 14 de diciembre de 1992.

²⁸⁷ SALINAS SICCHA, *Derecho Penal. Parte Especial*, p. 278.

Administración de Justicia como un instrumento para poder lesionar el honor del sujeto falsamente acusado²⁸⁸.

La postura antes mencionada no ha gozado de gran acogida en la doctrina, ya que la doctrina mayoritaria sostiene que la sola lesión del honor no constituye un fundamento material suficiente para apreciar el delito de acusación falsa, puesto que de ser así bastaría cualquier tipo de imputación, incluso aquella que careciera de una mínima idoneidad para incoar un procedimiento penal, para que se consumara el tipo del artículo 456 CP, lo que a todas luces no se acomodaría ni con la *ratio* del precepto, ni con la pena prevista para su infracción²⁸⁹.

III.- PLURIOFENSIVIDAD DEL DELITO

Como ya se adelantó, quienes defienden esta postura consideran que la acusación y denuncia falsas es un delito pluriofensivo, pues lesionan al bien jurídico de la Administración de Justicia y otro(s) más. Es precisamente sobre este último aspecto en el que la doctrina se haya dividida, pues no existe unanimidad al momento de determinar cuáles son esos otros bienes jurídicos que, además de la ya mencionada Administración de Justicia, son protegidos por el tipo penal estudiado.

Se ha optado por agrupar las tesis que postulan la pluriofensividad del delito en dos grandes grupos: la tesis de carácter bifronte y la tesis de carácter compleja determinable.

A continuación, se expondrán los argumentos principales esgrimidos en favor de cada una de esas posiciones.

²⁸⁸ ORDEIG ORERO, *El delito de acusación y denuncia falsas*, pp. 74-75.

²⁸⁹ ROPERO CARRASCO, *Abusar de la Justicia. Dimensión del actual delito de acusación y denuncias falsas*, p. 180.

1. Tesis de carácter bifronte: protección de la Administración de Justicia y el honor del sujeto falsamente acusado²⁹⁰

Esta postura es tal vez la que goza de mayor aceptación en la doctrina y jurisprudencia²⁹¹.

Se la ha denominado bifronte debido a que quienes la defienden, sostienen que el legislador a través de la tipificación del delito de acusación y denuncia falsas ha regulado la punición de un delito pluriofensivo, pues entienden que mediante la comisión de la conducta delictiva se afectan al mismo tiempo dos bienes jurídicos protegidos, uno de naturaleza supraindividual (la Administración de Justicia) y otro de naturaleza individual (el honor de quien es acusado o denunciado falsamente)²⁹².

El delito de acusación y denuncia falsas combina, de cierta forma, un atentado contra el honor –calumnia– y a la vez uno también contra la Administración de

²⁹⁰ Al respecto véase: CANTARERO BANDRÉS, *Administración de justicia y obstruccionismo judicial*, p. 27; MARES ROGER/MARTÍNEZ LLUESMA, en *Delitos contra la Administración Pública, contra la Administración de Justicia y contra la Constitución*, p. 188; RODRÍGUEZ LÓPEZ/SOBRINO MARTÍNEZ, *Delitos contra la Administración de Justicia*, p. 175; QUERALT JIMÉNEZ, *Derecho Penal Español. Parte Especial*, p. 1254; LUZÓN CUESTA, *Compendio de Derecho Penal. Parte Especial*, p. 349; CONDE-PUMPIDO FERREIRO, *Contestaciones de Derecho Penal al Programa de Judicatura. Parte Especial*, p. 477; VIVES ANTÓN, “Lección XL: Delitos contra la Administración de Justicia”, en *Derecho Penal. Parte Especial*, p. 693; BLANCO LOZANO, *Tratado de Derecho Penal Español*, t. II, vol. II, p. 560; BENLLOCH PETIT, en *Lecciones de Derecho Penal. Parte Especial*, p. 349; SANTANA VEGA, en *Derecho Penal. Parte Especial*, t. I, p. 782; JUDEL PRIETO/PIÑOL RODRÍGUEZ/SUÁREZ-MIRA RODRÍGUEZ, “Acusación y Denuncias Falsas”, en *Manual de Derecho Penal. Parte Especial*, t. II, p. 567; BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, en *El poder penal del Estado: homenaje a Hilde Kaufmann*, p. 264; SERRANO GONZÁLEZ DE MURILLO, *Diario La Ley*, núm. 6209, de fecha 14 de marzo de 2005; DE MIRANDA VÁZQUEZ, en *Probática Penal I. La prueba en los delitos contra la Administración de Justicia*, p. 80; LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, en *Contestaciones al programa de Derecho Penal Parte Especial para acceso a las carreras judicial y fiscal*, t. II, p. 434; entre otros. Cabe mencionar, que en la doctrina existió un sector minoritario que entendía que el delito estudiado era pluriofensivo, pero que no solo lesionaba el honor y la Administración de Justicia, sino que atentaba a su vez a la verdad, y que por ello era también un delito que atentaba contra la fe pública. FERRER SAMA, en *Homenaje a D. Nicolás Pérez Serrano*, t. II, p. 339.

²⁹¹ Al respecto, la Audiencia Provincial de Valencia, Sección 2ª, en el segundo fundamento jurídico de la sentencia nº 310/2006, de 28 de abril del 2006, ha expresado manifestado lo siguiente: “Es procedente hacer una referencia a cuál sea el bien jurídico protegido con el delito de acusación y denuncia falsa, importante para describir la esencia del tipo penal, pues, pese a su ubicación en el Código, se trata de un delito de los denominados pluriofensivos, es decir, de aquellos que protegen al mismo tiempo varios bienes jurídicos, en este caso, probablemente con análoga intensidad, la correcta actuación y el buen hacer de la Administración de Justicia, por una parte, y el honor de la persona afectada, por otro, bienes que se vulneran con la denuncia o acusación falsa”.

²⁹² QUERALT JIMÉNEZ, *Derecho Penal Español. Parte Especial*, p. 1254.

Justicia –simulación de delito–; salvando claro está, las diferencias que guarda con dichas figuras delictivas, como por ejemplo, el que la calumnia sea un delito privado, mientras que la acusación y denuncia falsas es un delito perseguible de oficio²⁹³.

Así pues, mediante la comisión del ilícito penal se produce un ataque de ambos bienes jurídicos, ya que por un lado, se genera una indebida e innecesaria promoción de la actividad judicial, mientras que por otro, una afectación del honor del sujeto acusado falsamente y sometido a un proceso injusto. Produciéndose de este modo un doble daño social²⁹⁴.

Esta postura también es sostenida en la jurisprudencia, por ejemplo, en el tercer fundamento jurídico del auto n.º. 62/2006 de la Audiencia Provincial de Sevilla al expresarse que:

“[s]i bien los delitos de denuncia falsa y simulación de delito están recogidos en el mismo Título del Código Penal relativo a los delitos contra la Administración de Justicia (Título XX de su Libro II), sus naturalezas presentan divergencias. Así, el delito de simulación de delito puede decirse que ataca exclusivamente un bien jurídico de naturaleza pública, como es la Administración de Justicia, por no implicar la imputación del delito a tercera persona. Por el contrario, **el delito de denuncia falsa**, en el que sí hay tal imputación, **tiene una naturaleza pluriofensiva al afectar tanto a la Justicia como al imputado, en su honor (de calumnia cualificada lo tilda la jurisprudencia). De ahí que el propio artículo 456 del Código Penal, aparte otras exigencias, prevé la posibilidad de denuncia del ofendido**”²⁹⁵ (el resaltado es mío).

²⁹³ MOLINA FERNÁNDEZ, en *Compendio de Derecho Penal (Parte Especial)*, vol. II, p. 287.

²⁹⁴ CONDE-PUMPIDO FERREIRO, *Contestaciones de Derecho Penal al Programa de Judicatura. Parte Especial*, p. 477. Al respecto García Solé partiendo de la premisa de que el delito de acusación y denuncia falsas compatibiliza en un mismo tipo penal una pluralidad de objetos de protección, el honor y la Administración de Justicia –incorporando este último en su núcleo de injusto diversas parcelas de protección refleja, más concretamente las que hacen referencia a las garantías del art. 24.2 CE y a los derechos jurídico-individuales de la persona sujeta a un proceso penal–, entiende que la falsa imputación de una infracción penal provoca un doble ataque; uno que se individualiza, y adquiere entidad propia, la ofensa al honor, y otro que, se cierne sobre la actividad errónea de la Administración de justicia que dirige todo su conjunto de medidas coactivas y restrictivas de derechos fundamentales hacia una persona ilegítimamente sujeta al proceso penal. Y que, en función de este ataque, el precepto debe salvaguardar los intereses de la Administración de justicia, en cuanto medio institucional escaso, exclusivo, excluyente puesto que, en determinados casos, puede resultar idóneo para poner en peligro o lesionar bienes jurídico-individuales. GARCÍA SOLÉ, *El delito de acusación y denuncia falsas*, pp. 123-128.

²⁹⁵ Véase: El auto n.º 62/2006 de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla, de fecha 1 de marzo de 2006. En igual sentido, el Tribunal Supremo en el décimo segundo fundamento jurídico de la sentencia n.º 254/2011, de fecha 29 de marzo de 2011 ha expresado que: “Jurisprudencia y doctrina

Como se desprende del fundamento antes transcrito, el legislador al estipular la posibilidad de persecución de este delito a través de la denuncia del ofendido, reconoce tácitamente con ello, la afectación del bien jurídico honor al lado del correcto funcionamiento de la Administración de Justicia.

En otro orden de cosas, un aspecto importante a comentar es el referido a la prioridad que existe en la protección de los bienes jurídicos. Están quienes sostienen que ambos bienes (Administración de Justicia y el honor) tienen igual importancia para ser protegidos en un mismo nivel, otros que entienden que la preeminencia la tiene el honor del sujeto acusado falsamente y, finalmente, quienes consideran, por el contrario, que dicha preeminencia la tiene la Administración de Justicia.

- a) Sobre la *primera postura* (protección igualitaria), debe mencionarse que ésta encuentra fundamento en la STS de fecha 21 de mayo de 1997, en donde se sostiene que pese a la ubicación que tiene el delito de acusación y denuncia falsas en el Código Penal, se trata de un delito pluriofensivo que protege al mismo tiempo y, probablemente, con análoga intensidad la correcta actuación de la Administración de Justicia, por una parte y, el honor de la persona afectada, por la otra²⁹⁶.
- b) En cuanto a la *segunda postura* (prioridad del bien jurídico individual), tenemos como uno de sus partidarios a VIVES ANTÓN, quien sostiene que nos encontramos ante un delito pluriofensivo en donde el honor ocupa el lugar preeminente en

han señalado generalmente que el bien jurídico protegido en este delito es doble: de un lado el correcto funcionamiento de la Administración de Justicia, que se perjudica al verse en la precisión de llevar a cabo actuaciones procesales penales basadas en hechos cuya falsedad consta desde el inicio a quien los pone en su conocimiento; y de otro el honor de la persona a la que se imputan los hechos falsos, que se ve afectado negativamente al aparecer como imputado en una causa penal. En el primer aspecto, la Justicia no solo sufre los efectos negativos de un esfuerzo injustificado, sino que también puede verse perjudicada en su prestigio en cuanto llega al conocimiento público que el Poder del Estado en ese ámbito ha sido engañado e incluso conducido a tomar decisiones, aunque sean provisionales, que al basarse en hechos falsos, resultan injustas”.

²⁹⁶ Véase: Al respecto, la STS nº 753/1997 de fecha 21 de mayo de 1997. En igual sentido: GOYENA HUERTA, en *Los Delitos contra la Administración de Justicia*, p. 158; BLANCO LOZANO, *Tratado de Derecho Penal Español*, t. II, vol. II, p. 560, entre otros.

orden a la tutela dispensada, ya que a su entender este delito no es sino un delito de calumnia cualificada por las circunstancias concurrentes en su verificación, coincidiendo ambas infracciones en la conducta típica (la de imputar un delito) y en el componente subjetivo que se ve representado en el actuar «con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad»²⁹⁷.

- c) Respecto a la *tercera postura*²⁹⁸ (preponderancia del bien jurídico supraindividual), MUÑOZ CONDE sostiene que el delito de acusación y denuncia falsas supone un ataque tanto a la Administración de Justicia, en cuanto a la utilización indebida de la actividad jurisdiccional, como al honor del acusado o denunciado falsamente. Sin embargo, para el mencionado autor, el honor es objeto de protección de manera indirecta o subsidiaria, ocupando el primer plano sólo cuando la imputación falsa del hecho delictivo no llegue a constituir una acusación o denuncia falsas, encontrándonos en ese caso ante el delito de calumnia del art 205 CP²⁹⁹.

En ese sentido, primero se lesionaría a la Administración de Justicia, ya que se pone en funcionamiento de manera

²⁹⁷ VIVES ANTÓN, “Lección XL: Delitos contra la Administración de Justicia”, en *Derecho Penal. Parte Especial*, p. 693. Similar posición tienen Rodríguez López y Sobrino Martínez, al sostener que: “El bien jurídico protegido, que para los demás delitos del título venía siendo la correcta administración de justicia, ahora se amplía a la protección del honor, que incluso es bien preferente”. RODRÍGUEZ LÓPEZ/SOBRINO MARTÍNEZ, *Delitos contra la Administración de Justicia*, p. 183. Véase también: SERRANO GÓMEZ, *Derecho Penal. Parte Especial*, 2002, p. 841. En igual sentido, véase: ORTS BERENGUER, en *Derecho Penal. Parte Especial*, p. 666; RUÍZ VADILLO, en *Delitos contra la Administración de Justicia art. 325 a 338 bis del Código Penal (acusación y denuncia falsa, falso testimonio y otros delitos)*, p. 98; entre otros.

²⁹⁸ Ya en los años 50 en Argentina, Fontán Balestra nos decía que en este tipo de delitos se destaca el ataque que se produce al interés público de que no se vea burlada la Administración de Justicia, el cual viene a ser en opinión de la doctrina mayoritaria, el bien jurídico más importante que se lesiona con la comisión de dicho ilícito, por encima del honor de los particulares. FONTÁN BALESTRA, *El Delito de Falsa Denuncia*, p. 10. En igual sentido, Cardenal Murillo y Serrano González de Murillo sostienen que en el delito de acusación y denuncia falsa lo que se lesiona primordialmente es el interés del Estado por garantizar un correcto funcionamiento de la Administración de Justicia y sólo secundariamente el honor personal. CARDENAL MURILLO/SERRANO GONZÁLEZ DE MURILLO, *Protección penal del honor*, p. 118.

²⁹⁹ MUÑOZ CONDE, *Derecho Penal. Parte Especial*, p. 810. Así también: MUERZA ESPARZA, *La Ley. Revista Jurídica Española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía*, núm. 4, 1986, p. 1042.

injustificada y por motivos espurios; y luego se afectaría el honor de las personas acusadas o denunciadas falsamente, quedando absorbido este segundo bien jurídico por el desvalor del primero, sin perjuicio de que el honor pueda cobrar protagonismo en el supuesto de que no se lograra iniciar el procesamiento por el delito de acusación y denuncia falsas³⁰⁰.

Por otro lado, cabe señalar en cuanto al modo de afectación de los bienes jurídicos protegidos en este delito que, acorde a la doctrina mayoritaria, se produce la lesión efectiva del honor del acusado o denunciado falsamente³⁰¹ y la puesta en peligro del buen funcionamiento de la Administración de Justicia.

³⁰⁰ CALDERÓN CEREZO/CHOCLÁN MONTALVO, *Derecho Penal*, t. II, p. 556. Soraya Callejo Carrión sostiene que: "... no debe confundirse la calumnia con el delito previsto en el Art. 456 del CP, delito de acusación o denuncia falsas porque a pesar de que éste sustancialmente también consiste en la imputación de hechos falsos, la intención en este último no es tanto la de deshonrar como la de poner indebidamente en marcha el funcionamiento de la Administración de Justicia". CALLEJO CARRIÓN, *El derecho al honor. El honor como objeto del proceso civil de amparo especial*, pp. 78-79.

³⁰¹ Al respecto, Lorenzo Copello sostiene que los delitos que afectan al honor responden a una estructura típica de los delitos de lesión y no de peligro, ya que lo relevante es que el ámbito de libertad de actuación resulta lesionado –y no sólo puesto en peligro– con la emisión de imputaciones o juicios peyorativos, con independencia de que el descrédito derivado de aquellas imputaciones, se concrete o no. Y es que, en opinión de la autora, lo que el Derecho penal pretende proteger es la expectativa de respeto, la misma que se lesiona –y no sólo puesta en peligro–, cuando alguien es objeto de imputaciones o juicios capaces de suscitar una valoración social negativa. LAURENZO COPELLO, *Delitos contra el Honor*, pp. 48-50. Postura contraria es la que mantiene Queralt Jiménez, para quien los delitos contra el honor suponen un delito de peligro, ya que la lesión efectiva no se produce la mayoría de las veces; destacando que, mantener una postura contraria conllevaría a que los delitos de calumnia e injuria –las más de las veces– quedarían en la fase de tentativa, normalmente, inacabada. QUERALT JIMÉNEZ, *Derecho Penal Español. Parte Especial*, p. 326. Así también, Cardenal Murillo y Serrano González de Murillo entienden que los delitos contra el honor se configuran como delitos de peligro concreto, para cuya consumación resulta necesario comprobar la concurrencia del resultado peligro que se pretende prevenir con su regulación legal, castigando por delito doloso consumado cuando, además de abarcar el autor conscientemente el peligro de lesión para el honor, y aceptarlo, concurre la situación objetivo-material (la falsedad objetiva de lo imputado, la expresión objetivamente injuriosa, etc.) que permite la lesión efectiva del honor, debiendo señalarse que, acorde a los mencionados autores, para la consumación de los delitos que atentan contra el honor no resulta necesaria la efectiva lesión del honor entendida como disminución de la autoestima o de la heteroestima sino que basta con la realización de la conducta típica de exteriorizar expresiones ofensivas aptas para menoscabarlo. CARDENAL MURILLO/SERRANO GONZÁLEZ DE MURILLO, *Protección penal del honor*, pp. 78 y ss.

2. Tesis de carácter compleja determinable: protección de la Administración de Justicia, el honor de quien fue falsamente acusado y otros bienes jurídicos a determinar en el caso concreto³⁰².

Quienes promueven esta postura sostienen que es manifiesta la afectación de los dos bienes jurídicos antes mencionados y que, además, pueden verse afectados otros derechos como la libertad, la seguridad o el patrimonio –en función de las medidas cautelares que puedan adoptarse al recibir la falsa imputación–, argumentando que esta situación se ve reflejada en la gravedad de la penalidad de este delito y en la disparidad de penas existentes para aquél³⁰³.

Se ha optado por denominar a esta tesis como una de carácter compleja determinable, debido a que es compleja porque quienes la sostienen postulan la pluriofensividad del delito, y es determinable –dicha complejidad– porque a pesar de que se hace mención a otros bienes jurídicos –además del honor y la correcta Administración de Justicia–, no se establece que necesariamente estos siempre se afectarán con la comisión de la conducta ilícita estudiada, dejando la concretización de la determinación de los bienes jurídicos afectados en función del caso en particular.

GONZÁLEZ RUS, partidario de esta postura, entiende que a la lesión del honor viene a sumarse la del correcto funcionamiento de la Administración de Justicia y, además, el peligro de lesión de derechos personales que son puestos

³⁰² Este último aspecto es resaltado por Maqueda Abreu, quien destaca que la diferencia de penalidades que el legislador ha establecido para este delito va en función de la trascendencia de la falsa imputación, es decir, de la dañosidad de la misma y la posibilidad de afectación de otros bienes jurídicos. Véase: MAQUEDA ABREU, *Acusación y denuncia falsas*, p. 25. Algunos partidarios de esta postura son: GONZÁLEZ RUS, en *Derecho Penal. Parte Especial*, p. 960; PÉREZ RÚA, *La acusación y denuncia falsas*, p. 55; ROPERO CARRASCO, *Abusar de la Justicia. Dimensión del actual delito de acusación y denuncias falsas*, p. 183; entre otros.

³⁰³ Serrano Butragueño, entiende que la pluriofensividad de este delito se ve reflejada en la afectación de la Administración de Justicia, el honor y “hasta” la libertad del imputado. SERRANO BUTRAGUEÑO, en *Delitos contra la Administración de Justicia art. 325 a 338 bis del Código Penal (acusación y denuncia falsa, falso testimonio y otros delitos)*, p. 27.

en riesgo como consecuencia de la promoción inútil de un proceso penal sin objeto³⁰⁴.

En ese sentido, el mencionado autor sostiene que es la posibilidad de que se dicte una sentencia injusta³⁰⁵, como consecuencia de la iniciación de un procedimiento contra una persona inocente a causa de una denuncia falsa, lo que supone, por encima de la lesión o el peligro para cualquier interés social o estatal, el peligro o la lesión de concretos derechos o intereses del sujeto pasivo (libertad, honor, seguridad, patrimonio)³⁰⁶, y que son estos los que deben tomarse en cuenta. Siendo ello así, sostiene que podría llegar a considerar como atípicos los comportamientos que alcancen solamente a lesionar los aspectos formales de la función jurisdiccional, sin afectación de derechos fundamentales o intereses de los sujetos³⁰⁷.

Asimismo, destaca que, no necesariamente en todos los casos se producirá una lesión efectiva del derecho al honor, ya que por ejemplo, en los supuestos en los que se emita un sobreseimiento, no se perjudicaría efectivamente la reputación de los procesados, habiéndose realizado solamente una puesta en peligro de aquel bien jurídico³⁰⁸.

³⁰⁴ GONZÁLEZ RUS, en *Derecho Penal Español. Parte Especial*, p. 960.

³⁰⁵ Para González Rus, el aspecto lesivo dominante en la acusación y denuncia falsas es el que guarda relación con la función jurisdiccional, entendiendo que lo determinante no es la innecesaria puesta en marcha de la Administración judicial –tan es así que considera que esa situación no debería ser constitutiva de delito–, sino el inicio de un procedimiento contra una persona inocente, y que como consecuencia de ello se ponga injustamente en peligro –mediante la posibilidad de emisión de una resolución materialmente injusta–, no sólo su honor, sino también su libertad, patrimonio y seguridad personal. En ese sentido, sostiene que el sustrato de esta figura delictiva se encuentra en el derecho de todo ciudadano a no ser objeto de un procedimiento judicial infundado y ver amenazados por éste sus derechos e intereses legítimos. GONZÁLEZ RUS, en *Manual de Derecho Penal. Parte Especial*, p. 8.

³⁰⁶ En similares términos se ha pronunciado Pérez Rúa al destacar que a pesar de que el delito estudiado se ubique dentro de los delitos contra la Administración de Justicia, éste no agota su *ratio essendi* en la protección de la función jurisdiccional, sino que al lado de ésta se protegen además bienes personales del individuo como el honor, la libertad, la seguridad o el patrimonio. PÉREZ RÚA, *La acusación y denuncia falsas*, p. 55.

³⁰⁷ GONZÁLEZ RUS, en *Manual de Derecho Penal. Parte Especial*, pp. 5-6.

³⁰⁸ GONZÁLEZ RUS, en *Manual de Derecho Penal. Parte Especial*, pp. 8-9. Esta manera de pensar, al parecer se sustenta en una concepción fáctica del honor, en donde el honor objetivo es el que preponderancia frente al autoestima. Tal y como se señaló en el apartado correspondiente a la tesis individualista, la concepción del honor asumida en este trabajo es la mixta, por ello, se considera que la afectación al honor siempre será efectiva, incluso en los casos en los que se produzcan sobreseimientos o archivos.

Particular resulta la postura de ROPERO CARRASCO, pues sostiene que el derecho a la presunción de inocencia es uno de los intereses individuales afectados –poniéndose en peligro– a consecuencia de la puesta en peligro del correcto funcionamiento de la Administración de Justicia mediante la comisión del delito de acusación y denuncia falsas³⁰⁹.

Habiendo expuesto de manera sincrética las principales posturas de la doctrina en cuanto al bien jurídico protegido en el delito de acusación y denuncia falsas; corresponde a continuación, sentar la posición que se asumirá en este trabajo.

IV.- TOMA DE POSTURA

En primer lugar, recordando lo expuesto por ORDEIG ORERO, es necesario tener en claro que pueden existir tanto objetos de protección como objetos de lesión en los delitos, puesto que, a veces al cometer un ilícito penal no solamente se afecta al bien jurídico protegido en un determinado delito, sino que también, en algunas ocasiones se dañan otros bienes jurídicos de manera colateral.

El mero hecho de que se produzca una lesión colateral a otro bien jurídico, no conlleva a que éste sea considerado como bien jurídico protegido del delito inicial. Y es que, acorde a la política criminal se sabe que previo a la creación de una norma penal debe tenerse en claro el bien jurídico que se intentará proteger con ella, y no al revés.

Así pues, para pronunciarse sobre el contenido del bien jurídico protegido en un delito concreto deberá de analizar la voluntad del legislador.

En el caso del delito de acusación y denuncia falsas, por lo expuesto en el primer capítulo de este trabajo se sabe que históricamente este delito se creó para perseguir una conducta que afectaba el honor del falsamente acusado, y que posteriormente, se empezó a resaltar la afectación a la Administración de la Justicia.

³⁰⁹ ROPERO CARRASCO, *Abusar de la Justicia. Dimensión del actual delito de acusación y denuncias falsas*, p. 183.

Así pues, con tan sólo remitirnos a las fuentes históricas de este delito, puede observarse claramente la promoción de la pluriofensividad del mismo.

A pesar de lo antes señalado, en la doctrina existe un sector que postula la uniofensividad de este delito.

Al respecto se ha concluido que:

- a) El correcto funcionamiento de la Administración de Justicia no puede ser el único bien jurídico protegido en el delito de acusación y denuncia falsas, ya que: i) el honor del falsamente acusado o denunciado no es un instrumento mediató del cual se vale el sujeto activo para lesionar la Administración de la Justicia, sino por el contrario, es un bien jurídico protegido en el delito estudiado, el cual junto con la correcta Administración de la Justicia se ve lesionado de manera simultánea ante la comisión de la conducta delictiva estudiada; ii) al permitirse la persecución de este delito previa denuncia del ofendido, existe un reconocimiento del ofendido como sujeto pasivo del delito; y, iii) tal como se ha mencionado, históricamente este delito ha sido estructurado como un delito contra el honor del imputado falsamente, pues sin la imputación falsa de una infracción penal en su contra no cabría la posibilidad de existencia del delito de acusación y denuncia falsas.
- b) El honor no puede ser el único bien jurídico protegido en este delito por diversas razones, entre ellas principalmente porque: i) para afectar solamente el honor de la persona falsamente imputada con una infracción penal no es necesario que la imputación revista de visos de veracidad (idoneidad) que permita la instauración de un proceso penal, lo cual claro está va en contra de la estructura del delito de acusación y denuncia falsas que requiere que la imputación falsa sea idónea para la apertura de un proceso penal; y, ii) el honor al ser un bien jurídico disponible por

su titular trae como consecuencia que su afectación penal sea sólo perseguible a instancia de parte, algo que claro está no sucede con el delito de acusación y denuncia falsas ya que es un delito público que incluso puede ser iniciado mediante una deducción de testimonio.

Por los motivos antes apuntados, se ha considerado que el delito de acusación y denuncia falsas es uno de naturaleza pluriofensiva. Ahora bien, tal como se expuso en el apartado correspondiente, existen dos grandes vertientes en las que se subdivide esta postura: la tesis de carácter bifronte y la tesis de carácter compleja determinable.

Particularmente, en este trabajo se ha suscrito la primera vertiente de la tesis de la pluriofensividad, ya que se entiende que los bienes jurídicos protegidos en este delito son tanto el correcto funcionamiento de la Administración Justicia –concretamente la tutela judicial efectiva– como el honor del falsamente acusado.

Es evidente que cuando alguien imputa falsamente a otro la comisión de una infracción penal, a pesar de conocer la falsedad de lo manifestado u obrando con temerario desprecio a la verdad, quiere dañar el honor de esta persona. Y es que la falsa imputación afecta la dignidad de la persona, lo coloca en un estado de zozobra y aflicción, incidiendo en su papel que desempeña en la sociedad, puesto que, a partir de ese momento, será una persona que cargará con la etiqueta de denunciado, imputado, procesado o acusado, que si bien es cierto no es una de “culpable” genera un impacto negativo en la sociedad –muchas veces un rechazo– y más aún en su entorno más cercano. Por ello, mediante la persecución de este tipo de conductas se busca proteger el honor de las personas.

Por otro lado, el hecho de que la construcción de la norma penal agregase la condición de que la imputación falsa deba ser realizada ante un funcionario judicial o administrativo que en razón de su cargo tenga el deber de proceder a la averiguación de los hechos, destaca la necesidad de protección del correcto funcionamiento de la Administración de Justicia frente a ataques producidos a consecuencia del ejercicio injustificado del derecho a la tutela judicial efectiva, ocasionando un daño que podría finalmente verse materializado en el dictado de una resolución materialmente injusta,

fuera del daño económico que se le ocasiona al Estado al emplear éste horas-hombre en la investigación y/o juzgamiento de un proceso penal que nunca debió de haberse iniciado.

La afectación al correcto funcionamiento de la Administración de Justicia es manifiesta, ya que se activa la maquinaria procesal penal a fin de perseguir un delito no cometido por el falsamente acusado o denunciado o, aún peor, un delito inexistente. Claro está, siempre y cuando, la denuncia o acusación falsa revista de visos de verosimilitud, pues en caso de ser manifiestamente inverosímil, no tendría la idoneidad de poder dar inicio a un proceso penal y, por tanto, no lesionaría el bien jurídico mencionado³¹⁰ —lo concerniente a la falsedad de la imputación, su idoneidad y demás, será tratado en el capítulo cuarto de este trabajo—.

Otro factor que sirve para destacar la pluriofensividad de carácter bifronte de este delito es el vinculado al reconocimiento expreso al ofendido de la facultad de instar procedimiento por acusación falsa —a través de la acusación particular—, sirviendo esto de apoyo a la idea de que se trata de un delito pluriofensivo con referentes colectivos, pero también individuales³¹¹.

En cuanto a la segunda vertiente de esta postura (pluriofensiva de carácter compleja determinable), a pesar de que ella sustenta también la pluriofensividad del delito estudiado, se considera que ésta es inviable pues:

- a) Postula que los bienes jurídicos adicionales al correcto funcionamiento de la Administración de Justicia y al honor del acusado falsamente deben determinarse según el caso concreto,

³¹⁰ Y es que el ordenamiento español requiere tácitamente que la imputación falsa tenga aspectos que la hagan creíble ya que sólo de esa forma tendrá la posibilidad de generar el inicio de un proceso penal, esto se condice con la necesidad del cumplimiento del requisito de procedibilidad para poder entablar un proceso por acusación y denuncia falsas. La idoneidad de la imputación falsa es algo requerido no sólo por la legislación española sino también por legislaciones como la italiana, con la diferencia que en esta última no se requiere necesariamente de la iniciación de un proceso penal derivada de la falsa imputación, sino más bien, bastaría con acreditar que la imputación falsa era idónea para crear la posibilidad de apertura de un procedimiento penal, ello clara esto con independencia de que efectivamente se haya instaurado el proceso. Sobre la legislación italiana y la idoneidad de la imputación véase *in extenso*: SANTORIELLO, *Calunnia, autocalunnia e simulazione di reato*, p. 94-100.

³¹¹ MAQUEDA ABREU, *Acusación y denuncia falsas*, p. 25.

algo que como ya se indicó, va en contra de lo establecido en la política criminal.

- b) Confunde los conceptos de bien jurídico protegido y objeto de lesión, puesto que, la afectación de otros bienes jurídicos no implica *per se* que estos sean también bienes jurídicos protegidos en el delito estudiado.
- c) A pesar de que puede darse el caso de que exista una afectación de derechos individuales de manera indirecta derivada de la acusación y denuncia falsas –debido al inicio del proceso penal–, no es menos cierto que esas restricciones de derechos –libertad, patrimonio, etc.– dadas en el marco de un proceso penal son toleradas por el ordenamiento jurídico, y por tanto, esos derechos afectados no deben de ser considerados como bienes jurídicos a protegerse en el delito estudiado.

Por ejemplo, la imposición de una medida cautelar de prisión preventiva no es incompatible con la idea del encierro de un inocente, pues al ser una medida cautelar personal persigue unos fines concretos que son los de asegurar el correcto desarrollo del proceso penal y garantizar la efectividad de la sentencia que en el mismo se dicte. En ese sentido, con la imposición de la medida quedan cubiertos los fines antes dichos, siendo de esta forma admisible la idea de que sujetos inocentes puedan verse privados de su libertad, claro está, en la medida que existan razones de orden procesal que permitan justificarlo, todo ello con independencia de que en el plano de la realidad el sujeto sea inocente o culpable³¹².

³¹² Al respecto véase: VALENZUELA SADÍAS, *Revista de Estudios de la Justicia*, núm. 14, 2011, p. 56. Debemos tener en cuenta, tal como lo ha señalado Humberto Nogueira Alcalá que: “el derecho a la libertad personal está íntimamente ligado a la seguridad personal, vale decir, al derecho a no ser perturbado en su libertad a través de detenciones, arrestos y otras medidas que, adoptadas ilegal o arbitrariamente, amenacen, perturben o priven a la persona, de organizar libremente su vida individual o social conforme a sus libres opciones y convicciones”. NOGUEIRA ALCALÁ, *Ius et praxis*, vol. 5, núm. 1, 1999, p. 292. Así pues, el derecho a la libertad personal implica que no puedan

Así pues, la afectación de esos otros derechos puede darse en el marco de la imposición de medidas cautelares –reales o personales– no pudiendo ser atribuida o vinculada a la comisión del delito de acusación y denuncia falsas, sino más bien, deberá de ser asumidas como situaciones toleradas por nuestro ordenamiento jurídico –claro está siempre que para su imposición se haya llevado un estricto celo del debido proceso– dadas en el marco del desarrollo de un proceso penal.

La afectación a la libertad del falsamente acusado mediante una sentencia condenatoria de primera instancia –revocada posteriormente³¹³, tampoco sería un factor a evaluar en los casos de acusación y denuncia falsas, ya que la restricción de ese derecho se hace en el marco de un proceso penal procesalmente correcto pero injusto en el sentido de que el fallo no fue el que debió de haberse emitido, debido ello a la falsedad de la imputación.

- d) Bajo ninguna circunstancia podría admitirse que la comisión del delito de acusación y denuncia falsas afecte de alguna manera a la presunción de inocencia, y es que, ésta es justamente un derecho fundamental mediante el cual se prevé que todo procesado deberá ser considerado como inocente mientras no se pruebe su culpabilidad. De esta forma, la violación que podría producirse en

realizarse restricciones de libertad de manera ilegítima o arbitraria, en ese sentido, podemos desprender que, una privación de la libertad personal dictaminada en el marco de un proceso penal llevado con el pleno respeto de las garantías al debido proceso, será injusta en el caso en que el sujeto haya sido falsamente acusado –ya que no merece estar privado de su libertad–, más no ilegítima ni arbitraria.

³¹³ En el desarrollo del proceso penal se pueden producir errores que pueden conllevar a condenar a gente inocente, por ello existe el derecho de recurrir a la doble instancia con el fin de obtener una sentencia acorde a Derecho, lo cual en cierta medida ayuda a disminuir el margen de error e “injusticia” en las decisiones judiciales. En teoría, se sabe que, para la emisión de una sentencia condenatoria, el Tribunal debe haber llegado al convencimiento o certeza de la realización del hecho punible y que ésta es atribuible al acusado. De ello podría desprenderse la idea de que el margen de error es casi nulo, puesto que si una persona es inocente podría alcanzarse una certeza al respecto o a lo mucho podría existir una duda, conllevando esta última a la absolución del procesado por *in dubio pro reo*. Sin embargo, en la práctica, se sabe que sí existe un margen de error, ya que los jueces al ser seres humanos pueden tomar decisiones falibles. Pudiéndose de esta forma sancionar penal e injustamente a una persona que ha sido acusada o denunciada falsamente.

realidad no se haya vinculada al acto mismo de la acusación o denuncia falsa sino más bien se vincula a un acto que compete estrictamente al juez, al dirigir el proceso penal con la idea preconcebida de que el acusado ha cometido el delito que se le imputa.

El hecho de que se le haya imputado a un sujeto falsamente la comisión de un ilícito penal, nada tiene que ver con una lesión o supuesta puesta en peligro de la presunción de inocencia, ya que este derecho debe ser respetado por el juez, quién es el obligado para hacerlo, ya que sólo de esa forma, podrá garantizar que el proceso penal se desarrolle respetando todas las garantías procesales, impartiendo justicia adecuadamente.

Asimismo, en el caso de que se produjese afectaciones al debido proceso en el marco de un proceso penal no podría argumentarse que dichas lesiones se hayan vinculadas al delito de acusación y denuncia falsas, sino más bien, por el contrario, son consecuencia de una patología en el funcionamiento del proceso que deberá de ser evaluada como un hecho independiente y de ser el caso, sancionada administrativa o penalmente.

En otro orden de cosas, en cuanto al modo de afectación de los bienes jurídicos protegidos en el delito de acusación y denuncia falsas debe indicarse que al ser un delito de lesión se producirá una lesión efectiva a ambos una vez que se haya realizado la conducta típica.

La lesión efectiva al honor es indiscutible dado que afecta directamente el amor propio y la dignidad de la persona al verse sometida a un proceso penal como consecuencia de la imputación falsa de hechos delictivos, mientras que, la percepción de una lesión efectiva al correcto funcionamiento de la Administración de Justicia se percibirá siempre y cuando se entienda que el aspecto concreto protegido de éste es el vinculado a la tutela judicial efectiva. Así, la afectación de ese bien jurídico se producirá claramente con el sólo hecho de imputar falsamente a una persona la comisión de hechos delictivos

–un funcionario judicial o administrativo que tenga el deber de proceder a su averiguación–, con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad, haciendo que el Estado de manera innecesaria y llevado por error –entre otras cosas–, destine recursos tanto personales como económico con el fin de esclarecer hechos que, o bien no ocurrieron, o bien no fueron cometidos por la persona imputada, conllevando ello la posibilidad del dictado de una resolución materialmente injusta.

Ahora bien, en cuanto a la prevalencia de la protección de alguno de los bienes jurídicos protegidos en el delito estudiado sobre el otro, cabe destacar que, ambos bienes jurídicos son protegidos de manera igualitaria en el delito de acusación y denuncia falsas, sin prevalencia de uno respecto del otro.

Ello se considera así, ya que si bien es cierto es un delito público –dada la clara afectación del bien jurídico correcto funcionamiento de la Administración de Justicia–, debido a la especial regulación contenida en el art. 456.2 CP se admite la posibilidad de persecución de este delito cuando el Juez o Tribunal que conoció la causa principal mande a proceder de oficio o cuando exista una denuncia previa del ofendido, realizándose de esta forma la figura del ofendido como titular del bien jurídico honor afectado con la comisión del ilícito penal estudiado, ubicando la protección del honor al mismo nivel que la del correcto funcionamiento de la Administración de Justicia.

SEGUNDA PARTE:

**La falsedad en el delito de
acusación y denuncia falsas**

§ 4. LA FALSEDAD TÍPICA EN EL DELITO DE ACUSACIÓN Y DENUNCIA FALSAS

I.- INTRODUCCIÓN

La conducta típica del delito de acusación y denuncia falsas consiste en imputar a una persona hechos que, de ser ciertos, constituirían una infracción penal.

La imputación de aquellos hechos debe realizarse con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad, y ante un funcionario judicial o administrativo que tenga el deber de proceder a su averiguación.

Y es que, la mera imputación de hechos ciertos que constituyan una infracción penal no se encuentra penada, ya que es muestra del ejercicio del derecho que poseen las personas a la tutela judicial efectiva –derivada del art. 24 CE– y del cumplimiento del deber de denunciar la comisión de actos ilícitos –contenido en el art. 259 LECrim–.

Así pues, lo que realmente se castiga es *la imputación de hechos que, de ser ciertos, constituirían una infracción penal, siempre que dicha imputación se haya realizado con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad.*

De este modo, la “falsedad de la imputación” se convierte en uno de los elementos esenciales que condiciona la relevancia penal de la conducta estudiada, pues tiene la capacidad de lesionar a los bienes jurídicos protegidos en el delito de acusación y denuncia falsas. De esta forma, dicha falsedad tiene la capacidad de, por un lado, lesionar efectivamente el honor de la persona falsamente acusada o denunciada al atribuirle la comisión de hechos delictivos que no ha realizado; y, por el otro, lesionar también al correcto funcionamiento de la Administración de Justicia al ejercer de manera abusiva el derecho a la tutela judicial efectiva, poniendo en marcha el aparato represivo penal por hechos falsos o por hechos que en realidad ocurrieron pero que se atribuyeron falsamente a otra persona y creando con ello a su vez, la posibilidad del dictado de una resolución materialmente injusta.

En este último supuesto, la lesión sólo se producirá siempre y cuando la imputación falsa haya sido realizada ante funcionarios judiciales o administrativos que tuvieran el deber de proceder a la averiguación de los hechos imputados; de lo contrario, sólo

existiría una lesión efectiva al derecho al honor que podría subsumirse –dependiendo del caso en concreto– dentro del delito de calumnia.

Ahora bien, la interrogante principal que surge en torno a la falsedad se haya referida al criterio interpretativo que debe dársele a ésta en el delito de acusación y denuncia falsas.

Este aspecto ha sido intensamente discutido en la doctrina durante décadas. El debate se ha centrado en determinar si la falsedad de la imputación debía interpretarse desde un cariz objetivista, subjetivista o incluso, uno ecléctico. La redacción del tipo penal y la elección de un determinado criterio interpretativo tendrá como consecuencia directa que se ubique a la falsedad de manera distinta dentro de las categorías de la teoría del delito.

La redacción del tipo penal es un factor importante a tener en cuenta.

Por ejemplo, la regulación derogada –art. 325 CP de 1944– al estipular expresamente la expresión “los que *imputaren falsamente* a alguna persona hechos que, ...” permitía inferir que la falsedad de la imputación se ubicaba en el área concerniente a la tipicidad del delito, circunscribiendo el debate en determinar si ésta era un elemento objetivo o subjetivo del tipo penal.

Tradicionalmente se llegó a sostener que la falsedad debía de ser interpretada desde una concepción objetivista, entendiendo de esta forma que ella se constituía como un elemento objetivo del tipo penal. Sin embargo, al no haberse logrado un consenso unánime al respecto, en opinión de un sector doctrinario³¹⁴, se intentó superar la discusión antes mencionada eliminando de la redacción del CP vigente la palabra “falsamente” e introduciendo la frase “los que, con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad, ...”, enfatizando con ello una posible perspectiva subjetiva de la falsedad.

Muy por el contrario, la redacción actual en nada ha contribuido a zanjar la discusión sobre el carácter de la falsedad –ni su ubicación precisa dentro de las categorías de la teoría del delito–, pues la exigencia del conocimiento de la falsedad lleva implícita la

³¹⁴ APARISI MIRALLES, en *Estudios Jurídicos en memoria del profesor Dr. D. José Ramón Casabó Ruiz*, vol. I, p. 112.

exigencia de que la imputación sea falsa, manteniéndose de este modo aún viva la discusión antes expuesta. Incluso, podría alegarse que la modificación legislativa introducida trajo consigo una nueva discusión doctrinaria vinculada al alcance que debe dársele a la expresión “temerario desprecio hacia la verdad” –aspecto que se tratará en el quinto capítulo–.

Así pues, la discusión sobre el criterio interpretativo que debe seguirse sobre la falsedad de la imputación –de hechos que, de ser ciertos, podrían ser constitutivos de una infracción penal– mantiene aún vigencia.

Por ello, a continuación, se expondrán los argumentos postulados en la doctrina sobre cada una de las interpretaciones mencionadas (subjetivista, objetivista y ecléctica) para luego realizar una toma de postura, y finalmente, se abordarán algunos temas vinculados al tratamiento que viene recibiendo la falsedad en el ámbito probatorio.

II.- LA FALSEDAD DE LA IMPUTACIÓN³¹⁵

La palabra falsedad proviene del término latín *falsus*, el cual deriva a su vez del verbo *fallêre* que significa engañar. Así pues, etimológicamente la falsedad se concibió como una forma de engaño³¹⁶.

De acuerdo con el DRAE, las primeras dos acepciones de la palabra falsedad hacen mención a: 1) la falta de verdad o autenticidad, y, 2) la falta de conformidad entre las palabras, las ideas y las cosas. Mientras que, por falso la RAE entiende como segunda acepción a lo “incierto y contrario a la verdad”.

³¹⁵ En este trabajo se prefiere emplear el término “falsedad de la imputación”, ya que ésta hace referencia tanto a la falsedad de los hechos imputados como a la falsedad en la atribución de hechos verdaderos a personas que no los realizaron. En este sentido, a pesar de que algunos autores citados no hayan empleado el término falsedad de la imputación, sino más bien hechos falsos, falsedad de los hechos imputados, etc., debe entenderse que por ellos se hace referencia a la falsedad de la imputación –en sentido amplio– y no sólo al aspecto de la falsedad de los hechos –en sentido estricto–.

³¹⁶ VARGAS PINTO, *Revista de Derecho (Valdivia)*, vol. XXIV, núm. 2, 2011, p. 186. Sobre el particular, cabe mencionar que, muchos autores consideran que esencialmente el tipo delictivo estudiado es un engaño a la justicia realizado por un sujeto que, abusando de la justicia se vale de mecanismos legales puestos a su disposición para emplearlos con fines espurios. En ese sentido véase: MARCIANO, *Scuola Positiva – Rivista di diritto e procedura penale*, año XIII, fasc. 3-4, 1933, p. 3.

El hecho de que con el empleo de la palabra falsedad se haga referencia a la ausencia de verdad, trae consigo necesariamente como consecuencia una vinculación entre la falsedad y la verdad en condición de antónimos o ideas contrapuestas.

Así pues, ambos conceptos pueden ser abordados desde una perspectiva objetiva, subjetiva o ecléctica; por tanto, de adoptarse un determinado criterio para una de ellas, la otra debería de ser analizada también desde dicha perspectiva³¹⁷.

Es importante tener en cuenta esto último, ya que al ser la falsedad de la imputación –es decir, su oposición a la verdad–³¹⁸ la esencia comisiva del delito de acusación y denuncia falsas, se convierte en necesario determinar el criterio bajo el cual debe interpretársela³¹⁹.

Siendo ello así, es conveniente traer a colación las distintas posiciones que existen en la doctrina sobre la concepción de la falsedad de la imputación en el delito de acusación y denuncia falsas y su ubicación en las categorías de la teoría del delito, para posteriormente realizar una toma de postura al respecto.

1. Concepciones sobre la falsedad de la imputación

La falsedad de la imputación puede ser percibida a la luz de tres concepciones distintas: una objetivista, una subjetivista y una ecléctica. Cada una de ellas ofrece una forma particular de entender en dónde radica la falsedad.

³¹⁷ Así pues, a la verdad: a) objetiva –entendida como la conformidad de las cosas con el concepto que de ellas forma la mente– se le contrapondrá una falsedad objetiva, b) subjetiva –entendida como la conformidad de lo que se dice con lo que se siente o piensa– se le opondrá una falsedad subjetiva, y, c) ecléctica –entendida como la conformidad de las cosas tanto con lo que se dice como con lo que se sabe– se enfrentará una falsedad ecléctica.

³¹⁸ GARCÍA SOLÉ, *El delito de acusación y denuncia falsas*, p. 170.

³¹⁹ Al respecto, debemos recordar que la imputación de hechos que, podrían ser constitutivos de una infracción penal, puede ser verdadera o falsa. Siendo la falsa, la penalmente relevante pues lesiona el honor de la persona falsamente imputada como autora de una infracción penal, y, en el caso de que dicha imputación falsa fuese realizada ante un funcionario judicial o administrativo que tenga el deber de proceder a su averiguación, se afectaría además al correcto funcionamiento de la Administración de Justicia, mientras que, la imputación que se haga en estricta respeto de la veracidad de lo imputado, tan sólo sería muestra del ejercicio de la tutela judicial efectiva y del cumplimiento del deber de denunciar la comisión de actos ilícitos.

A pesar de las diferencias existentes en cada una de esas posturas, existen elementos comunes a ellas, estos son los siguientes:

- a) La imputación falsa deba reunir una apariencia de verosimilitud, pues sólo de esa forma tendría la capacidad de lesionar los bienes jurídicos protegidos en el delito estudiado, ya que, en caso de ser manifiestamente inverosímil, a pesar de que el sujeto acusador haya ejercido de manera arbitraria su derecho a la tutela judicial efectiva, no lesionaría el correcto funcionamiento de la Administración de Justicia, dado que la imputación realizada no se tomaría en cuenta, y por tanto, no daría lugar a que se activase toda la maquinaria jurídico procesal penal³²⁰.

Esto último en concordancia con lo establecido en el art. 269 LECrim, pues en él se ha estipulado que el funcionario o Tribunal ante el que se formalice una denuncia manifiestamente falsa –inverosímil o inidónea– se abstendrá de todo procedimiento³²¹, con lo que, claramente el ejercicio abusivo de la tutela judicial efectiva realizado por un sujeto que haya perpetrado una imputación delictiva falsa a otro de manera inverosímil no tendrá la entidad suficiente como para lesionar al correcto funcionamiento de la Administración de Justicia, dado que no podría dar lugar al nacimiento de un proceso penal³²².

³²⁰ MAQUEDA ABREU, *Acusación y denuncia falsas*, p. 44.

³²¹ Expresamente, el art. 269 LECrim., el cual dispone que: “Formalizada que sea la denuncia, se procederá o mandará proceder inmediatamente por el Juez o funcionario a quien se hiciese a la comprobación del hecho denunciado, salvo que éste no revistiere carácter de delito, o que la denuncia fuere manifiestamente falsa. En cualquiera de estos dos casos, el Tribunal o funcionario se abstendrán de todo procedimiento, sin perjuicio de la responsabilidad en que incurran si desestimasen aquélla indebidamente”. Otro fundamento que destaca que es necesario que la imputación objetivamente falsa sea inverosímil es aquél que entiende que el ordenamiento español requiere tácitamente que la imputación falsa tenga aspectos que la hagan verosímil, ya que sólo de esa forma se generará la posibilidad de dar inicio a un proceso penal, lo cual se condice con la necesidad del cumplimiento del requisito de procedibilidad para poder entablar un proceso por acusación y denuncia falsas.

³²² Sobre el principio de lesividad y la necesidad de que la imputación se encuentre dotada de visos de verosimilitud (idoneidad) para poder lesionar los bienes jurídicos protegidos en este delito se ha tratado en el capítulo tercero de este trabajo.

Asimismo, dicha imputación objetivamente falsa realizada de manera inverosímil tampoco lesionaría el honor del falsamente denunciado, pues no tendría la capacidad de poder afectar directamente el amor propio y la dignidad de la persona, dado que aquella no se vería sometida a un proceso penal como consecuencia de la inverosimilitud de la imputación falsa.

- b) El hecho falso imputado, tiene que poder subsumirse dentro de una infracción penal. Así pues, en el caso de que aquél no se vincule a un delito, no dará lugar a que pueda sancionarse penalmente la conducta realizada por el sujeto como un delito de acusación y denuncia falsas.

Habiendo mencionado los elementos que son aceptados unánimemente por las posturas antes mencionadas, se procederá a analizar las particularidades de cada una de ellas.

1.1. Concepción objetivista

Quienes defienden esta postura entienden que lo relevante es la contradicción existente entre la realidad y lo manifestado, es decir, la discordancia total entre lo sucedido realmente y lo afirmado por el denunciante, identificando de esta forma a la falsedad como un dato objetivo³²³.

Ello lo fundamentan principalmente basándose en un análisis de la redacción del tipo penal, ya que, en opinión de sus defensores, al consignarse la expresión “hechos que, de ser ciertos” se exige con ella que los hechos que se imputen no sean ciertos, es decir, que necesariamente deben ser falsos³²⁴.

³²³ MUÑOZ CONDE, *Derecho Penal. Parte Especial*, p. 811. Entre los principales autores que suscriben esta postura tenemos a: MAQUEDA ABREU, *Acusación y denuncia falsas*, p. 43; GONZÁLEZ RUS, en *Derecho Penal Español. Parte Especial*, p. 961; MOLINA FERNÁNDEZ, en *Compendio de Derecho Penal (Parte Especial)*, vol. II, p. 275; entre otros.

³²⁴ GONZÁLEZ RUS, en *Derecho Penal Español. Parte Especial*, p. 961.

Para este sector doctrinario, el elemento nuclear que determina la lesividad de la imputación falsa es la objetiva falsedad de lo imputado y no la creencia subjetiva de quien la realiza, destacando que, en caso de que el sujeto crea razonablemente que su imputación es veraz pero objetivamente resulte ser falsa, desaparecerá un elemento subjetivo imprescindible para el reproche personal, pero no así la lesión a los bienes jurídicos –cuando menos, no al honor–³²⁵.

Así pues, sólo aquella acusación o denuncia que guarde una discrepancia entre la realidad y lo declarado por quien imputó a otro la comisión de una infracción penal ante funcionario judicial o administrativo que tenga el deber de proceder a su averiguación tendrá la entidad suficiente para lesionar los bienes jurídicos protegidos en el delito estudiado (el correcto funcionamiento de la Administración de Justicia y el honor del acusado o denunciado falsamente)³²⁶. En ese sentido, si los hechos imputados fueran ciertos, aun cuando el sujeto hubiese realizado la imputación con mendacidad subjetiva, no tendrían la capacidad de lesionar los bienes jurídicos protegidos antes mencionados.

De esta forma, bajo la concepción objetivista, el sujeto activo del delito estudiado debe realizar la imputación de hechos falsos constitutivos de una infracción penal sin contar con fundamento fáctico alguno –al menos en los aspectos esenciales– que le haga pensar que es verdad lo que está manifestando. Es decir, debe existir una ausencia inicial de cualquier base fáctica que permita la

³²⁵ MOLINA FERNÁNDEZ, en *Compendio de Derecho Penal (Parte Especial)*, vol. II, p. 275. Bajo esta concepción si el sujeto erróneamente pensase que la imputación que ha realizado la ha hecho acorde a la verdad, pero objetivamente resultase ser falsa, no podría sancionarse penalmente esa conducta debido a la falta de dolo, sin embargo, los defensores de esta postura destacan que, a pesar de ello, sí se produciría una afectación al honor debido a que se habría lesionado el mismo mediante la imputación de hechos delictivos no acaecidos o no cometidos por el imputado. En cuanto a una posible afectación al correcto funcionamiento de la Administración de Justicia, ésta no se produciría ya que, bajo la concepción defendida en este trabajo, la imputación objetivamente falsa, pero subjetivamente verdadera sería muestra de un ejercicio adecuado de la tutela judicial efectiva.

³²⁶ ROPERO CARRASCO, *Abusar de la Justicia. Dimensión del actual delito de acusación y denuncias falsas*, pp. 194-195.

realización de una imputación razonada, denotando esta situación el “plus de ofensividad” que el delito estudiado demanda³²⁷.

La falsedad objetiva de la imputación puede percibirse de maneras distintas en función del aspecto sobre el que incide y en función de la extensión de aquella.

Acorde al primer criterio, se entiende que la falsedad de la imputación puede ser:

- a) **material**, cuando la falsedad incide sobre el hecho en sí mismo, es decir, cuando o bien el hecho no se haya producido o bien cuando el imputado no sea el autor del mismo³²⁸; y,
- b) **formal**, cuando la falsedad recaiga sobre la forma en la que se han producido los hechos. Es decir, cuando a pesar de haberse producido los hechos, no han ocurrido en la forma en la que el sujeto los ha descrito, siendo esto una desnaturalización no de los hechos en sí, sino de la forma en la que estos han tenido lugar, falseándose las condiciones en las que se produjeron hasta el extremo de presentarlos como delictivos, induciendo con ello a error a los órganos encargados de su averiguación y castigo³²⁹.

Mientras que, acorde al segundo criterio, se entiende que la falsedad de la imputación puede ser:

- a) **total**, cuando la conducta delictiva imputada no se hubiese realizado.

³²⁷ MORÓN LERMA, en *Tratado de Derecho Penal Español. Parte Especial III*, p. 947.

³²⁸ ROPERO CARRASCO, *Abusar de la Justicia. Dimensión del actual delito de acusación y denuncias falsas*, p. 196.

³²⁹ DÍAZ PITA, *El delito de acusación y denuncia falsas: Problemas fundamentales*, p. 81.

- b) **parcial**, será de este tipo cuando la falsedad no recaiga sobre todos los elementos que se ven involucrados en la realización de la imputación delictiva en contra del sujeto falsamente acusado o denunciado.

Según los aspectos en concreto sobre los que recaiga la falsedad de los hechos imputados, se procederá de una forma u otra.

Así pues, si la falsedad recayese sobre las características esenciales del hecho atribuido permitiendo que éste pueda ser subsumido en uno de los tipos penales de los previstos en el Código Penal, la conducta realizada podría ser constitutiva de un delito de acusación y denuncia falsas –un ejemplo de ello sería cuando los hechos imputados son verdaderos, pero no han sido cometidos por el sujeto imputado–; mientras que, por otra parte, si aquella falsedad sólo recayese en las características accesorias del hecho –por ejemplo, sobre circunstancias que carezcan de relevancia penal o que puedan vincularse con circunstancias agravantes–, no sería constitutiva del delito estudiado³³⁰, ya que aunque la imputación no se hubiese realizado en estricto respeto de la veracidad de lo acaecido, el que los hechos denunciados sean esencialmente verdaderos legitimaría la denuncia o acusación realizada por el sujeto, poniendo en conocimiento de las autoridades pertinentes la comisión de una infracción penal.

³³⁰ Véase: MORÓN LERMA, en *Tratado de Derecho Penal Español. Parte Especial III*, p. 947. Sobre las imputaciones parcialmente falsas, Gonzáles Rus ha sostenido que: “...habrá acusación y denuncia falsa cuando no sean ciertos los hechos que permiten considerar lo atribuido al sujeto un delito o una falta; no la habrá cuando la falsedad afecte a elementos accesorios de los que no depende la calificación del hecho como infracción criminal”. GONZÁLEZ RUS, en *Derecho Penal. Parte Especial*, p. 962.

Similar situación a la expresada en el último supuesto ocurriría en el caso de que un sujeto denunciase hechos reales, pero diese a los mismos una calificación o valoración jurídica errónea³³¹.

1.2. Concepción subjetivista

Quienes suscriben esta postura, apoyándose en la actual redacción del art. 456 CP que incluye –al igual que en el delito de calumnia– la expresión “con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad”, entienden que lo relevante es la contradicción entre lo declarado por el sujeto y la representación subjetiva que éste tenía sobre los hechos, siendo indiferente si estos eran o no ciertos objetivamente³³².

De esta forma, la falsedad subjetiva podría percibirse en dos sentidos: i) como aquella que demuestra la falta de conformidad entre lo dicho y lo que se ha pensado, aun cuando lo dicho sea conforme a lo realmente sucedido y, ii) como aquella que muestra la falta de conformidad entre lo dicho y lo que se ha pensado, aun cuando lo que se piensa sea conforme a lo sucedido.

Para VIVES ANTÓN, uno de los principales exponentes de esta postura, la jurisprudencia ante la disyuntiva verdad objetiva-verdad subjetiva ha optado por exigir en el denunciante la intención de faltar a la verdad, pues de exigir una verdad objetiva de la imputación, se haría prácticamente inefectivo el derecho a la denuncia, dado que el denunciante casi nunca tiene la certeza absoluta de que el hecho que denuncia y la participación en él de una persona determinada son ciertas, lo cual podría conllevar a que se abstudiese de denunciar por

³³¹ GOYENA HUERTA, en *Los Delitos contra la Administración de Justicia*, p. 168.

³³² Algunos de los principales representantes de esta postura son: VIVES ANTÓN, “Lección XL: Delitos contra la Administración de Justicia”, en *Derecho Penal. Parte Especial*, p. 693; ORDEIG ORERO, *El delito de acusación y denuncia falsas*, p. 196; entre otros.

temor a que sus manifestaciones, hechas en la creencia de ser ciertas, pero falsas objetivamente, pudieran hacerlo incurrir en responsabilidad penal³³³.

El sustento principal de esta postura se fundamenta en la doctrina de la *actual malice*, la cual tiene como base la sentencia New York Times Co. vs. Sullivan³³⁴.

Al respecto, es pertinente destacar los siguientes aspectos vinculados a la sentencia antes mencionada³³⁵:

- a) Fue emitida el 9 de marzo de 1964. Este dato es importante dado que su contenido referido a la *actual malice* sirvió de inspiración para la inclusión de la expresión “con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad” dentro de la redacción de los tipos penales referidos a la calumnia y a la acusación y denuncia falsas en el CP vigente.
- b) Este proceso penal se originó debido a que el diario New York Times publicó una información falsa que perjudicaba la imagen de la policía de Montgomery y consecuentemente

³³³ VIVES ANTÓN, “Lección XL: Delitos contra la Administración de Justicia”, en *Derecho Penal. Parte Especial*, p. 693. En similares términos se ha pronunciado Ordeig Orero, quien al partir de la idea de que el único bien jurídico protegido en el delito estudiado es el honor del acusado o denunciado falsamente, entiende que lo relevante no es la falsedad objetiva de la imputación, sino la intención con la que el sujeto activo la lleva a cabo, la voluntad que tiene éste de producir una lesión particularmente grave en el honor del imputado al tener lugar ante un funcionario judicial o administrativo que tiene el deber de proceder a la averiguación de los hechos imputados. ORDEIG ORERO, *El delito de acusación y denuncia falsas*, p. 196.

³³⁴ ORDEIG ORERO, *El delito de acusación y denuncia falsas*, p. 196. Con la sentencia del caso New York Times vs. Sullivan se puso en relieve la doctrina de la *actual malice*, mediante la cual se estableció que la verdad objetiva no es el único elemento que tienen que tener en cuenta los magistrados a la hora de determinar la responsabilidad por difamación –antes ante cualquier mínima desviación de la verdad se consideraba inevitablemente que se había verificado una lesión del honor–, sino que también es necesario que se pruebe que la falsedad de la imputación se ha realizado con conocimiento de su falsedad o con imprudencia temeraria respecto a su falsedad. CARUSO FONTÁN, *El delito de calumnias y la protección del honor*, pp. 52-53.

³³⁵ El contenido de la sentencia en su idioma original se encuentra disponible en: <https://www.law.cornell.edu/supremecourt/text/376/254>.

la de Sullivan –uno de los tres Comisionados electos de la ciudad de Montgomery, Alabama–.

En una primera instancia, la razón le fue dada al demandante (Sullivan), dado que, entre otras cosas, se consideró que el contenido del artículo periodístico publicado era injurioso *per se* y que, habiéndose acreditado la falsedad de algunas de las afirmaciones realizadas sobre los hechos imputados, la malicia se presumía.

La empresa dueña del diario en cuestión impugnó la sentencia y la Corte Suprema de los Estados Unidos revocó el sentido del fallo de la sentencia del *a quo*, dado que sostuvo la inconstitucionalidad de las reglas del *common law* aplicadas en el estado de Alabama –debido a que la regla que manejaba el estado de Alabama imponía una grave limitación en contra de los derechos a la libertad de expresión y de prensa– y expresó que el estándar que debía de seguirse en este tipo de casos en los que hubiere conflictos entre el derecho a la libertad de expresión y de prensa y el honor de un funcionario público vinculado al ejercicio de sus actividades funcionariales sería el de la *actual malice*, es decir, verificando si la conducta se realizó con conocimiento de su falsedad o con temerario desprecio de si las mismas eran verdaderas o falsas³³⁶.

Así pues, sólo en el supuesto de que quedase acreditada que las imputaciones injuriosas falsas en contra del funcionario –en el marco del cumplimiento de sus funciones– fueran realizadas con *actual malice*, se podría sancionar dicha conducta en perjuicio de la libertad de expresión y de

³³⁶ En inglés se expresa el contenido de la *actual malice* mediante la siguiente expresión: “knowledge that statements are false or in reckless disregard of the truth”.

prensa, de lo contrario, el respeto por estas últimas debería de primar.

Sobre este último aspecto cabe señalar que la Corte Suprema de los Estados Unidos en otra sentencia importante, el caso *Harte-Hanks Communications Inc. vs. Connaughton* (1989)³³⁷, ha desarrollado ampliamente el contenido de la expresión *actual malice* sosteniendo que:

- a) La *actual malice* no debe ser interpretada en el sentido de mala voluntad o malicia –en el sentido ordinario del término–.
- b) Requiere como mínimo que la información falsa publicada en el medio periodístico haya sido realizada como mínimo con un temerario desprecio por la verdad –se ahondará sobre el contenido de esta expresión en la legislación española en el quinto capítulo de este trabajo–. Así pues, en dicha sentencia se sostiene que la manifestación falsa debe realizarse con un alto grado de conocimiento de la probabilidad de la falsedad de lo manifestado o al menos, con serias dudas sobre la verdad de lo publicado.

De este modo, el sector de la doctrina española que ha adoptado de cierta forma los criterios establecidos por la doctrina norteamericana se han decantado por una concepción subjetivista de la falsedad, postulando que la falsedad de la imputación debe determinarse fundamentalmente en función a parámetros subjetivos –observando una inveracidad subjetiva–, y haberse realizado con temerario desprecio de toda confrontación con la realidad o a sabiendas de su inexactitud³³⁸.

³³⁷ El contenido de la sentencia en su idioma original se encuentra disponible en: <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/491/657/case.html>.

³³⁸ GRANADOS PÉREZ, en *Derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen II*, p. 144.

En cuanto a la jurisprudencia, aunque no existe una postura unánimemente adoptada, el criterio imperante en ella hasta hace algunos años era el de la falsedad subjetiva.

Un ejemplo de ello, se puede observar en el tercer fundamento jurídico de la sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo nº 6174/1993, de fecha 23 de septiembre de 1993, el cual señala que:

“El verbo en que consiste la acción es el de imputar, es decir, atribuir a otro una acción, en este supuesto un delito, debiéndose significar, a reglón seguido, que esta imputación ha de ser falsa, es decir, contraria a la verdad, lo que nos conduce a su vez a otro problema muy importante, cual es el de determinar a qué verdad se refiere la Ley, si a la verdad objetiva - comparar lo que es con lo que se dice que es en la denuncia o acusación- o a la subjetiva, es decir, lo que el denunciante o acusador entendía razonablemente que era (Cfr. la problemática que representa la frontera entre el derecho a la libertad de expresión y de información y el derecho al honor de las personas y a la dignidad de la función pública). La jurisprudencia de la Sala ha exigido, en este sentido, como elemento subjetivo del tipo, la intención de faltar a la verdad, lo cual, como siempre que se hace referencia al ánimo en el derecho penal o en cualquier otro sector del Ordenamiento jurídico sancionador, habrá de ser inferido de las circunstancias concurrentes. Otra solución conduciría a hacer prácticamente inefectivo el derecho a la denuncia como una manifestación muy decisiva del derecho a la tutela judicial efectiva, teniendo en cuenta que, en general, en abstracto, el denunciante, cuando hace la correspondiente declaración, casi nunca tiene la certeza de que el hecho que denuncia y, sobre todo, que la participación en él de una determinada persona son ciertas; casi siempre se estará en presencia de probabilidades y no de certezas. Por consiguiente, excluida la forma culposa, este delito sólo puede atribuirse a título de dolo, únicamente cuando se pruebe o se infiera razonable y razonadamente que el sujeto llevó a cabo su acusación o denuncia con malicia, es decir, con conocimiento de la falsedad o con manifiesto desprecio hacia la verdad”.

Por otro lado, cabe señalar que al igual que con la concepción objetivista, para que la falsedad subjetiva de la imputación sea relevante penalmente es necesario que la falsedad afecte al núcleo de la imputación, siendo irrelevante si solamente los aspectos accesorios de aquella no se ajustan a la verdad, ya que ello no

afectaría a la finalidad fundamental de la imputación realizada³³⁹, la cual es imputar falsamente hechos que constituyan una infracción penal.

1.3. Concepción mixta

Quienes respaldan esta concepción, entienden que la falsedad requiere que la discrepancia no sólo se produzca entre lo que verdaderamente ha sucedido y lo que el sujeto ha declarado, sino que además requerirá que exista una discrepancia entre lo que el sujeto ha declarado y la representación subjetiva que éste tiene sobre los hechos acaecidos³⁴⁰.

Así, los adherentes de esta postura interpretan que mediante la modificación realizada en el CP de 1995 por la que se sustituyó el término falsamente por “conocimiento de su falsedad o temerario desprecio a la verdad” se intentó superar la discusión sobre el carácter que debía tener la falsedad –objetiva o subjetiva– requiriendo –mediante la actual redacción del tipo penal– que para que se produzca la consumación del ilícito penal estudiado no sólo se constate la discrepancia objetiva entre lo manifestado y lo realmente acaecido, sino que además se verifique que el sujeto ha tenido conocimiento de esa falsedad o que al menos ha actuado con cierto grado de temeridad³⁴¹.

Al respecto, GARCÍA SOLÉ, entiende que el mensaje que el legislador ha pretendido plasmar con la modificatoria es que “los términos falsedad y verdad incorporados en la descripción del

³³⁹ VIDAL MARÍN, *El derecho al honor y su protección desde la Constitución Española*, p. 287.

³⁴⁰ Entre sus principales representantes tenemos a: GARCÍA SOLÉ, *El delito de acusación y denuncia falsas*, p. 200 y APARISI MIRALLES, en *Estudios Jurídicos en memoria del profesor Dr. D. José Ramón Casabó Ruiz*, vol. I, p. 112.

³⁴¹ APARISI MIRALLES, en *Estudios Jurídicos en memoria del profesor Dr. D. José Ramón Casabó Ruiz*, vol. I, p. 112.

precepto están definidos por la Real Academia de la Lengua española en una doble vertiente objetiva-subjetiva, ...”³⁴².

Y es que para la autora, una concepción mixta de falsedad es lo ideal, ya que la falsedad subjetiva se integra como elemento configurador del actuar doloso y por ello su presencia es necesaria para afirmar que un actuar es doloso, ello claro está, sin dejar de lado que el dolo al proyectarse sobre los elementos objetivos requerirá de la aparición de una falsedad objetiva, tan es así que a su entender, el cumplimiento del requisito de procedibilidad –auto de sobreseimiento o sentencia absolutoria firme– tendría como sustento la demostración de una falsedad objetiva, destacando a su vez que, la ausencia de uno de los dos tipos de falsedad no permitiría el castigo de dicha conducta³⁴³.

De este modo, la falsedad de la imputación percibida a la luz de una concepción mixta se entiende como aquélla que muestra, por un lado, una conformidad entre lo que realmente ha acaecido y lo que el sujeto ha pensado al respecto y, por el otro, una disconformidad entre lo dicho y el binomio compuesto por lo acaecido y lo pensado.

Actualmente, esta concepción va teniendo mayor acogida en la jurisprudencia. En ese sentido se ha pronunciado la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Madrid, en el tercer fundamento jurídico de la sentencia nº 356/2016, de fecha 20 de junio de 2016, en el cual ha expresado que:

“Es necesario, pues, para que concurra este delito, se cumplan los siguientes requisitos: que los hechos atribuidos sean constitutivos de infracción penal; que estos sean falsos; y que además la imputación sea ante un funcionario judicial o administrativo que tenga el deber de proceder a su averiguación. Además exige que quien haga la imputación conozca la falsedad de la misma, es decir

³⁴² GARCÍA SOLÉ, *El delito de acusación y denuncia falsas*, p. 200.

³⁴³ GARCÍA SOLÉ, *El delito de acusación y denuncia falsas*, p. 200.

que tenga la conciencia de que esos hechos no se corresponden con la realidad (STS 1193/2010 de 24 febrero)”.

Habiéndose expuesto el contenido de las posturas respecto a la naturaleza que tiene la falsedad de la imputación en el delito estudiado, corresponde realizar en el siguiente apartado un estudio sobre la ubicación de la falsedad de la imputación dentro de las categorías de la teoría del delito.

2. Ubicación de la falsedad de la imputación dentro las categorías de la teoría del delito

Según la concepción adoptada sobre el criterio interpretativo de la falsedad de la imputación se puede ubicar a este elemento en una categoría distinta de la teoría del delito.

Así pues, se la ha ubicado en dos categorías distintas, en la tipicidad y en la antijuricidad.

A continuación, se expondrán los argumentos expuestos en la doctrina que sustentan cada una de dichas ubicaciones de la falsedad de la imputación.

2.1. Dentro de la tipicidad

Esta postura es asumida mayoritariamente en la doctrina. Las discusiones básicamente se centran en determinar si la falsedad de la imputación es un elemento objetivo, subjetivo u objetivo-subjetivo del tipo penal.

Siendo ello así, se deberán exponer los argumentos a favor esgrimidos por la doctrina en favor de cada una de esas tres vertientes.

2.1.1. Como elemento objetivo del tipo

Usualmente, quienes defienden esta postura parte de una concepción objetivista de la falsedad.

Entienden, basándose principalmente en un análisis de la redacción del tipo penal, que al consignarse la expresión “hechos que, de ser ciertos” se exige que los hechos que se imputen no sean ciertos, es decir, que sean falsos necesariamente.

Así también lo ha sostenido MAQUEDA ABREU quien, partiendo de una comparación entre la regulación anterior y la vigente, ha concluido que no se ha introducido una variación sobre la interpretación que debe brindársele a la falsedad como elemento del tipo penal –a su entender, elemento objetivo el tipo penal–, puesto que no se ha suprimido la referencia a “la incerteza” de los hechos imputados al mantenerse la referencia a que los hechos imputados deben no ser ciertos. Destacando que, la inclusión de la expresión “con conocimiento de la falsedad o temerario desprecio hacia la verdad” lo que hace es establecer criterios que permiten fijar el alcance de la responsabilidad subjetiva del autor cuando afirme hechos falsos³⁴⁴.

En ese sentido, la falsedad de la imputación se constituiría como un elemento objetivo del tipo penal, en donde, a efectos de tipicidad los hechos tienen que ser falsos³⁴⁵.

³⁴⁴ MAQUEDA ABREU, *Acusación y denuncia falsas*, p. 43.

³⁴⁵ GONZÁLEZ RUS, en *Derecho Penal Español. Parte Especial*, p. 961.

Consecuentemente, al considerarse a la falsedad de la imputación como un elemento del tipo objetivo, deberá de ser abarcada por el dolo del sujeto³⁴⁶, y, desde el punto de vista procesal, deberá también demostrarse su concurrencia al igual que como con los demás elementos del tipo objetivo, ya que, de lo contrario, se estaría vulnerando el principio de presunción de inocencia³⁴⁷.

Al respecto, debe destacarse lo manifestado por FUENTES OSORIO, quien destacando la particular técnica de tipificación de los delitos de calumnias e injurias –similar a la del delito de acusación y denuncia falsas y por ello extrapolable el razonamiento empleado– sostiene que, la concepción de la falsedad como elemento objetivo típico se deduce de las exigencias subjetivas de veracidad derivadas de la exigencia de que los hechos se imputen “con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad”, pues para que la imputación sea realizada con conocimiento de su falsedad, necesariamente el hecho imputado debe ser falso. En el caso de los delitos mencionados, los tipos penales han indicado el contenido que debe tener el dolo, correspondiéndose éste con un referente objetivo (la falsedad de la imputación) y no, como usualmente se suele realizar, estipulando los elementos objetivos del tipo penal a partir de los que se debería construir la parte subjetiva, exigiendo que el sujeto tenga

³⁴⁶ ROPERO CARRASCO, *Abusar de la Justicia. Dimensión del actual delito de acusación y denuncias falsas*, p. 194.

³⁴⁷ CARDENAL MURILLO/SERRANO GONZÁLEZ DE MURILLO, *Protección penal del honor*, p. 124.

conocimiento y voluntad de la realización de aquellos³⁴⁸.

Siendo ello así, en el caso de que la falsedad objetiva se encontrase ausente, se estaría ante un supuesto de atipicidad de la conducta realizada³⁴⁹.

Cabe precisar, que la falsedad objetiva de la imputación se constituiría como un elemento normativo del tipo, ya que su valoración se encontraría subordinada a los criterios jurídicos imperantes en el Derecho procesal, fundamentalmente los vinculados a la verdad procesal.

2.1.2. Como elemento subjetivo del tipo

Esta tesis es defendida por aquellos que entienden que la falsedad de la imputación debe ser interpretada desde un cariz estrictamente subjetivista.

Acorde con esta postura, la falsedad subjetiva forma parte de la tipicidad subjetiva del delito de acusación y denuncia falsas, ya que es necesario que el sujeto haya actuado con la intención de faltar a la verdad realizando la imputación con conocimiento de la falsedad de lo imputado o con temerario desprecio hacia la verdad. En ese sentido, de no concurrir alguno de estos elementos, la conducta sería atípica y, por tanto, no sancionable penalmente.

³⁴⁸ FUENTES OSORIO, *Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales*, núm. LX, 2007, p. 445. En similar sentido se ha pronunciado Moretón Toquero al manifestar que aunque la falsedad de la imputación ya no es un requisito exigido expresamente por el tipo penal, debe sin embargo considerarse como elemento esencial implícito a partir de las exigencias subjetivas del mismo, entendiendo así que el tipo penal sigue exigiendo la falsedad objetiva de la imputación. Véase: MORETÓN TOQUERO, *Biblioteca Online Bosch*, p. 8.

³⁴⁹ CARMONA SALGADO, en *Derecho Penal. Parte Especial*, p. 402.

La principal crítica que se realiza a esta postura es que, de aceptarse este criterio, podría llegarse a sancionar penalmente la imputación de hechos verdaderos que sólo fueren falsos en la mente del denunciante, siendo ésta situación, en principio, inidónea para la afectación del honor del falsamente imputado³⁵⁰ y el correcto funcionamiento de la Administración de Justicia.

Ahora bien, si se entendiese que esta postura adopta fielmente los criterios estipulados en la sentencia *New York Times Co. vs. Sullivan*, se asumiría cuando menos, que la falsedad objetiva de los hechos imputados sería un presupuesto del delito y que la falsedad de la imputación desde su interpretación subjetiva sería un elemento subjetivo del tipo penal.

Sin embargo, el sector doctrinario que suscribe la concepción subjetivista no se ha pronunciado en ese sentido respecto a la falsedad objetiva de la imputación, sino más bien sólo se ha limitado a señalar que la falsedad de la imputación debe evaluarse desde una perspectiva subjetiva con independencia de la falsedad objetiva de los hechos.

En ese sentido, pareciera que las críticas realizadas a esta postura radican en el hecho de que sus suscriptores restaron importancia a supuestos problemáticos en los que existiese una disconformidad entre lo dicho y lo pensado respecto de un hecho, pero que a su vez mostrasen una conformidad entre lo dicho y lo realmente acaecido.

³⁵⁰ ROPERO CARRASCO, *Abusar de la Justicia. Dimensión del actual delito de acusación y denuncias falsas*, p. 193.

2.1.3. Como elemento objetivo y subjetivo del tipo

Esta postura es defendida por aquellos que sostienen que la falsedad de la imputación debe ser concebida desde una perspectiva mixta.

Así pues, para este sector doctrinario la falsedad debe concebirse en ambos sentidos; en su vertiente objetiva como una exigencia del tipo objetivo –ello en coincidencia con el enunciado del epígrafe capitular: “De la acusación y denuncia falsas y de la simulación de delitos”– a partir de la cual se realiza un análisis del conocimiento de la misma (vertiente subjetiva), constituyéndose la falsedad subjetiva como un elemento cognoscitivo de naturaleza subjetiva que también se exige en el tipo penal³⁵¹.

En ese sentido, entienden que concurren ambos tipos de falsedad; la falsedad objetiva de la imputación como elemento objetivo del tipo penal y la falsedad subjetiva –entendida como el conocimiento de la probabilidad de que sea falso lo imputado–³⁵² como elemento subjetivo del tipo penal.

De este modo, la falta de alguno de los dos tipos de falsedad tendría como resultado la atipicidad de la conducta realizada.

³⁵¹ PALOMO DEL ARCO, en *Delitos contra la Administración de justicia*, p. 174.

³⁵² Se hace referencia al conocimiento de la probabilidad de que lo imputado sea falso, dado que la falsedad subjetiva hace referencia tanto al conocimiento de la falsedad –el cual puede ser interpretado como un alto grado de conocimiento de la probabilidad de que lo imputado sea falso– como al temerario desprecio hacia la verdad –es decir, a las dudas que el sujeto tiene sobre la veracidad de lo imputado–. Los aspectos concernientes al conocimiento de la falsedad y el temerario desprecio hacia la verdad serán tratados en el quinto capítulo de este trabajo.

2.2. Dentro de la antijuricidad

Esta postura se sustenta en una interpretación de la falsedad de la imputación desde una vertiente objetiva.

Es sostenida principalmente por BACIGALUPO ZAPATER, quien interpreta que la falsedad objetiva de la imputación es un elemento objetivo de una causa de justificación, al mencionar –respecto a la calumnia– que:

“[l]a consideración de la falsedad (aspecto negativo de la veracidad) como un elemento de la justificación surge, en primer lugar, del propio texto constitucional: el art. 20.1.d) considera la libertad de información a que ésta sea «veraz»; es obvio que aunque la libertad de expresión [art. 20.a)] no haga referencia expresa a la veracidad no podría significar que la Constitución garantiza el derecho a expresar hechos inclusive cuando sean falsos. (...) desde este punto de vista la imputación de un hecho verdadero, pero subjetivamente inveraz, no constituirá una tentativa de calumnia (error de tipo al revés), sino un delito putativo (error de prohibición al revés)”³⁵³.

Parece que lo que BACIGALUPO ZAPATER propone es que la falsedad se constituya como un elemento objetivo de la causa de justificación vinculada al cumplimiento de un deber o ejercicio legítimo de un derecho.

Interpretando la postura del mencionado autor, la falsedad (aspecto negativo de la veracidad) se constituiría como un elemento objetivo de la justificación, ya que la veracidad de la información sería el requisito *sine qua non* para que pueda ejercerse legítimamente el derecho a la libertad de información y expresión.

Si bien es cierto, el análisis realizado por el autor se enmarca en el delito de calumnia, por la similitud entre esta figura típica con el

³⁵³ BACIGALUPO ZAPATER, *Teoría y práctica del Derecho Penal*, t. II, p. 1427.

delito de acusación y denuncia falsas, se puede extrapolar el razonamiento empleado a este último.

Siendo ello así, podría llegar a sostenerse que la falsedad objetiva de la imputación en el delito de acusación y denuncia falsas sería un elemento de la causa de justificación vinculado al ejercicio del derecho legítimo a la tutela judicial efectiva y al cumplimiento del deber de denunciar la comisión de actos ilícitos –contenido este último en el art. 259 LECrim–.

Culminada la exposición de las distintas posturas que existe en la doctrina sobre la ubicación de la falsedad de la imputación dentro de las categorías de la teoría del delito, corresponde seguidamente realizar una toma de postura tanto de la naturaleza de la falsedad de la imputación como de su ubicación dentro de las categorías de la teoría del delito.

3. Toma de postura

Sobre el criterio interpretativo que debe emplearse para entender la esencia de la naturaleza de la falsedad de la imputación en el delito de acusación y denuncia falsas, se ha optado por la perspectiva objetivista, ya que, se considera que el eje central de la conducta delictiva estudiada es la falsedad objetiva de la imputación, pues sin ella, no se podrían lesionar los bienes jurídicos protegidos en este delito –el correcto funcionamiento de la Administración de Justicia y el honor del acusado o denunciado falsamente–.

En ese sentido:

- a) Si el relato de la imputación –de una infracción penal– fuese acorde con la realidad y el sujeto realizase la imputación ante un funcionario judicial o administrativo que tenga el deber de proceder a la averiguación de los hechos imputados con conciencia de que lo que relata es verdadero, no habría afectación del correcto funcionamiento de la Administración de Justicia

puesto que la imputación realizada ante la autoridad competente se haría en ejercicio legítimo de la tutela judicial efectiva y, en el caso de los delitos públicos, ante el cumplimiento del deber impuesto en la LECrim de denunciar la comisión de actos ilícitos.

Asimismo, al igual que con el delito de calumnia –delito que tiene como único bien jurídico al honor–, la imputación verdadera de la comisión de un delito a su autor no es sancionable penalmente, ya que sólo lo será si los hechos imputados fuesen falsos. Por tanto, la imputación verdadera de hechos delictivos no producirá una afectación al honor del imputado que merezca protección penal.

- b) Si el relato de la imputación –de una infracción penal– fuese acorde con la realidad y el sujeto realizase la imputación ante un funcionario judicial o administrativo que tenga el deber de proceder a la averiguación de los hechos imputados bajo la errónea idea de que lo que relata es falso, no habría tampoco afectación del correcto funcionamiento de la Administración de Justicia ni del honor del imputado, dado que, al basarse la imputación en hechos verdaderos el aspecto volitivo del sujeto pasaría a un segundo plano.

De esta manera, la falsedad objetiva de la imputación se constituye como un elemento objetivo del tipo penal sin el cual no podría existir el delito de acusación y denuncia falsas. Esto se deduce también de la propia redacción del tipo penal, pues si bien ya no se hace mención expresa a la falsedad de la imputación –como sí se hacía con el CP de 1944–, se sigue manteniendo la expresión “hechos que, de ser ciertos”, con lo que, indirectamente se hace referencia a que los hechos imputados deben ser falsos. Así pues, si los hechos imputados fuesen verdaderos, la conducta sería atípica.

La falsedad de la imputación, como en el caso de todos los elementos objetivos del tipo penal, debe encontrarse abarcada por el dolo del sujeto –este aspecto se desarrollará en el siguiente capítulo–.

Así pues, para que la conducta sea considerada típica deberá darse la concurrencia tanto de la falsedad objetiva del hecho como del conocimiento de la probabilidad de que lo manifestado sea falso –si es en alto grado, se referirá a un conocimiento de la falsedad y si es en uno menor, se estaría ante un escenario de temerario desprecio hacia la verdad–.

De este modo, resultaría innecesario hacer referencia a la posibilidad de concurrencia de la falsedad subjetiva –discrepancia entre lo manifestado y lo que subjetivamente el sujeto pensaba respecto a los hechos–, ya que lo relevante es la discordancia entre lo ocurrido y lo manifestado (falsedad objetiva) y el conocimiento que el sujeto tiene de ésta, y no, la discordancia entre lo manifestado y lo que el sujeto pensaba (falsedad subjetiva).

A pesar de haber plasmado los argumentos por los cuales se ha optado por una visión objetivista de la falsedad de la imputación y por una identificación de ella como elemento objetivo del tipo penal, merece la pena reflexionar un poco sobre la postura objetivista propuesta por BACIGALUPO ZAPATER, quien postula que la falsedad (aspecto negativo de la veracidad) de la imputación es un elemento objetivo de una causa de justificación.

Siguiendo la lógica expuesta por él y situando la discusión en torno al delito de calumnia, para que se pueda alegar la concurrencia de la causa de justificación del ejercicio legítimo del derecho a la libertad de información y expresión sería necesario que lo expresado sea veraz y no falso. Siendo ello así, sería la veracidad y no la falsedad –como propuso el autor– la que se constituiría como elemento objetivo de la causa de justificación.

Bajo los términos antes señalados, cuando la información sea falsa objetivamente no concurriría dicha causa de justificación, deviniendo consecuentemente en antijurídica la conducta realizada por el sujeto; mientras que, en el caso de que el sujeto actuase creyendo que se encontraba amparado en dicha causa de justificación –ejercicio legítimo del derecho a la libertad de información y expresión–, pero resultase que la información era falsa

objetivamente, se encontraría ante un supuesto de error de prohibición –art. 14.3 CP–.

Ahora bien, en el caso del delito de acusación y denuncia falsas, el derecho a la tutela judicial efectiva permite poder acceder a los órganos jurisdiccionales para que se realice una investigación y se emita un pronunciamiento sobre la presunta comisión de hechos ilícitos realizados por terceros, claro está, siempre y cuando se tengan indicios razonables que lleven a pensar al sujeto que realiza la imputación que efectivamente dicho hecho ilícito se cometió y que fue realizado por la persona imputada.

Así pues, el ejercicio de ese derecho intrínsecamente lleva un deber de veracidad, puesto que, si se tuviese conocimiento de la falsedad de lo imputado, se estaría ante un ejercicio abusivo de ese derecho, lo cual claro está no se encuentra amparado por el ordenamiento jurídico.

Asimismo, cabe recordar que la LECrim impone a las personas que presenciaren la perpetración de cualquier delito público el deber de denunciar inmediatamente dichos hechos ante un Juez de instrucción, de Paz, Comarcal o Municipal, o Funcionario fiscal³⁵⁴.

El cumplimiento de dicho deber, al igual que como sucede con el derecho a la tutela judicial efectiva, debe darse con estricto respeto a la veracidad, pues lo que se debe denunciar es la perpetración de delitos públicos que verdaderamente han ocurrido, y en el caso de que se impute directamente a un sujeto por la comisión de dichos hechos, deberá de existir una correspondencia entre la identidad del sujeto imputado y la del autor del delito.

En ese sentido, si la falsedad objetiva no fuera parte integrante del tipo penal, siguiendo la postura plasmada por BACIGALUPO ZAPATER respecto a la

³⁵⁴ Cabe mencionar que, se encuentran exentos de cumplir con el deber general de denunciar aquellas personas que por sus condiciones mentales o por su desarrollo intelectual, no tienen completo uso de razón, los que tengan vínculos de matrimonio o parentesco (ascendientes y descendientes consanguíneos y colaterales hasta el segundo grado). CORTÉS DOMÍNGUEZ, “Lección 12: Modos de iniciación del proceso penal”, en *Derecho Procesal Penal*, p. 193.

calumnia y extrapolándola al delito estudiado, sería un elemento objetivo de la causa de justificación referida al derecho de tutela judicial efectiva y al deber de denunciar delitos públicos.

Acorde a ella, el ejercicio de aquél derecho y el cumplimiento del deber impuesto por la LECrim llevarían implícitamente la exigencia de veracidad de lo expresado para que puedan intentar emplearse como causas de justificación. Por tanto, la falsedad objetiva de lo imputado no daría lugar a la aplicación de dicha causa de justificación y, en el caso de que el sujeto creyendo estar ejerciendo legítimamente su derecho a la tutela judicial efectiva o cumpliendo su deber de denunciar la perpetración de un delito público imputare hechos falsos objetivamente pero que subjetivamente creyó eran verdaderos, conllevaría a un escenario de error de prohibición.

Bajo este razonamiento, tal y como sucede con la calumnia, la veracidad y no la falsedad –como propuso el autor– es la que podría constituirse como elemento objetivo de la causa de justificación.

En este trabajo, se es de la opinión de que la falsedad de la imputación no puede encontrarse fuera de la tipicidad de la conducta, ya que de lo contrario se estaría admitiendo la idea de que la imputación de hechos que constituyen infracciones penales ante funcionario judicial o administrativo que tenga el deber de proceder a su averiguación sería una conducta típica, lo cual claro está, es atentatorio al ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva y al cumplimiento del deber de denunciar la comisión de delitos públicos.

De sostener esto, se perseguiría la realización de conductas que encuentran su respaldo en otros cuerpos normativos –la CE y la LECrim–, siendo esto manifiestamente contradictorio.

Incluso, en el supuesto de que se admitiese –sin caer en una falta de coherencia con el resto del ordenamiento jurídico– que la conducta típica no tiene como uno de sus elementos a la falsedad, tampoco podría sostenerse que ésta es

elemento objetivo de la causa de justificación, ya que el elemento objetivo es la veracidad de lo imputado³⁵⁵ y no su falsedad.

En suma, como se ha observado, la falsedad de la imputación es probablemente el eje central de la conducta delictiva estudiada. Siendo un elemento objetivo del tipo penal es necesario acreditar su presencia, verificándose si efectivamente el hecho imputado se produjo en la realidad y, de ser así, si éste fue o no realizado por la persona imputada.

En vista de ello, es necesario revisar a continuación, algunos aspectos procesales vinculados al tratamiento de la falsedad de la imputación.

III.- ASPECTOS PROCESALES DEL TRATAMIENTO DE LA FALSEDAD DE LA IMPUTACIÓN

La acusación o denuncia falsa se puede identificar como aquella acusación o denuncia que es contraria a la verdad, pero ¿a qué tipo de verdad se refiere?

Por verdad, la RAE establece en sus dos primeras acepciones que por ella se hace mención a: 1) la conformidad de las cosas con el concepto que de ellas forma la mente, y, 2) la conformidad de lo que se dice con lo que se siente o se piensa. Mientras que, por verdadero, el DRAE establece en sus dos primeras acepciones que hacemos referencia a algo que: 1) contiene verdad, o, 2) es real y efectivo.

Una primera aproximación a este término nos llevaría a entender que con él hacemos referencia a la plena y absoluta coincidencia –en lo esencial– entre el contenido de una afirmación y la realidad afirmada³⁵⁶.

³⁵⁵ Debemos recordar, tal como lo ha señalado Rojas Chacón y Sánchez Romero que: “[t]anto actuar en cumplimiento de un deber legal como en el ejercicio legítimo de un derecho, para que operen como justificantes, deben realizarse dentro de los límites legales y conforme a derecho. El derecho que se invoca debe ser verdadero, no supeditado a una condición suspensiva o resolutoria, o a una mera situación jurídica (no basta una simple expectativa de derecho). Además, debe emanar del ordenamiento jurídico”. ROJAS CHACÓN/SÁNCHEZ ROMERO, *Teoría del Delito. Aspectos Teóricos y Prácticos*, t. I, p. 250.

³⁵⁶ DE MIRANDA VÁZQUEZ, en *Probática Penal I. La prueba en los delitos contra la Administración de Justicia*, p. 86.

La verdad puede ser estudiada desde diversas perspectivas: filosófica, sociológica, etc.; es así que, dada la amplitud de enfoques mediante los cuales se podría abordar el estudio de este concepto, nos limitaremos a estudiar cómo se percibe la verdad en el proceso penal ya que es este el campo en el cual el delito estudiado se desenvuelve.

El concepto y concepción de la “verdad” que predomina en el proceso penal, no tiene mucha relación con el uso cotidiano que se hace de ella³⁵⁷.

Cuando se estudia la teoría general del proceso penal existen dos tipos de verdad que usualmente se mencionan, la histórica o material y la procesal o forense. La pregunta que surge es ¿cuál de estos dos tipos de verdad es la que interesa al delito estudiado?

La verdad material es aquella que guarda correspondencia entre lo afirmado y lo que efectivamente sucedió, así, ella implica un conocimiento empírico y la comprobación de la ocurrencia de los hechos³⁵⁸.

Su obtención, en relación a los hechos que indiciariamente han merecido la calificación de típicos³⁵⁹, es el fin perseguido por el proceso penal³⁶⁰.

Esta búsqueda no puede realizarse de cualquier manera pues encuentra sus límites en: i) el debido respeto a los derechos fundamentales del imputado, ii) los principios que rigen el proceso penal, iii) la necesidad de una celeridad en la averiguación de los hechos – debido a que la investigación no puede prolongarse indefinidamente hasta que se alcance la verdad material absoluta–, y, iv) la necesidad del alcance de una solución al conflicto.

Dichas limitaciones “impiden que la inocencia o la culpabilidad de un acusado pueda ser investigada a toda costa o a cualquier precio”³⁶¹. Todo ello, trae como consecuencia

³⁵⁷ HASSEMER, *Verdad y búsqueda de la verdad en el proceso penal. La medida de la Constitución*, p. 23.

³⁵⁸ GARCÍA SOLÉ, *El delito de acusación y denuncia falsas*, p. 175.

³⁵⁹ GARCÍA SOLÉ, *El delito de acusación y denuncia falsas*, p. 170.

³⁶⁰ Para Cafferata Nores, “[l]a verdad que se persigue en el proceso penal es, a diferencia de lo que sucede en sede civil, la históricamente ocurrida, denominada verdad material, verdad correspondencia o *verdad real*”. CAFFERATA NORES, *La prueba en el proceso penal*, p. 6.

que el proceso penal se “conforme” con alcanzar una verdad procesal³⁶², es decir, con una verdad relativa, contextual o aproximada a la verdad histórica, derivada racionalmente de las pruebas que se hayan actuado en el proceso penal³⁶³.

Lo ideal sería que mediante el material probatorio disponible en el proceso penal se alcanzase un conocimiento pleno de lo sucedido, obteniendo en todos los procesos una verdad material incontestable; sin embargo, esto es inviable porque no siempre existirán pruebas suficientes para poder reconstruir históricamente en su totalidad la forma en la que ocurrieron los hechos investigados. Así pues, a fin de que los jueces puedan impartir adecuadamente la justicia, se ha visto necesario dejarles un margen para que mediante su criterio interpretativo y en base a las pruebas actuadas en el proceso puedan alcanzar una convicción sobre lo que realmente ocurrió y establezcan a partir de ello, una verdad procesal.

El hecho de que el proceso penal se conforme con una verdad procesal no quiere decir que ésta se encuentra desvinculada del plano de la realidad³⁶⁴, es decir, que no tenga un sustrato fáctico comprobado, sino que bastará con que se cuente con las pruebas suficientes que permitan o no tener por acreditada la responsabilidad penal del sujeto imputado.

Se inició este apartado indicando que la acusación o denuncia falsa se puede identificar como aquella acusación o denuncia que es contraria a la verdad, ello en concordancia

³⁶¹ MUÑOZ CONDE, *Diario El País*, núm. 9617, de fecha 28 de septiembre de 2003. Al respecto, sobre la imposibilidad de alcanzar el conocimiento absoluto de la verdad material, Luigi Ferrajoli ha manifestado que: “[l]a imposibilidad de formular un criterio seguro de verdad de las tesis judiciales depende del hecho de que la verdad «cierta», «objetiva» o «absoluta» representa siempre la «expresión de un ideal» inalcanzable. La idea contraria de que se puede conseguir y aseverar una verdad objetiva o absolutamente cierta es en realidad una ingenuidad epistemológica que las doctrinas jurídicas ilustradas del juicio como aplicación mecánica de la ley comparten con el realismo gnoseológico vulgar”. FERRAJOLI, *Derecho y razón. Teoría del garantismo penal*, p. 50. En ese sentido, véase: PLASENCIA VILLANUEVA, *Boletín Mexicano de Derecho Comparado*, núm. 83, 1995, p. 711.

³⁶² DÍAZ PITA, *El delito de acusación y denuncia falsas: Problemas fundamentales*, p. 65. Y es que, el hallazgo de la verdad, como realización de un valor, es aproximativo, por tanto, pretender alcanzar una verdad material absoluta además de ser un imposible, nos podría llevar a adoptar actitudes autoritarias como, por ejemplo, las vividas en el marco de la Santa Inquisición. GIMÉNEZ PERICÁS, *Revista Eguzkilore: Cuaderno del Instituto Vasco de Criminología*, núm. 6, 1992, p. 31.

³⁶³ TARUFFO, *La prueba, artículos y conferencias*, p. 28.

³⁶⁴ DÍAZ PITA, *El delito de acusación y denuncia falsas: Problemas fundamentales*, p. 65.

con lo antes expuesto, permite inferir que el tipo de verdad a la que se refiere es la procesal.

Ahora bien, la interrogante que inmediatamente surge es ¿cuál verdad procesal, la que se ha logrado establecer en el proceso por el delito de acusación y denuncia falsas o la que se estableció en el proceso penal inicial que dio origen al proceso por acusación y denuncia falsas?

Para responder la interrogante propuesta, debe tenerse en cuenta que el delito de acusación y denuncia falsas tiene como antecedente un proceso penal instaurado debido a la imputación falsa realizada por un sujeto y que culminó con un auto de sobreseimiento o archivo, o sentencia absolutoria firme.

Los indicios de falsedad objetiva de la imputación se derivan de la resolución emitida por el juez en el proceso inicialmente instaurado. Sin embargo, lo antes mencionado no debe conducir al error de entender que toda sentencia absolutoria o auto de sobreseimiento o archivo firmes de por sí terminarían necesariamente dando lugar a una condena por el delito de acusación y denuncia falsas —en el capítulo sexto y décimo de este trabajo se tratará sobre la relación existente entre el sentido de las resoluciones emitidas en el primer proceso y el proceso de acusación y denuncia falsas—, pues de ser así, las personas terminarían por inhibirse de denunciar hechos que consideran delictivos por temor de verse inmersas en un proceso penal en caso de que no se dictaminase una sentencia condenatoria por el delito imputado³⁶⁵, aun cuando la narración de los hechos se ajustase a la verdad.

De este modo puede afirmarse que, no siempre que se obtengan ese tipo de resoluciones judiciales favorables será porque ha existido una falsedad en la imputación, sino que muchas veces, el motivo principal estará vinculado a la ausencia de prueba suficiente para formular acusación o sostenerla³⁶⁶.

³⁶⁵ VÁZQUEZ IRUZUBIETA, *Comentarios al Código Penal (Actualizado por las Leyes Orgánicas: 1/2015, 30 de marzo y 2/2015, 30 de marzo)*, p. 926.

³⁶⁶ En este sentido se ha pronunciado también la Fiscalía General del Estado al señalar que es erróneo identificar la ausencia de prueba suficiente para formular acusación o sostenerla, con aquellos casos en que se acredita al menos indiciariamente que la denuncia es falsa. FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, *Memoria de la Fiscalía General del Estado*, vol. I, p. 642.

Por ello, siempre que se inicie un proceso penal por delito de acusación y denuncia falsas será necesario que se acredite la falsedad objetiva de la imputación, ya sea mediante algún tipo de prueba directa o prueba por indicios, y no que ésta se infiera de la sentencia absolutoria o auto de sobreseimiento o archivo que se emitió en el proceso inicial instaurado por la denuncia originada por el sujeto sindicado de haber realizado una denuncia mendaz.

A nivel probatorio, la acreditación de la falsedad de la imputación puede percibirse desde dos perspectivas:

- a) Por un lado, una de corte inquisitivo (doctrina minoritaria), que entendía que una imputación falsa no solamente es aquella cuya veracidad ha quedado totalmente excluida, sino que también lo puede ser aquella de la cual no sea posible probar su veracidad, argumentando que el que imputa un delito debería de asumir el riesgo que se podría derivar de la imposibilidad de probar lo imputado, no pudiendo emplearse a su favor el principio de *in dubio pro reo*³⁶⁷.
- b) Por el otro, una de corte garantista (doctrina mayoritaria), que entendía que solamente puede ser considerada como falsa la imputación que excluye la posibilidad de que sea veraz³⁶⁸.

En cuanto a la primera postura, pareciera que quienes la defienden equiparan, de cierta forma, a la acusación o denuncia falsa con la acusación o denuncia improbadada. Esta concepción recuerda a la percepción que se tuvo sobre este delito en momentos vinculados a la etapa precodificadora –tal como se ha expuesto en el capítulo primero–.

El criterio de asimilar la improbanza de la imputación con la falsedad de la misma ha sido dejado de lado, principalmente debido al respeto del principio de *in dubio pro reo*,

³⁶⁷ BACIGALUPO ZAPATER, *Teoría y práctica del Derecho Penal*, t. II, p. 1428.

³⁶⁸ En ese sentido, véase: DE MIRANDA VÁZQUEZ, en *Probática Penal I. La prueba en los delitos contra la Administración de Justicia*, p. 92.

y es que el hecho de que una imputación quede improbadada no quiere decir que *per se* haya sido realizada con falsedad, sino que, no ha podido acreditarse lo imputado.

Esta dificultad probatoria no puede subsanarse entendiendo que en el caso de que exista se entenderá como acreditada la falsedad.

En la práctica, un gran porcentaje de casos que conllevan a la absolución del delito estudiado se producen por la imposibilidad de acreditar la falsedad de la imputación realizada –como se observará en el décimo capítulo–, de seguir el criterio antes mencionado, muchos de estos procesos habrían culminado con una condena, algunas de ellas a personas inocentes, siendo esto un error que el sistema judicial no puede permitirse³⁶⁹.

Siendo ello así, y debido a la forma en la que se encuentra estructurado el proceso penal español, las diversas garantías procesales y derechos que posee el imputado, puede sostenerse que una denuncia o acusación para ser considerada a nivel probatorio como falsa debe excluir la posibilidad de que ésta sea veraz, y en caso de que no se la pueda excluir, el órgano jurisdiccional teniendo en cuenta el principio de *in dubio pro reo* deberá fallar absolviendo al procesado por el delito de acusación y denuncia falsas.

Incluso, cabe mencionar que, la ausencia absoluta de prueba que acreditaría la comisión de un hecho delictivo imputado debe concebirse como un indicio de falsedad respecto de la imputación realizada, que –por su naturaleza– por sí sola no es suficiente para sustentar un fallo condenatorio³⁷⁰.

Al respecto, puede traerse a colación lo expuesto por DE MIRANDA VÁSQUEZ al sostener que:

“[L]a ausencia de corroboración probatoria, directa o indirecta, de la afirmación fáctica del denunciante o querellante, supuestamente falsa, no significa siempre que no haya ocurrido lo que se ha narrado. En algunos casos, ese vacío puede explicarse, de manera

³⁶⁹ Sobre los costes relativos de las absoluciones y las condenas falsas, véase *in extenso*: LAUDAN, *Verdad, error y proceso penal. Un ensayo sobre epistemología jurídica*, pp. 111 y ss.

³⁷⁰ DE MIRANDA VÁSQUEZ, en *Probática Penal I. La prueba en los delitos contra la Administración de Justicia*, p. 92.

harto plausible, por la especial clandestinidad de algunos ilícitos penales que se cometen en la intimidad y que no se reflejan en prueba directa, o por el alto grado de volatilidad de algunos medios de prueba y de la gran mayoría de indicios. Por consiguiente, no se puede confiar la prueba de la falsedad objetiva de la narración fáctica a la ausencia absoluta de evidencia. Es preciso que, en estos casos, el acusador pruebe el hecho distinto –a veces, antagónico– que excluya terminantemente la posibilidad de la existencia del acontecimiento objeto de la *notitia criminis*”³⁷¹.

Así pues, en el delito de acusación y denuncia falsas, la falsedad de la imputación debe emerger de los hechos denunciados y no deducirse de la absolución, sobreseimiento o del archivo del proceso penal primigenio³⁷², por ello, en algunas ocasiones, a pesar de haber contado con ese tipo de pronunciamientos, no se sentencia condenatoriamente a los sujetos que inicialmente denunciaron o acusaron la comisión de un delito y que posteriormente –previa sentencia absolutoria, auto de sobreseimiento o archivo firme– fueron imputados como autores del delito de acusación y denuncia falsas, ya que lo que se necesita acreditar es la falsedad objetiva de lo imputado, no la falta de probanza de la imputación inicial.

De esta forma, en el delito estudiado, lo que deberá averiguarse es si: i) el hecho imputado ha sido o no realizado, ii) el hecho imputado fue realizado o no en las condiciones esenciales en las que las ha descrito el sujeto acusador o denunciante, o, iii) a pesar de haberse realizado el hecho imputado, fue realizado o no por la persona imputada.

Como se señaló, la acreditación de la falsedad objetiva de la imputación es a veces dificultosa ya que en ocasiones se duda acerca de ella, pues en algunos casos se entiende que no existe material probatorio que permita excluir del todo la posibilidad de veracidad de la imputación.

En no pocas ocasiones, una de las pruebas principales que sirven para tener por acreditada la falsedad objetiva de la imputación y con ello fundamentar una condena es

³⁷¹ DE MIRANDA VÁZQUEZ, en *Probática Penal 1. La prueba en los delitos contra la Administración de Justicia*, p. 92.

³⁷² SOTO RODRÍGUEZ, *Diario La Ley*, núm. 7977, de fecha 3 de diciembre de 2012.

la confesión del denunciante o acusador falaz³⁷³, la cual se suele producir usualmente durante el plenario.

En otros casos, los medios de reproducción de la palabra, sonido e imagen proporcionarán las pruebas adecuadas para acreditar la falsedad objetiva de los ellos, por ejemplo, mediante la visualización de una cámara de seguridad de un local comercial se puede percibir la sucesión fáctica real de los hechos acaecidos y si el relato proporcionado por el acusador o denunciante es acorde a ella.

Además de las pruebas directas antes señaladas y de otras que pueden darse en el proceso en concreto, debe mencionarse que la prueba indirecta también juega un rol importante para la acreditación de la falsedad objetiva de la imputación.

Así, por ejemplo, mediante una pericia médica se puede obtener indicios relevantes que permitan determinar si una persona pudo haber sido violentada sexualmente o no.

Claro ésta, la valoración judicial que el órgano jurisdiccional realizará deberá ser sobre todo el material probatorio existente, pues puede darse el caso que existan pruebas que tengan una carga inculpatoria y otras exculpatoria, ante ello, el órgano jurisdiccional valorará todo lo actuado para determinar si la imputación realizada es objetivamente verdadera o si es objetivamente falsa.

Finalmente, a modo de conclusión puede señalarse que, la verdad procesal contrariada en la acusación o denuncia falsa es la obtenida en el proceso penal instaurado por el delito de acusación y denuncia falsas, mientras que, la verdad procesal obtenida en el proceso primigenio tan sólo nos brindará –en algunos casos– indicios sobre la posible falsedad de la imputación, la cual deberá de ser investigada en el proceso instaurado por el delito de acusación y denuncia falsas.

³⁷³ DE MIRANDA VÁZQUEZ, en *Probática Penal I. La prueba en los delitos contra la Administración de Justicia*, p. 101.

§ 5. EL CONOCIMIENTO DE LA FAKSEDAD Y EL TEMERARIO DESPRECIO HACIA LA VERDAD

I.- CONSIDERACIONES PREVIAS

En el capítulo anterior se sostuvo que no basta con que se acredite que la imputación es falsa objetivamente, sino que además es necesario que se acredite que el sujeto ha actuado con conocimiento de esa falsedad o al menos, con temerario desprecio hacia la verdad³⁷⁴.

Ambos elementos forman parte de la tipicidad subjetiva del tipo penal estudiado, sin embargo, cada uno de ellos posee un matiz particular que hace que se deban estudiar por separado.

Se empezará este capítulo realizando un estudio sobre las distintas percepciones que en doctrina se tiene sobre el conocimiento de la falsedad de la imputación –como elemento subjetivo distinto del dolo o como elemento intensificador del dolo típico– para posteriormente, hacer una toma de postura al respecto.

Asimismo, se reflexionará también sobre el conocimiento posterior de la falsedad de la imputación y sobre la prueba del conocimiento de la falsedad, y, finalmente, se analizará la naturaleza del temerario desprecio hacia la verdad.

II.- EL CONOCIMIENTO DE LA FALSEDAD

Se debe empezar este apartado partiendo de la premisa de que el delito de acusación y denuncia falsas es un delito eminentemente doloso, pues de haberse admitido la posibilidad de una conducta imprudente, ésta debería de haberse consignado expresamente en el tipo penal –ello acorde con el art. 12 del CP–, algo que no ha ocurrido con el delito estudiado.

El dolo exige que el sujeto activo tenga conocimiento de todos los elementos objetivos del tipo penal; en el caso del delito estudiado, éste se encontraría referido al conocimiento de: i) la falsedad de la imputación, ii) la condición de infracción penal de

³⁷⁴ ROPERO CARRASCO, *Abusar de la Justicia. Dimensión del actual delito de acusación y denuncias falsas*, p. 73.

lo imputado, y, iii) la condición de funcionario judicial o administrativo –que por razón de su cargo tenga el deber de proceder a la averiguación de lo imputado– de la persona ante la que se realiza la imputación³⁷⁵.

Ahora bien, del empleo de la expresión “con conocimiento de su falsedad” en la redacción del tipo penal se puede desprender la referencia a un dolo directo, tal como ocurría con el CP de 1944³⁷⁶ al consignar expresamente el adverbio “falsamente”³⁷⁷.

Sin embargo, el hecho de que se identifique la expresión “con conocimiento de su falsedad” con la exigencia de un dolo directo, no debe llevar al error de entender que sólo serán punibles las conductas que hayan sido realizadas con dicha clase de dolo, puesto que, el mismo tipo penal incluye a su vez la frase “temerario desprecio hacia la verdad”, la cual, como se expondrá en la parte final de este capítulo, hace referencia a un dolo eventual³⁷⁸. Por tanto, el delito de acusación y denuncia falsas es un delito doloso que puede ser realizado tanto con dolo directo como con dolo eventual.

A continuación, se estudiarán las distintas tesis que existen en cuanto a la concepción del “conocimiento de la falsedad”, ya sea como elemento subjetivo distinto del dolo y como elemento integrante del dolo típico, para posteriormente, realizar una toma de postura al respecto.

³⁷⁵ RODRÍGUEZ LÓPEZ/SOBRINO MARTÍNEZ, *Delitos contra la Administración de Justicia*, pp. 191. Por ejemplo, el conocimiento de la condición de funcionario –que por razón de su cargo tiene el deber de proceder a la averiguación de los hechos imputados– del sujeto ante el que se realiza la imputación tiene una relevancia importante, pues si el sujeto desconociese dicha condición, su accionar no podría enmarcarse dentro del delito estudiado, ello claro está, sin perjuicio de que dicha conducta pueda subsumirse dentro de un delito de calumnia. RODRÍGUEZ LÓPEZ/SOBRINO MARTÍNEZ, *Delitos contra la Administración de Justicia*, pp. 191-192. Los funcionarios judiciales o administrativos que tienen el deber de proceder a la averiguación de hechos imputados que, de ser ciertos, podrían constituir una infracción penal pueden ser: i) las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ii) Policías de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales, y, iii) los Jueces de Instrucción y los representantes de Ministerio Fiscal. GOYENA HUERTA, en *Los Delitos contra la Administración de Justicia*, p. 172.

³⁷⁶ RINCÓN HERRANZ, *Delito de acusación y denuncia falsas en el Código Penal español*, p. 199. Así también: OTERO GONZÁLEZ, en *Derecho Penal Español. Parte Especial II*, p. 841 y SANZ-DÍEZ DE ULZURRUN LLUCH, *Dolo e imprudencia en el Código Penal Español*, p. 562.

³⁷⁷ RINCÓN HERRANZ, *Delito de acusación y denuncia falsas en el Código Penal español*, p. 196.

³⁷⁸ Cabe mencionar que aun cuando hoy en día es mayoritaria la postura que admite tanto el dolo directo como el dolo eventual para este delito, existe un sector doctrinario minoritario que, al identificar este delito como uno que requiere de un elemento subjetivo típico específico, entiende que sólo podrá ser realizada la conducta típica mediante dolo directo. Al respecto, véase: MARES ROGER/MARTÍNEZ LLUESMA, en *Delitos contra la Administración Pública, contra la Administración de Justicia y contra la Constitución*, p. 191.

1. Como elemento subjetivo distinto del dolo

En la mayoría de los delitos dolosos, usualmente sólo se requiere en el aspecto subjetivo del tipo penal al dolo, es decir, a la conciencia y voluntad de realizar los elementos objetivos del tipo³⁷⁹. Sin embargo, existen también algunos delitos en los que junto al dolo concurren otras exigencias especiales de índole subjetiva, las cuales pueden consistir en móviles o tendencias³⁸⁰.

La prueba de la existencia de aquellos es complicada, ya que conlleva a que el juzgador –las más de las veces– recurra a valoraciones subjetivas de difícil objetivización³⁸¹.

Así pues, en doctrina se discute si la expresión “con conocimiento de su falsedad” a la que hace referencia el delito de acusación y denuncia falsas implica o no la concurrencia de un elemento subjetivo distinto del dolo vinculado a la malicia, mala fe, ánimo falsario o intención de abusar de un derecho –el derecho a la denuncia como manifestación del derecho a la tutela judicial efectiva–³⁸².

Al respecto cabe mencionar que, la postura que sostiene la necesidad de la concurrencia de un elemento subjetivo distinto del dolo es actualmente defendida por la doctrina minoritaria³⁸³.

³⁷⁹ MUÑOZ CONDE/GARCÍA ARÁN, *Derecho Penal. Parte General*, p. 296. En algunas ocasiones, el CP hace uso de expresiones coloquiales que hacen referencia a que la conducta debe ser dolosa, por ejemplo, mediante las palabras “intencionadamente” o “a sabiendas”, haciendo recaer con ellas el acento en aspectos volitivos o intelectivos, sin que ello signifique que se renuncie a ninguno de los dos. MUÑOZ CONDE/GARCÍA ARÁN, *Derecho Penal. Parte General*, p. 283.

³⁸⁰ VERA VEGA, *Revista de Psicología de la Universidad Viña del Mar*, vol. I, núm. 1, 2011, p. 113.

³⁸¹ ROPERO CARRASCO, *Abusar de la Justicia. Dimensión del actual delito de acusación y denuncias falsas*, p. 54.

³⁸² ROPERO CARRASCO, *Abusar de la Justicia. Dimensión del actual delito de acusación y denuncias falsas*, pp. 53-54.

³⁸³ Entre los principales representantes de esta postura se tiene a: SOTO RODRÍGUEZ, *Diario La Ley*, núm. 7977, de fecha 3 de diciembre de 2012; JUDEL PRIETO/PIÑOL RODRÍGUEZ/SUÁREZ-MIRA RODRÍGUEZ, “Acusación y Denuncias Falsas”, en *Manual de Derecho Penal. Parte Especial*, t. II, p. 568; RODRÍGUEZ LÓPEZ/SOBRINO MARTÍNEZ, *Delitos contra la Administración de Justicia*, p. 190, entre otros.

Quienes la sostienen, entienden que la referencia al conocimiento de la falsedad implica que el sujeto debe obrar con una especial intención para tener por consumada la conducta delictiva estudiada.

De este modo, sostienen que el tipo penal requiere de un elemento subjetivo del injusto adicional al dolo, identificando este delito como uno estrictamente intencional en el que el conocimiento de la falsedad de la imputación se configura como un específico elemento subjetivo típico que además de exigir el conocimiento de que el hecho denunciado es falso, requiere a su vez: i) la concurrencia de un *animus difamandi y perjudicandi*³⁸⁴, ii) una intención de obrar de mala fe³⁸⁵; o, iii) una intención del sujeto de faltar a la verdad³⁸⁶.

En cuanto a la jurisprudencia, hasta hace un par de décadas —en especial, en los últimos años donde rigió la redacción del CP de 1944—³⁸⁷. se hacía mención a que este tipo de conductas delictivas requerían que el sujeto activo hubiese actuado con un ánimo determinado, un ejemplo de esta situación se puede observar en el tercer fundamento de derecho de la STS nº 6174/1993, de fecha 23 de septiembre de 1993, en el que se sostenía que:

“[l]a jurisprudencia de la Sala ha exigido, en este sentido, como elemento subjetivo del tipo, la intención de faltar a la verdad, lo cual, como siempre que se hace referencia al ánimo en el derecho penal o en cualquier otro sector del Ordenamiento jurídico sancionador, habrá de ser inferido de las

³⁸⁴ Fernández-Espinar, recordando la concepción tradicional de este delito como un estrictamente intencional, destaca que para la doctrina mayoritaria española —a finales de los años 90— el tipo penal estudiado exigía la concurrencia de dolo directo, identificando a la falsedad como un específico elemento subjetivo típico que implicaba la necesidad de acreditar la existencia de un *animus difamandi y perjudicandi*. FERNÁNDEZ-ESPINAR, *Revista Actualidad Penal*, núm. 28, 1997, p. 636. La exigencia de la concurrencia del *animus difamandi* o *animus perjudicandi* partía de la idea de que el delito de acusación y denuncia falsas al tener también como bien jurídico protegido al honor del falsamente acusado seguía la lógica de los delitos contra el honor, es decir, requería de la concurrencia de los *animus* como elementos subjetivos específicos del tipo penal.

³⁸⁵ SOTO RODRÍGUEZ, *Diario La Ley*, núm. 7977, de fecha 3 de diciembre de 2012.

³⁸⁶ JUDEL PRIETO/PIÑOL RODRÍGUEZ/SUÁREZ-MIRA RODRÍGUEZ, “Acusación y Denuncias Falsas”, en *Manual de Derecho Penal. Parte Especial*, t. II, p. 568, RODRÍGUEZ LÓPEZ/SOBRINO MARTÍNEZ, *Delitos contra la Administración de Justicia*, p. 190.

³⁸⁷ A la luz de la redacción del CP de 1944, Muerza Esparza destacaba que en aquella época, el Tribunal Supremo exigía como elemento subjetivo necesario al ánimo de perjudicar, el cual podía encontrarse referido a uno que conlleva perjuicios económicos, aunque señala que de por sí, la propia imputación falsa irroga al acusado perjuicios procesales y morales, perturba el recto orden de la Administración de Justicia y es intento de obtener una resolución injusta y dañosa. MUERZA ESPARZA, *La Ley. Revista Jurídica Española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía*, núm. 4, 1986, p. 1043.

circunstancias concurrentes. Otra solución conduciría a hacer prácticamente inefectivo el derecho a la denuncia como una manifestación muy decisiva del derecho a la tutela judicial efectiva, teniendo en cuenta que, en general, en abstracto, el denunciante, cuando hace la correspondiente declaración, casi nunca tiene la certeza de que el hecho que denuncia y, sobre todo, que la participación en él de una determinada persona son ciertas; casi siempre se estará en presencia de probabilidades y no de certezas. Por consiguiente, excluida la forma culposa, este delito sólo puede atribuirse a título de dolo, únicamente cuando se pruebe o se infiera razonable y razonadamente que el sujeto llevó a cabo su acusación o denuncia con malicia, es decir, con conocimiento de la falsedad o con manifiesto desprecio hacia la verdad”³⁸⁸.

Así pues, en sentencias como la antes mencionada se destaca la exigencia de la concurrencia de un elemento distinto del dolo identificado con el ánimo deliberado de perjudicar al denunciado³⁸⁹.

Sin embargo, cabe señalar que la jurisprudencia moderna va dejando de lado las referencias a la necesidad de concurrencia de un determinado *animus* para la realización de la conducta delictiva estudiada.

³⁸⁸ A pesar de lo antes señalado, recientemente han existido pronunciamientos de distintos órganos jurisdiccionales que se han pronunciado suscribiendo esta postura. Así se tiene al tercer fundamento de derecho de la SAP de Murcia nº 383/2016, de fecha 12 de julio de 2016, en donde se expresó que: “Incidiendo y abundando en el elemento subjetivo de esta infracción penal la SAP de Murcia de 6-9-2000 afirma que ‘El delito de acusación o denuncia falsa tipificado en el art. 456 del CP exige para su confirmación el elemento subjetivo de la intención delictiva, esto es que la acusación o denuncia se haya hecho con mala fe por parte del sujeto activo y con manifiesto desprecio hacia la verdad, de tal forma que cuando la denuncia se verifica de buena fe, con conciencia de la verdad de la imputación falta la intención delictiva’. Y más adelante, recogiendo una sentencia del tribunal Supremo, señala que ‘El propio Tribunal Supremo, en Sentencia de fecha 19 de septiembre de 1990 estableció que el elemento subjetivo del delito de acusación y denuncia falsa, debe ser objeto de cuidadosa investigación y examen y de rigurosa exigencia, porque una laxitud de criterio sobre este punto podría afectar al derecho-obligación de denuncia que es un aspecto importante de la libertad de expresión’. Al respecto, y en relación al elemento subjetivo del tipo, la Sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de 29 de enero de 2008 (Pte”. Varela Castro) señala que el Tribunal Constitucional en su Sentencia 340/2006 de 11 de diciembre recuerda que el contenido de la garantía significa que: ‘...ha de quedar asimismo suficientemente probado el elemento subjetivo del delito cuya comisión se le imputa, si bien es cierto que la prueba de este último resulta más compleja y de ahí que en múltiples casos haya que acudir a la prueba indiciaria pero, en cualquier caso, la prueba de cargo ha de venir referida al sustrato fáctico de todos los elementos tanto objetivos como subjetivos del tipo delictivo, pues la presunción de inocencia no consiente en ningún caso que alguno de los elementos constitutivos del delito se presuma en contra del acusado (...). En relación específicamente con los elementos subjetivos, debe tenerse presente además que sólo pueden considerarse acreditados adecuadamente si el enlace entre los hechos probados de modo directo y la intención perseguida por el acusado con la acción se infiere de un conjunto de datos objetivos que revelan el elemento subjetivo a través de una argumentación lógica, razonable y especificada motivadamente en la resolución judicial...’”.

³⁸⁹ MORALES ANDRADE, *El delito de acusación o denuncia calumniosa*, p. 50.

2. Como elemento integrante del dolo típico

Esta postura es sostenida por la doctrina mayoritaria, quienes interpretan que el conocimiento de la falsedad forma parte del dolo³⁹⁰, y que, por ende, no se constituye como un elemento autónomo distinto de éste³⁹¹.

Esta postura se fundamenta básicamente en la idea de que el dolo *per se* implica el conocimiento de cada uno de los elementos del tipo objetivo, en ese sentido, la referencia al conocimiento de la falsedad no debe interpretarse como la referencia a un elemento subjetivo específico distinto del dolo, sino más bien, como una enfatización de la necesidad de que el sujeto sea consciente de la falsedad objetiva de los hechos imputados³⁹².

Y es que, para este sector doctrinario, quien realiza una imputación falsa tiene conocimiento de una determinada sucesión fáctica y conscientemente la

³⁹⁰ El dolo es definido comúnmente como la conciencia y voluntad de la realización de todos los elementos objetivos del tipo penal. En el caso del delito estudiado, la falsedad de la imputación se constituye como un elemento normativo del tipo penal, por tanto, bajo esta perspectiva, el conocimiento de dicha falsedad y el querer realizar el tipo penal a pesar de ello, sería una situación intrínseca a la naturaleza propia del dolo. Así pues, autores como Ordeig Orero entienden que, los elementos que el dolo debe abarcar en el delito de acusación y denuncias falsas, son los siguientes: i) que la imputación se lleve a cabo con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad, ii) que se lleve a cabo ante funcionario judicial o administrativo que por razón de su cargo deba proceder a su averiguación, y iii) que sea constitutiva de una infracción penal. ORDEIG ORERO, *El delito de acusación y denuncia falsas*, p. 192. En ese sentido se ha pronunciado también Conde-Pumpido Ferreiro quien sostiene que en el delito de acusación y denuncia falsas, “[e]l contenido subjetivo es el dolo, que en principio, debe abarcar la falsedad de lo imputado”. CONDE-PUMPIDO FERREIRO, *Contestaciones de Derecho Penal al Programa de Judicatura. Parte Especial*, p. 478.

³⁹¹ Sobre el particular, Ferrer Sama ha señalado que la referencia al dolo se puede realizar mediante diferentes expresiones tales como: “a sabiendas”, “maliciosamente”, “con conocimiento de...”, entre otras. Así pues, bajo la concepción de este autor, podría entenderse que, la expresión “con conocimiento de la falsedad” es una referencia al dolo y no un elemento subjetivo distinto de éste. FERRER SAMA, en *Homenaje a D. Nicolás Pérez Serrano*, t. II, p. 356.

³⁹² En este sentido se ha pronunciado Solís Espinoza, quien, siguiendo a Mir Puig sostiene que, en cuanto a los denominados delitos de expresión –entre los que se incluye al delito de acusación y denuncia falsas–, el conocimiento de la falsedad de la declaración integra el conocimiento necesario propio dolo –esto acorde al esquema finalista–, y que por tanto, no se trata de un elemento subjetivo distinto al dolo. SOLÍS ESPINOZA, *Revista de Derecho UNED*, núm. 4, 2009, p. 365. Por su parte, Moretón Toquero entiende que la referencia al término “conocimiento de su falsedad” abarca el conocimiento de la imputación, de su falsedad, y de la significación antijurídica del acto. MORETÓN TOQUERO, *Biblioteca Online Bosch*, pp. 9-10. Así también se ha pronunciado Sanz-Díez de Ulzurrun Lluch al sostener que: “[e]n relación con el «conocimiento de la falsedad», esta línea interpretativa considera que no plantea graves problemas de interpretación y equivale a la conciencia real de la falsedad de la imputación, lo que podría identificarse, a juicio de estos autores, con el dolo directo”. SANZ-DÍEZ DE ULZURRUN LLUCH, *Dolo e imprudencia en el Código Penal Español*, p. 562.

tergiversa en su declaración, proyectándose de esta manera, el dolo (conocimiento y voluntad) sobre la falsedad de los hechos (elemento objetivo del tipo penal), convirtiéndose este conocimiento de la falsedad en un elemento configurador del actuar doloso, es decir, como parte indispensable para afirmar un actuar doloso y no como un elemento autónomo en el tipo subjetivo³⁹³.

Bajo ese criterio, el delito de acusación y denuncia falsas –al igual que en el caso de la calumnia, por la similitud de la redacción entre ambos tipos penales– se consumaría sin la necesidad de que el autor persiguiese finalidades adicionales, es decir, no se requiere de la concurrencia de especiales elementos subjetivos del injusto, siendo perfectamente compatible la realización de esta conducta delictiva con cualquier móvil del sujeto³⁹⁴.

Así también lo ha sostenido PÉREZ RÚA, quien partiendo de un análisis sobre la redacción actual del tipo penal entiende que éste no hace mención expresa de la exigencia de elementos subjetivos del injusto distintos o añadidos al dolo genérico de realización de los elementos objetivos típicos, ni que tampoco se puede deducir aquélla, ya que en función de un análisis de la antijuricidad material del hecho “la capacidad para lesionar tanto la Administración de Justicia como los bienes personales del individuo depende de la falsedad de la imputación y del crédito que merezca la propia imputación, dependiente esto de las circunstancias en las que se realiza la imputación y de las circunstancias de quien la recibe así como de la credibilidad de su autor, pero siendo

³⁹³ GARCÍA SOLÉ, *El delito de acusación y denuncia falsas*, p. 200. Cabe destacar que, el mencionado autor entiende que la intención de faltar a la verdad forma parte del elemento volitivo que junto al cognitivo –conocimiento de la falsedad de la infracción penal imputada, de la condición de autoridad de la persona ante la que se imputa la misma, y del inicio indebido de un proceso penal–, conforman los elementos que configuran el dolo del delito de acusación y denuncia falsas. GARCÍA SOLÉ, *El delito de acusación y denuncia falsas*, p. 212.

³⁹⁴ OTERO GONZÁLEZ, en *Derecho Penal Español. Parte Especial II*, p. 842. Así también: VIDAL MARÍN, *El derecho al honor y su protección desde la Constitución Española*, p. 289; CASTIÑEIRA PALOU, en *Lecciones de Derecho Penal. Parte Especial*, p. 151; SERRANO GÓMEZ/SERRANO MAÍLLO, *Derecho Penal. Parte Especial*, p. 309; y, MARES ROGER/MARTÍNEZ LLUESMA, en *Delitos contra la Administración Pública, contra la Administración de Justicia y contra la Constitución*, p. 191, entre otros. Por ejemplo, García Solé reforzando esta postura critica la exigencia de elementos subjetivos adicionales al dolo sosteniendo que la mala fe o el ánimo de perjuicio no pueden constituirse en elementos subjetivos del injusto de este delito, pues a lo sumo podrían ser contemplados como elementos a partir de los cuales el Juez deberá inferir la conducta dolosa de falsedad del denunciante. GARCÍA SOLÉ, *El delito de acusación y denuncia falsas*, p. 212.

indiferente la finalidad última que persiga el autor con su acción y que en definitiva haría depender la realización del tipo de elementos anímicos”³⁹⁵.

De esta forma, para la mencionada autora la tipicidad subjetiva del delito estudiado se encuentra integrada únicamente por el dolo, debiendo interpretarse la expresión “con conocimiento de su falsedad” como una referencia al dolo directo, es decir, como la consciencia por parte del sujeto activo de que el hecho denunciado es falso y constitutivo de una infracción penal, y a pesar de ello, voluntad de imputarlo a una persona determinada, siendo consciente de su inocencia, con la intención de poner en marcha un procedimiento penal para el castigo de las acciones imputadas falsamente³⁹⁶.

Otro argumento interesante a favor de esta postura parte del hecho de que la conducta al ser realizada alternativamente o con conocimiento de la falsedad de la imputación o con temerario desprecio hacia la verdad no exige la concurrencia de ánimos específicos, puesto que de hacerlo tendría que ser así para ambos escenarios, algo que no podría darse con relación al temerario desprecio hacia la verdad pues éste se refiere a una especie de actitud negligente –para un sector doctrinario, intermedia entre el dolo eventual y la imprudencia consciente– que se ubica en un estado que tradicionalmente se ha considerado incompatible con ánimos específicos³⁹⁷. Por tanto, no podría exigirse la presencia de un elemento subjetivo del tipo distinto del dolo (*animus*), ya que éste es incompatible con el temerario hacia la verdad.

Además, remitiéndose estrictamente a lo estipulado en el tipo penal, éste no hace referencia alguna a la exigencia de que el sujeto activo tenga que actuar con un determinado propósito o ánimo concreto.

La jurisprudencia actual –en su mayoría– exige únicamente que la conducta sea dolosa, sin importar si el sujeto activo actuó con un determinado ánimo o no.

³⁹⁵ PÉREZ RÚA, *La acusación y denuncia falsas*, p. 123.

³⁹⁶ PÉREZ RÚA, *La acusación y denuncia falsas*, p. 147.

³⁹⁷ ROPERO CARRASCO, *Abusar de la Justicia. Dimensión del actual delito de acusación y denuncias falsas*, pp. 56-59.

Así se tiene, por ejemplo, al sexto fundamento de derecho de la sentencia nº 152/2000 emitida por la SAP de Sevilla, de fecha 6 de marzo de 2000, en donde se sostuvo que:

“[e]l elemento subjetivo del delito de calumnia, que no exige ya el ‘*ánimus calumniandi o difamandi*’ como antes, puede darse bien a través del dolo directo (conocimiento de la falsedad) o dolo eventual (temerario desprecio hacia la verdad), y en este caso concurre en su doble modalidad”.

Si bien es cierto, la sentencia antes mencionada se refiere al delito de calumnia, debido a la gran similitud del aspecto subjetivo de este delito con el delito de acusación y denuncias falsas, se puede extrapolar el razonamiento empleado en aquella a esta última. De este modo, bajo la misma lógica empleada, tampoco se requeriría la concurrencia de un *animus* especial en el delito de acusación y denuncia falsas³⁹⁸

3. Toma de postura

Habiendo expuesto las dos posturas que se tienen en torno a la interpretación que debe darse al conocimiento de la falsedad de la imputación, se ha optado en este trabajo por suscribir la segunda postura, es decir, la que sostiene que éste forma parte del dolo típico de este delito.

En el capítulo anterior se estableció en la toma de postura que la falsedad de la imputación es un elemento objetivo del tipo, por tanto, el dolo debe abarcar su conocimiento pues éste exige el conocimiento de todos los elementos del tipo objetivo; en el caso del delito de acusación y denuncia falsas, con especial relevancia, el conocimiento de la falsedad de la imputación³⁹⁹.

El que en la redacción del tipo penal se haya consignado una referencia al “conocimiento de la falsedad” de la imputación no debe interpretarse como una exigencia de un elemento subjetivo distinto del dolo, sino más bien como una

³⁹⁸ En ese sentido, sobre la calumnia véase: MESTRE DELGADO, “Delitos contra el Honor”, en *Derecho Penal. Parte Especial*, p. 224.

³⁹⁹ MUÑOZ CONDE, *Derecho Penal. Parte Especial*, p. 812.

“particular” técnica de redacción que empleó el legislador para resaltar que el hecho imputado debe ser falso –recordando con ello que la esencia de este delito radica en la falsedad de la imputación– y que es necesario que el sujeto conozca de la falsedad del hecho imputado.

La falsedad objetiva de la imputación debe ir acompañada del conocimiento de ésta por parte del sujeto activo del delito, y es que, sin la consciencia de ella, la acción sería atípica debido a la falta del dolo.

El conocimiento de la falsedad hace referencia a un dolo directo. Sin embargo, tal como se expondrá más adelante, este delito no sólo se realiza mediante este tipo de dolo, sino que también puede admitirse situaciones en las que el sujeto obre con dolo eventual –como en el caso del temerario desprecio hacia la verdad–.

A nivel probatorio, la probanza del conocimiento de la falsedad por parte del sujeto activo al momento de realizar la imputación objetivamente falsa se convierte probablemente en una de las más grandes dificultades con las que cuenta este delito para su efectiva punición.

Y es que, en muchas ocasiones, a pesar de haberse acreditado la falsedad objetiva de lo imputado, no se cuenta con material probatorio suficiente que permita conocer si efectivamente el sujeto tenía o no conocimiento de la falsedad de los hechos imputados al momento de realizar la imputación, conllevando todo ello, muchas veces, a una absolución por el delito de acusación y denuncia falsas.

Asimismo, otro problema vinculado al conocimiento de falsedad de la imputación es determinar el momento preciso en el que ésta debe aparecer. Al respecto, debe partirse de la premisa de que el delito de acusación y denuncia falsas se produce en el marco de un proceso penal, por ello, en ocasiones surgen dudas en torno a si el conocimiento de la falsedad de la imputación debe figurar necesariamente al momento de realizar la imputación –inicial– o si pueden darse supuestos en los que un conocimiento posterior de ella –durante

el desarrollo del proceso penal– tenga la relevancia penal necesaria, para que, con la comprobación de la concurrencia de los demás elementos del tipo penal, de lugar a que se tenga por consumada la conducta ilícita estudiada. Así pues, a continuación, se desarrollará un apartado en el cual se analizará las implicancias del conocimiento posterior de la falsedad en el delito de acusación y denuncia falsas.

III.- EL CONOCIMIENTO POSTERIOR DE LA FALSEDAD

Teóricamente, el conocimiento debe existir siempre en el momento en que se lleva a cabo la conducta típica, sin que, en principio, un conocimiento posterior de la falsedad posea relevancia de cara a afirmar la tipicidad del comportamiento⁴⁰⁰, esto es indiscutible cuando nos encontramos ante delitos instantáneos, pero ¿qué sucede con los delitos permanentes?

El delito de acusación y denuncia falsas es un delito cuya conducta típica consiste en imputar a una persona –con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad– hechos que, de ser ciertos, constituirían una infracción penal, ante un funcionario judicial o administrativo que tuviese el deber de proceder a su averiguación. Ahora bien, el alcance de dicha conducta es discutible, pues éste dependerá de si se entiende que se está ante un delito instantáneo o ante uno permanente.

Si se interpretase en el primer sentido, se entendería que la consumación se produciría con la atribución a un tercero de la supuesta comisión de una conducta delictiva, con conocimiento de la falsedad objetiva de lo imputado, todo ello ante un funcionario judicial o administrativo que tuviese el deber de proceder a su averiguación. Mientras que, si se entendiese que la imputación hace referencia a una actividad que se desarrolla a lo largo de un tiempo prolongado, se entendería que, la consumación del delito se produciría desde el primer momento en el que el sujeto activo pone en conocimiento del funcionario judicial o administrativo la supuesta comisión de una infracción penal

⁴⁰⁰ En palabras de Eugenio Zaffaroni: “La voluntad posterior a la realización del tipo objetivo (llamada *dolo subsecuente*) tampoco es dolo, porque no puede regir la realización de algo que ya se ha producido. Los llamados dolos antecedente y subsecuente son sólo disposiciones interiores irrelevantes”. ZAFFARONI/ALAGIA/SLOKAR, *Derecho Penal. Parte General*, p. 530.

realizada por un tercero –a pesar de conocer la falsedad objetiva de lo imputado– hasta que se emitiese una resolución que pusiese fin al proceso penal o hasta que el sujeto depusiese dicha imputación.

En este trabajo se ha optado por entender que la imputación no sólo abarca el momento inicial de la puesta en conocimiento a la autoridad competente de la supuesta comisión de una actividad ilícita, sino que también implica la permanencia de la misma durante el desarrollo del proceso, dado que, hasta que no se emita una resolución que ponga fin al proceso o hasta que el propio sujeto que ha realizado la imputación no deponga su actitud, se mantendrá aquélla⁴⁰¹.

Así las cosas, dependiendo de la interpretación que se le otorgue a la palabra “imputar”, se podría admitir o rechazar la posibilidad de punición de un conocimiento posterior de la falsedad.

De este modo, se tiene, por un lado, a un sector de la doctrina y jurisprudencia que entiende que es típica la conducta de quien inicia un proceso penal sin conocimiento de la falsedad, pero que mantiene la imputación después de conocer su falsedad⁴⁰². En ese

⁴⁰¹ Esta postura se condice también con una visión del inicio de la prescripción a partir del día en que se archivaron firmemente las diligencias que dieron lugar a la acusación o denuncia falsas o en que se dictó la sentencia absolutoria firme, dado que recién en ese momento cesó la situación antijurídica creada por aquéllas, y a partir de él, los perjudicados por el delito pueden reaccionar interponiendo la acción por el mismo. Sobre la prescripción en este tipo de delitos, véase: SANTANA VEGA, en *Derecho Penal. Parte Especial*, t. I, p. 785.

⁴⁰² En ese sentido se tiene el auto n° 36/2001 de la Audiencia Provincial de Zamora, de fecha 12 de marzo de 2001, el cual estableció en su cuarto fundamento de derecho que: “Excluida la forma culposa, este delito sólo puede atribuirse a título de dolo, únicamente cuando se prueba o se infiera razonable o razonadamente que el sujeto llegó a cabo la acusación o denuncia con malicia, es decir, con conocimiento de la falsedad o con manifiesto desprecio hacia a verdad, lo que no acontece en el supuesto de autos. Pues cuando se presentó por la querellada escrito de querella en el Juzgado, denunciando al actual querellante, atribuyendo al querellado la comisión de un delito de falsedad en documento público, al haber celebrado contratos laborales sin la previa adopción de acuerdo del ayuntamiento que autorizase al alcalde la celebración de contratos laborales, la querellante no tenía conocimiento de la falsedad ni podía actuar con manifiesto desprecio de la verdad, pues examinado el Libro de Actas del Ayuntamiento no existía ninguna acta que contuviera acuerdo alguno que autorizara al alcalde a celebrar contratos laborales. Solo varios años después de presentar la querella y admitirla, tres años aproximadamente, cuando ya se han practicado números diligencias de prueba, se ha transformado las diligencias previas en procedimiento abreviado, la acusación particular ha solicitado la apertura del juicio oral, calificando los hechos, se había abierto el juicio oral contra el acusado, es cuando se descubre en una carpeta, una vez realizado una búsqueda minuciosa en los archivos del Ayuntamiento, un borrador del acta fechada el día 30 de diciembre de 1.987, que contenía un acuerdo que autorizaba al alcalde a celebrar contratos laborales. Es decir, en el momento de la consumación del delito, cual es la puesta en conocimiento al Juzgado de Instrucción de los hechos presuntamente delictivos, la querellada en este proceso no tenía conocimiento de que el

sentido, si el sujeto conoce posteriormente la falsedad objetiva de lo imputado y pone en conocimiento de la autoridad dicha circunstancia, no cometería el delito de acusación y denuncia falsas⁴⁰³.

Y, por el otro, a un sector doctrinario que sostiene que el conocimiento de la falsedad debe ser inicial, quedando excluida de esta figura delictiva la posibilidad de casos en los que se admita la punición por el conocimiento posterior de ésta. De esta manera, si la acusación fuese hecha inicialmente con buena fe y posteriormente el sujeto descubriese la falsedad objetiva de lo imputado, y a pesar de ello, decidiese mantener la imputación, no se cometería el delito de acusación y denuncia falsas, ello claro está, sin perjuicio de que se pueda sancionar penalmente dicha conducta como falso testimonio, en el caso de que el sujeto acusador en el juicio oral brinde su declaración faltando a la verdad⁴⁰⁴.

Si se asume la postura de que nos encontramos ante un delito cuya acción se desarrolla en un periodo prolongado de tiempo, podría asumirse que el conocimiento posterior de la falsedad y persistencia de la imputación a pesar de aquél es perfectamente subsumible dentro del delito de acusación y denuncia falsas, ya que, si bien es cierto, el conocimiento no se produce desde el inicio de la imputación, se obtiene durante la

objeto de su denuncia fuera falso o hubiera existido un manifiesto desprecio hacia la verdad, pues el Libro de Actas no recogía el acuerdo de autorización y solo mucho tiempo después se llegó a descubrir la existencia del acuerdo que, por otro lado, la fecha de adopción no coincidía con la fecha aducida por el querellado. En efecto, como argumenta el recurrente, hubo cierta dejadez por parte de la querellante, al haber dejado transcurrir excesivo tiempo desde que tiene conocimiento de la existencia del acuerdo hasta el momento en que abandonó la querella, habiendo dejado que la Sala señalase fecha y hora para celebración del juicio oral, su suspensión, y devolución al Juzgado para práctica de nuevas diligencias, pero esa desidia en dejar que el proceso penal continuase hacia delante no puede tener tal relevancia como para considerar que hubo dolo de perjudicar al querellado, pues dentro de dicho margen de tiempo hubo contactos con la Defensa técnica para ver la manera de terminar el proceso abierto”. Así, en este caso, se destaca que el conocimiento posterior de la falsedad de la imputación carece de relevancia penal, pues en el caso en concreto, el sujeto realizó mediante su Defensa técnica algunas acciones con la finalidad de terminar el proceso abierto, en ese sentido, se puede inferir que, para la Audiencia Provincial de Zamora, si el sujeto hubiese continuado con la imputación a pesar de haber tomado conocimiento posteriormente de la falsedad de lo imputado, realizaría una conducta penalmente relevante. Es pertinente destacar la postura de Goyena Huerta, quien entiende que una conducta atípica por la ausencia inicial de dolo, puede terminar siendo punible cuando el sujeto que realizó la acusación o denuncia toma conocimiento de la falsedad de los hechos imputados, y, a pesar de ello, no acude a los funcionarios judiciales o administrativos para rectificar su denuncia inicial, ya que se trataría de una conducta sancionable por omisión punible de conformidad con lo establecido en el art. 11 CP. GOYENA HUERTA, en *Los Delitos contra la Administración de Justicia*, p. 179.

⁴⁰³ VÁZQUEZ IRUZUBIETA, *Comentarios al Código Penal (Actualizado por las Leyes Orgánicas: 1/2015, 30 de marzo y 2/2015, 30 de marzo)*, p. 928.

⁴⁰⁴ FERRER SAMA, en *Homenaje a D. Nicolás Pérez Serrano*, t. II, p. 361.

permanencia de ésta, lo cual hace que el conocimiento posterior de la falsedad aunado con la verificación de la concurrencia de los demás elementos del tipo penal sea penalmente relevante, y por tanto, sancionable. Así, en el caso de que el sujeto tuviese conocimiento posterior de la falsedad de lo imputado y pusiese en conocimiento de la autoridad competente dicha situación, su conducta no podría enmarcarse en la del delito estudiado.

Ahora bien, es pertinente destacar que, el conocimiento posterior de la falsedad objetiva de lo imputado aunado a hechos como, por ejemplo, la declaración falsa realizada por el mismo sujeto que ha acusado o denunciado –con el fin de mantener su imputación falsa–, no da lugar a un concurso real o ideal de delitos, sino más bien, a un acto copenado⁴⁰⁵, conllevando ello a que el desvalor de la acusación y denuncia falsas consuma al desvalor del falso testimonio.

Teniendo en cuenta los aspectos antes señalados, y a fin de finalizar el estudio doctrinario sobre el conocimiento de la falsedad, es necesario realizar a continuación algunos comentarios en torno a su prueba.

IV.- PRUEBA DEL CONOCIMIENTO DE LA FALSEDAD

Al igual que sucede con el delito de calumnia, existe una gran dificultad para poder acreditar que la acusación o denuncia objetivamente falsa se realizó con conocimiento de su falsedad⁴⁰⁶.

La prueba del conocimiento de la falsedad versará sobre la acreditación del conocimiento del sujeto de la invalidez de la imputación que realizó, debiendo

⁴⁰⁵ Siguiendo a Palma Herrera, consideramos que debemos tener en cuenta que, el término “acto copenado” quedaría reservado para aquellos supuestos en los que un determinado hecho es castigado penalmente, no de manera autónoma y en base al precepto en el que el mismo era *a priori* subsumible, sino a través de la pena aplicable a otro hecho que resulta típico conforme a un precepto distinto. Debiendo observarse que, tiene que tratarse de un caso en el que la pena correspondiente a un hecho, el principal, contemple además del castigo correspondiente a ese hecho, el que correspondería también al hecho previo o posterior. En ningún caso podría entenderse que es acto copenado, aquél cuya pena se impone conjuntamente con la del hecho principal, mediante su acumulación, o asperación, ya que, en el primer caso, nos encontraríamos en realidad, ante un supuesto de concurso real de delitos, mientras que, en el segundo, ante un concurso ideal. PALMA HERRERA, *Los Actos Copenados*, p. 17.

⁴⁰⁶ COBOS GÓMEZ DE LINARES, en *Derecho Penal. Parte Especial*, t. II, pp. 55.

demostrarse que el sujeto ha actuado a pesar de haber contado, cuando menos, con indicios razonables de la falsedad de lo dicho⁴⁰⁷.

Así, la prueba por indicios se constituye en una herramienta vital a fin de perseguir este tipo de conductas delictivas, lo cual permite contrarrestar la gran posibilidad de impunidad que se produce con este tipo de delitos, debido a la dificultad probatoria que existe.

Como se sabe, la acreditación del conocimiento de la falsedad –al pertenecer al fuero interno del sujeto– se circunscribirá a la búsqueda de actos o elementos de carácter externo que pongan de manifiesto, de manera clara e inequívoca, que el sujeto tenía conocimiento de la falsedad objetiva de la imputación⁴⁰⁸.

De hallarse dichos elementos, se estarían encontrando indicios inculpatorios que, de ser suficientes, en conjunto podrían permitir tener por acreditada una situación, en este caso, el conocimiento de la falsedad.

Por ello, la prueba por indicios es de vital importancia en la acreditación de este aspecto, máxime si se tiene en cuenta que, en la mayoría de casos, el falso acusador o denunciador actúa valiéndose de artimañas con el fin de eliminar los rastros que muestren que su imputación fue espuria.

Por ejemplo, se evaluarán aspectos como la posibilidad de concurrencia de móviles espurios por parte del denunciante o acusador al realizar la imputación. Estos móviles pueden ser de cualquier tipo: patrimoniales, profesionales, celos, venganza, etc.

⁴⁰⁷ SANZ-DÍEZ DE ULZURRUN LLUCH, *Dolo e imprudencia en el Código Penal Español*, p. 677. Sobre la injuria, pero extrapolable al delito de acusación y denuncia falsas debido a la inclusión de la expresión “con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad” en la redacción del art. 208 CP, se ha manifestado que la probanza del conocimiento por parte del sujeto de que lo imputado es falso es algo de muy difícil probanza, lo cual conlleva a que en muchas ocasiones se entienda que no existió tal conocimiento, absolviendo consecuentemente al imputado por falta de dolo. MACIÁ GÓMEZ, *El delito de injuria*, p. 64.

⁴⁰⁸ PÉREZ RÚA, *La acusación y denuncia falsas*, p. 198. Sobre la imposibilidad de acreditar el conocimiento de la falsedad de la imputación mediante prueba directa y, consecuentemente, su necesidad de acreditación únicamente mediante prueba indiciaria véase: DE MIRANDA VÁZQUEZ, en *Probática Penal I. La prueba en los delitos contra la Administración de Justicia*, p. 117.

Así, no son infrecuentes los casos en los que alguno de los progenitores denuncia al otro por maltrato físico –o, peor aún, por agresiones sexuales– en contra del hijo en común, con el fin de que ejercer la patria potestad en exclusiva.

A pesar de que se pueda contar con la prueba por indicios como una herramienta importante para la determinación del conocimiento de la falsedad, existe una gran dificultad probatoria de este aspecto, lo cual conlleva a que, en muchísimas ocasiones, por respeto a los principios generales y las garantías constitucionales, se tenga que absolver al acusado por el delito de acusación y denuncia falsas –como se observará del análisis de los datos estadísticos vertidos en el décimo capítulo⁴⁰⁹.

Cabe señalar que, aun cuando la prueba por indicios es la prueba reina empleada para la acreditación de este aspecto, existe también otro medio probatorio mediante el cual se puede lograr alcanzar la acreditación de la concurrencia de este elemento, este es: la confesión autoinculpatoria⁴¹⁰.

Ésta ocurre cuando el sujeto que realiza falsamente una imputación de un delito a otro confiesa la falsedad de aquélla, y consecuentemente el conocimiento que tenía sobre ella. En la práctica estas situaciones no ocurren a menudo, cuando suceden, usualmente se realizan con el fin de recibir una sanción penal menor.

No debe confundirse la confesión autoinculpatoria en el proceso de acusación y denuncia falsas con la declaración posterior que el sujeto que realizó la imputación falsa haya podido realizar en el proceso primigenio con el fin de que la imputación que formuló sea desestimada.

En algunas ocasiones, especialmente en los procesos vinculados a la violencia de género, las mujeres suelen declarar posteriormente ante la autoridad competente que la denuncia que formularon contra sus parejas fueron falsas o exageradas con el fin de que se archiven las diligencias policiales o se sobresea la causa.

⁴⁰⁹ PÉREZ RÚA, *La acusación y denuncia falsas*, p. 198.

⁴¹⁰ Sobre la prueba del dolo, véase *in extenso*: RAGUÉS I VALLES, *REJ–Revista de Estudios de la Justicia*, núm. 4, 2004, p. 18.

No pretendiendo analizar el fenómeno de la violencia de género, debe destacarse que, aun cuando se archivase la causa a consecuencia de esa “confesión”, usualmente, ésta no permitirá dar inicio a un proceso por la posible comisión de un delito de acusación y denuncia falsas, básicamente por dos motivos: i) porque se sabe que usualmente este tipo de “confesiones” se producen no porque el hecho imputado no haya ocurrido, sino porque el agresor ha logrado convencer a la víctima de que deponga su imputación; y, ii) porque, salvo que haya sido palmaria la falsedad de la imputación y el Juez instructor haya ordenado el sobreseimiento de la causa y, además, la deducción del testimonio por la posible comisión del delito de acusación y denuncia falsa, no se iniciaría un proceso penal por este delito, ya que los “supuestos” ofendidos no denuncian.

V.- TEMERARIO DESPRECIO HACIA LA VERDAD⁴¹¹

Tal como se ha indicado, para que la conducta pueda ser reprimida como un delito de acusación y denuncia falsas se requiere que el sujeto haya actuado con conocimiento de la falsedad objetiva de la imputación que realizó o con temerario desprecio hacia la verdad.

En ese sentido, y habiendo culminado el estudio concerniente al conocimiento de la falsedad, corresponde realizar un estudio sobre el temerario desprecio hacia la verdad, incidiendo principalmente en la naturaleza de su contenido.

El término temerario desprecio hacia la verdad hace referencia al límite mínimo que el ciudadano no debe trasgredir para ejercitar el derecho y deber de denuncia de manera adecuada⁴¹².

⁴¹¹ El Anteproyecto y Proyecto del CP de 1992 empleaba la expresión “manifiesto desprecio hacia la verdad”, siendo que, a partir del Anteproyecto y Proyecto del CP de 1994 se sustituye dicha expresión por la de “temerario desprecio hacia la verdad”, la cual se mantiene en la actual redacción del CP. GARCÍA SOLÉ, *El delito de acusación y denuncia falsas*, p. 218. Es pertinente mencionar la diferencia que existe entre el temerario desprecio hacia la verdad y el manifiesto desprecio hacia ella, ésta radica en el hecho de que el primero de ellos no alberga una voluntad o ánimo malicioso que es propio del segundo. ROPERO CARRASCO, *Abusar de la Justicia. Dimensión del actual delito de acusación y denuncias falsas*, p. 57.

⁴¹² GARCÍA SOLÉ, *El delito de acusación y denuncia falsas*, p. 229.

Consiste en la actitud consciente de no dotar de importancia alguna al resultado de la veracidad o de la falsedad de la imputación⁴¹³, a pesar de que el sujeto tan sólo tiene sospechas sobre la posible comisión de una infracción penal⁴¹⁴.

Que una persona actúe sin temerario desprecio a la verdad conlleva a que el sujeto tenga que presentar la denuncia o acusación teniendo en cuenta la razonabilidad de la veracidad de lo que imputa⁴¹⁵, no siendo necesario que éste cumpla con realizar propiamente una averiguación sobre aquello⁴¹⁶.

Así pues, ante las dudas o sospechas que tiene el sujeto respecto de la posible comisión de un ilícito penal, debería de declarar el hecho con ajuste al conocimiento real que posee, exponiendo sus dudas, certezas y, sobre todo, dejando en claro cuáles son los aspectos que desconoce⁴¹⁷. De lo contrario, formular la imputación como absolutamente veraz, sin expresar sus incertezas e inseguridades, constituiría un proceder que se enmarca dentro de una conducta de temerario desprecio hacia la verdad⁴¹⁸.

Para evitar la comisión del delito de acusación y denuncia falsa no puede exigirse que el sujeto realice una labor de información y/o de investigación, ya que, si ello fuese una imposición, en algunas ocasiones, supondría que el sujeto pusiese en riesgo su seguridad y/o la de terceros. Por ello, lo único exigible a los sujetos que interponen denuncias o acusaciones ante las autoridades competentes es que trasmitan fielmente todo lo que sabe respecto a la supuesta comisión del ilícito penal, incluso sus dudas⁴¹⁹.

La inclusión de esta expresión en el CP de 1995 fue muy criticada, tan es así que, desde que se propuso su inserción en la redacción del tipo penal referido al delito de acusación

⁴¹³ MACIÁ GÓMEZ, *El delito de injuria*, p. 66.

⁴¹⁴ GARCÍA SOLÉ, *El delito de acusación y denuncia falsas*, p. 229.

⁴¹⁵ Es decir, el sujeto deberá realizar la denuncia o acusación teniendo un conocimiento racionalmente fundado sobre la veracidad de los hechos que va a imputar, ello en función de la información y sostén probatorio al que ha tenido acceso y que le ha permitido formar una convicción racional sobre su verdad. SANZ-DÍEZ DE ULZURRUN LLUCH, en *La respuesta del Derecho penal ante los nuevos retos*, pp. 405-406.

⁴¹⁶ SANZ-DÍEZ DE ULZURRUN LLUCH, *Dolo e imprudencia en el Código Penal Español*, p. 525.

⁴¹⁷ GARCÍA SOLÉ, *El delito de acusación y denuncia falsas*, p. 229.

⁴¹⁸ GARCÍA SOLÉ, *El delito de acusación y denuncia falsas*, p. 236.

⁴¹⁹ GARCÍA SOLÉ, *El delito de acusación y denuncia falsas*, pp. 230-231.

y denuncia falsas en el Proyecto de LO del CP (nº 121/000063) se discutió si debía retirársela de aquella⁴²⁰.

Por ejemplo, en la sesión del debate del Proyecto de LO del CP realizada por la Comisión Justicia e Interior presidida por Don Javier Luis Sáenz Cosculluela, de fecha 7 de junio de 1995, Don Pillado Monte sostuvo que: “... es muy difícil tipificar dentro de este capítulo el temerario desprecio hacia la verdad. Parece que esto suena a falsedad por imprudencia temeraria –ahí se emplea el término temerario–, pero de mantenerse en el texto, la rúbrica tendría que decir de la acusación y denuncias falsas o temerarias y de la simulación de delitos. No creo que haya, en mi opinión, que modificar la rúbrica. Lo que se tiene que hacer es excluir la expresión ‘o temerario desprecio a la verdad’, dejando sólo la alusión a la falsedad dolosa”⁴²¹.

De este modo se observa que, el término antes mencionado ha generado controversia principalmente vinculada a la naturaleza de dicha expresión, es decir, si ésta podía asimilarse como un supuesto de imprudencia temeraria o si, por el contrario, podía ser compatible con un supuesto de conducta dolosa.

Siendo ello así, se expondrán los argumentos formulados por los suscriptores de dichas posturas, y posteriormente se realizará una toma de postura al respecto.

⁴²⁰ Cabe recordar que el origen de la inclusión de esta frase en el Código Penal español, tuvo como influencia a la sentencia *New York Times Co. Vs. Sullivan* –a la que se hizo referencia en el capítulo anterior–, más precisamente, lo expresado en torno al *reckless disregard for the truth*, es decir, al temerario desprecio por la verdad. En dicha sentencia se estableció que para entender que alguien ha actuado con *reckless disregard for the truth* requiere un análisis no en función de la conducta razonable de un hombre medio al respecto, sino más bien, de la evidencia que permita concluir que sujeto que realizó la imputación tenía serias dudas respecto a la verdad de lo manifestado. Así, para la verificación de la concurrencia del *reckless disregard for the truth* se evaluará el alto grado de conocimiento que tenía el sujeto sobre la probabilidad de falsedad de la información dada, por tanto, aun en el caso de que se estableciese que el hombre medio no hubiese tenido dudas sobre la probabilidad de falsedad de la información, esto no se evaluaría, ya que lo verdaderamente importante es determinar si el sujeto en particular tuvo o no consciencia de la alta probabilidad de la falsedad, siendo relevante para ello, la verificación de obvias razones que lo hiciesen dudar sobre la veracidad o exactitud de la información.

⁴²¹ CORTES GENERALES, *Ley Orgánica del Código Penal. Trabajos Parlamentarios*, vol. I, p. 1012. Así también lo considera un sector de la doctrina que entiende que el término “temerario desprecio hacia la verdad” genera confusión y que incluso podría decirse que sobra en el artículo puesto que toda imputación falsa es de por sí una temeridad, representando ello un desprecio hacia lo verdadero. VÁZQUEZ IRUZUBIETA, *Comentarios al Código Penal (Actualizado por las Leyes Orgánicas: 1/2015, 30 de marzo y 2/2015, 30 de marzo)*, p. 503. Sobre los principales aspectos vinculados al debate parlamentario del proyecto de CP de 1995, acerca de la expresión “temerario desprecio hacia la verdad”, puede verse *in extenso*: GARCÍA SOLÉ, *El delito de acusación y denuncia falsas*, pp. 218-222.

1. Como manifestación de un supuesto de imprudencia

La doctrina minoritaria sostiene que el delito de acusación y denuncia falsas con la inclusión de la expresión “temerario desprecio hacia la verdad” deja de ser un delito sustancialmente doloso, abriendo la posibilidad de que la conducta pueda ser sancionada cuando se obre con imprudencia, es decir, cuando la imputación llevada a cabo por el sujeto se haya realizado “con imperdonable ligereza”⁴²².

Para los defensores de esta postura, no puede dejarse de lado el hecho de que el empleo del término “temerario” es un *nomen iuris* que tradicionalmente es utilizado para designar la imprudencia grave⁴²³. Así pues, entienden que todo denunciante tiene el deber de cerciorarse, cuando menos, mínimamente de la realidad de los hechos de los que acusa, de este modo, si los hechos fueren falsos y se observase que el sujeto actuó infringiendo su deber de diligencia en la comprobación de los hechos o en la formulación de la denuncia —en opinión de los adherentes de esta postura, este deber se encontraba consagrado en la STC nº 6/1988— la conducta sería sancionada por imprudente al haberse obrado con temerario desprecio hacia la verdad⁴²⁴.

Se entiende de esta manera que el delito de acusación y denuncia falsas puede ser doloso o gravemente imprudente, equiparando con ello ambas conductas a efectos punitivos⁴²⁵.

2. Como expresión de un supuesto de dolo eventual

Esta postura es defendida por la doctrina mayoritaria⁴²⁶. Quienes la defienden entienden que la expresión comentada evoca el requerimiento de un dolo

⁴²² SOTO RODRÍGUEZ, *Diario La Ley*, núm. 7977, de fecha 3 de diciembre de 2012.

⁴²³ GOYENA HUERTA, en *Los Delitos contra la Administración de Justicia*, p. 178.

⁴²⁴ GOYENA HUERTA, en *Los Delitos contra la Administración de Justicia*, p. 178.

⁴²⁵ MESTRE DELGADO, “Delitos contra la Administración de Justicia”, en *Derecho Penal. Parte Especial*, p. 684.

⁴²⁶ En ese sentido: FERRER SAMA, en *Homenaje a D. Nicolás Pérez Serrano*, t. II, p. 361; RINCÓN HERRANZ, *Delito de acusación y denuncia falsas en el Código Penal español*, p. 201; CALDERÓN

eventual, excluyendo con ello del tipo penal, la posibilidad de una imputación imprudente⁴²⁷. Es decir, que con dicha expresión se hace referencia al conocimiento eventual que el sujeto puede obtener respecto de la falsedad del hecho que imputa⁴²⁸.

En ese sentido, la indiferencia consciente del autor respecto de la veracidad o falsedad de los hechos imputados es lo que determina que la conducta sea dolosa (dolo eventual).

En la práctica, existen dos escenarios según el resultado de veracidad o falsedad de los hechos imputados. En el primero, si se determinase que los hechos son verdaderos, no existiría sanción penal alguna –a pesar de la conducta temeraria–, ya que, por un lado, sería una conducta atípica al no existir la falsedad objetiva de la imputación –elemento esencial para la configuración de este delito–, y por el otro, no habría consecuentemente, una afectación de los bienes jurídicos protegidos en este delito –el correcto funcionamiento de la Administración de Justicia y el honor del sujeto denunciado o acusado–⁴²⁹.

En el segundo, si los hechos imputados fuesen falsos, se habría configurado el tipo penal, se lesionarían los bienes jurídicos protegidos en este delito y, por tanto, se tendría que sancionar penalmente la conducta realizada por el sujeto⁴³⁰.

El argumento principal a favor de esta postura se fundamenta en el hecho de que, si el legislador hubiese querido castigar una conducta imprudente en el art. 456 CP, expresamente lo hubiese consignado de esa forma, ello de

CEREZO/CHOCLÁN MONTALVO, *Derecho Penal*, t. II, p. 555; MARTÍNEZ ATIENZA, *Comentarios al Código Penal. Estudio sistematizado*, p. 683; MUÑOZ CONDE, *Derecho Penal. Parte Especial*, p. 267; VIVES ANTÓN, “Lección XVI: Delitos contra el Honor”, en *Derecho Penal. Parte Especial*, p. 341; COBOS GÓMEZ DE LINARES, *Derecho Penal. Parte Especial*, t. II, p. 55; BLANCO LOZANO, *Tratado de Derecho Penal Español*, t. II, vol. II, p. 562, entre otros.

⁴²⁷ MUÑOZ CONDE, *Derecho Penal. Parte Especial*, p. 812.

⁴²⁸ VIVES ANTÓN, “Lección XVI: Delitos contra el Honor”, en *Derecho Penal. Parte Especial*, p. 296.

⁴²⁹ GARCÍA SOLÉ, *El delito de acusación y denuncia falsas*, p. 246.

⁴³⁰ MORÓN LERMA, en *Tratado de Derecho Penal Español. Parte Especial III*, pp. 949-950.

conformidad con lo previsto en el art. 12 CP al establecer que “[l]as acciones u omisiones imprudentes sólo se castigarán cuando expresamente lo disponga la Ley”⁴³¹.

Por otro lado, equiparar en punición al conocimiento de la falsedad con el temerario desprecio hacia la verdad, si se entendiese que este último hace referencia a una conducta imprudente, sería contrario al principio de culpabilidad y al de proporcionalidad de la pena⁴³².

3. Toma de postura

Es ampliamente conocida la intensa discusión doctrinal existente en torno a la delimitación del dolo eventual y la imprudencia grave o temeraria. Se han postulado diversas teorías para intentar identificar la frontera entre ambos elementos.

Así, por un lado, tradicionalmente se tiene a la teoría del consentimiento, la cual se fundamente en la exigencia de que el autor se represente la posibilidad del resultado y consienta o apruebe –en su fuero interno– su producción; y por el otro, a la teoría de la probabilidad, la cual establece que para la existencia del dolo se requiere que el autor se haya representado el resultado con un alto grado de probabilidad, mientras que, para la de la imprudencia sólo se requeriría cuando el autor sólo se haya representado como posible la producción del resultado⁴³³.

Hoy en día, la postura que va logrando una mayor acogida es la propuesta por ROXIN, quien sostiene que:

“... se puede decir que hay que afirmar el dolo eventual cuando el sujeto cuenta seriamente con la posibilidad de la realización del tipo, pero a pesar de

⁴³¹ CONDE-PUMPIDO FERREIRO, *Contestaciones de Derecho Penal al Programa de Judicatura. Parte Especial*, p. 157.

⁴³² CONDE-PUMPIDO FERREIRO, *Contestaciones de Derecho Penal al Programa de Judicatura. Parte Especial*, p. 157.

⁴³³ QUINTANAR DÍEZ/ORTIZ NAVARRO, *Elementos del Derecho Penal. Parte General*, pp. 110-111.

ello sigue actuando para alcanzar el fin perseguido, y se resigna así –sea de buena o de mala gana– a la eventual realización de un delito, se conforma con ella. En cambio, actúa con imprudencia consciente quien advierte la posibilidad de producción del resultado, pero no se la toma en serio y en consecuencia tampoco se resigna a ella en caso necesario, sino que negligentemente confía en la no realización del tipo”⁴³⁴.

Dado que, la discusión en torno a la delimitación entre ambos elementos del tipo subjetivo se mantiene aún vigente, y podría por sí sola ser objeto de un estudio independiente, se ha tenido a bien culminar la exposición en este trabajo de dicha cuestión, suscribiendo la postura propuesta por ROXIN, sirviendo ésta como base para la exposición de la tesis que se asumirá sobre la naturaleza del temerario desprecio hacia la verdad.

En este trabajo se ha optado por identificar al temerario desprecio hacia la verdad como una referencia a la admisión de un dolo eventual, y no a la inclusión de la posibilidad de punición de una conducta imprudente.

Y es que, al contrario del CP de 1944, el CP de 1995 requiere en su art. 12 que las conductas imprudentes sean consignadas expresamente como tales. En ese sentido, observando la redacción del art. 456 CP se puede desprender que ésta no hace referencia expresa a la admisión de una conducta imprudente, con lo que, en virtud de la taxatividad exigida por el propio CP puede concluirse que el tipo penal estudiado no admite la comisión imprudente.

A pesar de que quienes sustentan la posibilidad de admisión de la imprudencia, parten de la idea de que usualmente el término temeridad –con el anterior CP– se empleaba para hacer referencia a una conducta imprudente, debe rechazarse este razonamiento para la actual redacción del delito de acusación y denuncia falsas, ya que el CP vigente es bastante claro al exigir que expresamente la conducta imprudente sea consignada como tal.

Por otro lado, en cuanto a la prueba del temerario desprecio hacia la verdad, ésta versará sobre la acreditación de que el sujeto actuó con conciencia de la falta de fundamento

⁴³⁴ ROXIN, *Derecho Penal. Parte General*, t. I, p. 427.

racional de la imputación que realizó y del consiguiente riesgo de falsedad en el que podía incurrir⁴³⁵.

Así pues, para sancionar la conducta delictiva estudiada realizada con un temerario desprecio hacia la verdad, tendría que acreditarse que el sujeto en función de la información con la que contaba no actuó de manera razonable con respecto a la valoración de la veracidad de los hechos que él imputó a un tercero.

De esta forma, se intenta superar algunas críticas que se realizan en contra de la admisión del temerario desprecio hacia la verdad, pues con ella se garantiza en cierta medida el respeto por el derecho a la tutela judicial efectiva —en lo referido al acceso a la jurisdicción—, evitando que los sujetos puedan inhibirse de realizar denuncias —por miedo a que posteriormente se determine que el contenido de su imputación es falso y consecuentemente se les sancione penalmente por ello— cuando crean que los hechos que relatan son verdaderos.

En la práctica judicial, existe un pequeño número de sentencias condenatorias por el delito de acusación y denuncia falsas que han tenido como fundamento del elemento subjetivo del tipo al temerario desprecio hacia la verdad. Un ejemplo de ellas se encuentra en la SAP de Valencia nº 310/2006, de fecha 28 de abril de 2006, la cual, en el cuarto y quinto fundamento de derecho ha expresado que:

“C.- El deber de objetividad y veracidad, que se aprecia maliciosamente infringido, se sustenta en la específica condición de quienes están sometidos, como funcionarios y agentes del orden, a una legislación específica, la Ley de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, que les impone, junto a un código de conducta inexcusable, un sustrato normativo de obligado cumplimiento, garantía de la actuación policial, cuyo desconocimiento derivaría hacia peligrosas consecuencias de desprestigiada autoridad.

Quinto.- De todo ello se deriva que el agente encargado de la instrucción y el policía local que intervino en el accidente, y redactó de manera postdatada y ha seguido manteniendo con posterioridad su versión contraria a toda lógica, despreciaron la verdad de lo ocurrido con temeridad manifiesta, incorporando en su comportamiento el elemento intencional que el delito del artículo 456.1 del Código Penal exige”.

El proceso que dio origen a la sentencia antes mencionada giró en torno a la supuesta imputación falsa de la comisión de un delito contra la seguridad del tráfico.

⁴³⁵ SANZ-DÍEZ DE ULZURRUN LLUCH, *Dolo e imprudencia en el Código Penal Español*, p. 678.

La acreditación del temerario desprecio hacia la verdad con el que actuaron los agentes policiales condenados por el delito estudiado se basó en el hecho de que se consignó en el atestado el aparente estado de ebriedad en el que se encontraba el conductor intervenido, a pesar de que ellos mismos no previnieron la realización de pruebas de detección alcohólica para que se pudiese establecer si el conductor se encontraba en estado de ebriedad al momento de la ocurrencia de dichos hechos.

Ello, sumado al hecho de que, entre otras cosas, el médico que realizó las exploraciones correspondientes –debido a una herida inciso contusa sobre el párpado superior derecho del conductor, producto del accidente de tránsito– advirtió que el sujeto no exponía síntoma alguno de ingesta alcohólica, muestra el temerario desprecio con el que actuaron los agentes, pues al no prever la realización de la prueba correspondiente para la detección de alcohol en el organismo del conductor y al tener versiones de otros sujetos que indican que el conductor no exteriorizaba síntomas de estar en estado de ebriedad, puede desprenderse que aquellos tenían conocimiento de la gran probabilidad de que lo que estaban sosteniendo no se ajustaba a la verdad y a pesar de ello realizaron la imputación.

§ 6. ASPECTOS PROCESALES

I.- INTRODUCCIÓN

Para que se pueda proceder a iniciar un proceso por el delito de acusación y denuncia falsas es necesario previamente cumplir con algunas condiciones de procedibilidad que el art. 456 CP establece.

Estos requisitos tienen vinculación con factores –estudiados en los capítulos precedentes– como el reconocimiento de la pluriofensividad de este delito, la necesidad de que el proceso inicial por el delito falsamente imputado haya llegado a su fin mediante una resolución firme, entre otros.

Así, a continuación, se realizará un estudio sobre los requisitos que exige el 456 CP para que se pueda proceder por el delito de acusación y denuncia falsas.

II.- CONDICIONES DE PROCEDIBILIDAD⁴³⁶

En el delito de acusación y denuncia falsas se han estipulado dos condiciones de procedibilidad que se requiere para que se pueda perseguir este delito, la primera de ellas exige la existencia previa de una sentencia firme o auto firme de sobreseimiento o archivo respecto al proceso iniciado en contra del falso denunciado o acusado⁴³⁷, es decir, que se haya resuelto firmemente la causa inicial originada por la denuncia o acusación objetivamente falsa⁴³⁸.

La segunda, hace referencia a que el Juez o Tribunal que conoció de dicha causa judicial mandará a proceder de oficio contra el denunciante o acusador, siempre que de la causa principal resultasen indicios bastantes de falsedad de la imputación, sin perjuicio de que el hecho pueda perseguirse también previa denuncia del ofendido⁴³⁹.

⁴³⁶ En el octavo capítulo de este trabajo puede consultarse un estudio empírico realizado en torno al cumplimiento de los requisitos de procedibilidad exigidos por el art. 456.2 CP.

⁴³⁷ SOTO RODRÍGUEZ, *Diario La Ley*, núm. 7977, de fecha 3 de diciembre de 2012.

⁴³⁸ CONDE-PUMPIDO FERREIRO, *Contestaciones de Derecho Penal al Programa de Judicatura. Parte Especial*, p. 479.

⁴³⁹ GARCÍA SOLÉ, *El delito de acusación y denuncia falsas*, p. 260.

La exigencia de estos requisitos no afecta a la existencia y consumación del delito, pero sí a su persecución procesal⁴⁴⁰.

Una vez cumplidas dichas condiciones de procedibilidad, el hecho será perseguible y punible, rigiendo de esta forma todas las características de un delito normal⁴⁴¹.

A continuación, se estudiarán cada uno de esos requisitos de procedibilidad.

1. Con relación al proceso anterior

A pesar de que, como se ha indicado, la exigencia previa de una sentencia firme o auto firme de sobreseimiento o archivo respecto al proceso iniciado en contra del falso denunciado o acusado es considerada para un sector mayoritario de la doctrina como un requisito de procedibilidad⁴⁴², mientras que para otro, ésta constituye más bien, una condición objetiva de punibilidad⁴⁴³.

La condición objetiva de punibilidad tiene como fin fijar una frontera a partir de la cual nacerá una responsabilidad penal. Usualmente, es establecida en delitos de índole patrimonial o socioeconómica, en donde se fijan cuantías económicas que servirán para identificar cuándo procederá un reproche penal y cuándo la conducta realizada deberá enmarcarse dentro de otra rama del derecho –comúnmente la del Derecho administrativo–⁴⁴⁴.

⁴⁴⁰ MUÑOZ CONDE, *Derecho Penal. Parte Especial*, pp. 812-813.

⁴⁴¹ LUZÓN PEÑA, *Lecciones de Derecho Penal. Parte General*, p. 564.

⁴⁴² DÍAZ PITA, *El delito de acusación y denuncia falsas: Problemas fundamentales*, p. 122. Cabe destacar que un sector doctrinario emplea el término condición de perseguibilidad en vez de condición de procedibilidad, en este trabajo se ha optado por asimilar los términos antes mencionados, a pesar de que, como ha destacado Ordeig Orero, ambos no son propiamente sinónimos entre sí, a pesar de producir el mismo efecto. El incumplimiento del primero de ellos impide que se pueda perseguir el delito en el sentido de que se imposibilita la apertura de la investigación, mientras que, el del segundo, impide que se pueda abrir el proceso en sí mismo. ORDEIG ORERO, *El delito de acusación y denuncia falsas*, p. 135.

⁴⁴³ Sobre la defensa de esta postura véase: MAGALDI PATERNOSTRO, *Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales*, fasc. 1, 1987, pp. 67-68 y MORÓN LERMA, en *Tratado de Derecho Penal Español. Parte Especial III*, p. 951.

⁴⁴⁴ MORÓN LERMA, en *Tratado de Derecho Penal Español. Parte Especial III*, p. 951.

Por ejemplo, García Solé –defensor de esta postura– entiende que aquella “[e]s una condición objetiva de punibilidad que se deduce *ex-ante* a constatar en juicio la presencia del injusto típico de acusación y denuncia falsas, sin embargo la infracción de la norma ya se ha producido, ...”⁴⁴⁵.

De esta forma, sus defensores entienden que como condición objetiva de punibilidad afecta la existencia material del delito y, por otro lado, expresa el especial grado de menoscabo o deterioro de los bienes jurídicos protegidos en el tipo penal.

Sin embargo, de un análisis del contenido expreso del art. 456.2 CP –éste hace expresa mención a que “no podrá procederse...”–, puede inferirse que la norma lo que verdaderamente contiene es un requisito de procedibilidad, pues el cumplimiento o no de dicha exigencia en nada afecta la configuración del delito, estipulando solamente el cumplimiento de un requisito para que se pueda proceder a admitir la persecución penal por el delito de acusación y denuncia falsas⁴⁴⁶.

Uno de los fines principales que se persigue mediante la imposición de este tipo de condiciones es evitar el nacimiento de un proceso de acusación y denuncia falsas que nazca a la par del proceso por el delito inicialmente imputado, previniendo con ello la posibilidad del dictado de resoluciones contradictorias entre sí.

1.1. Sentencia absolutoria firme

La norma penal exige que para que pueda procederse contra el denunciante o acusador exista previamente una “sentencia firme” o auto también firme, de sobreseimiento o archivo del Juez o Tribunal que ha conocido de la infracción imputada.

⁴⁴⁵ GARCÍA SOLÉ, *El delito de acusación y denuncia falsas*, p. 260.

⁴⁴⁶ FARALDO CABANA, en *El nuevo Derecho penal español. Estudios penales en memoria del Profesor José Manuel Valle Muñoz*, pp. 1304-1305.

Así, a pesar que el art. 456.2 CP no expresa que esa sentencia debe ser absolutoria, el carácter de ésta se sobreentiende, ya que, como se reitera, la esencia delictiva de esta conducta se enfoca en la falsedad.

En ese sentido, si la sentencia previa firme fuese condenatoria, no habría lugar al nacimiento de un proceso penal por acusación y denuncia falsas, ya que la emisión de una sentencia condenatoria se sustenta siempre en la certeza absoluta de que el sujeto condenado fue el que efectivamente realizó los hechos imputados⁴⁴⁷, teniendo su soporte en una verdad objetiva de los hechos imputados, lo cual es incompatible con la esencia delictiva del delito de acusación y denuncia falsas, pues ella se fundamenta en la falsedad objetiva de la imputación⁴⁴⁸.

Teniendo en claro que la sentencia firme debe ser siempre una absolutoria, cabe precisar que, el hecho de que se emita una sentencia absolutoria por un delito que un sujeto imputó a otro no implica *per se* que se le vaya a condenar a aquél por un delito de acusación y denuncia

⁴⁴⁷ Sobre la certeza, suscribiendo la postura de Cafferata Nores, se entiende que por ella se hace referencia a la firme convicción de estar en posesión de la verdad. La certeza puede percibirse desde una doble vertiente, una positiva que implica la firme creencia de que algo existe y una negativa que implica la firme creencia de que algo no existe. CAFFERATA NORES, *La prueba en el proceso penal*, p. 8. El que una sentencia condenatoria siempre tenga que basarse en la certeza de que la persona imputada es la que realizó el hecho delictivo no excluye la posibilidad de que una sentencia absolutoria se base en la certeza absoluta de que la persona imputada no pudo ser la que realizó el ilícito penal; la diferencia entre ambas situaciones radica en que siempre será necesario contar con una certeza para la emisión de una sentencia condenatoria, mientras que, para la emisión de una sentencia absolutoria bastará con la duda sobre la posibilidad de que el sujeto haya cometido los hechos ilícitos imputados.

⁴⁴⁸ Sin perjuicio de lo antes expuesto, existe un sector doctrinario que entiende que el requisito de procedibilidad podría cumplirse incluso cuando se obtuviese una sentencia condenatoria firme, siempre y cuando de ella se desprenda la falsedad al menos de una parte de los hechos denunciados. ORDEIG ORERO, *El delito de acusación y denuncia falsas*, p. 139. La opinión que se sostiene en este trabajo es de rechazo absoluto sobre la posibilidad de que una sentencia condenatoria firme pueda dar lugar a la apertura de un proceso penal por el delito de acusación y denuncia falsas, ya que si se percibiera una falsedad en la imputación de una parte de los hechos denunciados, se tendría o bien que absolver respecto del delito imputado falsamente –en el caso que se impute una pluralidad de hechos ilícitos–, es decir en ese extremo la sentencia tendría una connotación absolutoria y no condenatoria; o bien, si la falsedad de la imputación no radicó en los elementos esenciales de aquella, no existiría delito, pues la falsedad no tendría la relevancia suficiente como para afectar a los bienes jurídicos protegidos en el delito estudiado –véase el cuarto capítulo de este trabajo referida a la falsedad parcial–. Por tanto, una sentencia condenatoria firme no podría dar lugar a que se tenga por cumplido el requisito de procedibilidad exigido por el art. 456.2 CP.

falsas⁴⁴⁹, ya que ello dependerá de factores como el evaluar si hubo o no realmente cierto sustrato fáctico al hacer la denuncia, correspondiendo realizar en el proceso posterior el análisis sobre la acreditación o no de la falsedad objetiva de la acusación formulada y el conocimiento o no que de aquella tuvo el sujeto.

Las sentencias absolutorias se pueden dar en dos supuestos: i) cuando el delito imputado es inexistente o es imposible que el imputado lo haya podido cometer, o, ii) cuando exista falta de pruebas o dudas razonables sobre la veracidad de los hechos o la participación del sujeto en los hechos delictivos⁴⁵⁰.

El primer caso da lugar a una absolución por insuficiencia probatoria, mientras que la segunda da lugar a una absolución por *in dubio pro reo*.

De acreditarse en el primer supuesto el conocimiento de la falsedad objetiva de la imputación por parte del sujeto que realizó la acusación o denuncia, sería más sencillo poder iniciar un proceso por acusación y denuncia falsas.

En el segundo supuesto se complica el escenario, ya que habría que acreditar tanto la falsedad de la imputación como el conocimiento por parte del sujeto de ésta, algo que muchas veces también conllevará a

⁴⁴⁹ SANTANA VEGA, en *Comentarios al Código Penal LO 5/2010*, p. 988. Al respecto, el 30 de marzo de 2006, la Audiencia Provincial de Valladolid, en un proceso donde previamente se habían emitido sentencias absolutorias –por la comisión de un supuesto delito falsamente imputado–, sostuvo en la sentencia nº 130/2006 que: “[e]xaminado el contenido de la presente causa, y contrastado este contenido con la investigación realizada, tanto en el proceso abierto a raíz de tal denuncia, como luego en el juicio oral, no se observa a juicio de esta Sala, datos o elementos suficientes para la condena de la acusada, y por ende, para la revocación de la sentencia impugnada. No debemos olvidar que las respectivas denuncias interpuestas por la ahora acusada, a pesar de terminar en sendas sentencias absolutorias, no eran inventadas, no eran rotundamente falsas, sino que tenían cierto sustrato fáctico real, a pesar de la diferente calificación que se diera a los hechos; ...”. Así pues, se confirmó la absolución por el delito de acusación y denuncia falsas debido a que la imputación inicialmente realizada poseía cierto sustrato fáctico verídico, ello a pesar de que los procesos realizados por dichas imputaciones culminasen con sentencias absolutorias.

⁴⁵⁰ GÓMEZ COLOMER, “Lección Décimo octava: La terminación del proceso penal”, en *Derecho Jurisdiccional III. Proceso Penal*, p. 429.

una dificultad probatoria que culminará con una sentencia absolutoria o un auto de sobreseimiento o archivo.

1.2. Auto de sobreseimiento libre o provisional firme

Otra resolución judicial que puede permitir dar inicio a un proceso por el delito estudiado es aquella que se refiera al sobreseimiento libre del proceso inicial iniciado en contra del acusado o denunciado falsamente.

El art. 637 LECrim ha establecido que se producirá tal cuando: i) no haya existido indicios racionales de haberse perpetrado el hecho que hubiere dado motivo a la formación de la causa (falta de elemento fáctico), existiendo de esta forma una certeza absoluta de la inexistencia del hecho⁴⁵¹; ii) el hecho no sea constitutivo de delito (falta de elemento jurídico)⁴⁵²; o, iii) aparezcan exentos de responsabilidad criminal los procesados como autores, cómplices o encubridores (falta de elemento personal)⁴⁵³.

Así, con el efecto del sobreseimiento libre se denegará la apertura del juicio oral por los motivos antes expuestos –ya que de antemano se sabe

⁴⁵¹ ASENCIO MELLADO, *Derecho Procesal Penal*, p. 253.

⁴⁵² Al respecto cabe precisar que, dependiendo del momento en el que se obtenga la certeza absoluta de la atipicidad de la conducta imputada podría emitirse diferentes tipos de resoluciones judiciales, así, si desde el inicio se percibe que los hechos imputados mediante denuncia o querrela no son delictivos, se deberá inadmitir la misma –ello acorde al art. 269 y 313.1 LECrim, respectivamente–; si por el contrario, la certeza de la atipicidad se produce culminada la etapa del sumario se emitirá un auto de sobreseimiento libre; y, si la certeza se alcanzase en el momento de dicta la sentencia, se emitirá una sentencia absolutoria. GÓMEZ COLOMER, “Lección Décimo tercera: El juicio oral (I)”, en *Derecho Jurisdiccional III. Proceso Penal*, pp. 321-322.

⁴⁵³ El primer supuesto se produce debido a que, a pesar de que los hechos acusados tienen apariencia de delito, no se tiene racionalmente ningún indicio de que el supuesto hecho ilícito se ha producido realmente, con lo que, no tendrá sentido la apertura de juicio oral para enjuiciar al acusado. El segundo supuesto se produce debido a que si los hechos imputados no son constitutivos de delitos es imposible justificar el enjuiciamiento penal de cualquier persona por esos hechos, dado que los juicios penales no se desarrollan en vano. Finalmente, el tercer supuesto se produce cuando a pesar de que los hechos imputados existan y parezcan ser constitutivos de delito, los acusados no sean responsables penalmente de los hechos investigados de conformidad con lo establecido en los arts. 19 y 20 CP o porque exista la certeza absoluta de que estos no pudieron realizar el hecho ilícito. CORTÉS DOMÍNGUEZ, “Lección 22: La fase intermedia”, en *Derecho Procesal Penal*, p. 375.

que no será posible la condena del acusado—⁴⁵⁴, poniéndose con ello fin al proceso penal.

Con el auto firme de sobreseimiento libre, por cualquiera de las razones antes mencionadas, se podrá dar inicio al proceso de acusación y denuncia falsas contra el sujeto que realizó la imputación que dio lugar al proceso que culminó con dicho sobreseimiento.

Dependiendo el motivo por el cual se emitió el auto de sobreseimiento puede analizarse una serie de escenarios con relación a la posibilidad de apertura exitosa de un proceso por acusación y denuncia falsas.

Si el auto de sobreseimiento libre se hubiese emitido por falta de elemento fáctico, podría perfectamente dar cabida a un proceso de acusación y denuncia falsa, claro está, siempre y cuando la persona que realizó la acusación haya tenido conocimiento de la falsedad objetiva de lo imputado.

Si en cambio, el auto de sobreseimiento libre se hubiese emitido por falta de elemento jurídico, la situación se complica un poco más, dado que si la base fáctica de la imputación es verdadera objetivamente y el error radica en la calificación de tales realizada por el sujeto que formuló la imputación, en principio, no debería prosperar la denuncia por delito de acusación y denuncia falsas, dado que los hechos denunciados inicialmente fueron verdaderos fácticamente. Ahora bien, si existiese una base fáctica verdadera, pero se deformase ciertos aspectos de ella con el fin de hacer parecer como delictivos los hechos descritos, podría iniciarse un proceso penal por el delito estudiado que probablemente podría conllevar a una sentencia condenatoria del sujeto que realizó aquella imputación.

⁴⁵⁴ CORTÉS DOMÍNGUEZ, “Lección 22: La fase intermedia”, en *Derecho Procesal Penal*, p. 375.

En el caso de que el sobreseimiento libre se hubiese producido por falta de elemento personal, podría iniciarse un proceso por el delito estudiado, pero difícilmente éste prosperaría, ya que el sustrato fáctico sería verdadero objetivamente, lo cual claro está, excluye de por sí el elemento falsedad objetiva que requiere el delito de acusación y denuncia falsas para poder sancionarse.

En cuanto al sobreseimiento provisional, es pertinente recordar previamente que, su naturaleza no es poner fin al proceso de manera definitiva, sino más bien, suspenderlo momentáneamente –teniendo como límite máximo temporal la fecha anterior a que prescriba el delito– hasta que se obtenga mediante actos de investigación complementarios algún tipo de información que permita dar lugar al inicio del juicio oral o emitir un sobreseimiento firme⁴⁵⁵.

Desde la regulación del CP de 1944 se discutió si éste podía cumplir con el requisito exigido por la norma penal, o si por el contrario, el único sobreseimiento a admitir era el libre.

Ante la discusión planteada, el Tribunal Constitucional mediante la STC nº 34/1983, de fecha 6 de mayo de 1983, tomó postura al respecto señalando en su tercer fundamento jurídico que:

“...el Código Penal –art. 325– establece como requisito de procedibilidad contra el denunciador o acusador la Sentencia firme o Auto de sobreseimiento también firme, lo que suscita el problema de interpretar si tal Auto firme puede ser el de sobreseimiento provisional.

Para resolver tal problema hemos de interpretar el mencionado precepto de conformidad con la C.E. En materia de derechos fundamentales, como reiteradamente ha señalado este TC, la legalidad ordinaria ha de ser interpretada de la forma más favorable para la efectividad de tales derechos, lo que conduce en este caso a la conclusión de que el Auto firme de sobreseimiento corresponde tanto al de carácter definitivo como al provisional, pues firmes

⁴⁵⁵ GÓMEZ COLOMER, “Lección Décimo tercera: El juicio oral (I)”, en *Derecho Jurisdiccional III. Proceso Penal*, p. 320. Así también: CONDE-PUMPIDO FERREIRO, *Contestaciones de Derecho Penal al Programa de Judicatura. Parte Especial*, p. 479.

formalmente son los Autos de sobreseimiento, cuando ya no procede contra ellos recurso alguno, como sucede en el presente caso en que se ha pronunciado la Audiencia al respecto. De no darse esta interpretación resultaría que el Auto de sobreseimiento provisional vendría a impedir el ejercicio del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva que reconoce el art. 24.1 de la C.E., por lo que sería incompatible con la misma, al impedir al recurrente el ejercicio del mencionado derecho fundamental frente a acusaciones que califica de falsas, calificación sobre la que en definitiva deben pronunciarse los Tribunales”⁴⁵⁶.

De esta forma, con la sentencia antes mencionada se declaró que el sobreseimiento provisional tiene también el carácter de firme –ya que contra ella no puede proceder recurso alguno–, y que, por tanto, podía permitir perfectamente el inicio de un proceso por acusación y denuncia falsas⁴⁵⁷.

Hoy en día se admite casi unánimemente que el sobreseimiento exigido como requisito de procedibilidad en el delito estudiado puede ser libre o provisional, siempre que estos tengan la condición de ser firmes⁴⁵⁸.

Ahora bien, en la práctica resulta a veces dificultoso que se emita una sentencia condenatoria cuando el precedente es un sobreseimiento provisional firme, ya que, estos al poder emitirse porque no ha resultado debidamente justificada la perpetración del delito que dio motivo a la formación de la causa –ello acorde al art. 641.1 LECrim– no excluyen definitivamente que los hechos imputados sean verdaderos, sino más bien, indican que estos no se encuentran suficientemente justificados.

Y es que, la naturaleza del sobreseimiento provisional radica en el estado de duda temporal –que podría despejarse en un futuro, de ahí el carácter de provisional– en el que se encuentra el juez, al haberse practicado las diligencias de averiguación pertinentes y no haber conseguido contar con los elementos necesarios para entrar a juicio –no

⁴⁵⁶ BOE núm. 120 –suplemento–, de fecha 20 de mayo de 1983, pp. 4-5.

⁴⁵⁷ ROPERO CARRASCO, *Abusar de la Justicia. Dimensión del actual delito de acusación y denuncias falsas*, p. 19. Así también: ORTS BERENGUER, en *Derecho Penal. Parte Especial*, p. 667.

⁴⁵⁸ MUÑOZ CONDE, *Derecho Penal. Parte Especial*, pp. 812-813.

porque no se haya averiguado, sino porque los resultados obtenidos no son suficientes para acreditar el hecho delictivo (art. 641.1 LECrim) o la participación de la persona imputada en su comisión (art. 641.2 LECrim)–, y en la no posibilidad de que la investigación de los hechos se hagan sin límite temporal –ya que de lo contrario, ello no sólo afectaría a los derechos de los acusados, sino también los intereses de la Justicia–⁴⁵⁹.

Por ello, la discusión principal vinculada a este tipo de sobreseimientos, es si estos –al ser muestra de un estado de duda– pueden servir para fundamentar la falsedad objetiva de los hechos imputados.

Así, con relación al sobreseimiento provisional emitido en virtud del art. 641.1 LECrim y un proceso posterior de acusación y denuncia falsas a partir de él, se han emitido un sinnúmero de sentencias en las que se destaca que la prueba sobre la veracidad o falsedad de los hechos se practicará en el proceso por el delito de acusación y denuncia falsas, es decir que, aun cuando haya existido un sobreseimiento provisional firme que no haya descartado por completo la veracidad de los hechos imputados, puede darse el caso que en el proceso de acusación y denuncia falsas se logre establecer –al menos, indiciariamente– la veracidad o inveracidad de lo imputado, concluyendo el proceso con una absolución o condena, según el caso⁴⁶⁰.

⁴⁵⁹ Esta provisionalidad del sobreseimiento se da debido a que con actos de investigación posteriores podrían obtenerse datos nuevos que permitan completar lo actuado, pudiendo seguirse un proceso que se sobreseyó provisionalmente, claro está, siempre y cuando el delito investigado no hubiese prescrito. Así, en este tipo de escenarios, no se puede ni formular acusación que haga que se dé inicio a un juicio oral ni dar por terminado definitivamente el proceso, ya que se está a la expectativa de que una investigación posterior complementaria pueda aportar nuevos datos que hagan posible la apertura del juicio o, permita poner fin definitivamente al proceso mediante un sobreseimiento libre. CORTÉS DOMÍNGUEZ, “Lección 22: La fase intermedia”, en *Derecho Procesal Penal*, pp. 380-381. Puede interpretarse de esta forma que mediante el sobreseimiento libre se pone fin al proceso, mientras que, con el sobreseimiento provisional se paraliza temporalmente el proceso. GÓMEZ COLOMER, “Lección Décimo tercera: El juicio oral (I)”, en *Derecho Jurisdiccional III. Proceso Penal*, p. 320.

⁴⁶⁰ En ese sentido, la Audiencia Provincial de Tarragona en la sentencia emitida el 9 de noviembre de 2006 –recaída sobre el recurso nº 1398/2003– expresó en el tercer fundamento de derecho que: “El procedimiento que dio lugar a las presentes actuaciones por acusación y denuncia falsa, finalizó mediante auto de sobreseimiento provisional, por no aparecer debidamente justificada la perpetración del delito que ha dado motivo a la formación de la causa, existiendo dudas razonables de los hechos que constan en autos. De ello deriva el recurrente que la resolución de finalización descrita no

Sin embargo, existen algunas críticas a esta postura que entienden que existe una imposibilidad de que el sobreseimiento provisional pueda fundamentar una falsedad objetiva en el delito de acusación y denuncia falsas; dichas críticas encuentran su fundamento en el hecho de que, a pesar que el sobreseimiento provisional pueda tener la condición de firme, dicha resolución judicial no permitiría cumplir la condición de procedibilidad que exige el CP, ya que no es definitiva respecto del proceso, pues al no acreditar con certeza que los hechos imputados sean contrarios a la realidad, no permiten sustentar el requisito de falsedad objetiva que exige el tipo penal⁴⁶¹.

En este trabajo se defiende la idea de que es posible que el sobreseimiento provisional pueda cumplir con el requisito de procedibilidad exigido por el tipo penal, pero, se reconoce a su vez, la dificultad que conlleva sustentar un proceso por el delito de acusación y denuncia falsa a partir de este tipo de autos, y peor aún, una sentencia condenatoria, ya que como bien ha destacado el sector que critica la admisión del sobreseimiento provisional, éste no acredita con certeza la falsedad de los hechos.

Por otro lado, con relación a los autos de sobreseimiento provisional emitidos de conformidad al art. 641.2 LECrim, cabe señalar que, probablemente, procedería de manera exitosa el proceso por el delito de acusación y denuncia falsas, en caso de que se acreditase que el sujeto que realizó la imputación tenía conocimiento de que el sujeto al que

concluye que los hechos resultaren falsos, sino que no quedaron suficientemente justificados. Sin embargo, como argumenta la resolución de instancia, objeto de apelación, el tipo penal previsto en el art. 456 no exige otra cosa sino que la resolución (auto de sobreseimiento o sentencia) que ponga fin al procedimiento resulte firme. La prueba sobre la veracidad o inveracidad de los hechos, sin embargo, debe practicarse en el procedimiento penal en el que los mismos se enjuician el presente-, por lo que la concurrencia de dicho elemento típico no puede sino resultar de la valoración de la prueba desarrollada en el acto del juicio oral seguido por el delito de acusación y denuncia falsa. El art. 456 CP, acertadamente, no condiciona el tipo de sobreseimiento que puede alzar el requisito de procedibilidad previsto para el delito de acusación y denuncia falsa. Precisamente porque en ocasiones los elementos de aquél ilícito pueden concurrir, aun cuando en el procedimiento origen éstos no hayan sido objeto directo de averiguación, sino más bien el hecho denunciado, en nuestro caso, el calificable como agresión sexual.”

⁴⁶¹ VILLAMARÍN LÓPEZ, en *El sobreseimiento provisional en el proceso penal*, p. 331-333.

imputó como responsable de los hechos ilícitos no podía haber sido el autor del delito imputado.

Otro aspecto importante a tener en cuenta es que en el caso de que se imputasen una pluralidad de hechos relacionados entre sí que pudiesen ser constitutivos de diversas infracciones penales, se deber esperar a obtener un pronunciamiento total respecto a todos ellos, no bastando por ejemplo el sobreseimiento por uno de ellos para poder proceder por el delito de acusación y denuncia falsas⁴⁶².

1.3. Auto de archivo firme

Algunos autores entienden que el empleo del término “archivo” hace referencia al sobreseimiento provisional, y que se empleaba éste para diferenciarlo del “sobreseimiento libre”⁴⁶³.

Otro sector, ha entendido que el empleo de dicha palabra se usa como una reiteración o sinónimo del término “sobreseimiento”, ya que todo sobreseimiento tiene como efecto el archivo de la causa⁴⁶⁴.

En este trabajo se ha optado por entender que el término sobreseimiento hace referencia tanto al libre como al provisional y que la expresión “auto de archivo firme” se refiere a aquel auto de archivo que emite el Juez de Instrucción cuando se le presenta una denuncia que es manifiestamente falsa o que carece de caracteres delictivos.

Cuando una denuncia revista alguna de las dos condiciones antes señaladas, la LECrim en su art. 269 ha establecido que el Juez o

⁴⁶² SANTANA VEGA, en *Comentarios al Código Penal LO 5/2010*, p. 988.

⁴⁶³ CONDE-PUMPIDO FERREIRO, *Contestaciones de Derecho Penal al Programa de Judicatura. Parte Especial*, p. 470.

⁴⁶⁴ GARCÍA SOLÉ, *El delito de acusación y denuncia falsas*, p. 279. Para Ordeig Orero, la aclaración introducida en la redacción del 456.2 CP mediante la incorporación del “auto de archivo” constituye una aclaración que, si bien no era estrictamente necesaria, resulta útil y conveniente para resaltar la no diferencia entre la naturaleza jurídica del archivo y del sobreseimiento definitivo. ORDEIG ORERO, *El delito de acusación y denuncia falsas*, p. 142.

funcionario ante quien se ha hecho esa denuncia tendrá que abstenerse de la realización de todo procedimiento.

Este rechazo *ad limine*, en principio, no permite tener por cumplimentada la condición de procedibilidad del art. 456.2 CP, y, por otro lado, no afecta el correcto funcionamiento de la Administración de Justicia dado que ninguna actividad procesal se desarrolla a consecuencia de aquél, pues una denuncia manifiestamente falsa o que no reviste caracteres de delito es –usualmente– inidónea para generar actividad procesal⁴⁶⁵.

Ahora bien, si la autoridad ante la que se realiza la denuncia fuese el Juez de Instrucción y éste emite una resolución judicial inadmitiéndola por los motivos antes señalados, habría lugar al nacimiento de un proceso por el delito estudiado, siempre y cuando se percibiese objetivamente la idoneidad de la denuncia para iniciar un procedimiento penal⁴⁶⁶.

Si en cambio, la autoridad ante la que se realizase la denuncia fuese el representante del Ministerio Fiscal, y éste en virtud del art. 773.2 LECrim y el art. 5.1 de la Ley 50/1981 decretase el archivo de las diligencias de investigación, sólo podría dar lugar a tener por cumplido el requisito de procedibilidad exigido por el art. 456.2 CP cuando remitiese las diligencias al órgano judicial para que éste emita una resolución judicial dictando el archivo⁴⁶⁷.

De este modo, puede sostenerse que, una denuncia rechazada *ad limine* por ser manifiestamente falsa o por no referirse a hechos constitutivos de delito, podrá dar lugar al cumplimiento del requisito de perseguibilidad cuando: i) haya sido interpuesta ante el Juez de

⁴⁶⁵ PALOMO DEL ARCO, en *Delitos contra la Administración de justicia*, p. 194.

⁴⁶⁶ GOYENA HUERTA, en *Los Delitos contra la Administración de Justicia*, p. 183.

⁴⁶⁷ ORDEIG ORERO, *El delito de acusación y denuncia falsas*, p. 143.

Instrucción o éste haya tenido conocimiento de ella y sea él quien emita una resolución judicial de archivo; y; ii) de la lectura de su contenido se desprenda la idoneidad objetiva de ésta para poder dar inicio a un procedimiento penal⁴⁶⁸.

En la práctica judicial, los autos de archivo *ad limine* no suelen dar lugar a que se pueda iniciar un proceso por acusación y denuncia falsas.

Sólo queda reiterar que, con la exigencia del cumplimiento de este requisito de procedibilidad se consigue evitar que se debilite el derecho a la tutela judicial –mediante la presentación de una denuncia–, ya que de permitirse que pueda iniciarse un procedimiento a la par por el delito de acusación y denuncia falsas se estaría realizando una intervención penal excesivamente temprana⁴⁶⁹, que podría generar que las personas dejaran de denunciar la comisión de delitos por miedo a que se les inicie un proceso de acusación y denuncia falsas sin siquiera existir un pronunciamiento previo firme sobre el delito inicialmente imputado.

Si no se requiriese este requisito de procedibilidad –como se observará en el caso de Italia–, podría darse un supuesto de acumulación de causas o peor aún dar lugar a que se celebrasen dos procesos independientes que podrían culminar con sentencias contradictorias. Siendo ello así, la inclusión de este requisito de procedibilidad en el tipo penal, parece idónea para intentar perseguir adecuadamente las conductas que aparentemente podrían circunscribirse en este tipo de delito, ya que sirve como tamiz para evitar que procesos iniciados por “denuncias verdaderas” y que culminen con sentencias

⁴⁶⁸ Otro sector doctrinario encabezado por Pérez Rúa, propone la supresión del término “archivo”, para evitar que éste siga siendo considerado como una alternativa al sobreseimiento, pues entiende que cuando una denuncia no reviste caracteres de delito, se debe de admitir un auto de sobreseimiento, y que, en todo caso, dentro de la norma procesal penal que regula lo referente al sobreseimiento libre debería incluirse a la manifiesta falsedad de la denuncia como uno de los motivos para dictaminarlo. A pesar que postula que la supresión y modificación del art. 637.2 LECrim referido al sobreseimiento libre sería lo deseable, sostiene que acorde a la regulación actual, el auto de archivo –de rechazo *ad limine*– tiene la virtualidad suficiente para servir de base a un procedimiento posterior por el delito de acusación y denuncia falsas, pero que se limitaría únicamente al supuesto en que la denuncia fuese manifiestamente falsa, ya que cuando el hecho no revistiere los caracteres de delito se tendría que aplicar el art. 779.1.1ª LECrim o el art. 637.2 LECrim –dependiendo del tipo de proceso– y dictar un auto de sobreseimiento. PÉREZ RÚA, *La acusación y denuncia falsas*, pp. 180-181.

⁴⁶⁹ MORÓN LERMA, en *Tratado de Derecho Penal Español. Parte Especial III*, p. 951.

condenatorias, puedan dar lugar a que se inicie un proceso de acusación y denuncia falsas.

Debe recordarse que, para emitir una sentencia condenatoria, el Juez o Tribunal debe tener la certeza de la comisión del ilícito por parte de la persona imputada, con lo que, una sentencia condenatoria no puede dar lugar al nacimiento de un delito como el estudiado, ya que aquélla se dictamina debido a que se ha acreditado que la imputación realizada es objetivamente verdadera, lo cual no se condice con la esencia falsaria del delito de acusación y denuncia falsas.

2. Con relación al inicio del proceso de acusación y denuncia falsas

El delito de acusación y denuncia falsas es un delito público perseguible de oficio y también a instancia de parte⁴⁷⁰.

Para desentrañar las implicancias de aquella afirmación es pertinente recordar algunos conceptos básicos del derecho procesal penal.

En cuanto al inicio del proceso penal, éste tradicionalmente se inicia como consecuencia de una denuncia o una querella. La primera de ellas implica la puesta en conocimiento a la autoridad competente de la *notitia criminis*, mientras que la segunda, además de ella, conlleva el ejercicio de la acción penal lo cual hace que el querellante se constituya en parte actora⁴⁷¹.

Adicionalmente a esos dos supuestos, existe un tercero, el inicio del proceso penal de oficio. Éste se produce cuando órgano jurisdiccional abre el sumario debido a que toma conocimiento directo de la *notitia criminis* mediante otro medio adicional a la querella y la calumnia, por ejemplo, mediante la deducción de testimonio ordenada por un Juzgado o Tribunal.

⁴⁷⁰ SOTO RODRÍGUEZ, *Diario La Ley*, núm. 7977, de fecha 3 de diciembre de 2012.

⁴⁷¹ GÓMEZ COLOMER, “Lección Sexta: La instrucción del proceso: Su estructura esencial”, en *Derecho Jurisdiccional III. Proceso Penal*, p. 142.

En cuanto a la perseguibilidad del delito, que un delito sea perseguible de oficio (delito público) indica que no se requiere contar para su persecución con la denuncia previa del ofendido, siendo ello así, cualquier persona que haya tenido conocimiento de la comisión del ilícito puede realizar la denuncia correspondiente, en cambio, si un delito es perseguible sólo a instancia de parte (delito privado) exigirá necesariamente la denuncia del ofendido para su persecución. A estas posibilidades de persecución se añade una adicional de naturaleza mixta que permite que la persecución de este ilícito penal se produzca, siempre y cuando, previamente el ofendido haya realizado la denuncia (delito semipúblico).

Dependiendo del tipo de delito, la acción penal podrá ser ejercitada por determinadas personas.

En principio, debe tenerse en claro que, la acción penal al ser pública puede ser ejercitada por todos los ciudadanos –salvo las excepciones contenidas en los arts. 102 y 103 LECrim–, no existiendo un monopolio de la misma por parte del Ministerio Fiscal⁴⁷². El ejemplo de máxima expresión de esta posibilidad se produce con los delitos públicos, en donde la acción penal puede ser ejercitada por el Ministerio Fiscal, el ofendido por el delito como actor particular e incluso por el no ofendido como acusador popular.

Sin embargo, cabe mencionar que este poder no es irrestricto, ya que existen supuestos como los vinculados a delitos semipúblicos y privados en donde el ejercicio de la acción penal se enfrenta a con ciertas limitaciones.

⁴⁷² En palabras de Montero Aroca: “[e]n nuestro ordenamiento, por un lado, el Estado no abandona el ejercicio de la acción penal en manos de los particulares, con el riesgo de impunidad que ello podría suponer, estableciendo un órgano específico, el Ministerio fiscal, pero, por otro, éste no la asume en exclusiva, permitiéndose la actuación de los ciudadanos. Si para el Fiscal el ejercicio de la acción penal es un deber, para el ciudadano es un derecho. El sostenimiento de la acción penal por personas diferentes del Ministerio Fiscal puede atender a dos tipos de razones muy distintas. La acusación que puede sostener cualquier persona tiene una base esencialmente política y se denomina acusación popular. La otra atiende al reconocimiento de un derecho procesal de la víctima del delito y se denomina acusación particular”. MONTERO AROCA, “Lección Tercera: Las partes acusadoras”, en *Derecho Jurisdiccional III. Proceso Penal*, pp. 79-80.

En el primer caso, la acción sólo puede ser ejercida por los ofendidos y/o el representante del Ministerio Fiscal, siendo dificultosa la admisión de la posibilidad del ejercicio de la acción penal por parte de un no ofendido, ya que la persecución de estos delitos se supedita a la voluntad de los ofendidos.

En el segundo caso, vinculado a los delitos privados, el monopolio del ejercicio de la acción penal le corresponde únicamente al ofendido.

Así pues, una vez establecidas las premisas antes indicadas, corresponde hacer un análisis de dichas situaciones vinculadas al delito de acusación y denuncia falsas.

Tal como se indicó, el proceso penal puede iniciarse de oficio, por una querrella o a consecuencia de una denuncia. Ahora bien, el que un proceso penal se inicie de oficio no conlleva a que la pretensión penal sea ejercida de oficio, ya que ello implicaría desconocer la vigencia del principio acusatorio⁴⁷³.

Esta aclaración es importante dado que usualmente se suele identificar al “mandato de proceder de oficio contra el denunciante o acusador” como un acto de ejercicio de la acción penal, algo que es erróneo ya que los jueces no pueden ejercitar la acción penal por la prohibición contenida en el art. 102 LECrim.

Lo que se produce con dicho mandato es una deducción de testimonio, es decir, el Juez o Tribunal que conoció la causa principal ordena que se hagan copias de lo actuado y se remitan al Juzgado de Instrucción de Guardia para que éste proceda conforme a ley.

¿En qué consiste ese proceder?, inmediatamente que el Juez de Instrucción haya tomado conocimiento de la posible comisión de un delito mediante la remisión del testimonio, pondrá en conocimiento del Fiscal aquella situación, para que sea éste quien propiamente ejercite la acción penal.

⁴⁷³ GÓMEZ COLOMER, “Lección Sexta: La instrucción del proceso: Su estructura esencial”, en *Derecho Jurisdiccional III. Proceso Penal*, p. 138.

Así pues, si bien es cierto, el proceso penal se inicia de oficio, la acción penal no es ejercitada de oficio ya que se requerirá que exista una persona que sostenga la acusación, y claro está, ésta no puede ser el Juez que ordenó la deducción del testimonio.

Sobre la perseguibilidad de este delito, existen ciertas particularidades que pueden ser conflictivas con lo antes expuesto.

Y es que, a pesar de considerarse que el delito estudiado es un delito público perseguible de oficio, las únicas personas legitimadas para promover la persecución de este delito serían el ofendido y el Juez o Tribunal que conoció la causa principal y que ordenó la deducción de testimonio. De esta forma, se excluye la posibilidad de que un tercero ajeno tenga la capacidad de promover la persecución penal por este delito⁴⁷⁴.

Si el Juez o Tribunal que conoció la causa principal no mandase a deducir testimonio y el ofendido tampoco denunciase los hechos, no se podría tener por cumplida la exigencia de este requisito de procedibilidad, y, por tanto, no podría darse inicio a un proceso penal por este delito.

Al respecto, la Audiencia Provincial de Zaragoza se ha pronunciado en ese sentido en la sentencia nº 226/2012, de fecha 19 de junio de 2012, en donde revocando una sentencia condenatoria emitida por el Juzgado de lo Penal núm. 7 de Zaragoza –de fecha 13 de abril de 2012– declara la absolución de una persona debido a que no se cumplió el requisito de procedibilidad exigido por el art. 456.2 CP, al no haber ordenado el Juzgado de Violencia sobre la mujer proceder de oficio en contra de la mujer que denunció la supuesta comisión de actos de violencia de género en su contra por parte de su entonces compañero sentimental y al no contar, tampoco, con la denuncia previa del ofendido.

⁴⁷⁴ En ese sentido, Soto Rodríguez ha sostenido que se excluye la posibilidad de que terceros ajenos a los mencionados puedan ejercer alguna acción que dé inicio a un proceso por el delito mencionado –dentro de este grupo se ubicarían los representantes del Ministerio Fiscal, otros jueces o terceros particulares interesados en la denuncia–. SOTO RODRÍGUEZ, *Diario La Ley*, núm. 7977, de fecha 3 de diciembre de 2012. En igual sentido: GOYENA HUERTA, en *Los Delitos contra la Administración de Justicia*, p. 187.

Sin perjuicio de lo antes señalado, es de destacarse que, la limitación antes apuntada no limita la capacidad de ejercicio de la acción penal, pues ésta puede ser ejercida tanto por el Ministerio Fiscal, el ofendido por el delito como el actor particular e incluso el no ofendido como acusador popular, claro está, siempre y cuando, la persecución del delito se haya iniciado en las condiciones mencionadas.

A veces, esa limitación en la posibilidad de dar inicio al proceso por el delito de acusación y denuncia falsas es interpretada como una referencia a que este delito posee una esencia semipública⁴⁷⁵, algo con lo que se discrepa en este trabajo, pues ese tipo de delitos exige expresamente para su persecución que la persona agraviada denuncie por los hechos⁴⁷⁶, lo que no sucede con el delito estudiado puesto que, la promoción de la persecución de este delito se puede iniciar a consecuencia de la deducción de testimonio realizada por orden del Juez o Tribunal que conoció la causa principal, sin necesidad de contar con que el ofendido haya denunciado previamente.

A continuación, se estudiarán más detenidamente las dos posibilidades de inicio de la persecución de este delito:

2.1. A consecuencia de la deducción de testimonio por parte del Juez o Tribunal

Cumplíndose la exigencia de contar con una sentencia absolutoria o auto firme de sobreseimiento o archivo, podrá procederse de oficio o a instancia del ofendido. En el primer supuesto, el Juez o Tribunal que dictaminó dicha resolución mandará a deducir testimonio por delito contra la Administración de Justicia⁴⁷⁷

⁴⁷⁵ CALDERÓN CEREZO/CHOCLÁN MONTALVO, *Derecho Penal*, t. II, p. 556.

⁴⁷⁶ Sobre el ejercicio de la acción penal en los diferentes tipos de delitos (públicos, semipúblicos y privados), véase: MONTERO AROCA, “Lección Tercera: Las partes acusadoras”, en *Derecho Jurisdiccional III. Proceso Penal*, p. 78.

⁴⁷⁷ MORÓN LERMA, en *Tratado de Derecho Penal Español. Parte Especial III*, p. 952.

La deducción de testimonio por parte del Juez o Tribunal que conoció de los hechos, siempre que comprabase la falsedad de la imputación y considerase que hay indicios sobre el posible conocimiento de dicha falsedad por parte del sujeto que realizó la imputación, es obligatoria⁴⁷⁸, constituyendo su omisión un posible delito de omisión del deber⁴⁷⁹.

Ahora bien, en la práctica judicial –como se acreditará en el octavo capítulo de este trabajo– este delito rara vez es perseguido a raíz de una deducción de testimonio⁴⁸⁰.

La orden de proceder de oficio contra el denunciante o acusador se emitirá siempre y cuando de la causa principal se desprenda que existen “indicios bastantes de la falsedad de la imputación”.

Siendo ello así, cabe recordar que es lo que debe entenderse por indicio. Los indicios son hechos relacionados indirectamente con los hechos delictivos que se pretenden probar, por sí solos no son capaces de probar la comisión del delito, pero unido a otros se convierten en elementos útiles y suficientes para poder fundamentar una condena, siempre y cuando se encuentren rodeados de las siguientes situaciones⁴⁸¹:

- a) Deben encontrarse plenamente probados mediante prueba directa.

⁴⁷⁸ ORDEIG ORERO, *El delito de acusación y denuncia falsas*, p. 144.

⁴⁷⁹ CONDE-PUMPIDO FERREIRO, *Contestaciones de Derecho Penal al Programa de Judicatura. Parte Especial*, p. 479. Cabe recordar que, en el CP de 1928, el art. 403 exigía la declaración de falsedad de la acusación o denuncia para la persecución de estos delitos, ya sea en la sentencia firme o auto firme de sobreseimiento libre o definitivo –recaído en la causa sobre el delito imputado–. Pudiendo inclusive emitirse dicha declaración después de firmes las resoluciones aludidas, siempre y cuando así lo solicitase el Ministerio Fiscal o el ofendido. La eliminación de esa exigencia en los sucesivos Códigos Penales es del todo acertada, pues como se ha indicado en el cuarto capítulo de este trabajo, la acreditación o evaluación de la falsedad objetiva de la imputación se debe analizar en el proceso de acusación y denuncia falsas, y no esperar a que ésta se acredite en el proceso inicial.

⁴⁸⁰ SOTO RODRÍGUEZ, *Diario La Ley*, núm. 7977, de fecha 3 de diciembre de 2012.

⁴⁸¹ ASENCIO MELLADO, *Derecho Procesal Penal*, pp. 298-299.

- b) En principio, debe existir una pluralidad de indicios, salvo en el caso excepcional de que el indicio por sí solo posea una intensidad tal que permita alcanzar una certeza respecto a los hechos, pudiendo en este supuesto un solo indicio fundamentar la condena.
- c) Deben converger en una misma dirección, es decir, deben tender a demostrar la misma conclusión.
- d) No deben dar lugar a una alternativa posible distinta a la incriminatoria, de lo contrario, se tendría que excluir la comisión del delito.
- e) La conclusión (hecho presumido) no puede ser otra que la decisión de culpabilidad en función de los indicios obtenidos.
- f) El nexo causal entre el indicio y el hecho presunto se debe realizar en función de un análisis deductivo, el razonamiento debe ser motivado de forma especial y extensa en la sentencia.

Así, los indicios permitirán formar una opinión referida a la falsedad de la imputación⁴⁸².

En el caso del delito estudiado, puede discutirse la naturaleza del tipo de indicio de falsedad que se requiere, es decir, si refiere a una falsedad objetiva de la imputación o si, por el contrario, a una falsedad subjetiva de aquélla.

Autores como GARCÍA SOLÉ entienden que los indicios a los que hace referencia el art. 456.2 CP deben ser interpretados en clave

⁴⁸² PÉREZ RÚA, *La acusación y denuncia falsas*, p. 188.

subjetiva, ya que interpretarla en su vertiente objetiva conllevaría a que cualquier auto de sobreseimiento, archivo o sentencia absolutoria pudiese fundamentar la apertura de una causa por acusación y denuncia falsas, a pesar de que en el desarrollo del proceso se percibiese el aparente desconocimiento por parte del sujeto que realizó aquella imputación, lo cual podría generar en las personas un miedo a denunciar hechos por temor a que en el proceso se determinasen que éstos fueron falsos. Mientras que, una interpretación desde una perspectiva subjetiva, iría más allá, ya que, con independencia de que los hechos fuesen objetivamente falsos, los indicios se observarían en función de si el sujeto pudo o no tener conocimiento de dicha falsedad, por ejemplo, percibiéndose factores como las discrepancias de las declaraciones del sujeto que realizó la imputación en las distintas fases del proceso penal, que podrían permitir inferir que es probable que el sujeto pueda haber tenido conocimiento de la discrepancia entre lo que dijo y lo verdaderamente sucedido⁴⁸³.

Particularmente, se suscribe la postura última mencionada, ya que lo determinante es que el Juez o Tribunal que conoció de la causa principal haya podido percibir indicios sobre el conocimiento de la falsedad objetiva de los hechos imputados por parte del sujeto que realizó la denuncia o la acusación. Si no percibiesen indicios sobre dicho conocimiento, por más que el hecho imputado sea objetivamente falso, no daría lugar a que el Juez o Tribunal mande a deducir testimonio en contra de aquél.

La prueba por indicios del conocimiento de la falsedad por parte del acusador o denunciante es de suma importancia, ya que sin ellos podría caerse en una situación de impunidad⁴⁸⁴.

⁴⁸³ GARCÍA SOLÉ, *El delito de acusación y denuncia falsas*, pp. 299-300.

⁴⁸⁴ Sobre la prueba por indicios del conocimiento de la falsedad se ha tratado en el capítulo quinto de este trabajo.

2.2. A consecuencia de la previa denuncia del ofendido

En el art 456.2 CP se ha establecido que el Juez o Tribunal que haya conocido de la infracción imputada, mandará a proceder de oficio contra el denunciante o acusador siempre que de la causa principal resulten indicios bastantes de la falsedad de la imputación, sin perjuicio de que el hecho pueda también perseguirse previa denuncia del ofendido –esta posibilidad tiene carácter independiente respecto de la orden de proceder del Juez o Tribunal y en defecto de esa⁴⁸⁵.

Con las anteriores regulaciones se entendía que el CP había establecido una prohibición para el ofendido de poder denunciar el delito cometido en su contra, entendiendo que la persecución a este delito sólo podía darse si el Juez o Tribunal que hubiere conocido de la infracción inicial imputada hubiese mandado a proceder, de lo contrario, no podía iniciarse acción penal alguna en contra del falso denunciante o acusador.

Esa interpretación que tuvo gran asidero en la doctrina, fue criticada debido a que contradecía lo expuesto en el art. 24 C, y desechada, una vez que el legislador, en la actual redacción del CP estableció en su art. 456 la posibilidad de que el hecho pueda perseguirse previa denuncia del ofendido⁴⁸⁶.

Así, el CP vigente introdujo una modificación en lo concerniente al delito estudiado, estableciendo la admisión de la persecución de este delito previa denuncia del ofendido. Con la inclusión de esta posibilidad, en opinión de un sector de la doctrina, se busca destacar la función de reparación de la situación de injusticia protegiendo el interés

⁴⁸⁵ MARES ROGER/MARTÍNEZ LLUESMA, en *Delitos contra la Administración Pública, contra la Administración de Justicia y contra la Constitución*, p. 194. Sin embargo, otro sector doctrinario le asigna un carácter subsidiario, es decir, siempre y cuando el Juez o Tribunal no haya mandado previamente a proceder por este delito de oficio. CONDE-PUMPIDO FERREIRO, *Contestaciones de Derecho Penal al Programa de Judicatura. Parte Especial*, p. 479.

⁴⁸⁶ ORTS BERENGUER, en *Derecho Penal. Parte Especial*, p. 667.

individual concreto del derecho a la tutela judicial efectiva del acusado o denunciado falsamente⁴⁸⁷ de poder acceder a la jurisdicción denunciando o acusando la supuesta comisión de un ilícito penal en su contra.

Otra lectura que podría darse a la inclusión de esta facultad podría ser que a través de ella se reconoce la importancia del honor como bien jurídico protegido en este delito y que por ello se destaca que la posibilidad de persecución de este delito previa denuncia del ofendido⁴⁸⁸.

Sea uno u otro el motivo principal por el cual el legislador decidió incluir esta previsión en la norma penal, lo cierto es que su inclusión ha servido para que se pueda perseguir más firmemente este delito, ya que antes de ella se estaba a merced de que el Juez o el Tribunal dispusiese proceder de oficio contra el denunciante o acusador falso, algo que usualmente no solían solicitar⁴⁸⁹.

Hoy en día la cantidad de procesos que se inician por el delito de acusación y denuncia falsas a consecuencia de la denuncia del ofendido es mayor que la que se inician a consecuencia de la deducción del testimonio. Es más, la cantidad de procesos que sólo tienen a la acusación particular –es decir, a la acción penal ejercida por el ofendido– como parte que ejerce en exclusiva la acción penal es considerable.

⁴⁸⁷ En ese sentido véase: ROPERO CARRASCO, *Abusar de la Justicia. Dimensión del actual delito de acusación y denuncias falsas*, p. 19.

⁴⁸⁸ De esta manera se ha expresado la Audiencia Provincial de Sevilla, en el auto nº 62/2006, de fecha 1 de marzo de 2006, al expresar que: "... el delito de denuncia falsa, en el que sí hay tal imputación, tiene una naturaleza pluriofensiva al afectar tanto a la Justicia como al imputado, en su honor (de calumnia cualificada lo tilda la jurisprudencia). De ahí que el propio artículo 456 del Código Penal, aparte otras exigencias, prevé la posibilidad de denuncia del ofendido". En ese sentido, Morón Lerma sostiene que, de esta forma, se deja en manos del ofendido la decisión de poder recurrir a los Tribunales penales, o en todo caso, solicitar la tutela de su honor en vía civil. MORÓN LERMA, en *Tratado de Derecho Penal Español. Parte Especial III*, p. 953.

⁴⁸⁹ SERRANO GÓMEZ/SERRANO MAÍLLO, *Derecho Penal. Parte Especial*, p. 892.

Al respecto, cabe destacar tal como lo ha mencionado Soto Rodríguez que, la acusación particular “...supone fundamentalmente un derecho de los ciudadanos, pero al mismo tiempo representa una obligación en el caso de los delitos públicos: deber de denuncia que puede ser definido como deber cívico de colaboración con la justicia, o deber jurídico público positivo”⁴⁹⁰.

Asimismo, de esta modificación se puede desprender también que, la infracción penal falsamente imputada no necesariamente tenía que ser de aquellas que daban lugar a un procedimiento de oficio –situación que sí era requerida en las anteriores regulaciones–, sino que además de este supuesto, se admitía la posibilidad de que la imputación falsa sea también de delitos privados, que como se sabe, son perseguibles a petición de parte⁴⁹¹.

⁴⁹⁰ ROPERO CARRASCO, *Abusar de la Justicia. Dimensión del actual delito de acusación y denuncias falsas*, p. 115.

⁴⁹¹ En ese sentido véase: RINCÓN HERRANZ, *Delito de acusación y denuncia falsas en el Código Penal español*, p. 103.

§ 7. DERECHO COMPARADO

I.- INTRODUCCIÓN

Realizar un estudio sobre el tratamiento que viene recibiendo este delito en otros ordenamientos jurídicos es de por sí algo enriquecedor, ya que permitirá realizar un análisis crítico de dichas realidades jurídicas y compararlas con la regulación española con el fin de determinar si puede importarse algunos aspectos de las regulaciones extranjeras analizadas para conseguir una mejora práctica en el manejo de los procesos penales a instaurar por este delito en la experiencia española.

Se ha elegido estudiar la regulación de dos países, la italiana y la peruana. El motivo principal por el que se ha optado estudiar la normativa de estos países, es debido a que la percepción de este delito en dichas regulaciones es distinta de la existente en España, proveyendo un material interesante a efectos del análisis comparativo.

El delito estudiado ha sido ampliamente tratado por la doctrina italiana; aspectos como el bien jurídico protegido en este delito o la inclusión del término inocente en la redacción del tipo penal son temas que merecen ser analizados críticamente en el contexto del propio país, para posteriormente determinar si se pueden extrapolar algunos aspectos de la construcción normativa italiana a la española y viceversa.

En el caso peruano, en cambio, este delito no ha sido muy estudiado por la doctrina, lo cual conlleva a asumir una responsabilidad mayor en la realización del análisis de esta figura delictiva. Por un lado, se espera que éste constituya un aporte serio para el entendimiento del funcionamiento de esta figura delictiva en Perú, identificando los aspectos positivos y a mejorar en la regulación peruana. Y por el otro, se pretende establecer si existe algún aspecto de la regulación peruana que podría adoptarse en la española para una mejora de la regulación de esta última.

II.- ITALIA

En el art. 368 del CP italiano se establece lo concerniente al delito de calunnia –nombre italiano con el que se denomina al delito de acusación y denuncia calumniosa– de la siguiente manera:

“Chiunque, con denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'autorità giudiziaria o ad un'altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne o alla Corte penale internazionale, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se s'incolpa taluno di un reato pel quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni, o un'altra pena più grave. La reclusione è da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna alla reclusione superiore a cinque anni; è da sei a venti anni, se dal fatto deriva una condanna all'ergastolo; e si applica la pena dell'ergastolo, se dal fatto deriva una condanna alla pena di morte”⁴⁹².

Este delito se ubica dentro del Capítulo Primero –denominado “De los delitos contra la actividad judicial”– del Título Tercero –cuya rúbrica es “De los delitos contra la Administración de la Justicia– del Libro Segundo del CP italiano.

De su ubicación se desprende preliminarmente que uno de los bienes jurídicos protegidos en este delito es la Administración de la Justicia, ya que mediante la persecución de este tipo de conductas se busca garantizar la veracidad de la *notitiae criminis*, evitando con ello que se ponga en funcionamiento la actividad judicial en vano o peor aún, que se la desvíe de sus fines⁴⁹³.

Ahora bien, la discusión doctrinaria y jurisprudencial italiana ha girado en torno a determinar si la Administración de la Justicia es el único bien jurídico protegido en este delito o si en cambio, nos encontramos ante un delito pluriofensivo.

Un sector minoritario de la doctrina y la jurisprudencia se ha inclinado por una posición tradicionalista en la que se defiende la idea de que el único interés jurídicamente tutelado es la Administración de justicia⁴⁹⁴ y que aun cuando en este delito no se busca

⁴⁹² La traducción de la norma penal italiana al español sería aproximadamente la siguiente: “Cualquiera que, mediante denuncia, querrela, petición o instancia, ya sea de forma anónima o bajo nombre falso, se dirija a la autoridad judicial, o a otra autoridad que tenga la obligación de informar o a la Corte penal internacional, inculpa de un delito a alguien que sabe inocente, o simula pruebas tendentes a inculparlo, será sancionado con la pena de reclusión de dos a seis años. La pena se aumentará si se inculpa a alguien con un hecho delictivo para el que la ley haya establecido una pena de reclusión superior, en el máximo de diez años, u otra pena más grave. El encarcelamiento será de cuatro a doce años, si del hecho se deriva una condena de prisión superior a cinco años; y será de seis a veinte años, si del hecho se deriva una condena a cadena perpetua; [y se aplicará la pena de cadena perpetua, si del hecho se deriva una condena a la pena de muerte]”. Debe de recordarse que la pena de muerte fue abolida en Italia en el año 1948.

⁴⁹³ QUARTA, en *Reati contro la Pubblica Amministrazione e contro L'Amministrazione della Giustizia*, p. 366.

⁴⁹⁴ Al respecto, Almena citando a Pannain destaca que éste entiende que la calunnia es sólo un delito que afecta a la Administración de justicia y que cualquier afectación a otro interés jurídicamente tutelado

la protección del honor del imputado falsamente, se debe reconocer que éste puede resultar dañado con la comisión del ilícito penal, pudiendo éste constituirse como parte civil en el proceso penal que se instaure a fin de solicitar la tutela de sus intereses resarcitorios⁴⁹⁵.

Mientras que, por otro lado, el sector mayoritario se inclina por una posición plurofensiva en donde se defiende la idea de que a la par de la puesta en peligro a la Administración de la Justicia –al engañársela y desviarla de su adecuado funcionamiento– se pone en peligro también los intereses particulares de que las personas no vean lesionado su honor y, eventualmente, su libertad personal⁴⁹⁶.

es un daño colateral. ALMEMA, *Rivista italiana di diritto penale*, año VII, núm. 1, 1936, p. 9. Autores como Carosio sostienen que la protección de intereses individuales tales como la libertad personal – en consideración de la agravante prevista en la norma– se realizan siempre de manera indirecta y que por tanto lo que verdaderamente se protege con la persecución de este delito es la supremacía del Estado en el ejercicio función jurisdiccional. CAROSIO, *Se sussista reato di calunnia qualora l'incolpato sia persona non imputabile*, p. 4. De igual forma, véase lo sostenido por Frosali, quien entiende que la calunnia es un delito contra la administración de justicia, cuyo objeto de tutela penal es el interés de que la actividad del Estado dirigida a la persecución y la represión del delito no se vea desviada con la inculpación de un inocente. FROSALI, *Scuola Positiva – Rivista di diritto e procedura penale*, año XXII, fasc. 9-10, 1942, p. 5. Así también lo sostiene Manzini, quien entiende que lo importante para determinar el bien jurídico protegido en el delito de calunnia no es la relación entre el falso acusador y falsamente acusado sino más bien la relación el primero y la autoridad judicial, por ello, sostiene que el bien jurídico protegido es el normal funcionamiento de la actividad judicial, destacando a su vez que, para afectar dicho bien, no es necesario constatar una lesión efectiva, sino que basta con verificar una la puesta en peligro de éste. MANZINI, *Trattato di Diritto penale italiano*, t. V, p. 828. Sobre el modo de afectación del bien jurídico protegido en este delito, Piffer sostiene que es un delito de peligro (concreto) pues no es necesario verificar la efectiva instauración de un procedimiento penal, sino que basta con acreditar la posibilidad de su inicio, ello en función de la idoneidad de la falsa acusación –su apariencia de verosimilitud–. PIFFER, en *Trattato di Diritto penale. Parte speciale*, vol. IV, t. I, p. 191. En similares términos, véase también: PISA, en *Codice Penale. Parte speciale*, t. IV, p. 465; ALMEMA, *Annali di diritto e procedura penale*, año IV, fasc. 1, 1935, pp. 4-5; entre otros. Una variante de esta primera postura es aquella mediante la cual un sector doctrinario ha sustentado la uniofensividad de este delito entendiendo que el bien jurídico protegido en este delito se materializa o bien en la protección del interés del Estado de no ver desviada a recta Administración de la Justicia o bien en la protección del interés del individuo de no verse sometido a un procedimiento penal siendo inocente. Debiendo destacarse que, autores como Pagliaro entienden que el interés protegido inmediato con la persecución de esta conducta delictiva se identifica con el interés de que las personas no se vean injustamente sometidas a un proceso penal, lo cual puede llevar a la confusión de entender que el titular de este interés es el Estado –ya que en él se deposita el poder judicial– cuando en realidad su titular es la persona individual, ello claro está, sin dejar de lado la existencia de un interés estatal que debe ser protegido de manera mediata a partir de la relación existente entre ambos interés. Aclarando que, lo que legitima en primera instancia la tutela penal es el interés individual protegido. PAGLIARO, *Il delitto di calunnia*, 1961, pp. 121-122.

⁴⁹⁵ SANTORIELLO, *Calunnia, autocalunnia e simulazione di reato*, p. 20.

⁴⁹⁶ Al respecto, véase: BALSAMO, en *Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, vol. V, p. 55; TRINCI/FARINI, *Compendio di Diritto penale. Parte speciale*, p. 180; BELLANTONI/BENIGNI, en *Lesione dei diritti della persona*, p. 153; ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, vol. II, p. 504; entre otros. Autores como Pier Paolo Emanuele destacan que la inclusión en la redacción del tipo penal de la palabra inocente destaca la plurofensividad de los bienes jurídicos protegidos en este delito. EMANUELE, *Il delitto di calunnia*, p. 177. En la jurisprudencia italiana se suele reconocer

Quienes adoptan esta postura entienden que existen dos titulares de los bienes jurídicos protegidos en este delito, y que por tanto sujeto pasivo de éste son tanto el Estado como el particular que fue falsamente acusado.

Al igual que en el caso español, la doctrina que defiende la pluriofensividad de este delito discute la prevalencia de los bienes jurídicos protegidos entre sí.

Así pues, un sector doctrinario minoritario ha sostenido que en este delito se debe dar prevalencia a los intereses individuales del inocente que viene falsamente acusado, para ser más precisos al interés de no ser sometido a un procedimiento penal. Destacando que no debe entenderse que es un interés estrictamente privado, ya que el interés de que no se inste un procedimiento penal ante una persona inocente se funde con el interés colectivo e institucional de la correcta Administración de la Justicia, siendo el primero un servicio que debe “garantizar” el Estado a través de los órganos que conforman la Administración de la Justicia⁴⁹⁷.

Mientras que, por otro lado, el sector mayoritario de la doctrina ha entendido que la protección de la función jurisdiccional ejercida por el Estado tiene una posición preponderante y que la protección de los intereses individuales (honor y/o libertad individual) obtiene una protección en vía indirecta y subordinada⁴⁹⁸.

que la calunnia es un delito pluriofensivo, pero limitando la protección como bienes jurídicos a la correcta Administración de justicia y al honor del inculcado. Véanse: Sez. 6, núm. 21789 del 28/04/2010; Sez. 6, núm. 43915 del 12/10/2016, entre otras. Sobre la protección de la libertad personal como bien jurídico protegido en el delito de calunnia, autores como Masera destacan la tutela de dicho bien a partir de la inclusión de las circunstancias agravantes contenidas en el art. 368 del CP italiano, que incrementan la pena cuando el sujeto imputado falsamente recibe una condena por la falsa imputación, de esta forma, entienden que mediante la persecución de estas conductas se busca velar por la incolumidad de la libertad individual. MASERA, *Contributo allo studio del delitto di calunnia*, p. 9.

⁴⁹⁷ QUARTA, en *Reati contro la Pubblica Amministrazione e contro L'Amministrazione della Giustizia*, p. 366. Autores como Pagliaro han entendido que la titularidad del interés principal protegido no le pertenece al Estado, como –a su parecer erróneamente– ha entendido un sector mayoritario de la doctrina, sino que más bien éste le corresponde al particular en el sentido de que éste –en su condición de inocente del delito imputado– no se vea sometido a la instauración de un procedimiento penal. PAGLIARO, *Il delitto di calunnia*, 1967, pp. 116-117.

⁴⁹⁸ CAROSIO, *Se sussista reato di calunnia qualora l'inculpato sia persona non imputabile*, p. 9. Así también: GULLO, *Il delitto di calunnia*, p. 8.

Debido a que el eje central de este trabajo gira en torno a la falsedad de la imputación, el análisis realizado sobre la legislación italiana se limitará al estudio de este aspecto⁴⁹⁹.

Para ello, es necesario tener previamente en cuenta que la legislación italiana no hace expresa mención a la falsedad de la imputación o al conocimiento de ella, sino al conocimiento de la inocencia del sujeto inculcado mediante la expresión “sabe inocente”⁵⁰⁰. Dicha expresión es equiparable –en cierta medida– al conocimiento de la falsedad de la imputación, ya que implica un conocimiento –por parte del sujeto que realiza la imputación– de la falsedad de lo que alega⁵⁰¹ y un reconocimiento tácito de la inocencia del sujeto respecto de los hechos imputados.

⁴⁹⁹ De una primera lectura de la “calunnia” italiana, puede observarse que la redacción del tipo penal posee elementos similares en relación al delito de acusación y denuncia falsas de España, como elemento común se tiene al ensalzamiento de aspectos subjetivos como el conocimiento de la inocencia del inculcado equiparable al conocimiento de la falsedad de los hechos imputados, mientras que, como matices particulares de la regulación italiana puede destacarse el hecho de que exista una especie de calunnia formal y una material, la primera de ellas vinculada directamente con la presentación de una denuncia, querella, petición o instancia inculcando a una persona inocente, y la segunda, entendida como la simulación de pruebas de un delito inculcado a una persona inocente. *In extenso*, véase: MANZINI, *Trattato di Diritto penale italiano*, t. V, p. 829.

⁵⁰⁰ A pesar que el tipo penal italiano hace mención a la palabra inocente, un gran sector de la doctrina prefiere emplear el término *incolpevole* dado que a su entender es procesalmente más adecuado, ya que la inculpabilidad se refiere a la no culpabilidad o bien porque el sujeto no ha realizado los hechos o bien porque no se puede acreditar que lo haya hecho, mientras que, por la inocencia, en un sentido restringido en comparación con el anterior, se entiende que se hace referencia a la acreditación fehaciente de que el sujeto no fue quien realizó los hechos. Por ello, la doctrina mayoritaria opta por emplear el término inculpable que de cierto modo abarca los supuestos de aquellos inocentes que no han podido acreditar fehacientemente que no han realizado los actos imputados. Véase: MANZINI, *Trattato di Diritto penale italiano*, t. V, pp. 835 y ss. Por otro lado, autores como Boscarelli han agregado que el término inocencia no puede interpretarse como irresponsabilidad, ya que, de cierta forma el contenido de éste último es más extenso que el primero y por ende, de realizar una interpretación como la antes mencionada se realizaría una especie de analogía *in malam partem*. Y es que para el autor, la irresponsabilidad del inculcado abarcaría supuestos tales como en los que: i) el inculcado sea irresponsable por no haber realizado el hecho delictivo, ii) a pesar de haber realizado el hecho delictivo concurre una causa de exclusión del delito, iii) no se pudiese verificar el cumplimiento de la condición de punibilidad, o, iv) existiese una causa de extinción de la responsabilidad penal; mientras que, la inocencia, tan sólo abarca los supuestos en los que el sujeto no ha cometido el ilícito imputado, ya sea porque fácticamente no lo realizó o porque habiendo realizado el hecho delictivo concurre una causa de exclusión del delito. Así pues, se desprende de ello que, para el autor antes mencionado, aquella imputación de un delito que se realice en contra de una persona “no inocente” pero si irresponsable, conociendo dichas condiciones, no podría constituir un delito de calunnia, ya que lo que interesa es la inocencia del inculcado y el conocimiento de ella, y no la irresponsabilidad del inculcado y el conocimiento de aquella. BOSCARIELLI, *Annali della Facoltà Giuridica*, vol. XXVII, 1961, pp. 132-133.

⁵⁰¹ En ese sentido se ha pronunciado la doctrina mayoritaria al expresar que el objetivo de la calunnia reside esencialmente en la falsedad de la inculpación, la cual se deduce de la referencia a la inculpación de un delito a un sujeto que sabe inocente. EMANUELE, *Il delitto di calunnia*, p. 174.

Como es de observarse, al igual que con la legislación española, el legislador italiano ha recurrido también a ensalzar aspectos subjetivos tales como el conocimiento de la inocencia para hacer indirectamente referencia a una situación que se constituye como elemento objetivo del tipo penal, la inocencia del falsamente imputado en Italia.

De esta forma, el conocimiento de la inocencia y la objetiva condición de inocencia del sujeto se funden como esencia de la calunnia.

En cuanto al primero de los mencionados —el “conocimiento de la inocencia”—, éste se encuentra expresamente recogido en la redacción del tipo penal y se constituye como un elemento del tipo penal de naturaleza subjetiva. Así pues, en caso de error del sujeto en cuanto al conocimiento de la inocencia de la persona acusada, la conducta devendría en atípica debido a la falta del elemento subjetivo del tipo⁵⁰².

Mientras que, por otro lado, la inocencia del inculpado se constituye como un elemento del tipo penal de naturaleza objetiva. De este modo, en el caso de que el sujeto fuese culpable, la conducta sería atípica, no por ausencia del dolo sino más bien porque no se habría cumplido con realizar todos los elementos de tipo objetivo⁵⁰³.

Sobre este elemento cabe destacar que, un amplio sector de la doctrina ha sostenido que “la inocencia del inculpado” es un elemento constitutivo del acto material de calunnia, más precisamente, un presupuesto de la conducta, ya que sin la preexistencia de ésta no podría imaginarse la comisión de este delito⁵⁰⁴.

Ahora bien, teniendo en cuenta que la inocencia del falsamente imputado es un elemento del tipo penal objetivo en el delito de calunnia, la duda que inmediatamente surge se refiere al contenido que debe dársele a la inocencia, ya que puede interpretársela desde distintas perspectivas, tales como la: procesal, coloquial, filosófica, etc.

⁵⁰² BALSAMO, en *Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, vol. V, p. 75.

⁵⁰³ QUARTA, en *Reati contro la Pubblica Amministrazione e contro L'Amministrazione della Giustizia*, p. 376.

⁵⁰⁴ EMANUELE, *Il delitto di calunnia*, p. 168.

En principio, debe partirse de la premisa de que el procedimiento que se instaura por el delito de calunnia es independiente del proceso que se ha instaurado en contra del sujeto inocente por el delito atribuido falsamente.

Si se identifica a la inocencia con una categoría procesal, se entendería que sería necesario contar previamente con un pronunciamiento firme en forma de sentencia absolutoria por insuficiencia probatoria o por *in dubio pro reo*, lo cual implicaría una especie de exigencia tácita de un requisito de procedibilidad, pues sin dicho pronunciamiento no podría sostenerse que se está ante una persona inocente.

Sostener una postura como la antes mencionada, teniendo en cuenta como se encuentra redactado el tipo penal italiano, es inviable, ya que el art. 368 del CP italiano no exige expresamente un requisito de procedibilidad en ese sentido, con lo que, en estricto respeto del principio de legalidad, no podría exigirse el cumplimiento de un requisito no establecido expresa y previamente en la norma penal.

En la práctica, el proceso judicial por calunnia puede iniciarse sin requerir la existencia de un proceso previo iniciado en contra del falsamente acusado, ya que lo que realmente importa es que la imputación falsa sea realizada de tal forma que pueda generar la posibilidad de inicio del proceso penal independientemente del hecho de que éste se inicie o no⁵⁰⁵.

Incluso, tal como lo ha destacado MANZINI, el que alguien sea condenado irrevocablemente por un delito —a pesar de no haberlo cometido—, no impide que pueda imputar y enviarse a juicio al sujeto que realizó la inculpación por el delito de calunnia referida a los actos delictivos atribuidos y por los cuales fue condenado el primero de los mencionados⁵⁰⁶. Ello se encuentra en concordancia con lo estipulado en las agravantes previstas en el art. 368 del CP italiano, en donde se establecen endurecimientos de la pena cuando el sujeto acusado falsamente haya sufrido una sentencia condenatoria.

⁵⁰⁵ Así se ha sostenido que basta con que el falsamente imputado reciba el aviso de indagación por la policía judicial para entender que la imputación formulada cumplía con el requisito de idoneidad. CALBI, *La Giustizia Penale – Rivista mensile di doctrina, giurisprudenza e legislazione*, año LXXX, núm. 2, 1975, p. 510.

⁵⁰⁶ MANZINI, *Trattato di Diritto penale italiano*, t. V, p. 837.

En cambio, si la inocencia se interpreta en un sentido coloquial, se entendería que con dicho término se hace referencia a la exención de culpa en un delito o en una mala acción –tal como lo define el DRAE en su segunda acepción–. Sostener dicha interpretación conlleva a entender que no se requiere contar con un pronunciamiento del órgano jurisdiccional estableciendo la no responsabilidad penal del sujeto inocente por los hechos ilícitos que le fueron atribuidos⁵⁰⁷.

La consecuencia de adoptar esta segunda posición –la cual se comparte en este trabajo– es la admisión de la idea de que se puede proceder en contra del acusador falsario con independencia de la instauración o del éxito de procedimiento penal instaurado en contra del falsamente imputado, en ese sentido, se entiende que tampoco sería necesaria la existencia de una sentencia que se pronunciase sobre la inocencia de aquél⁵⁰⁸.

Debe tenerse en cuenta que, en el caso de que existiese un pronunciamiento referido a la inocencia del sujeto falsamente imputado, éste no necesariamente implicaría que se vaya a sentenciar al sujeto acusado de calunnia, ya que la declaración en el juicio primigenio no hace estado en el juicio posterior por calunnia⁵⁰⁹.

En este sentido se han pronunciado distintos autores, quienes entienden que existe una completa autonomía entre el proceso iniciado por el delito de calunnia y el “eventual” proceso penal iniciado en contra del acusado falsamente por el delito imputado falsamente –dado que, al contrario de la legislación española, no se exige la iniciación de un proceso penal–, y que por tanto, aun cuando se tenga una sentencia que se pronuncie sobre la inocencia del sujeto respecto a la imputación calumniosa, ella no necesariamente condicionará al juez a asumir por falsas las imputaciones realizadas, debiendo éste realizar un análisis sobre los hechos a fin de determinar la falsedad de éstas.

⁵⁰⁷ Esta postura es defendida por autores como Gullo, quien entiende que el legislador ha empleado el término “*innocente*” en un sentido extra-jurídico. GULLO, *Il delitto di calunnia*, p. 55.

⁵⁰⁸ QUARTA, en *Reati contro la Pubblica Amministrazione e contro L'Amministrazione della Giustizia*, p. 390.

⁵⁰⁹ QUARTA, en *Reati contro la Pubblica Amministrazione e contro L'Amministrazione della Giustizia*, p. 390. En igual sentido: PIFFER, en *Trattato di Diritto penale. Parte speciale*, vol. IV, t. I, p. 284.

Y es que, una sentencia absolutoria puede dictarse o bien porque no se ha acreditado que el sujeto ha realizado los hechos –lo cual no implica que el sujeto no los ha realizado, sino que no se puede probar que aquél los ha realizado–, o bien porque se ha acreditado que el sujeto inculcado no pudo realizar dichos hechos, siendo este segundo escenario el único que –en cierta medida– vincularía al juez dado que objetivamente se encontraría acreditada la inocencia del sujeto, debiendo analizarse en el proceso de calunnia la concurrencia de los otros elementos que conforman el tipo penal⁵¹⁰.

Por otro lado, partiendo de la aceptación de la idea de la independencia de ambos procesos penales –el de calunnia y el que pueda iniciarse en contra de la persona inocente a consecuencia de la imputación falsa realizada– y atendiendo a la redacción del tipo penal previsto en el art. 368 del CP italiano, merece la pena destacar una particularidad de la regulación italiana, y es que ésta permite que pueda darse inicio a un proceso por calunnia aun cuando el sujeto inculcado falsamente haya sido condenado firmemente por el delito atribuido falsamente, pudiendo incluso llegar a sentenciarse condenatoriamente al calunniatore –el calumniador– cuando el juez –analizando lo actuado en el juicio– tenga la íntima convicción de la inocencia del inculcado falsamente –a pesar de la sentencia condenatoria– y del conocimiento de ésta por parte de aquél⁵¹¹.

Siendo ello así, la inocencia del calunniato –el calumniado– será también analizada por el juez encargado del proceso de calunnia, ello con independencia del fallo que haya podido emitirse en el proceso inicial contra el inculcado falsamente⁵¹². Esto claro está, no supone someter al calunniato –sentenciado absolutoria o condenatoriamente por el delito que le fue imputado– a un nuevo procedimiento, sino solamente reevaluar los

⁵¹⁰ PIFFER, en *Trattato di Diritto penale. Parte speciale*, vol. IV, t. I, p. 284. Al respecto, Luca Masera explica la particularidad de la dinámica de ambos procesos (el iniciado contra el inculcado falsamente y el iniciado contra el calunniatore). Sostiene que, en el proceso en contra del inculcado falsamente en virtud del principio *in dubio pro reo*, le bastará al juez tener duda razonable sobre la culpabilidad del inculcado para absolver por el delito imputado, mientras que, en el caso de la calunnia, será necesario que no exista duda alguna sobre la inocencia del que supuestamente ha sido inculcado falsamente. De ello se desprende que, en caso de duda sobre la culpabilidad del inculcado se excluirá la posibilidad de tener por sentada la inocencia del sujeto y se deberá en consecuencia absolver al supuesto calunniatore. Véase: MASERA, *Contributo allo studio del delitto di calunnia*, p. 43.

⁵¹¹ AMATO, *Lineamenti dommatici del delitto di calunnia*, p. 19.

⁵¹² AMATO, *Lineamenti dommatici del delitto di calunnia*, p. 21. Así también: PAGLIARO, *Il delitto di calunnia*, 1967, pp. 74-75.

hechos fácticos acaecidos a fin de determinar si el calunniatore es o no responsable penalmente de los hechos que se le imputan, situación que es amparada en el ordenamiento italiano, ya que esta “reevaluación” de los hechos por parte de otro juez es permitida plenamente y acorde a la posición de la doctrina, pues no afecta la institución de la cosa juzgada⁵¹³.

Cabe precisar que, la posibilidad de sentenciar condenatoriamente a alguien por calunniator, a pesar de la existencia de una sentencia condenatoria firme en contra del calunniato, se desprende de la lectura de la segunda y tercera agravantes contenidas en el art. 368 del CP italiano, ya que establecen endurecimientos de la pena cuando el calunniato ha sufrido la imposición de una pena de reclusión superior a cinco años. Siendo ello así, podría darse el supuesto de que existiese una sentencia condenatoria tanto para el calunniato como para el calunniator, ya que el hecho de que en el proceso por calunnia el juez asuma que el calunniato es inocente de los hechos imputados –por los cuales ha sido condenado– no implica que la sentencia condenatoria que le haya sido impuesta sea modificada, pues en principio la sentencia impuesta tiene carácter de cosa juzgada, siendo la revisión de la sentencia condenatoria el único mecanismo por el cual el calunniato pueda ver modificada su condena, claro está, siempre y cuando existan los elementos necesarios para que éste pueda acceder a aquél –ello acorde a lo establecido en el art. 629 y ss. del CoPP italiano–.

Otro aspecto importante de destacar es que el CP italiano al emplear la palabra *innocenza* de modo genérico abarca supuestos tanto de “inocencia absoluta” como “inocencia relativa”⁵¹⁴.

⁵¹³ Sobre el particular, véase *in extenso* en: GULLO, *Saggi di Diritto penale. Calunnia–tentativo*, pp. 17-38. Autores como Pagliaro destacan que el juez encargado de llevar el proceso de calunnia debe valorar la inocencia del inculpado sin vincularla con el precedente judicial surgido en el proceso que se haya iniciado en su contra, valiendo este último tan sólo como un medio para recabar material probatorio para “revalorar” la inocencia del inculpado. Siendo ello así, entienden que la inculpación *calunniosa* es aquella que se realiza con conocimiento de que el inculpado es inocente, lo cual deviene en que la declaración realizada sea ideológicamente falsa, pues se atribuye la titularidad de un delito específico a un sujeto que se sabe inocente. PAGLIARO, *Il delitto di calunnia*, 1961, pp. 87-88.

⁵¹⁴ FEROCI, *Rivista italiana di diritto penale*, año III, núm. 3-4, 1931, p. 5. Sobre el particular, Manzini ha sostenido que el tipo penal no exige la absoluta inocencia del inculpado. MANZINI, *Trattato di Diritto penale italiano*, t. V, p. 836.

El primer supuesto abarca la imputación de delitos que no han sido cometidos o que han sido cometidos por otra persona, mientras que el segundo hace referencia a la imputación de circunstancias agravantes no cometidas por el sujeto imputado, que hacen que el delito imputado sea uno distinto y más grave al que verdaderamente le corresponde, así pues, se tendría por consumada la calunnia aun cuando el sujeto haya cometido efectivamente un delito, pero éste sea distinto al imputado⁵¹⁵.

En cuanto a este segundo supuesto, cabe agregar que, en el caso de que la circunstancia agravante imputada falsamente al sujeto no modificase el título del delito que le debe ser imputado, no constituiría un delito de calunnia, ya que el sustrato real del hecho sería verdadero.

Supuestos adicionales que pueden asumirse como inocencia relativa son aquellos en los cuales el sujeto a pesar de haber realizado el acto ilícito se encuentra inmerso en una causa de justificación, siendo ello así, si el calunniatore tenía conocimiento de la concurrencia de dicha causa y no la menciona cometería un delito de calunnia⁵¹⁶; lo mismo ocurriría en caso de que el sujeto a pesar de haber realizado el hecho ilícito poseyera alguna condición personal que sirviera como causa de exclusión de la pena, como por ejemplo, que el sujeto fuera inimputable⁵¹⁷.

Como es de observarse esta distinción entre inocencia absoluta e inocencia relativa podría de cierta forma equipararse a la distinción realizada por la doctrina española sobre la falsedad total y la parcial.

⁵¹⁵ ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, vol. II, p. 507. En opinión de Marciano, cuando se imputa un delito más grave a un sujeto, éste es culpable e inocente a la vez, culpable del delito cometido e inocente respecto del delito imputado. Véase: MARCIANO, en *Questioni di diritto*, p. 199.

⁵¹⁶ ROMANO, *Delitti contro l'amministrazione della giustizia*, p. 81. Este supuesto es controvertido, dado que en principio no podría esperarse del hombre medio una sensibilidad específica que le permita advertir que jurídicamente un acto puede asumirse como causa de justificación y por tanto de lugar a una exclusión de la pena, con lo que, aún en el supuesto de que se omitieran estos detalles no podría afirmarse que nos encontraríamos ante una calunnia ya que el acto central verdaderamente ocurrió. Al respecto: PAGLIARO, *Il delitto di calunnia*, 1961, p. 74.

⁵¹⁷ El último supuesto, es controversial, ya que autores como Antolisei consideran que estrictamente los sujetos inimputables no serían inocentes propiamente, ya que efectivamente han realizado un hecho delictivo, y por tanto, no habría posibilidad de un delito de calunnia, mientras que, por otro lado, un sector mayoritario de la doctrina como Romano entienden que esta situación de cierto modo sería equiparable a un estado de inocencia y por tanto, sí podría darse un supuesto de calunnia en caso de omisión de dicha condición personal de exclusión de la pena. Véase: ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, vol. II, p. 507. Cfr. ROMANO, *Delitti contro l'amministrazione della giustizia*, p. 80, así también, CALCAGNO, en *Reati contro L'Amministrazione della Giustizia*, p. 64.

El que la regulación italiana no exija la emisión de autos de sobreseimiento o archivo o sentencias absolutorias firmes para que se pueda proceder por el delito de calunnia, como sí lo exige la regulación española, genera escenarios distintos, por ejemplo, puede darse el caso de que la imputación de calunnia se produzca en el marco del proceso penal instaurado al imputado falsamente, lo cual podría incluso conllevar a una acumulación del proceso de calunnia y del delito imputado falsamente al *incolpevole*⁵¹⁸, algo impensado en el ordenamiento español.

Un aspecto final en el que debe incidirse es el referido a las penas agravadas a imponer en el caso de que el caso de que de la imputación del hecho delictivo se haya derivado una condena de prisión superior a cinco años o una cadena perpetua.

En principio, la inclusión de esta agravante ha sido entendida por parte de la doctrina italiana como un reconocimiento de la libertad personal como bien jurídico también protegido en el delito de *calunnia*⁵¹⁹.

En cambio, en la experiencia española no es una agravante que la persona haya sufrido una privación de su libertad personal a consecuencia de la denuncia o acusación falsa, ya sea ésta como medida cautelar personal o mediante una sentencia condenatoria de primera instancia.

Sin embargo, en la doctrina española se ha discutido si estas privaciones de libertad podrían llegar a subsumirse dentro del delito de detención ilegal, y entenderse con ello que el sujeto que realiza la acusación o denuncia falsa puede ser considerado como autor mediato de ese delito.

⁵¹⁸ MANZINI, *Trattato di Diritto penale italiano*, t. V, pp. 859-860. Cabe señalar, que la realidad jurídico procesal italiana hace que no sea viable la exigencia de requisitos de procedibilidad en este sentido, dado que los procesos penales en promedio tienden a demorar más de una década. Esperar a una sentencia absolutoria firme podría conllevar a problemas adicionales vinculados a la prescripción del delito. Es por ello que, acorde al desenvolvimiento del proceso penal italiano en el caso del delito de calunnia, lo idea es que se produzca una situación de acumulación de procesos, es decir del proceso mismo de calunnia y del proceso instaurado en contra del imputado falsamente por el delito que se le ha imputado.

⁵¹⁹ MASERA, *Contributo allo studio del delitto di calunnia*, p. 9.

Un sector doctrinario ha entendido que se produce un concurso real entre el delito estudiado y el de detención ilegal, siempre y cuando la sola denuncia hubiese sido causa bastante para acordar la detención del denunciado, y que tal privación de libertad hubiese sido asumida por el denunciante siquiera a título de dolo eventual⁵²⁰.

En este trabajo, se es de la opinión que la afectación de la libertad personal no puede ser atribuida o vinculada a la comisión del delito de acusación y denuncia falsas, sino más bien, deberá ser asumida como una situación tolerada por el ordenamiento jurídico –claro está siempre que para su imposición se haya llevado un estricto celo del debido proceso– pues es dictada en el marco del desarrollo de un proceso penal⁵²¹.

En ese sentido, en la experiencia española, la afectación a la libertad personal colateral, no puede subsumirse dentro del delito de detenciones ilegales, ni debería constituir una agravante en el delito de acusación y denuncia falsas, máxime si tiene en cuenta que las resoluciones judiciales que se emiten vinculadas a la afectación de ese derecho deben encontrarse debidamente razonadas y motivadas por parte del órgano jurisdiccional encargado de dictarlas.

Habiendo cumplido con exponer aspectos esenciales del delito de calunnia en Italia, corresponde realizar una valoración comparativa de esta figura delictiva y el delito de acusación y denuncia falsas:

- a) El eje central de la calunnia gira en torno al término “sa innocente”, de esta manera la regulación italiana pone el acento en la cualidad personal del sujeto al que se le imputa la comisión de un delito. Mientras que, el ordenamiento jurídico español al emplear la siguiente frase: “... con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad, imputaren ... hechos que, de ser ciertos, ...”, pone énfasis no ya en la cualidad de la persona a la que se le ha imputado un delito, sino más bien, en la falsedad misma de la imputación.

⁵²⁰ GOYENA HUERTA, en *Los Delitos contra la Administración de Justicia*, p. 189.

⁵²¹ Se ha hecho referencia a la falta de relevancia jurídica-penal de la afectación de la libertad personal a consecuencia de la denuncia o acusación falsa en el tercer capítulo.

No es lo mismo analizar la inocencia de una persona, que establecer la falsedad de una imputación.

Lo primero, conllevaría a discutir inclusive aspectos personales tales como, si puede o no considerarse que un inimputable es inocente a pesar de haber realizado el hecho imputado. Lo segundo, limita la discusión a determinar si la imputación es objetivamente verdadera o falsa, circunscribiéndose el análisis central a un estudio de la imputación en sí.

De la comparación de ambas situaciones, pareciera que la española es más acertada, ya que centra la discusión en la falsedad de la imputación. Y es que, hay que tener en cuenta que una persona es inocente a partir del momento en que se le empieza a cuestionar la posible comisión de un hecho ilícito y se rechaza dicha opción. Así pues, el que se sostenga que alguien es inocente implica que se ha cuestionado la posibilidad de que el sujeto sea culpable de un hecho y se ha determinado que no lo es.

Mientras que, la falsedad objetiva de la imputación representará un estudio más pulcro sobre si lo imputado se ajusta a la realidad de los hechos.

- b) Cuando una persona imputa falsamente a otra la comisión de un ilícito penal, sobre lo que usualmente tendrá conocimiento es acerca de la falsedad de dicha imputación –tal como lo requiere la regulación española–, es decir, del acto y las condiciones en las que éste ha sido realizado.

Por ello, se considera en este trabajo que es inapropiado sostener que alguien puede imputar un delito sabiendo que es inocente la persona imputada, ya que el conocimiento de la inocencia se produce una vez que alguien cuestione y determine la irresponsabilidad de una persona respecto a lo que se le imputa, en ese sentido, para saber de la inocencia de alguien es necesario que previamente alguien haya realizado una imputación en contra de esa persona.

En otras palabras, sin imputación previa no podría existir un conocimiento de la inocencia de alguien. Dicha afirmación conlleva a que se sostenga que fácticamente no podría realizarse una imputación sabiendo simultáneamente que la persona imputada es inocente –algo que de la lectura del art. 368 CP italiano se entendería que es exigido–.

Así, en razón de los argumentos antes esgrimidos, se sostiene que es más adecuada la regulación española, pues el conocimiento de la falsedad de lo imputado concurre simultáneamente con la realización de la imputación falsa ante el funcionario judicial o administrativo que tenga el deber de proceder a su averiguación.

- c) La no exigencia de condiciones de procedibilidad en la regulación italiana conlleva a la posibilidad de que se produzca una acumulación de procesos o, de que incluso se pueda tener a una persona sentenciada por el delito de calunnia y a otra también sentenciada por el delito que falsamente se le atribuyo.

Una regulación como la italiana permite que algunas personas sentenciadas firme y condenatoriamente puedan recurrir al órgano jurisdiccional interponiendo un proceso posterior por el delito de calunnia, generando con ello la posibilidad de que se instauren procesos con el único objeto de vengarse de la persona que realizó la imputación que llevó a que lo sentenciaran condenatoriamente.

Por ese motivo, se considera que la previsión de las condiciones de procedibilidad contenidas en el art. 456 CP es adecuada, ya que de alguna forma sirve como una especie de filtro para la evitación de procesos penales generados por un ánimo espurio –principalmente, revanchista–.

A modo de colofón puede indicarse que, la regulación italiana sobre este delito tiene unas particularidades dignas de ser estudiadas, pero que, en comparación con la española, presenta algunos problemas que podrían evitarse, por ejemplo, mediante la inserción de condiciones de procedibilidad.

III.- PERÚ

En el art. 402 del capítulo III –denominado “Delitos contra la administración de justicia– del título XVIII –cuya rúbrica es “Delitos contra la Administración Pública”– del libro segundo –Parte Especial-Delitos– del CP peruano de 1991 se regula lo concerniente a la denuncia calumniosa de la siguiente manera:

“Art. 402º.– El que denuncia a la autoridad un hecho punible, a sabiendas de que no se ha cometido o que ha sido cometido por persona distinta a la denunciada, o el que simula o adultera pruebas o indicios de su comisión que puedan servir de motivo para un proceso penal o el que falsamente se atribuye delito no cometido o que ha sido cometido por otro, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de tres años y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa.

Cuando la simulación o adulteración directa o indirecta de pruebas o indicios sea efectuada por miembros de la Policía Nacional u otro funcionario o servidor público encargado de la prevención del delito, y que puedan servir de sustento para un proceso penal por tráfico ilícito de drogas, la pena será privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años y trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa”.

Como es de observarse, en la disposición legal antes reproducida se recogen una serie de conductas que equiparadas con las conductas tipificadas en el Código Penal español se asimilan al delito de acusación y denuncia falsas y al delito de simulación de delitos.

Debido a que el tipo penal abarca una serie de subtipos, se limitará el estudio a la denuncia calumniosa propia, es decir la que estipula que:

“El que denuncia a la autoridad un hecho punible, a sabiendas de que no se ha cometido o que ha sido cometido por persona distinta a la denunciada, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de tres años y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días– multa”

Como se indicó en la introducción de este capítulo, este delito ha sido poco estudiado en la doctrina peruana, por ello será necesario recurrir al también escaso material jurisprudencial que existe para sentar postura respecto de algunos aspectos básicos de esta figura delictiva.

En primer lugar, la jurisprudencia ha entendido que este es un delito uniofensivo en donde lo que se lesiona es el correcto funcionamiento de la Administración de Justicia⁵²².

Esta postura que descarta pluriofensividad se apoya en el hecho de que el honor del falsamente denunciado se puede defender mediante la vía civil, a través de los mecanismos establecidos para la indemnización por responsabilidad extracontractual.

Así, en el art. 1982 CC de Perú –sobre la responsabilidad por denuncia calumniosa– se ha establecido que:

“Corresponde exigir indemnización de daños y perjuicios contra quien, a sabiendas de la falsedad de la imputación o de la ausencia de motivo razonable, denuncia ante autoridad competente a alguna persona, atribuyéndole la comisión de un hecho punible”.

Sin embargo, un sector doctrinario postula la pluriofensividad de este delito, destacando con ello que sujetos pasivos de este delito lo son tanto el Estado como el directamente perjudicado en su honor⁵²³.

Ahora bien, si se tiene en cuenta que el Derecho penal tiene como uno de sus principios rectores al de mínima intervención, el cual establece que aquél debe cumplir un rol de protección de los bienes jurídicos de manera subsidiaria frente a las demás ramas del Derecho, podría sostenerse que, de una lectura coherente del ordenamiento jurídico peruano, la protección del honor del ofendido con una imputación falsa se encontraría resguardada adecuadamente por lo establecido en la normativas civiles peruanas, por tanto, se sostiene que, el único bien jurídico protegido en el art. 402 CP de Perú es el correcto funcionamiento de la Administración de Justicia.

Además, si se atiende a la práctica judicial peruana, si bien es cierto, el proceso penal puede realizarse en un periodo menor de tiempo, los afectados por este tipo de

⁵²² Véase el primer considerando de la sentencia recaída sobre el Exp. n° 97-264-24255OI-JPO2 Ucayali, de fecha 3 de junio de 1998.

⁵²³ Incluso, Salas Arenas llega a sostener que el honor sería el bien jurídico protegido de manera preferente en el delito de denuncia calumniosa. Véase: SALAS ARENAS, *Acumulación de pretensiones derivadas de la pluriofensividad en el delito de denuncia calumniosa propia*, p. 7.

denuncias prefieren acudir a la vía civil ya que ven en ella la posibilidad de poder tener por garantizada un mayor monto indemnizatorio.

La norma penal establece como verbo rector a la palabra “denunciar”, el empleo de este término no es del todo afortunado, ya que, de por sí el término denunciar hace referencia implícita a acto de poner en conocimiento de la autoridad competente –autoridad policial o representante del Ministerio Público– sobre la posible comisión de un hecho ilícito.

Y es que la denuncia, para ser considerada como tal tiene que hacerse ante la autoridad competente para la averiguación de los hechos.

Siendo ello así, la referencia a “la autoridad”⁵²⁴ estaría demás pues se encontraría implícita dentro de lo que conlleva el acto de denunciar.

Por ello, se considera que debería sustituirse el término “denuncia” por “atribuye” o “imputa”, ya que son palabras que permiten; i) que se les pueda delimitar en cuanto a la persona ante la que debe realizarse dicho acto, en este caso, ante una autoridad; y, ii) que se les pueda delimitar en cuanto a su contenido, en este caso, un hecho punible.

Inciendiando en la naturaleza de la autoridad a la que se hace referencia en el art. 402 CP de Perú, no se ha expresado si ésta tiene que ser judicial o si puede serlo una administrativa, ni siquiera se ha hecho mención a que ésta por razones de su cargo debe ser la encargada de proceder a la averiguación de los hechos.

La carencia de una buena técnica legislativa en materia penal en Perú se pone de manifiesto en cosas como la antes mencionada, en donde vacíos tan importantes obligan a que la doctrina y los órganos jurisdiccionales a través de su jurisprudencia intenten dar sentido a la norma penal.

Pues bien, a pesar de que el precepto legal no lo haya establecido expresamente, se debe interpretar que la autoridad a la que se refiere es aquella que es competente para la

⁵²⁴ La norma estipula una sanción penal para: “[e]l que denuncia *a la* autoridad...”, se entiende que existe un error en la redacción del tipo penal y que, en vez del “*a la*” debería leerse “*ante la*”.

averiguación de los hechos imputados, en este caso, la autoridad policial o el fiscal que se encontraba de turno al momento de la presentación de la denuncia.

Otro aspecto a estudiar es el referido a la expresión “a sabiendas de que no se ha cometido o que ha sido cometido por persona distinta a la denunciada”, mediante esta frase se intenta destacar el carácter eminentemente doloso de este delito al emplear el término “a sabiendas”, mientras que, la referencia a que el hecho punible imputado no se haya cometido o que haya sido cometido por persona distinta destaca la falsedad objetiva de la imputación, más precisamente, hace mención a supuestos de una falsedad objetiva total.

De la exigencia de una falsedad objetiva total puede desprenderse la idea de que, si el hecho punible imputado se hubiese producido, pero el relato de los hechos hubiese sido modificado con el fin de que encajase en una infracción penal más grave, se estaría ante una conducta impune. Lo mismo ocurriría si el sujeto omitiese declarar aspectos esenciales vinculados, por ejemplo, con circunstancias que pudiesen dar lugar a que se sepa que el sujeto denunciado pudo haber actuado en legítima defensa.

Se ha mencionado que al igual que en el caso español, este delito es doloso, por tanto, es necesario que el sujeto que realiza la denuncia tenga conocimiento de la falsedad de la imputación y que, además, tenga conocimiento que la autoridad ante la que se ha realizado la denuncia es la competente para proceder a averiguar los hechos. De este modo, si el sujeto hubiese realizado la imputación pensando que los hechos punibles sí fueron realizados por el sujeto denunciado, no sería sancionado penalmente, ya que no puede cometerse este delito por culpa.

Con respecto a la exigencia de requisitos de procedibilidad, como puede apreciarse, la norma penal peruana no exige que se cuente con una sentencia absolutoria firme ni con ningún tipo de auto de sobreseimiento también firme, situación que permite, al menos teóricamente, que se pueda denunciar por este delito sin necesidad de que exista un pronunciamiento firme previo vinculado a la causa primigenia.

Sin embargo, tal como lo ha destacado CIEZA MORA al transcribir una conversación que tuvo con CARO JHON, en la práctica, para que pueda procederse por la denuncia

calumniosa será necesario que la causa inicial haya concluido mediante una sentencia absolutoria que haya sido emitida en ese sentido debido a una insuficiencia probatoria –y no en virtud del *in dubio pro reo*–, pues sólo mediante este tipo de resolución judicial se deja en claro que no se ha podido enervar la presunción de inocencia del sujeto al que se le atribuyó la comisión de una conducta ilícita⁵²⁵.

Dado que en la práctica judicial peruana no es común que se inicien procesos por este delito se procederá a estudiar algunos aspectos vinculados a la responsabilidad civil por denuncia calumniosa –los cuales tienen una mayor incidencia de procesos–.

La norma civil establece que sólo será indemnizable aquella imputación ante autoridad competente de la comisión de un hecho punible a un tercero, ante autoridad competente, que se haya producido a sabiendas de la falsedad de la imputación o cuando haya existido ausencia de motivo razonable para denunciar.

El término “a sabiendas” empleado en el art. 1982 CC de Perú, hace referencia al conocimiento sobre la falsedad de la imputación.

Debe precisarse, que a la persona demandada le corresponde descargar la falta de dolo, mientras que, la falsedad de la imputación o la ausencia de motivos razonables debe ser probada por el demandante.

Si el demandante no ha proporcionado pruebas que fehacientemente acrediten la falsedad de la imputación, el órgano jurisdiccional no podría pretender que el demandado desvirtúe el conocimiento de esa “supuesta” falsedad fáctica de la imputación que no ha sido debidamente probada.

No es razonable, bajo ninguna circunstancia, que se realice una presunción de falsedad de la imputación basada en la absolución del sujeto procesado por el delito “supuestamente” falsamente atribuido, ni tampoco en el sobreseimiento o archivo de la denuncia formulada. Y es que como se recuerda, no necesariamente toda sentencia penal absolutoria lo es de este modo porque sea falsa.

⁵²⁵ CIEZA MORA, *Diálogo con la jurisprudencia*, núm. 165, 2012, p. 6.

Por tanto, puede afirmarse categóricamente que no toda sentencia penal absolutoria podrá dar lugar a una responsabilidad civil por denuncia calumniosa contra el denunciante cuya denuncia fue desestimada⁵²⁶.

Probablemente, los medios probatorios más contundentes para acreditar la falsedad de la imputación, y, con ello lograr la indemnización por la denuncia calumniosa, sean los obtenidos en función de una sentencia condenatoria por el delito de denuncia calumniosa, sin embargo, de esperar su obtención, se correría el riesgo de que la acción indemnizatoria haya prescrito para ese entonces –el plazo es de dos años– debido a la demora propia del proceso penal.

A modo de comentario puede destacarse que, la protección civil del honor que se brinda a la persona que supuestamente ha sido imputada falsamente como autora de un ilícito penal es bastante adecuada, ya que permite que aquélla pueda obtener, al menos, un resarcimiento económico mayor por los daños que se le causaron a consecuencia de la imputación espuria.

Es pertinente reiterar que, en la práctica judicial peruana, son pocos o nulos los procesos que se inician por este tipo de delitos, ello debido a la estructura del proceso penal peruano que pone en manos de los representantes del Ministerio Público el monopolio de la acción penal, con lo que, ellos son quienes se encargan de formalizar las denuncias, y para hacerlo claro ésta, al menos, indiciariamente creen que los hechos imputados probablemente han ocurrido.

Así pues, en no pocas ocasiones, la falsedad de la imputación quedará cubierta por la denuncia formalizada del Fiscal, y aquélla que eventualmente saliese a relucir en el *iter* proceso no causaría ningún efecto perjudicial para el falso imputador debido a que, además de escudarse en el hecho de que quien formalizó la denuncia fue el Fiscal, por la demora usual de los procesos penales, la acción penal probablemente para ese entonces, ya haya prescrito.

⁵²⁶ CIEZA MORA, *Diálogo con la jurisprudencia*, núm. 165, 2012, p. 62.

Ahora bien, habiendo detectado las particularidades propias de la regulación peruana puede indicarse que, no se considera que existan elementos de dicha regulación que puedan extrapolarse a la española.

Por el contrario, de lo hasta aquí estudiado podría sostenerse que existen elementos de la regulación española que pueden extrapolarse a la peruana. Así por ejemplo, se considera que, cabría proponer, a fin de evitar una impunidad tan manifiesta, la inclusión de un requisito de procedibilidad en la regulación peruana como el establecido en la norma española referido a que para proceder por este delito sea necesario contar previamente con la emisión de una sentencia absolutoria firme o auto de sobreseimiento también firme de la causa principal, ya que ello evitaría que el delito prescribiera antes de que se obtuviese ese tipo de resoluciones, y, de alguna forma, permitiría una persecución más eficiente de este delito.

TERCERA PARTE:
El delito de acusación y
denuncia falsas en la
experiencia española. ¿Un
delito con poca incidencia?

§ 8. ESTUDIO EMPÍRICO VINCULADO A LOS REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD

I.- INTRODUCCIÓN

En el sexto capítulo se estudiaron aspectos teóricos vinculados a las dos condiciones de procedibilidad contenidas en el art. 456.2 CP, correspondiendo realizar ahora un estudio sobre la forma en la que en la práctica se produce la concurrencia de cada una de dichas condiciones.

Para ello, recurriendo a la información obtenible por medio del buscador de jurisprudencia del CENDOJ, se ha realizado un estudio sobre las sentencias firmes vinculadas al delito de acusación y denuncia falsas emitidas durante el periodo comprendido entre los años 2011 y 2015.

Se ha elegido limitar el estudio únicamente a las sentencias que tuviesen la condición de firmes debido a que permiten obtener un dato definitivo cuando se vincula con factores como el sentido del fallo.

Se descartó la posibilidad de realizar un estudio sobre autos de sobreseimiento vinculados al delito estudiado debido a que el buscador de jurisprudencia revisado no arroja datos importantes sobre este tipo de resoluciones judiciales emitidas por las Audiencias Provinciales y los Juzgados de lo Penal –por ejemplo, en el año 2015 sólo arroja ocho resoluciones judiciales de este tipo–, con lo que se impide la obtención de datos significativos que permitan hacer un estudio apropiado al respecto.

Los términos empleados para delimitar la búsqueda fueron los siguientes: “acusación falsa” O “acusación falsas” O “acusaciones falsas” O “denuncia falsa” O “denuncia falsas” O “denuncias falsas”.

Dicha búsqueda arrojó 2622 sentencias, las cuáles fueron revisadas en su totalidad, determinándose que únicamente 542 eran relevantes.

Si bien es cierto, sólo el 20.7% de las sentencias revisadas tratan sobre el tema estudiado, no es menos cierto que los términos elegidos han permitido tener el campo de búsqueda más amplio, permitiendo abarcar todas las sentencias existentes en el

buscador del CENDOJ que traten sobre el delito estudiado, pues necesariamente alguno de esos términos se tiene que emplear en la redacción de la sentencia⁵²⁷.

Dado que el tamaño de población (542 sentencias) y el tamaño de muestra (542 sentencias) es el mismo, el margen de error se redujo al mínimo.

La recopilación de datos culminó el 18 de junio de 2016⁵²⁸. Es importante destacar este aspecto, pues puede darse el caso que con el pasar del tiempo se hayan incorporado al repertorio jurisprudencial del CENDOJ más sentencias sobre este delito en el período de tiempo delimitado para el estudio pragmático –sobre todo, sentencias emitidas en el año 2015–.

A continuación, se expondrán los datos obtenidos vinculados a las condiciones de procedibilidad del delito estudiado.

II.- CON RELACIÓN AL PROCESO ANTERIOR

El art. 456 CP exige para la persecución de este delito que se emita previamente una sentencia firme o auto firme de sobreseimiento o archivo respecto al proceso iniciado en contra del falso denunciado o acusado.

Siendo ello así, se analizará por años –del 2011 al 2015– el porcentaje de cada una de esos tipos de resoluciones judiciales firmes que dieron origen a procesos de acusación y denuncia falsas que culminaron con una sentencia también firme.

⁵²⁷ Durante la elección de los términos se analizó la posibilidad de elegir otros términos como criterios de búsqueda, como por ejemplo el término “456”, sin embargo, de la lectura de las sentencias que tratan sobre el delito estudiado se pudo observar que no todas hacían referencia al art. 456, por tanto, a pesar de que con la elección de ese término y el término “falsa” se podría haber delimitado la búsqueda aún más, se ha preferido usar los términos arriba indicados ya que pretende abarcar incluso a aquellas sentencias que no hacen referencia al art. del CP correspondiente, lo cual nos permite obtener un mayor número de datos para el estudio empírico.

⁵²⁸ En los siguientes capítulos de la tesis se realizarán también estudios pragmáticos sobre algunos aspectos vinculados al delito estudiado, por lo que se deja en claro que, la base de datos que ha permitido la obtención de la información expuesta en el octavo, es la misma que la que se empleará para la realización de la investigación de los siguientes capítulos.

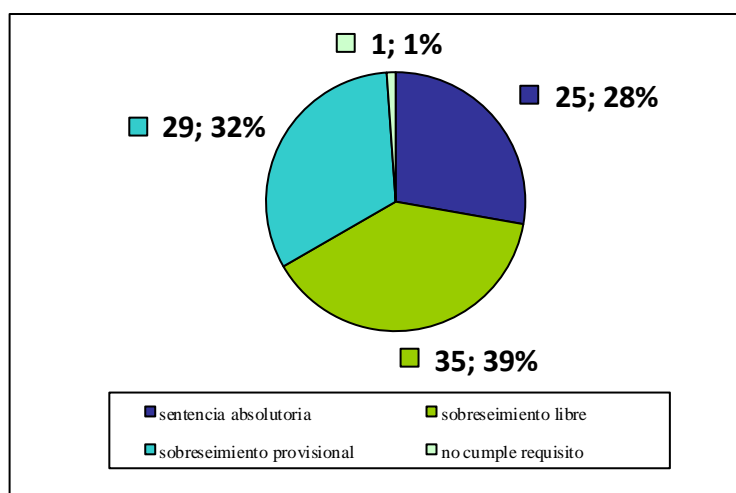
Asimismo, se estudiará la vinculación de cada uno de esos tipos de resoluciones judiciales con un aspecto tan importante como el número de condenas y absoluciones firmes.

1. Datos obtenidos respecto a procesos fenecidos en el año 2011

En el año 2011 se recabaron 90 sentencias firmes vinculadas al delito de acusación y denuncia falsas.

- a) *Según el tipo de resolución judicial que dio origen al proceso penal por el delito de acusación y denuncia falsas que feneció en el año 2011*

Se mostrará en el gráfico que sigue cuántos de los procesos penales vinculados al delito de acusación y denuncia falsas tuvieron su inicio a partir de sentencias absolutorias, autos de sobreseimiento provisional y autos de sobreseimiento libre emitidos en los procesos primigenios surgidos por las imputaciones realizadas por sujetos que posteriormente fueron imputados como autores de un delito de acusación y denuncia falsas.



De las 90 causas penales sobre el delito de acusación y denuncia falsas que culminaron en el año 2011: 25 (28%) tuvieron su origen en sentencias absolutorias del proceso primigenio; 35 (39%) en autos de sobreseimiento libre; 29 (32%) en autos de sobreseimiento provisional; y, 1 (1%) no cumplía con el requisito de procedibilidad⁵²⁹.

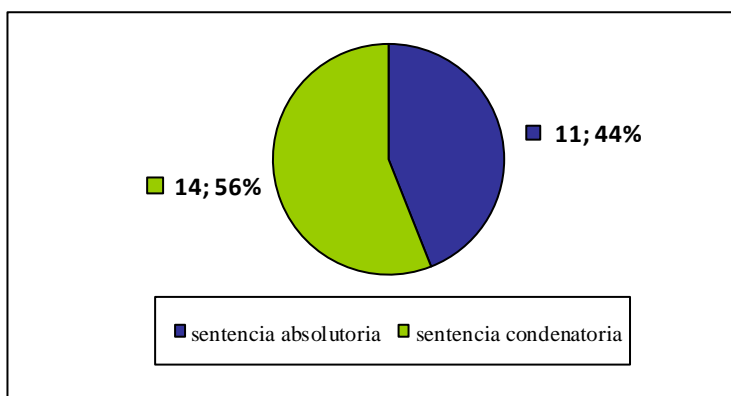
Los datos obtenidos sirven para demostrar la importancia que tiene en la práctica judicial la aceptación del sobreseimiento provisional firme como resolución judicial que puede dar cumplimiento al primer requisito exigido en el art. 456.2 CP para la persecución de este tipo de delitos, ya que el 32% de las causas culminadas por este delito tuvieron su origen en el fin de procesos penales que culminaron con este tipo de resoluciones judiciales.

Ahora bien, conociendo el número de procesos penales por este delito –que fenecieron en el año 2011– en función del tipo de resolución judicial que dio cumplimiento a la primera exigencia del art. 456.2 CP cabe preguntarse la relación de condenas y absoluciones emitidas en relación al tipo de resolución judicial firme del proceso primigenio.

Así pues, a continuación se realizará un estudio sobre dicha relación con el fin de poder determinar, por ejemplo, ¿cuál es el tipo de resolución judicial recaída sobre el proceso primigenio que dar lugar a más condenas?, ¿cuál es el tipo de resolución judicial recaída sobre el proceso primigenio que dar lugar a más absoluciones?, entre otras cosas.

⁵²⁹ En este caso se emitió una sentencia absolutoria. Debido a que el delito supuestamente imputado falsamente y el delito de acusación y denuncias se encontraban siendo dilucidados en la misma causa, con lo que no se cumplía con el requisito exigido por el art 456.2 CP.

b) *Sentido del fallo a raíz de sentencia absolutoria firme en causa principal*

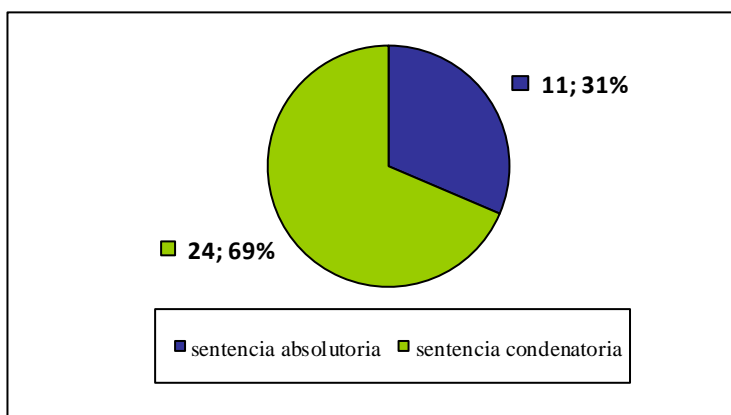


De las 25 causas sobre el delito de acusación y denuncia falsas que tuvieron fin mediante sentencias firmes en el año 2011 y se iniciaron a consecuencia de una sentencia absolutoria de la causa principal: 14 (56%) culminaron con una sentencia condenatoria, mientras que, 11 (44%) culminaron con una sentencia absolutoria.

En ese sentido, más de la tercera parte de los procesos penales por el delito de acusación y denuncia falsas que tuvieron su origen en una sentencia absolutoria de la causa principal culminaron con una absolución.

Los datos obtenidos permiten exponer dos ideas fundamentales: i) que no toda sentencia absolutoria es de esta forma porque necesariamente fue falsa la imputación realizada, y, ii) que no toda sentencia absolutoria que dé origen a un proceso por acusación y denuncia falsas culminará necesariamente con una sentencia condenatoria por dicho delito.

- c) *Sentido del fallo a raíz de auto de sobreseimiento libre firme en causa principal*



De las 35 causas penales vinculadas al delito de acusación y denuncia falsas que tuvieron fin mediante sentencias firmes en el año 2011, y que, se iniciaron a consecuencia de un auto de sobreseimiento libre de la causa primigenia: 24 (69%) culminaron con sentencias condenatorias, mientras que, 11 (31%) culminaron con sentencias absolutorias.

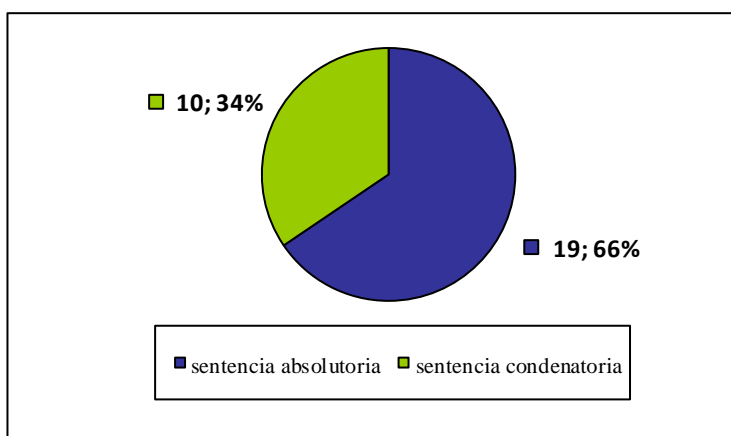
Debe recordarse que un proceso penal culmina con un auto de sobreseimiento libre porque no ha existido mérito para que se pueda dar apertura al juicio oral, ya que se ha establecido que: no hay indicios racionales de haberse perpetrado el hecho delictivo que fue imputado; el hecho no es constitutivo de delito; o, aparecen exentos de responsabilidad criminal los procesados como autores, cómplices o encubridores (falta de elemento personal).

Así pues, mediante la emisión de este tipo de resoluciones judiciales se descarta, de cierta forma, la veracidad objetiva de las imputaciones.

En contraste con lo antes mencionado, si del sumario hubiesen emergido algunos elementos que hiciesen pensar que la imputación se ajustaba a la realidad –es decir que tenía un sustrato fáctico verdadero–, se hubiese procedido con la apertura del juicio oral, independientemente del hecho de que después de ésta el órgano jurisdiccional hubiese dictaminado la absolución del imputado.

Por los datos obtenidos, pareciera que el porcentaje mayor de sentencias condenatorias por el delito de acusación y denuncia falsas que tiene su origen en autor de sobreseimiento libres en comparación con las que surgen a consecuencia de sentencias absolutorias, se debe a una detección “temprana” de la falsedad objetiva de la imputación.

- d) *Sentido del fallo a raíz de auto de sobreseimiento provisional firme en causa principal*



De las 29 causas sobre el delito de acusación y denuncia falsas que tuvieron fin mediante sentencias firmes en el año 2011 y se iniciaron a consecuencia de un auto de sobreseimiento provisional de la causa principal: 10 (34%) culminaron con una sentencia condenatoria, mientras que, 19 (66%) culminaron con una sentencia absolutoria.

Como se puede observar, en comparación con los datos obtenidos en función de los otros tipos de resoluciones que pueden dar inicio al proceso por el delito estudiado, en el caso de las causas iniciadas en razón de un sobreseimiento provisional firme, la tasa de sentencias absolutorias está por encima de las condenatorias, siendo algo que sólo se produce con este tipo de resoluciones judiciales, ya que, en los otros casos, la tasa de sentencias absolutorias representan tan sólo la mitad o la tercera parte de las condenatorias.

Probablemente, la gran tasa de absoluciones que se produce en estos casos tenga que ver con la gran dificultad que representa probar la falsedad objetiva de los hechos imputados, ya que, es de recordar que los sobreseimientos provisionales no descartan por completo la veracidad de los hechos imputados, sino más bien, expresan un estado de duda temporal en el que se encuentra el juez al no haber conseguido alcanzar –mediante las diligencias de averiguación pertinentes– los elementos necesarios para entrar a juicio o para sobreseer libremente la causa.

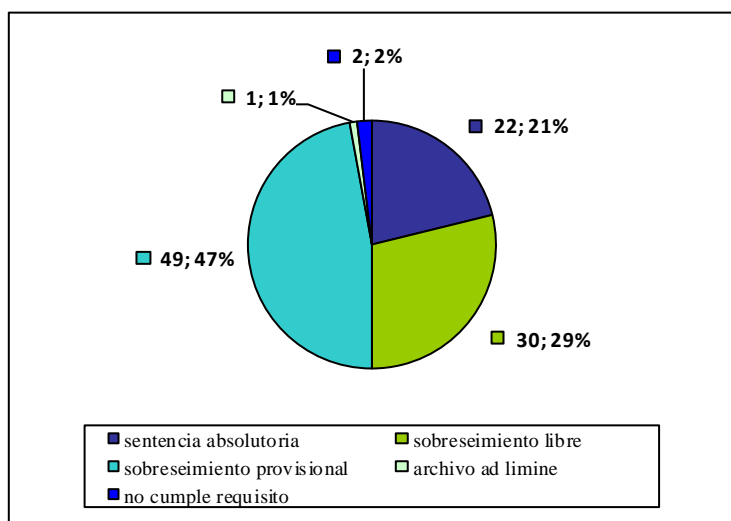
Por tanto, al no haberse excluido en el proceso primigenio la veracidad de la comisión de los hechos ilícitos imputados, se convierte en dificultosa –más no imposible– la acreditación de la falsedad objetiva de la imputación presuntamente falsa.

Como se demostrará en el décimo capítulo de este trabajo, la razón principal por la que se suele absolver por este delito en los casos en los que su origen se encuentra vinculado con un auto de sobreseimiento provisional se sustenta principalmente en la falta de acreditación de la falsedad objetiva de la imputación a consecuencia de la dificultad probatoria de este aspecto.

2. Datos obtenidos respecto a procesos fenecidos en el año 2012

En el año 2012 se recabaron 104 sentencias firmes sobre el delito de acusación y denuncia falsas.

- a) *Según el tipo de resolución judicial que dio origen al proceso penal por el delito de acusación y denuncia falsas que feneció en el año 2012*



De las 104 causas penales sobre el delito de acusación y denuncia falsas que culminaron en el año 2012: 22 (21%) tuvieron su origen en sentencias absolutorias del proceso primigenio; 30 (29%) en autos de sobreseimiento libre; 49 (47%) en autos de sobreseimiento provisional; 1 (1%) se inició por un archivo *ad limine*⁵³⁰; y, 2 (2%) no cumplían con el requisito de procedibilidad⁵³¹.

⁵³⁰ El archivo *ad limine* se produjo porque la denuncia era manifiestamente falsa. Se procesó entre otras cosas por simulación de delitos y denuncia falsas, condenándose por la simulación y absolviéndose por la acusación y denuncia falsas. El motivo de la absolución fue porque la conducta no encajaba dentro del tipo penal establecido en el art. 456 CP.

⁵³¹ En ambos casos se absolvió; en uno de ellos debido a que el antecedente era una sentencia condenatoria, y, en el otro, debido a que en el mismo juicio se estaba dilucidando si el delito presuntamente imputado se había producido o no.

Al igual que con los datos anteriores, la mayor cantidad de procesos penales resueltos por el delito de acusación y denuncia falsas tienen como antecedentes procesos que culminaron con sobreseimientos, la diferencia con respecto al año anterior, radica en que, en este año los sobreseimientos provisionales dieron inicio a más procesos por el delito estudiado que culminaron con sentencias firmes.

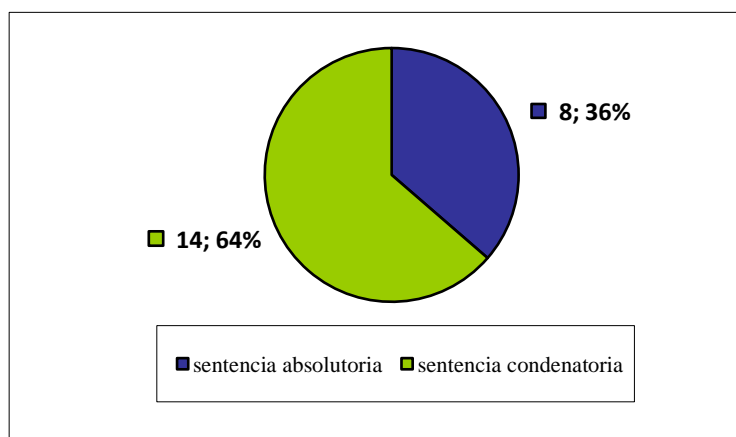
Para ser precisos, en el año 2012 culminaron 20 causas más –respecto al delito estudiado– que tuvieron su origen en un sobreseimiento provisional de la causa primigenia.

Incluso cabe mencionar, que los procesos sobre el delito estudiado culminados en el año 2012 que fueron iniciados por sentencias absolutorias y autos de sobreseimiento libre de las causas primigenias descendieron en comparación con el año anterior.

Así, en el 2012, existieron 4 procesos menos que tuvieron su origen en sentencias absolutorias firmes y 4 procesos menos que tuvieron su origen en autos de sobreseimiento libre.

A continuación, se analizará el porcentaje de absoluciones y condenas por el delito estudiado en virtud de cada uno de los tipos de resoluciones judiciales que pueden dar origen a procesos por el delito de acusación y denuncia falsas, claro está, todos ellos referidos a procesos que culminaron en el año 2012.

b) *Sentido del fallo a raíz de sentencia absolutoria firme en causa principal*



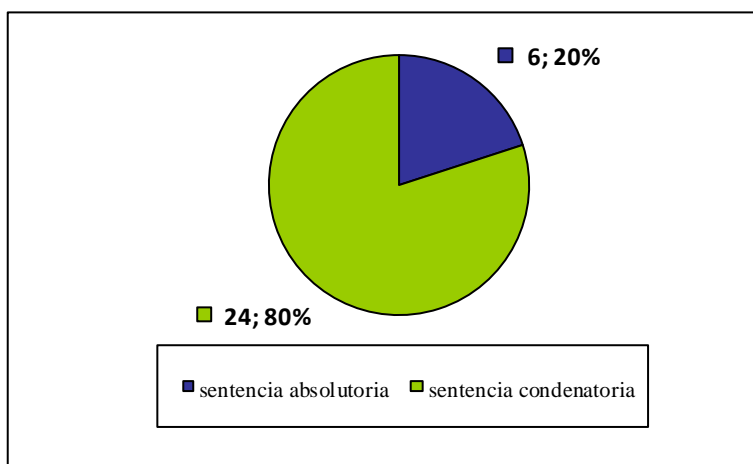
De las 22 causas sobre el delito de acusación y denuncia falsas que tuvieron fin mediante sentencias firmes en el año 2012 y que se iniciaron a consecuencia de una sentencia absolutoria de la causa principal: 14 (64%) culminaron con una sentencia condenatoria, mientras que, 8 (36%) culminaron con una sentencia absolutoria.

La proporción de datos arrojados sobre este aspecto en el año 2012 son similares a la que se obtuvo en el año 2011.

Con lo que, el porcentaje de condenas por el delito estudiado que tienen como precedente una sentencia absolutoria por la causa primigenia sigue siendo aproximadamente el doble que el de las absoluciones.

Así pues, en las dos terceras partes de estos casos la información obtenida en el proceso previo sirvió cuando menos para obtener indicios sobre la falsedad objetiva de la imputación y permitió –junto con la comprobación de la concurrencia de los otros elementos del tipo penal– la emisión de sentencias condenatorias por el delito de acusación y denuncia falsas.

- c) *Sentido del fallo a raíz de auto de sobreseimiento libre firme en causa principal*

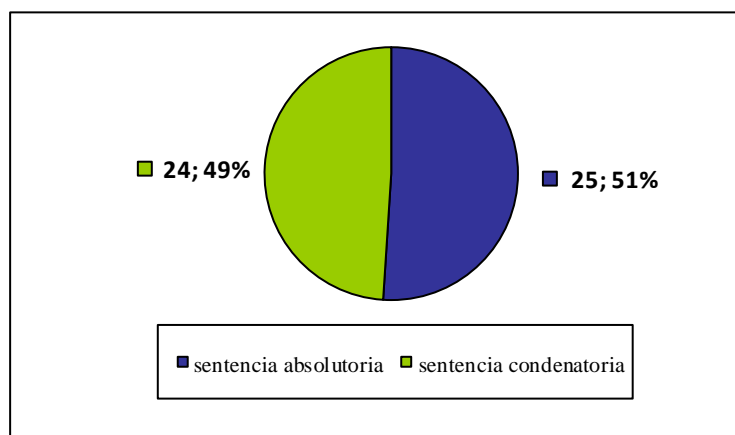


De las 30 causas sobre el delito de acusación y denuncia falsas que tuvieron fin mediante sentencias firmes en el año 2012 y que se iniciaron a consecuencia de un auto de sobreseimiento libre de la causa principal: 24 (80%) culminaron con una sentencia condenatoria, mientras que, 6 (20%) culminaron con una sentencia absolutoria.

Los datos obtenidos en el año 2012 son similares a los del año 2011 con lo que se sigue validando la idea de que los procesos que suelen iniciarse a partir de sobreseimientos libres, de alguna forma, sirven para acreditar al menos indiciariamente la falsedad objetiva de la imputación.

Afirmación que puede verse corroborada con el gran porcentaje de sentencias condenatorias versus el porcentaje exiguo de sentencias absolutorias, representando estas últimas una cuarta parte respecto de las primeras.

d) *Sentido del fallo a raíz de auto de sobreseimiento provisional firme en causa principal*



De las 49 causas sobre el delito de acusación y denuncia falsas que tuvieron fin mediante sentencias firmes en el año 2012 y se iniciaron a consecuencia de un auto de sobreseimiento provisional de la causa principal: 24 (49%) culminaron con una sentencia condenatoria, mientras que, 25 (51%) culminaron con una sentencia absolutoria.

Al contrario de los datos obtenidos en el año 2011, el porcentaje de sentencias absolutorias vinculadas a autos de sobreseimiento provisional es ligeramente superior al de sentencias condenatorias y ya no el doble como en el año anterior.

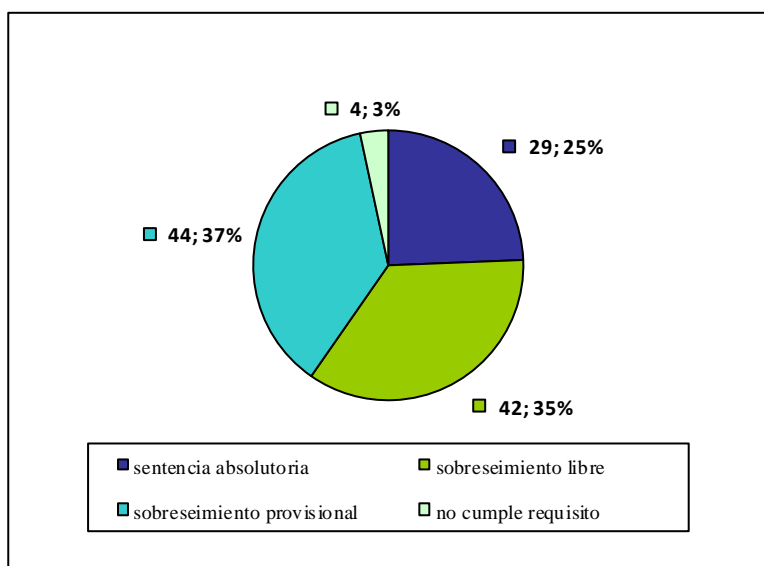
A pesar de que los datos muestran una casi igualdad de porcentajes entre las sentencias absolutorias y las condenatorias, en comparación con los otros porcentajes de sentencias absolutorias vinculadas a autos de sobreseimiento libre y sentencias absolutorias, puede observarse que el de sentencias absolutorias que parten de un auto de sobreseimiento provisional de la causa principal sigue siendo mayor que el de las emitidas en función de las otras resoluciones judiciales.

De esta forma, se puede seguir reforzando la idea de que muchos de los procesos por el delito de acusación y denuncia falsas que se inicien a partir de un auto de sobreseimiento provisional culminarán con un porcentaje importante de sentencias absolutorias debido a la dificultad probatoria que existe vinculada a la acreditación de la falsedad objetiva de la imputación.

3. Datos obtenidos respecto a procesos fenecidos en el año 2013

En el año 2013 se recabaron 119 sentencias firmes sobre el delito de acusación y denuncia falsas.

- a) *Según el tipo de resolución judicial que dio origen al proceso penal por el delito de acusación y denuncia falsas que feneció en el año 2013*



De las 119 causas penales sobre el delito de acusación y denuncia falsas que culminaron en el año 2013: 29 (24%) tuvieron su origen en sentencias absolutorias del proceso primigenio; 42 (35%) en autos de sobreseimiento libre; 44 (38%) en autos de

sobreseimiento provisional; y, 4 (3%) no cumplían con el requisito de procedibilidad⁵³².

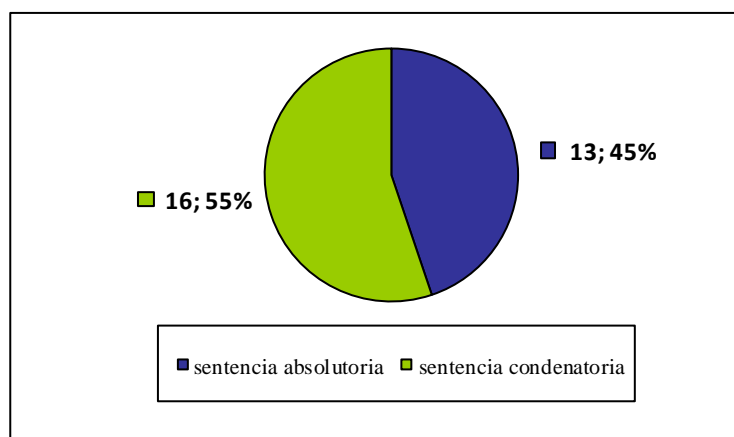
Los datos de este año siguen reflejando que la mayoría de los procesos penales culminados en el año 2013 tuvieron su antecedente en sobreseimientos firmes de las causas primigenias.

Al igual que en el año anterior, los sobreseimientos provisionales dieron inicios a más procesos por este delito que las otras resoluciones judiciales, lo cual sirve para destacar la idea de que la admisión de la posibilidad de que los sobreseimientos provisionales puedan también dar lugar a procesos por delitos de acusación y denuncia falsas es acertada, pues permiten perseguir situaciones que sin la adopción de este criterio quedarían impunes.

A continuación, se analizará el porcentaje de absoluciones y condenas por el delito estudiado, en función de cada uno de los tipos de resoluciones judiciales que pueden dar origen a procesos por el delito de acusación y denuncia falsas, claro está, todos ellos referidos a procesos que culminaron en el año 2013.

⁵³² En uno de los casos se absolvió debido a que no se cumplían con el requisito de procedibilidad debido a que no se inició un proceso por el delito imputado, ni investigaciones al respecto, ya que acudieron a las mismas dependencias judiciales los imputados brindando su versión de los hechos y la investigación giro en contra del sujeto que realizó la imputación unas horas antes; en otros dos casos, no se cumplió con este requisito dado que los delitos imputados supuestamente falsamente se estaban ventilando acumuladamente el delito de acusación y denuncia falsas; y, en otro caso, no se cumplió con el requisito debido a que el sobreseimiento libre no tenía la condición de firme, pues había sido apelado.

b) *Sentido del fallo a raíz de sentencia absolutoria firme en causa principal*



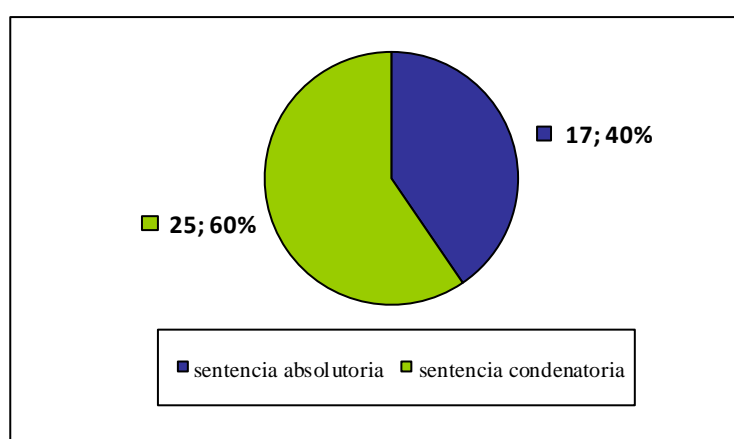
De las 29 causas penales sobre delitos de acusación y denuncia falsas que se iniciaron a consecuencia de sentencias absolutorias de las causas primigenias y que tuvieron su fin mediante sentencias firmes en el año 2013: 16 (55%) culminaron con una sentencia condenatoria, mientras que, 13 (45%) culminaron con una sentencia absolutoria.

La proporción de datos arrojados en el año 2013 mostró, al igual que en la de los años anteriores, que el porcentaje de sentencias condenatorias que se emitieron ese año y que tuvieron como antecedente sentencias absolutorias firmes en el proceso primigenio fue mayor que el de las absolutorias.

Sin embargo, la diferencia que existe en este año con respecto a los datos de los años anteriores radica en que, en el 2013, la diferencia entre las sentencias condenatorias y las absolutorias se redujo, pues en los otros años las sentencias condenatorias duplicaban a las absolutorias, mientras que, en éste tan sólo se emitieron tres sentencias condenatorias firmes más que las absolutorias.

De la interpretación de los datos obtenidos, puede desprenderse que la mayoría de los procesos por el delito estudiado que tienen su origen en sentencias absolutorias firmes de los procesos primigenios instaurados por la supuesta falsa imputación delictiva culminan con sentencias condenatorias por la comisión de delitos de acusación y denuncia falsas.

c) *Sentido del fallo a raíz de auto de sobreseimiento libre firme en causa principal*

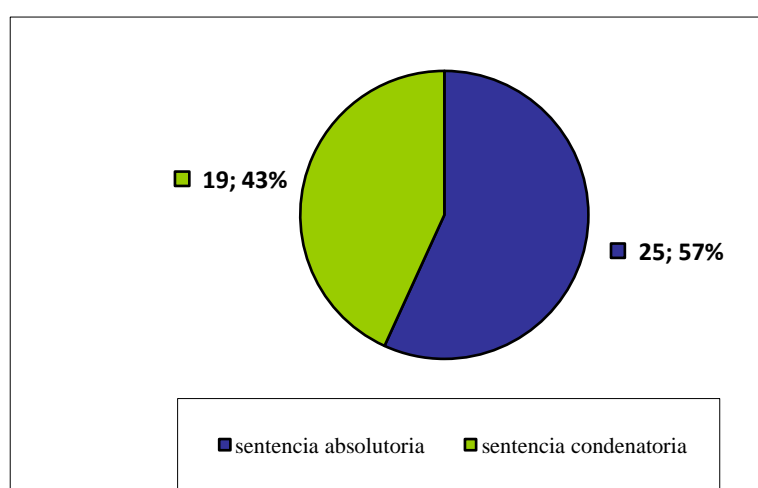


De las 42 causas sobre el delito de acusación y denuncia falsas que tuvieron fin mediante sentencias firmes en el año 2013 y que se iniciaron a consecuencia de un auto de sobreseimiento libre de la causa principal: 25 (60%) culminaron con una sentencia condenatoria, mientras que, 17 (40%) culminaron con una sentencia absoluta.

Los datos obtenidos en el año 2013 siguen arrojando un porcentaje mayor de sentencias condenatorias originadas a causa de un auto de sobreseimiento en el proceso primigenio, sin embargo, la diferencia del porcentaje entre sentencias condenatorias y absolutorias con origen en sobreseimientos provisionales de las causas iniciales se ha visto reducido en comparación con años anteriores.

A pesar de ello, se puede seguir sosteniendo la idea de que los autos de sobreseimiento libre de alguna forma proporcionan indicios sobre la falsedad objetiva de la imputación y por ello, en relación al origen de procesos vinculados a este tipo de resoluciones judiciales, existe un mayor porcentaje de sentencias condenatorias que de absolutorias sobre el delito estudiado.

d) *Sentido del fallo a raíz de auto de sobreseimiento provisional firme en causa principal*



De las 44 causas sobre el delito de acusación y denuncia falsas que tuvieron fin mediante sentencias firmes en el año 2013 y se iniciaron a consecuencia de un auto de sobreseimiento provisional de la causa principal: 19 (43%) culminaron con una sentencia condenatoria, mientras que, 25 (57%) culminaron con una sentencia absolutoria.

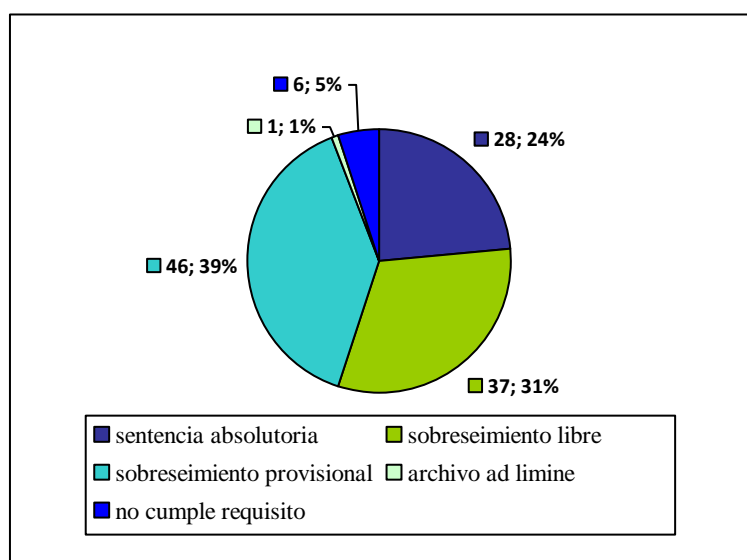
Los datos obtenidos en el año 2013 muestran una similitud a los obtenidos en el año 2012, ya que la diferencia entre el porcentaje de sentencias absolutorias vinculadas a autos de sobreseimiento provisional es ligeramente superior al de sentencias condenatorias.

Por tanto, se puede seguir observando que existe un número mayor de sentencias absolutorias que de condenatorias en los casos que tienen como origen autos de sobreseimiento provisional en las causas primigenias, lo cual, como se viene sosteniendo, se debe en no pocas ocasiones, a la dificultad probatoria que se tiene en cuanto a la acreditación de la falsedad objetiva de la imputación “presuntamente” falsa.

4. Datos obtenidos respecto a procesos fenecidos en el año 2014

En el año 2014 se recabaron 118 sentencias firmes sobre el delito de acusación y denuncia falsas.

- a) *Según el tipo de resolución judicial que dio origen al proceso penal por el delito de acusación y denuncia falsas que feneció en el año 2014*



De las 118 causas penales sobre el delito de acusación y denuncia falsas que culminaron en el año 2014: 28 (24%) tuvieron su origen en sentencias absolutorias del proceso primigenio; 37 (31%) en autos de sobreseimiento libre; 46 (39%) en autos de sobreseimiento provisional; 1 (1%) se inició por un archivo *ad*

*limine*⁵³³; y, 6 (5%) no cumplían con el requisito de procedibilidad⁵³⁴.

⁵³³ El archivo *ad limine* se produjo porque la denuncia era manifiestamente falsa. En este caso en particular se emitió una sentencia condenatoria condenando por el delito de acusación y denuncia falsas, pero en grado de tentativa. La denuncia a pesar de ser manifiestamente falsa en cuanto a la exposición fáctica de los hechos, estructuralmente era idónea para que las autoridades competentes pudieran dar inicio a las averiguaciones correspondientes. Ahora bien, es oportuno cuestionar si, una conducta de este tipo o una en el marco de una rectificación pronta del sujeto que realizó la falsa imputación que impide con ella que la investigación salga de la esfera policial, puede o no dar lugar a un delito de acusación y denuncia falsas, al menos en grado de tentativa. Al respecto, se sostiene la idea que cuando una denuncia es manifiestamente falsa, en principio, no podría dar lugar a un delito de acusación y denuncia falsas principalmente debido a la falta de idoneidad o inverosimilitud de lo denunciado, en este caso, no cabría ni siquiera la posibilidad de pensar en una tentativa punible. Ahora bien, existen supuestos en los que, la inverosimilitud de la imputación no radica en el contenido estructural sino en ciertos aspectos colaterales que permiten que la autoridad ante la que se realizó la imputación pueda detectar la falsedad de aquella, en estos supuestos, a pesar de que no se hubiese iniciado propiamente un proceso penal con su correspondiente resolución judicial que hubiese puesto fin a tal proceso, cabría la posibilidad de que se iniciase un proceso por un delito de acusación y denuncia falsas en grado de tentativa, ya que se si no hubiese detectado esa autoridad la falsedad de aquella imputación podría perfectamente haberse iniciado un proceso penal por el delito falsamente imputado –ello en concordancia con el art. 16.1 CP–. Por otro lado, existen algunos procesos en los que la investigación es archivada por la policía o por el representante del Ministerio Fiscal, en estos casos, se considera que se tendrá que atender también a la idoneidad de la imputación realizada, pues si ésta en un primer momento fuese considerada como idónea por revestir visos de verosimilitud, por más que no se hubiese iniciado un proceso penal a nivel judicial, tendría dicha imputación falsa la capacidad de ser considerada cuando menos como una tentativa del delito de acusación y denuncia falsas, ya que la configuración de los elementos del tipo se habría dado, pero, como no se instauró un proceso penal en sede judicial –lo cual impidió que se emitiera resolución judicial alguna al respecto– debido a que la denuncia fue archivada por la policía o el representante del Ministerio Público por haber detectado, después de realizar ciertas diligencias, la falsedad de la imputación, no se habría afectado esencialmente a los bienes jurídicos protegidos en el delito estudiado, debido a que las autoridades antes mencionadas mediante un accionar diligente pudieron detectar la falsedad de la imputación y con ello impedir que aquella siguiera su curso en sede judicial.

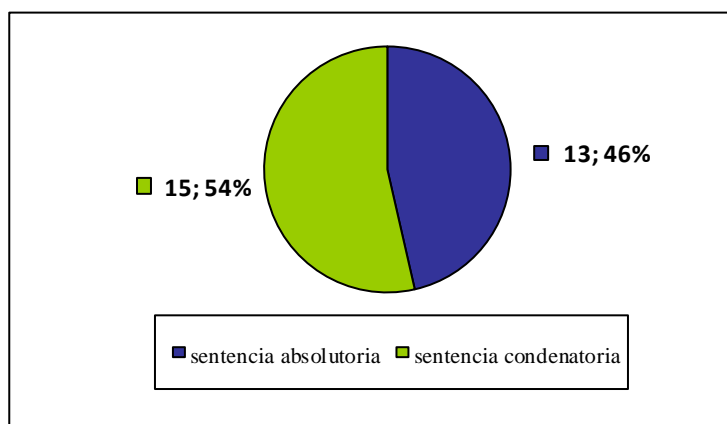
⁵³⁴ En todos los casos en los que faltó el requisito de procedibilidad se optó por absolver a los imputados. En uno de ellos, las procesadas por el delito de acusación y denuncia falsas no habían denunciado ni acusado a la persona que supuestamente había sido “denunciada” falsamente, con lo que, al no existir una denuncia realizada por parte de las procesadas, no se pudo dar inicio a ningún tipo de investigación y, al no darse inicio a ninguna investigación no se pudo emitir ningún tipo de resolución judicial que pusiese fin a dicho proceso, impidiendo todo ello a que se pudiese cumplir con el requisito de procedibilidad exigido por la norma penal estudiada –art. 456 CP–. En otro proceso, se decidió revocar la condena por el delito de acusación y denuncia falsas debido a que las diligencias practicadas se desarrollaron únicamente en sede policial, no existiendo resolución judicial firme, pues lo que se remitió al juzgado de instrucción fue el atestado por el presunto delito de denuncia falsa, debido a que el sujeto que imputó inicialmente a unos menores el hacer realizado unas pintadas en la fachada del Edificio de Correos reconoció días después ante las autoridades policiales ante las que había formulado su denuncia que lo que había manifestado no era cierto, no dando con ello oportunidad a la existencia de un procedimiento judicial derivado de la inicial comparecencia del sujeto que posteriormente fue procesado por el delito de acusación y denuncia falsas. En tres procesos no se cumplieron con el requisito de procedibilidad porque los delitos que supuestamente se habían imputado falsamente se encontraban siendo dilucidados en los mismos procesos penales por el delito de acusación y denuncia falsas, asimismo, cabe señalar que en todos ello se procedió a la absolución, debiendo destacarse que en dos de ellos las acusaciones particulares declinaron su acusación por el delito estudiado durante el juicio oral. Y finalmente, en otro de ellos, no se cumplió con el requisito de procedibilidad debido a que no se realizó una imputación de un delito ante una autoridad que por su cargo tuviese que proceder a la labor de averiguación, sino más bien, se realizó en un proceso de índole administrativa una alegación sobre una supuesta falsedad en una multa impuesta.

Al igual que en los años anteriores, la mayoría de los procesos penales culminados en el año 2014 tuvieron su antecedente en sobreseimientos firmes de las causas primigenias.

Los sobreseimientos provisionales siguen siendo las resoluciones judiciales que más se invocan para dar cumplimiento al requisito de procedibilidad exigido por el art. 456.2 CP, pues el 39% de los procesos por el delito estudiado fenecidos en el año 2014 tuvieron como antecedentes a este tipo de resoluciones judiciales, es decir, más de la tercera parte de los procesos se iniciaron a partir de la obtención de este tipo de autos.

A continuación, se analizará el porcentaje de absoluciones y condenas por el delito estudiado, en función de cada uno de los tipos de resoluciones judiciales que pueden dar origen a procesos por el delito de acusación y denuncia falsas, claro está, todos ellos referidos a procesos que culminaron en el año 2014.

b) *Sentido del fallo a raíz de sentencia absolutoria firme en causa principal*



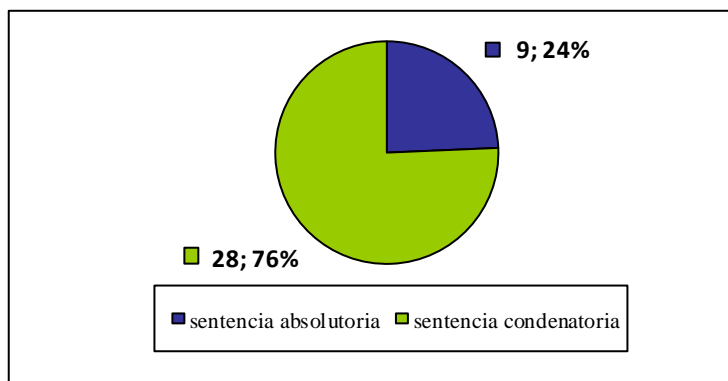
De las 28 causas sobre el delito de acusación y denuncia falsas que tuvieron su mediante sentencias firmes en el año 2014 y que se iniciaron a consecuencia de una sentencia absolutoria de la

causa principal: 15 (54%) culminaron con una sentencia condenatoria, mientras que, 13 (46%) culminaron con una sentencia absolutoria.

Al igual que los años anteriores, la emisión de sentencias condenatorias por el delito de acusación y denuncia falsas, que tuvieron su origen en sentencias absolutorias del proceso primigenio, sigue siendo mayor que la de las absolutorias.

Sin embargo, en el año 2014 se redujo significativamente la diferencia en cantidad entre ambos tipos de sentencias en comparación con los primeros años analizados.

- c) *Sentido del fallo a raíz de auto de sobreseimiento libre firme en causa principal*



De las 37 causas sobre el delito de acusación y denuncia falsas que tuvieron fin mediante sentencias firmes en el año 2014 y que se iniciaron a consecuencia de un auto de sobreseimiento libre de la causa principal: 28 (76%) culminaron con una sentencia condenatoria, mientras que, 9 (24%) culminaron con una sentencia absolutoria.

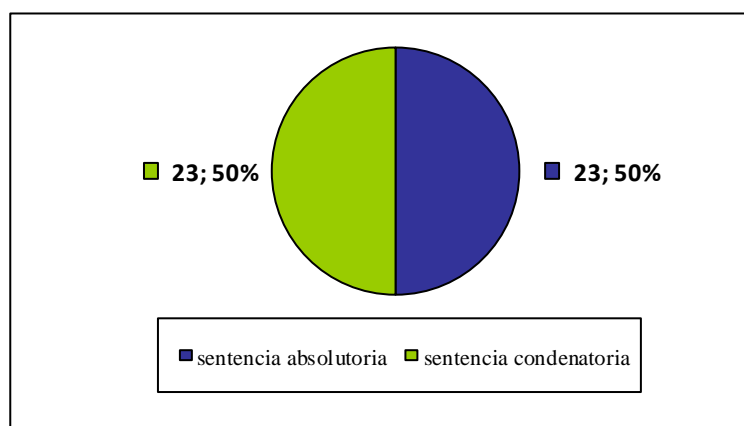
Los datos obtenidos sobre este aspecto siguen siendo similares a los de los años anteriores, principalmente a los de los años 2011 y

2012, ello debido a que el porcentaje de diferencia entre las sentencias condenatorias y las absolutorias es bastante pronunciado como lo fue en aquellos años.

Hasta este punto, puede observarse que en comparación con las otras resoluciones judiciales que pueden dar origen a un proceso por el delito de acusación y denuncia falsas, las que tienen su origen en sobreseimientos firmes son las que en mayor proporción culminan con una sentencia condenatoria.

Y es que, como se viene reiterando, la falsedad objetiva de la imputación probablemente se acredita indiciariamente con mayor facilidad en los procesos que han culminado con sobreseimiento libres, mientras que, en casos como los que culminan en sentencias absolutorias, no siempre permitirán tener por acreditada dicha falsedad, ya que en no pocas ocasiones la absolución se ha producido por la aplicación del *in dubio pro reo*, con lo que no se ha descartado la posibilidad de que la imputación haya sido objetivamente verdadera.

d) *Sentido del fallo a raíz de auto de sobreseimiento provisional firme en causa principal*



De las 46 causas penales fenecidas en el año 2014 vinculadas a delitos de acusación y denuncia falsas que tuvieron su origen en autos de sobreseimiento provisional firmes respecto a los procesos primigenios: 23 (50%) culminaron con sentencias condenatorias firmes, mientras que, 23 (50%) culminaron con sentencias absolutorias firmes.

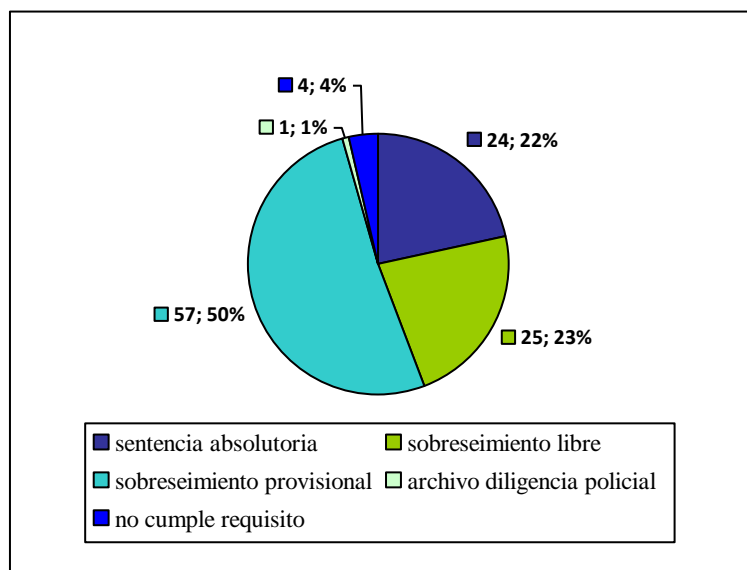
Los datos obtenidos este año se asemejan en parte a los alcanzados en el año 2012, con la salvedad de que en el año 2014 el porcentaje de las sentencias absolutorias firmes y condenatorias firmes por el delito de acusación y denuncia falsas vinculadas en su origen a autos de sobreseimiento provisional de sus causas primigenias, es el mismo.

Como puede deducirse de los datos obtenidos sobre este tipo de resoluciones judiciales, el gran porcentaje de absoluciones vinculadas a autos de sobreseimiento provisional de las causas primigenias se relaciona casi directamente con la dificultad probatoria que se tiene en cuanto a la acreditación de la falsedad objetiva de la imputación en casos que tienen su origen en este tipo de resoluciones judiciales.

5. Datos obtenidos respecto a procesos fenecidos en el año 2015

En el año 2015 se recabaron 111 sentencias firmes sobre el delito de acusación y denuncia falsas.

- a) *Según el tipo de resolución judicial que dio origen al proceso penal por el delito de acusación y denuncia falsas que feneció en el año 2015*



De las 111 causas penales sobre el delito de acusación y denuncia falsas que culminaron en el año 2015: 24 (21%) tuvieron su origen en sentencias absolutorias del proceso primigenio; 24 (22%) en autos de sobreseimiento libre; 57 (50%) en autos de sobreseimiento provisional; 1 (1%) en un archivo diligencia policial⁵³⁵; y, 4 (4%) no cumplían con el requisito de procedibilidad⁵³⁶.

⁵³⁵ En este caso se emitió una condena por el delito de acusación y denuncia falsas en grado de tentativa debido a que un sujeto llamó al 112 para reportar que su ex pareja estaba agrediendo a su menor hijo, sin embargo, cuando los agentes de la guardia civil acudieron al domicilio de la señora imputada, pudieron constatar que dicha imputación era falsa, no produciéndose por tanto diligencias posteriores, lo que fundamentó que la sanción de este delito fuese solo en grado de tentativa. Objetivamente la denuncia formulada fue idónea para lograr que los mencionados agentes acudieran al lugar de los hechos para esclarecer si se produjeron o no los hechos imputados, lo cual permite que la conducta pueda ser subsumida en un delito de acusación y denuncia falsas, pero en grado de tentativa.

⁵³⁶ En cuatro causas penales se detectó que no se cumplía con los requisitos de procedibilidad, en todas ellas se procedió a la absolución. En tres de ellas no se cumplió con el mencionado requisito debido a que los supuestos delitos falsamente imputados estaban siendo dilucidados acumulativamente con los delitos de acusación y denuncia falsas, y en la restante, no se cumplió con el requisito de procedibilidad debido a que el sujeto no había realizado la imputación ante una autoridad, con lo que no se inició ni investigaciones ni un proceso penal a raíz de aquella.

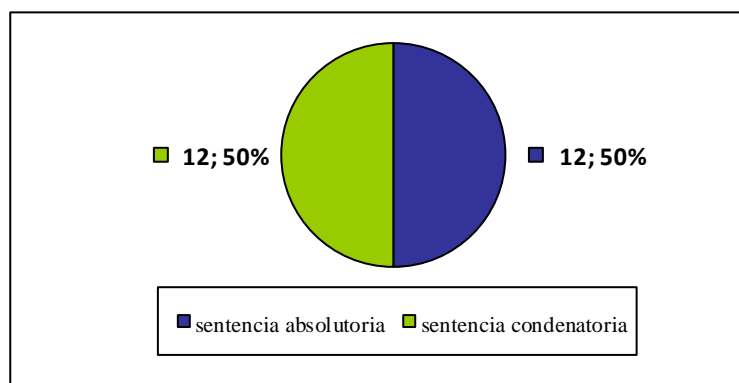
Los datos de este año confirman la tendencia de que la mayoría de procesos penales iniciados por este delito tienen su antecedente en sobreseimientos firmes de las causas primigenias.

Al igual que en los tres años anteriores, los sobreseimientos provisionales dieron inicios a más procesos por este delito que las otras resoluciones judiciales, aunque, en el año 2015 se produjo un incremento del porcentaje de procesos iniciados por este tipo de resoluciones, teniendo una tasa de más del 50% de procesos iniciados vinculados a sobreseimientos provisionales de las causas primigenias, es decir, más de la mitad de los procesos penales sobre el delito estudiado que fenecieron en el año 2015 tuvieron su origen en sobreseimientos provisionales firmes de las causas principales.

Tras el estudio de las sentencias firmes sobre este delito, emitidas en el período comprendido por los años 2011-2015, puede observarse con certeza cuán importante ha sido la admisión de la idea de que un sobreseimiento provisional de la causa primigenia puede ser válida para cumplir el requisito de procedibilidad exigido en el art 456.2 CP y dar inicio a un proceso por el delito de acusación y denuncia falsas.

A continuación, se analizará el porcentaje de absoluciones y condenas por el delito estudiado –que fenecieron en el año 2015–, en función de cada uno de los tipos de resoluciones judiciales que pueden dar origen a procesos por el delito de acusación y denuncia falsas.

b) *Sentido del fallo a raíz de sentencia absolutoria firme en causa principal*



De las 24 causas penales fenecidas en el año 2015 vinculadas a delitos de acusación y denuncia falsas que tuvieron su origen en sentencias absolutorias firmes respecto a los procesos primigenios: 12 (50%) culminaron con sentencias condenatorias firmes, y, otras 12 (50%) culminaron a consecuencia de la emisión de sentencias absolutorias firmes.

En el año 2015, al contrario de los anteriores, se logró alcanzar un porcentaje igualitario de sentencias absolutorias y condenatorias.

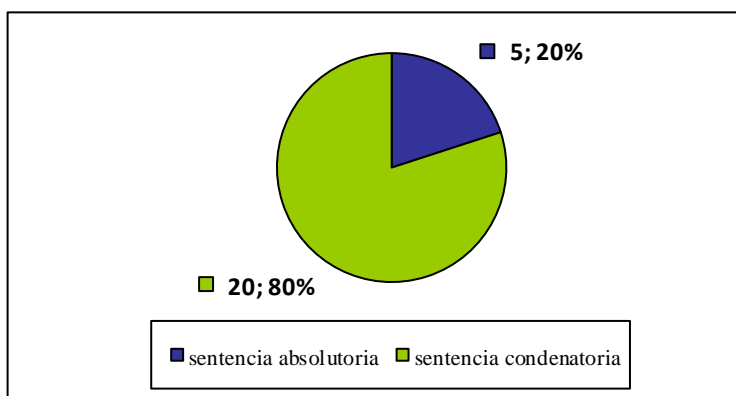
Así pues, en contraste con años anteriores, no existió en éste diferencia alguna sobre la incidencia de ambos tipos de fallos firmes –condenatorios y absolutorios–, pues fenecieron por igual, en ambos sentidos, 12 causas penales instauradas por el delito de acusación y denuncia falsas.

De una comparativa con respecto a los datos arrojados en años anteriores, se puede confirmar una tendencia hacia la equiparación entre el porcentaje de condenas y absoluciones por este delito vinculadas, en su origen, a sentencias absolutorias firmes recaídas sobre los procesos penales que se instauraron a consecuencia de una supuesta falsa imputación.

Antes, y con mayor incidencia en el año 2012, se produjo una proporción elevada de sentencias condenatorias –casi el doble que el de las absolutorias– procedentes de sentencias absolutorias de procesos iniciales instaurados debido a imputaciones falsas.

Esta proporción, poco a poco se ha ido equilibrando hasta lograr alcanza porcentajes casi iguales entre ambos tipos de sentencias. Es decir, por cada condena que se produjo en el 2015 vinculada en su origen a la resolución judicial mencionada, se emitió también una sentencia absolutoria al respecto.

c) *Sentido del fallo a raíz de auto de sobreseimiento libre firme en causa principal*



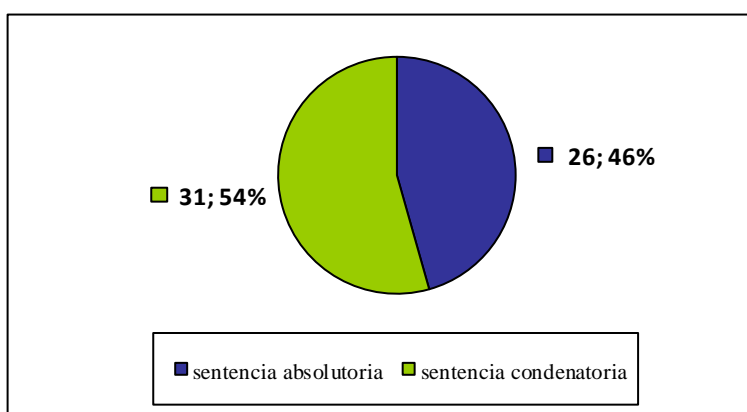
De las 25 causas sobre el delito de acusación y denuncias falsas que tuvieron fin mediante sentencias firmes en el año 2015 y que se iniciaron a consecuencia de un auto de sobreseimiento libre de la causa principal: 20 (80%) culminaron con una sentencia condenatoria, mientras que, 5 (20%) culminaron con una sentencia absolutoria.

Los datos obtenidos en el 2015 confirman la tendencia de que el número de condenas por el delito de acusación y denuncia falsas que tienen como origen procesos que culminaron con autos firmes

de sobreseimientos libres es tres veces superior al de las absoluciones.

De ello se puede corroborar la idea de que, en estos casos, se obtienen con mayor facilidad indicios en el proceso primigenio que permiten establecer la acreditación de la falsedad de la imputación en el proceso de acusación y denuncia falsas.

d) *Sentido del fallo a raíz de auto de sobreseimiento provisional firme en causa principal*



De las 57 causas sobre el delito de acusación y denuncia falsas que tuvieron fin mediante sentencias firmes en el 2015 y se iniciaron a consecuencia de un auto de sobreseimiento provisional de la causa principal: 31 (54%) culminaron con una sentencia condenatoria, mientras que, 26 (46%) culminaron con una sentencia absolutoria.

Este es el primer año en el que el porcentaje de sentencias condenatorias por este delito vinculadas a sobreseimientos provisionales en las causas primigenias es ligeramente superior al de absoluciones.

Los datos obtenidos confirman la tendencia de igualación de porcentajes de condenas y absoluciones por el delito de acusación

y denuncia falsas vinculadas a resoluciones judiciales como la comentada.

Al ser el sobreseimiento provisional la resolución judicial que por excelencia suele dar origen a procesos por el delito estudiado, el porcentaje de absoluciones que emiten no es nada despreciable. Por ejemplo, de las 111 causas sobre el delito de acusación y denuncia falsas fenecidas en el 2015, 26 de las que tuvieron su origen en sobreseimientos provisionales de las causas primigenias, culminaron con sentencias absolutorias, las cuales representan aproximadamente un 23,42% del total de las sentencias emitidas ese año.

III.- CON RELACIÓN AL INICIO DEL PROCESO DE ACUSACIÓN Y DENUNCIA FALSAS

El art. 456.2 CP, además de la condición de procedibilidad antes estudiada exige también para la persecución de este delito que, el Juez o Tribunal que conoció de la infracción supuestamente falsamente imputada mande, de oficio, a proceder contra el denunciado o acusador siempre que de la causa principal resulten indicios bastantes de la falsedad de la imputación, ello sin perjuicio de que el hecho pueda también perseguirse previa denuncia del ofendido.

La inclusión de la posibilidad de persecución de este delito por medio de denuncia del ofendido, fue una novedad introducida en el CP vigente, que permitió destacar la pluriofensividad de este delito, brindándole una herramienta adecuada al ofendido para que mediante su denuncia pueda hacer que se persiga esta conducta delictiva, ya que antes se entendía que sólo cuando el Juez o Tribunal mandaban a proceder de oficio contra el denunciado o acusador podía iniciarse un proceso por este delito.

Se dice que en la práctica judicial son pocos los procesos por este delito que se inician de oficio, por ello, se ha visto necesario realizar una recopilación de datos –en base a las 542 sentencias firmes obtenidas de la revisión de las sentencias vinculadas a este delito que fueron emitidas durante los años 2011 y 2015– para observar cuántos procesos se

inician de oficio y cuántos mediante previa denuncia del ofendido, y así poder determinar si la inclusión de esta cláusula en la norma penal ha sido beneficiosa o no.

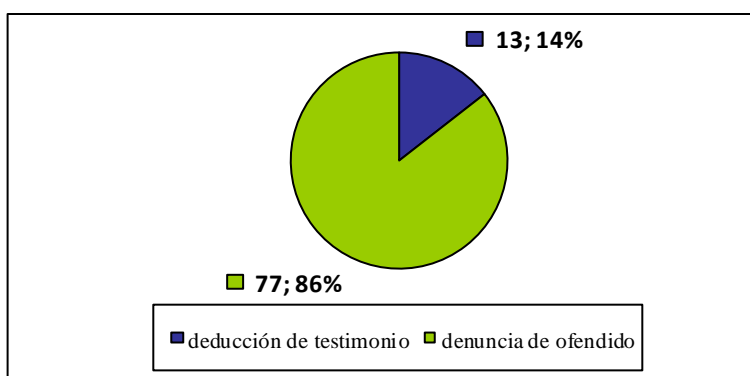
Asimismo, se expondrán los datos en torno al porcentaje de sentencias absolutorias y condenatorias en función del sujeto que dio inicio al proceso por el delito de acusación y denuncia falsas. Y, finalmente, se exhibirán los datos obtenidos sobre el tipo de resolución judicial que usualmente suele emplea el Juez o Tribunal para mandar a deducir testimonio y el tipo de resolución judicial que usualmente espera obtener el ofendido para dar inicio a su denuncia por el delito estudiado.

1. Datos obtenidos respecto a procesos fenecidos en el año 2011

En el año 2011 se recabaron 90 sentencias firmes sobre el delito de acusación y denuncia falsas.

a) *Según la forma en la que se dio inicio la persecución del delito de acusación y denuncia falsa en el año 2011*

Se mostrará en el gráfico que sigue, cuántos de esos procesos tuvieron su inicio a partir de una deducción de testimonio por parte del Juez o Tribunal que conoció de la causa principal, y cuántos tuvieron su origen a partir de la denuncia del ofendido.



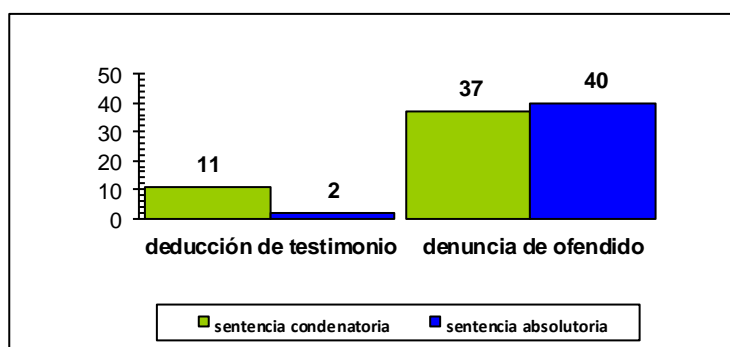
De las 90 causas penales sobre el delito de acusación y denuncia falsas que culminaron en el año 2011: 77 (86%) tuvieron su

origen en una denuncia por parte del ofendido, mientras que, sólo 13 (14%) lo tuvieron a partir de la deducción de testimonio por parte del órgano jurisdiccional que conoció de la causa principal.

Con sólo analizar esta muestra, se puede percibir la gran repercusión que ha tenido la inclusión en la parte final del art. 456.2 CP de la posibilidad de que este delito sea perseguible previa denuncia del ofendido, ya que más del 85% de los procesos vinculados al delito estudiado que fenecieron en el 2011 se persiguieron previa denuncia del ofendido, de exigirse necesariamente contar con la deducción del testimonio del órgano jurisdiccional que dilucido la causa principal para poder procederse a investigar la posible comisión de este ilícito penal, muchos de estos casos hubiesen quedado impunes.

b) *Según la vinculación entre el sentido de fallo y la forma en la que se da inicio la persecución del delito de acusación y denuncia falsas en el año 2011*

Se mostrará en el gráfico de barras que sigue el porcentaje de sentencias condenatorias y absolutorias firmes vinculadas al delito estudiado y emitidas en el año 2011 en función de la forma en la que se dio inicio al proceso penal por el delito de acusación y denuncia falsas.



De los 90 procesos penales por delitos de acusación y denuncia falsas que culminaron en el 2011: i) 77 fueron perseguidos porque el ofendido cumplió con denunciar por ese delito, de ellas, 37 (48%) culminaron con sentencias condenatorias, mientras que, 40 (52%) terminaron con la emisión de una sentencia absolutoria al respecto; y, ii) 13 se iniciaron debido a la deducción de testimonio que ordenó el órgano jurisdiccional que conoció de la causa principal, de ellas, 11 (85%) culminaron el proceso con sentencias condenatorias firmes, mientras que, tan sólo 2 (15%) culminaron con la emisión de sentencias absolutorias firmes.

Sobre los procesos penales que iniciaron previa denuncia del ofendido y que culminaron con una sentencia firme en el año 2011, aproximadamente poco más del 50% de ellos culminaron en una absolución. Es decir, uno de cada dos procesos penales que surgieron de bajo estas condiciones culminaron con una sentencia condenatoria, ya que se acreditó fehacientemente en ellas la falsedad de la imputación y el conocimiento que sobre ésta tenía el sujeto que denunció o acusó.

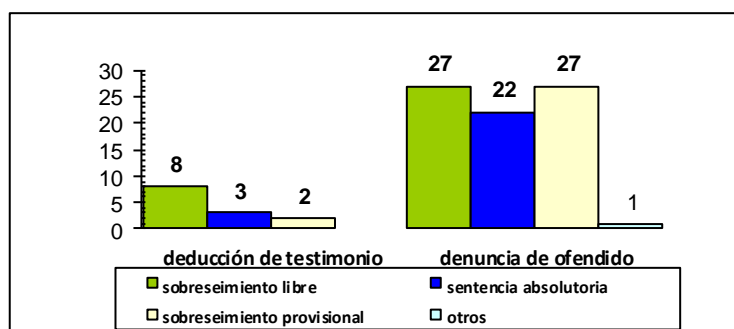
Por otro lado, de los datos obtenidos puede verificarse que la mayoría de procesos que iniciaron debido a la deducción de testimonio ordenada por el órgano jurisdiccional que conoció de la causa principal, a pesar de ser pocos, culminaron en un gran porcentaje con sentencias condenatorias por el delito estudiado.

Probablemente, la gran tasa de condenas a partir de la deducción del testimonio se debe al hecho de que, para realizar dicha deducción es necesario previamente que el órgano jurisdiccional haya percibido indicios bastantes de la falsedad de la imputación, con lo que, si bien es cierto, no necesariamente se tendrá que concluir el posterior proceso por el delito de acusación y denuncia falsas con una sentencia condenatoria, no es menos cierto que, la deducción de testimonio implicará la percepción de indicios de

falsedad, lo cual facilitará, de cierta forma, la acreditación de la falsedad de la imputación y del conocimiento que el sujeto tenía de ella.

Tal como se indicó en el apartado concerniente a la deducción de testimonio, los indicios bastantes de la falsedad de la imputación se encuentran referidos no a los de la falsedad objetiva de la imputación, ya que se entiende que en esos casos aquellos de por sí ya deberían de concurrir, sino más bien, a los indicios de un posible conocimiento de la falsedad por parte del sujeto que realizó una imputación que es tenida como objetivamente falsa o con gran probabilidad de serlo.

- c) *Según la vinculación entre el tipo de resolución judicial que dio fin a la causa primigenia y la forma en la que se da inicio la persecución del delito de acusación y denuncia falsas en el año 2011*



De los 77 procesos penales por el delito estudiado que se iniciaron a consecuencia de denuncias formuladas por los ofendidos: 27 (35%) se formularon después de que los ofendidos contaron con sobreseimientos libres firmes que les favorecían; 22 (29%) se hicieron después de que los ofendidos contaron con sentencias absolutorias firmes; 27 (35%) se realizaron una vez que los ofendidos contaron con autos de sobreseimiento provisional a su

favor; y, finalmente, 1 (1%) se interpuso sin cumplir con el primer requisito de procedibilidad exigido por el art. 456.2 CP.

Así pues, puede observarse que, en cuanto a los procesos por este delito fenecidos en el año 2011, más de las dos terceras partes de los ofendidos interpusieron las denuncias por la posible comisión de esos delitos contando para ello con autos de sobreseimiento firmes, lo cual sirve para destacar que: i) muchos de los procesos penales iniciados por denuncia de los ofendidos con las supuestas imputaciones falsas tienen su origen en autos de sobreseimiento provisional, lo que permite reiterar la importancia de la admisión de la posibilidad de perseguibilidad de este delito a través de la verificación de la concurrencia de un auto de sobreseimiento de este tipo; y, ii) la admisión de la posibilidad de persecución de este delito previa denuncia del ofendido permite sancionar conductas que, de otra forma, quedarían impunes.

En cuanto a los 13 procesos penales por el delito estudiado que se iniciaron a consecuencia de una deducción de testimonio ordenada por el órgano jurisdiccional que conoció la causa principal: 8 (62%) se encontraron vinculados a autos de sobreseimiento libre firmes; 3 (23%) a sentencias absolutorias firmes; y, 2 (15%) a autos de sobreseimiento provisional firmes.

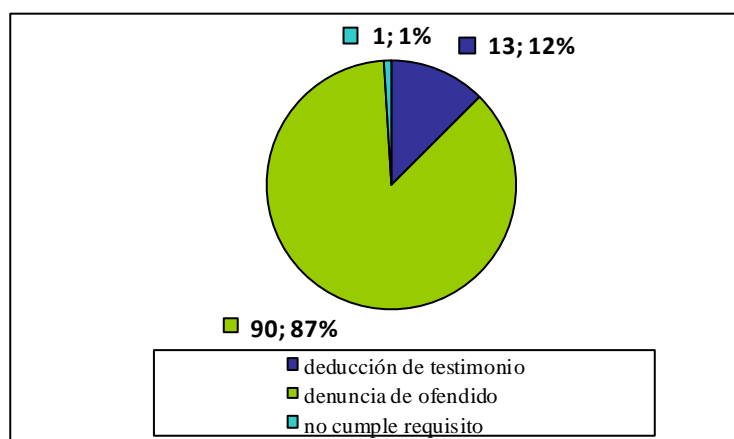
La información obtenida al respecto permite inferir que el órgano jurisdiccional que ventiló la causa primigenia suele detectar los indicios bastantes de la falsedad de la imputación con mayor facilidad en los procesos que han culminado con autos de sobreseimiento libre o con sentencias absolutorias firmes.

2. Datos obtenidos respecto a procesos fenecidos en el año 2012

En el año 2012 se recabaron 104 sentencias firmes sobre el delito de acusación y denuncia falsas.

a) *Según la forma en la que se dio inicio la persecución del delito de acusación y denuncia falsa en el año 2012*

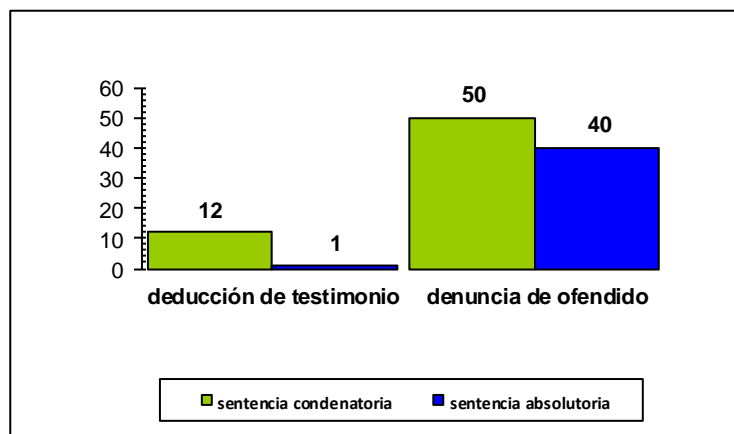
Se mostrará en el gráfico que sigue cuántos de esos procesos tuvieron su inicio a partir de una deducción de testimonio por parte del Juez o Tribunal que conoció de la causa principal, y cuántos tuvieron su origen a partir de la denuncia del ofendido.



De las 104 causas penales sobre el delito de acusación y denuncia falsas que culminaron en el año 2012: 90 (86%) tuvieron su origen en una denuncia por parte del ofendido; 13 (13%) se ocasionaron a partir de la deducción de testimonio por parte del órgano jurisdiccional que conoció de la causa principal; y, 1 (1%) no cumplió con el requisito de procedibilidad, ya que ni se dedujo testimonio ni el ofendido denunció.

Al igual que como ocurrió en el año anterior, casi un 90% de las causas penales fenecidas en el 2011 por este delito se iniciaron previa denuncia del ofendido, lo cual demuestra el gran impacto positivo que ha tenido –en el plano de la práctica judicial– la inclusión de la posibilidad de que este delito se pueda perseguir previa denuncia del ofendido.

- b) *Según la vinculación entre el sentido de fallo y la forma en la que se da inicio la persecución del delito de acusación y denuncia falsas en el año 2012*



De los 104 procesos penales por delitos de acusación y denuncia falsas que culminaron en el 2012: i) 90 fueron perseguidos porque el ofendido cumplió con denunciar por ese delito, de ellas, 50 (56%) culminaron con sentencias condenatorias, mientras que, 40 (44%) terminaron con la emisión de una sentencia absolutoria al respecto; y, ii) 13 se iniciaron debido a la deducción de testimonio que ordenó el órgano jurisdiccional que conoció de la causa principal, de ellas, 12 (92%) culminaron el proceso con una sentencia condenatoria firme, mientras que, tan sólo 1 (8%) culminó con la emisión de una sentencia absolutoria firme.

De los datos obtenidos se observa que en este año se produjo un incremento de la emisión de sentencias condenatorias vinculadas en su inicio a denuncias previas del ofendido.

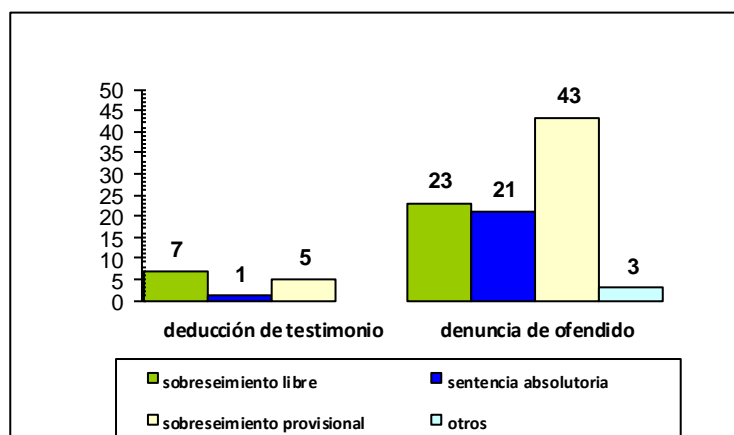
Sin embargo, la distancia porcentual entre ambos tipos de resoluciones judiciales –de condenas y absoluciones– no es muy grande, lo cual permite que se pueda proponer el siguiente enunciado: uno de cada dos procesos penales vinculados a delitos

de acusación y denuncia falsas culminará con una sentencia absolutoria.

Por otro lado, de los procesos penales instaurados sobre este delito –culminados en el 2011– que se iniciaron mediante deducción de testimonio ordenada por el órgano jurisdiccional que conoció de la causa principal, poco más del 90 % de ellos culminaron con una sentencia condenatoria firme.

Lo antes mencionado, permite corroborar que los procesos penales sobre este delito, que nacen debido a la deducción de testimonio, se instauran contando desde un primer momento con indicios bastantes sobre la falsedad de la imputación, lo cual conlleva a que un gran porcentaje de ellos siempre culminen con la emisión de sentencias condenatorias firmes.

- c) *Según la vinculación entre el tipo de resolución judicial que dio fin a la causa primigenia y la forma en la que se da inicio la persecución del delito de acusación y denuncia falsas en el año 2012*



De los 90 procesos penales por el delito estudiado que se iniciaron a consecuencia de denuncias formuladas por los ofendidos: 23 (26%) se formularon después de que los ofendidos contaron con

sobreseimientos libres firmes que les favorecían; 21 (23%) se hicieron después de que los ofendidos contaron con sentencias absolutorias firmes; 43 (48%) se realizaron una vez que los ofendidos contaron con autos de sobreseimiento provisional a su favor; y, finalmente, 3 (3%) se interpusieron sin cumplir con el primer requisito de procedibilidad exigido por el art. 456.2 CP.

Al contrario que el año anterior, en éste casi la mitad de los procesos fenecidos que se iniciaron a partir de denuncias formuladas por los ofendidos se hicieron después de que los sujetos ofendidos obtuvieron un sobreseimiento provisional firme.

En cuanto a los 11 procesos penales por el delito estudiado que se iniciaron a consecuencia de una deducción de testimonio ordenada por el órgano jurisdiccional que conoció la causa principal: 7 (54%) se encontraron vinculados a autos de sobreseimiento libre firmes; 1 (8%) a sentencias absolutorias firmes; y, 5 (38%) a autos de sobreseimientos provisional firmes.

En este año se produjo un incremento de deducciones de testimonio, por la presunta comisión del ilícito estudiado, a partir de sobreseimientos provisionales firmes; este dato es importante, ya que a pesar de que en conjunto se deducen más testimonios a partir de sentencias absolutorias y autos de sobreseimiento libre que de autos de sobreseimiento provisional, el órgano jurisdiccional no ha dejado de lado la relevancia de la posibilidad del inicio de procesos penales por el delito estudiado —ocasionados por su mandato de deducción de testimonio— cuando del sumario vinculado al proceso iniciado por el supuesto delito falsamente imputado no se hayan obtenido los elementos necesarios para sobreseer libremente dicha causa, de lo que se puede desprender que en ese tipo de procesos penales se estaba mucho más cercano a un sobreseimiento libre que a un juicio oral,

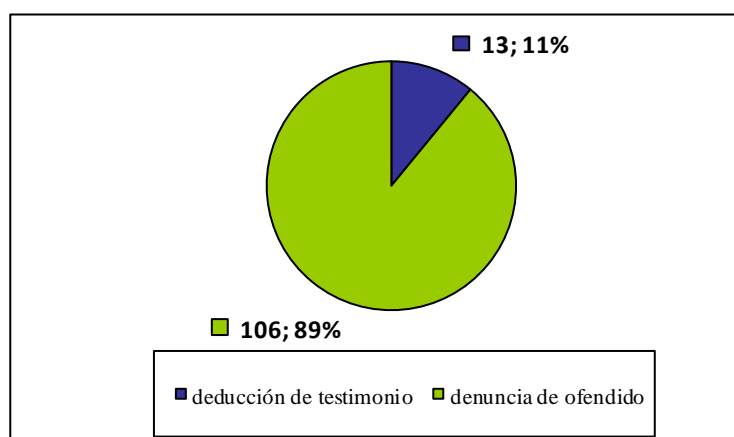
por ello la deducción de testimonio ordenada por el órgano jurisdiccional que conoció aquel proceso penal.

3. Datos obtenidos respecto a procesos fenecidos en el año 2013

En el año 2013 se recabaron 119 sentencias firmes sobre el delito de acusación y denuncia falsas.

a) *Según la forma en la que se dio inicio la persecución del delito de acusación y denuncia falsa en el año 2012*

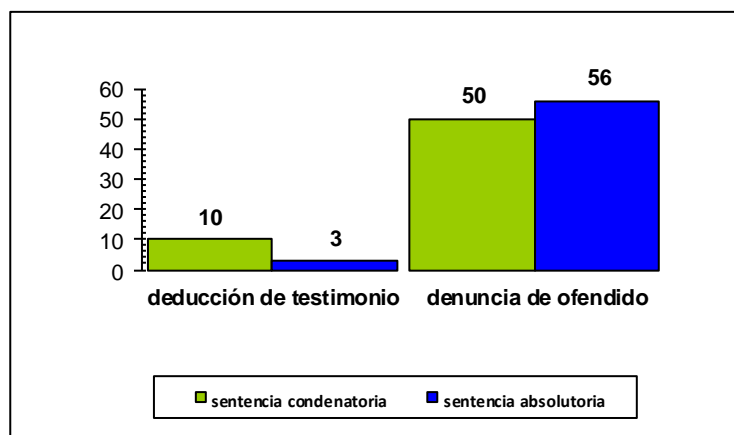
Se mostrará en el gráfico que sigue, cuántos de esos procesos tuvieron su inicio a partir de una deducción de testimonio por parte del Juez o Tribunal que conoció de la causa principal, y cuántos tuvieron su origen a partir de la denuncia del ofendido.



De las 119 causas penales sobre el delito de acusación y denuncia falsas que culminaron en el año 2013: 106 (89%) tuvieron su origen en una denuncia por parte del ofendido; y, 13 (11%) se ocasionaron a partir de la deducción de testimonio por parte del órgano jurisdiccional que conoció de la causa principal.

Al igual que en años anteriores, el porcentaje de procesos iniciados previa denuncia del ofendido es de casi el 90%.

- b) *Según la vinculación entre el sentido de fallo y la forma en la que se da inicio la persecución del delito de acusación y denuncia falsas en el año 2013*



De los 119 procesos penales por delitos de acusación y denuncia falsas que culminaron en el 2013: i) 106 fueron perseguidos porque el ofendido cumplió con denunciar por ese delito, de ellas, 50 (47%) culminaron con sentencias condenatorias, mientras que, 56 (53%) terminaron con la emisión de una sentencia absolutoria al respecto; y, ii) 13 se iniciaron debido a la deducción de testimonio que ordenó el órgano jurisdiccional que conoció de la causa principal, de ellas, 10 (77%) culminaron el proceso con una sentencia condenatoria firme, mientras que, tan sólo 3 (23%) culminó con la emisión de una sentencia absolutoria firme.

Al contrario de los años anteriores, en este año se produjo un mayor porcentaje de sentencias absolutorias que de sentencias condenatorias firmes vinculadas a procesos penales fenecidos sobre este delito que fueron iniciados a consecuencia de las denuncias previas de los ofendidos.

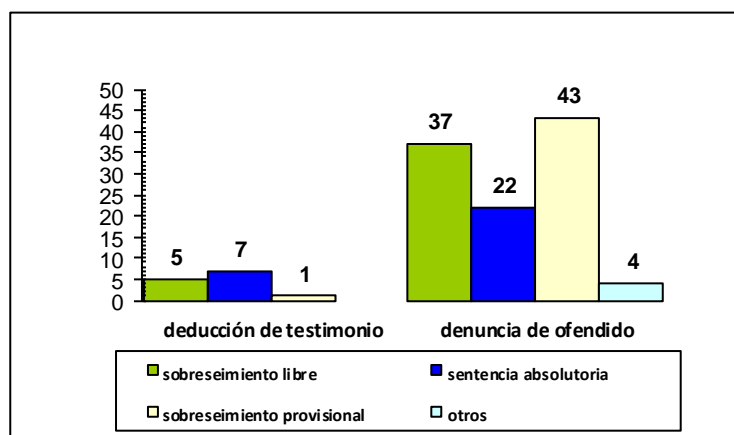
A pesar de este incremento, la distancia porcentual entre ambos tipos de resoluciones judiciales –de condenas y absoluciones– no es muy grande, lo cual permite que se siga validando el enunciado

propuesto referido a que: uno de cada dos procesos penales vinculados a delitos de acusación y denuncia falsas culminará con una sentencia absolutoria.

En cuanto a los 13 procesos penales instaurados sobre este delito –fenecidos en el año 2013– que se iniciaron mediante deducción de testimonio ordenada por el órgano jurisdiccional que conoció de la causa principal, aproximadamente el 80% de ellos culminaron con una sentencia condenatoria firme.

Lo cual permite percibir la elevada tasa de condenas a partir de procesos penales por este delito iniciados debido a la deducción del testimonio. Así pues, aproximadamente 4 de cada 5 procesos penales que se inicien de esa forma culminarán con una sentencia condenatoria firme.

- c) *Según la vinculación entre el tipo de resolución judicial que dio fin a la causa primigenia y la forma en la que se da inicio la persecución del delito de acusación y denuncia falsas en el año 2013*



De los 119 procesos penales por el delito estudiado que se iniciaron a consecuencia de denuncias formuladas por los ofendidos: 37 (35%) se formularon después de que los ofendidos

contaron con sobreseimientos libres firmes que les favorecían; 22 (21%) se hicieron después de que los ofendidos contaron con sentencias absolutorias firmes; 43 (40%) se realizaron una vez que los ofendidos contaron con autos de sobreseimiento provisional a su favor; y, finalmente, 4 (4%) se interpusieron sin cumplir con el primer requisito de procedibilidad exigido por el art. 456.2 CP.

En este año, al igual que en el anterior, la mayoría de procesos penales fenecidos vinculados al delito estudiado que se iniciaron a consecuencia de las denuncias previas de los ofendidos se realizaron después de que estos obtuvieron autos de sobreseimiento provisional en los procesos penales que se les habían instaurado en su contra.

Sin embargo, la diferencia porcentual entre el número de procesos penales iniciados de esta forma y los que se iniciaron después de haber obtenido un auto de sobreseimiento libre no es tan pronunciada –es un tan sólo de un 5 %– como lo fue en el 2012.

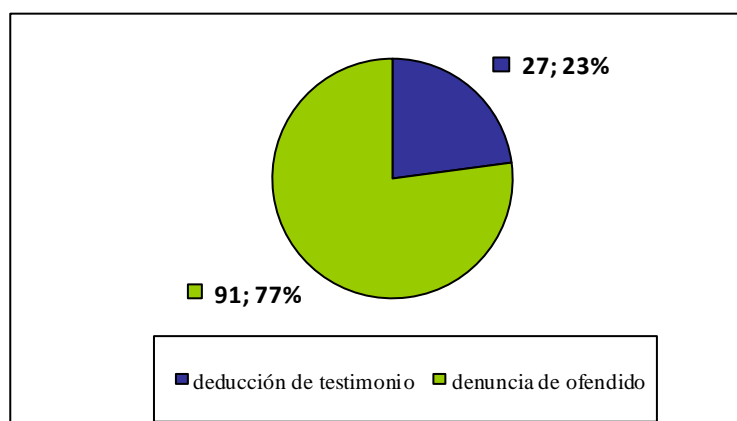
En cuanto a los 13 procesos penales por el delito estudiado que se iniciaron a consecuencia de una deducción de testimonio ordenada por el órgano jurisdiccional que conoció la causa principal: 5 (38%) se encontraron vinculados a autos de sobreseimiento libre firmes; 7 (54%) a sentencias absolutorias firmes; y, 1 (8%) a autos de sobreseimiento provisional firmes.

En este año, las deducciones de testimonio a partir de sobreseimientos provisionales firmes se redujeron sustancialmente en comparación con la de años anteriores, siendo destacable también, el incremento de deducciones de testimonio vinculadas a sentencias absolutorias firmes.

4. Datos obtenidos respecto a procesos fenecidos en el año 2014

En el año 2014 se recabaron 118 sentencias firmes sobre el delito de acusación y denuncia falsas.

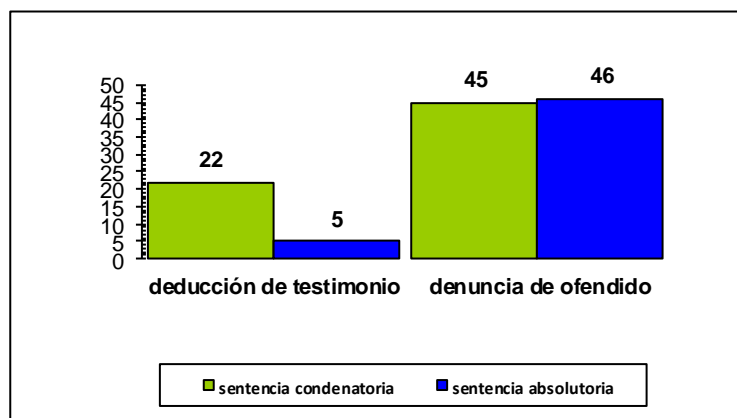
- a) *Según la forma en la que se dio inicio la persecución del delito de acusación y denuncia falsa en el año 2014*



De las 118 causas penales sobre el delito de acusación y denuncia falsas que culminaron en el año 2014: 91 (77%) tuvieron su origen en una denuncia por parte del ofendido; y, 27 (23%) se ocasionaron a partir de la deducción de testimonio por parte del órgano jurisdiccional que conoció de la causa principal.

Al igual que en los años anteriores los procesos penales que fenecieron ese año por el delito estudiado fueron perseguido principalmente a consecuencia de las denuncias formuladas por los ofendidos con la imputación presuntamente falsa de un delito.

- b) *Según la vinculación entre el sentido de fallo y la forma en la que se da inicio la persecución del delito de acusación y denuncia falsas en el año 2014*



De los 118 procesos penales por delitos de acusación y denuncia falsas que culminaron en el 2014: i) 91 fueron perseguidos porque el ofendido cumplió con denunciar por ese delito, de ellas, 45 (49%) culminaron con sentencias condenatorias, mientras que, 46 (51%) terminaron con la emisión de una sentencia absolutoria al respecto; y, ii) 27 se iniciaron debido a la deducción de testimonio que ordenó el órgano jurisdiccional que conoció de la causa principal, de ellas, 22 (81%) culminaron el proceso con una sentencia condenatoria firme, mientras que, tan sólo 5 (19%) culminaron con la emisión de sentencias absolutorias firmes.

De los datos obtenidos se observa que en este año se produjo casi una emisión de un número similar de sentencias condenatorias y absolutorias vinculadas en su inicio a denuncias previas del ofendido.

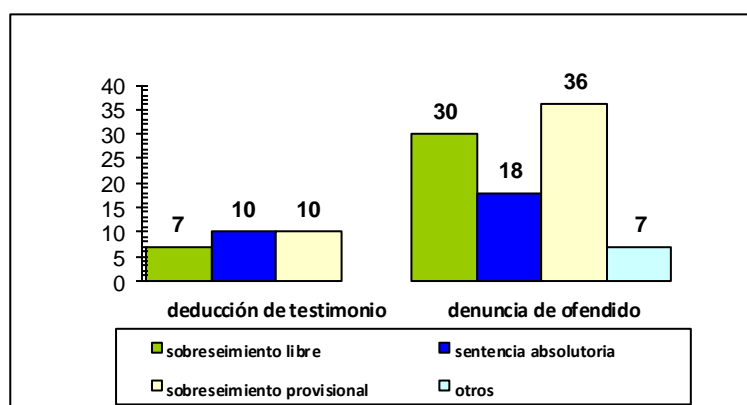
Observando la tendencia sobre este aspecto, podría irse confirmando la hipótesis que se expuso sobre la proporción de condenas y absoluciones a emitirse cuando el proceso es iniciado a consecuencia de la denuncia previa del ofendido (1 absolución por cada condena).

Por otro lado, de los procesos penales instaurados sobre este delito –culminados en el año 2014– que se iniciaron mediante

deducción de testimonio ordenada por el órgano jurisdiccional que conoció de la causa principal, poco más del 80 % culminaron con sentencias condenatorias firmes.

Ello, permite confirmar la hipótesis de que, al menos, 4 de cada 5 procesos penales por el delito estudiado que tienen su inicio en la deducción del testimonio ordenada por el Juez o Tribunal que conoció de la causa principal culminarán con sentencias condenatorias firmes.

- c) *Según la vinculación entre el tipo de resolución judicial que dio fin a la causa primigenia y la forma en la que se da inicio la persecución del delito de acusación y denuncia falsas en el año 2014*



De los 91 procesos penales por el delito estudiado que se iniciaron a consecuencia de denuncias formuladas por los ofendidos: 30 (33%) se formularon después de que los ofendidos contaron con sobreseimientos libres firmes que les favorecían; 18 (20%) se hicieron después de que los ofendidos contaron con sentencias absolutorias firmes; 36 (39%) se realizaron una vez que los ofendidos contaron con autos de sobreseimiento provisional a su favor; y, finalmente, 7 (8%) se interpusieron sin cumplir con el primer requisito de procedibilidad exigido por el art. 456.2 CP.

De los datos puede observarse, que se sigue manteniendo la tendencia de que al menos más de la tercera parte de los procesos fenecidos que tienen su origen a partir de denuncias formuladas por los ofendidos, surgieron después de que estos obtuvieran una resolución judicial que hiciese sobreseído provisionalmente la causa en su contra.

En cuanto a los 27 procesos penales por el delito estudiado que se iniciaron a consecuencia de una deducción de testimonio ordenada por el órgano jurisdiccional que conoció la causa principal: 7 (26%) se encontraron vinculados a autos de sobreseimiento libre firmes; 10 (37%) a sentencias absolutorias firmes; y, 10 (37%) a autos de sobreseimiento provisional firmes.

En este año se produjo un incremento de deducciones de testimonio, en comparación con años anteriores se duplicó la tasa de procesos penales sobre este delito que se empezaron a perseguir por este motivo.

De los datos obtenidos, puede observarse un incremento sustancial del número de procesos penales que surgieron de deducciones de testimonio vinculadas a la emisión de autos de sobreseimiento provisional sobre los delitos que supuestamente habían sido falsamente imputados.

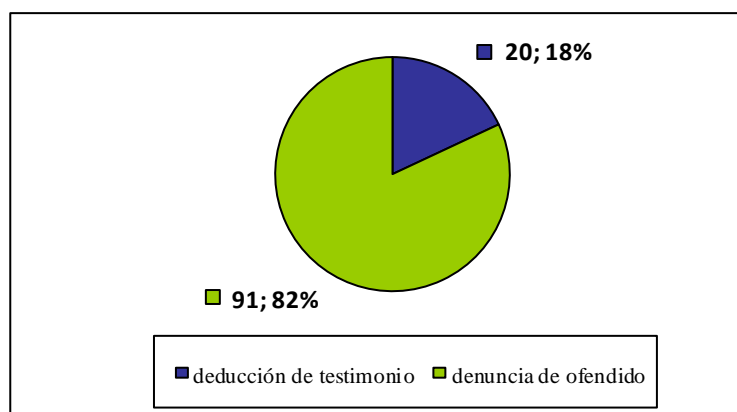
Sin embargo, este incremento no supera al número de procesos penales que se iniciaron por una deducción de testimonio vinculada a una sentencia absolutoria firme de la causa principal.

Así pues, en contraste con los procesos penales que son perseguidos a razón de la previa denuncia del ofendido, los que surgen como consecuencia de una deducción de testimonio no se vinculan, en su mayoría, a autos de sobreseimiento provisional firmes de las causas primigenias.

5. Datos obtenidos respecto a procesos fenecidos en el año 2015

En el año 2015 se recabaron 111 sentencias firmes sobre el delito de acusación y denuncia falsas.

- a) *Según la forma en la que se dio inicio la persecución del delito de acusación y denuncia falsa en el año 2015*



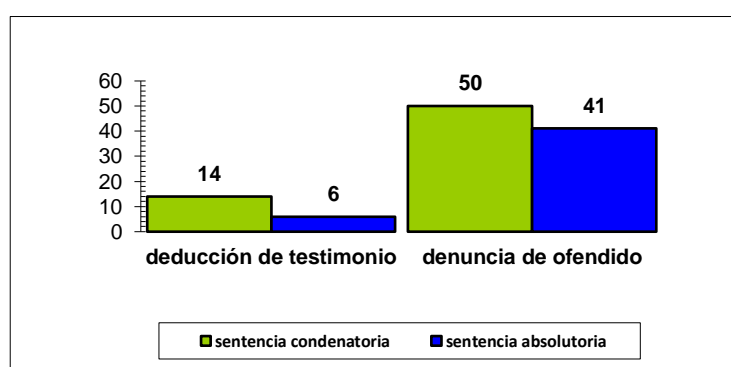
De las 111 causas penales sobre el delito de acusación y denuncia falsas que culminaron en el año 2015: 91 (82%) tuvieron su origen en una denuncia por parte del ofendido; y, 20 (18%) se ocasionaron a partir de la deducción de testimonio por parte del órgano jurisdiccional que conoció de la causa principal.

Al igual que en años anteriores, la tasa del porcentaje de procesos penales –que fenecieron en el año 2015– vinculados a este delito y que tuvieron su origen en denuncias presentadas por parte del ofendido es bastante superior al de los que se incoan a partir de deducciones de testimonios.

Así, al menos 4 de cada 5 procesos penales relacionados a este delito se inician a partir de la denuncia formulada por el supuesto ofendido.

Cabe destacar que, en este año, al igual que el anterior, se produjo un incremento de procesos penales fenecidos que fueron iniciados a consecuencia de la deducción del testimonio ordenada por el Juez o Tribunal que conoció de la causa principal, ya que se generaron 20 procesos penales de esta forma, 7 más que en el año 2011.

- b) *Según la vinculación entre el sentido de fallo y la forma en la que se da inicio la persecución del delito de acusación y denuncia falsas en el año 2015*



De los 111 procesos penales por delitos de acusación y denuncia falsas que culminaron en el año 2015: i) 91 fueron perseguidos porque el ofendido cumplió con denunciar por ese delito, de ellas, 50 (55%) culminaron con sentencias condenatorias, mientras que, 41 (45%) terminaron con la emisión de una sentencia absolutoria al respecto; y, ii) 20 se iniciaron debido a la deducción de testimonio que ordenó el órgano jurisdiccional que conoció de la causa principal, de ellas, 14 (70%) culminaron el proceso con una sentencia condenatoria firme, mientras que, tan sólo 6 (30%) culminaron con la emisión de sentencias absolutorias firmes.

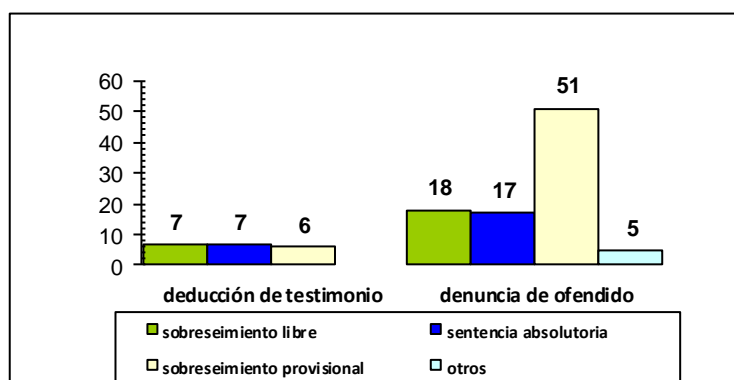
De los datos obtenidos se observa que en este año se produjo un incremento del número de la emisión de sentencias condenatorias vinculadas en su inicio a denuncias previas del ofendido.

Sin embargo, dado que la diferencia porcentual existente entre ambos tipos de sentencias (condenatorias y absolutorias) vinculadas en su inicio a denuncias previas del ofendido, puede mantenerse la hipótesis formulada de que aproximadamente por cada absolución que se emita en un proceso penal sobre este delito que haya sido iniciado a consecuencia de la denuncia previa del ofendido, se emitirá también, en otro proceso, una sentencia condenatoria.

Por otro lado, de los procesos penales instaurados sobre este delito –culminados en el año 2015– que se iniciaron mediante deducción de testimonio ordenada por el órgano jurisdiccional que conoció de la causa principal, el 70 % culminaron con sentencias condenatorias firmes.

Ello finalmente, permite confirmar la hipótesis que se viene sustentando en torno a que aproximadamente 4 de cada 5 procesos penales por el delito estudiado que tienen su inicio en la deducción del testimonio ordenada por el Juez o Tribunal que conoció de la causa principal culminan con sentencias condenatorias firmes.

- c) *Según la vinculación entre el tipo de resolución judicial que dio fin a la causa primigenia y la forma en la que se da inicio la persecución del delito de acusación y denuncia falsas en el año 2015*



De los 91 procesos penales por el delito estudiado que se iniciaron a consecuencia de denuncias formuladas por los ofendidos: 18 (20%) se formularon después de que los ofendidos contaron con sobreseimientos libres firmes que les favorecían; 17 (19%) se hicieron después de que los ofendidos contaron con sentencias absolutorias firmes; 51 (56%) se realizaron una vez que los ofendidos contaron con autos de sobreseimiento provisional a su favor; y, finalmente, 5 (5%) se interpusieron sin cumplir con el primer requisito de procedibilidad exigido por el art. 456.2 CP.

Como es de observarse, en este año se produjo un incremento sustancial de procesos fenecidos que tuvieron su origen a partir de denuncias formuladas por los ofendidos, que surgieron después de que estos obtuvieran una resolución judicial que hiciese sobreseído provisionalmente la causa en su contra, llegando a representar superar el 50% del total de los procesos iniciados bajo esas condiciones.

Así pues, de la evaluación de los datos recogidos de las sentencias firmes emitidas entre los años 2011 y 2015 puede desprenderse que los autos de sobreseimiento provisional firmes sobre las causas primigenias son las resoluciones judiciales que, en su mayoría aguardan obtener los ofendidos para poder proceder a denunciar a los supuestos falsos acusadores o denunciante de los delitos que se les imputaron.

En cuanto a los 20 procesos penales por el delito estudiado que se iniciaron a consecuencia de una deducción de testimonio ordenada por el órgano jurisdiccional que conoció la causa principal: 7 (35%) se encontraron vinculados a autos de sobreseimiento libre firmes; 7 (35%) a sentencias absolutorias firmes; y, 6 (30%) a autos de sobreseimiento provisional firmes.

De los datos obtenidos, se puede constatar que, si bien es cierto, existe un número importante de procesos que se inician por deducciones de testimonio vinculados a autos de sobreseimiento provisional firmes de las causas principales, la incidencia de estos, suele ser menor que la que se genera con las deducciones de testimonios vinculadas a autos de sobreseimiento libre firmes y sentencias absolutorias firmes de las causas primigenias.

IV.- CONCLUSIONES

En el sexto capítulo de la tesis se ha expuesto teóricamente que el auto de sobreseimiento provisional firme permite cumplir con el requisito de procedibilidad exigido por el art. 456.2 CP, sin embargo, mediante la realización del estudio empírico antes expuesto, se ha podido acreditar la magnitud e importancia que tiene la admisión de esta idea.

Y es que, aproximadamente un 41,5% (225) del total de procesos por el delito de acusación y denuncia falsas que fenecieron durante los años 2011-2015 se originaron a partir de autos de sobreseimiento provisional firmes. De ellos, un gran porcentaje fueron aguardados por los ofendidos para poder proceder a denuncia la presunta comisión del ilícito estudiado.

Respecto al otro requisito de procedibilidad, el referido a los sujetos y actos que deben de realizar para que pueda procederse a la persecución penal por este delito, se expuso en el apartado correspondiente del capítulo antes mencionado que la inclusión de la posibilidad de persecución de este delito previa denuncia del ofendido fue importante debido a que, además de reconocer la pluriofensividad del delito estudiado permitió efectuar una persecución de este delito de manera eficiente, ya que, a pesar de que los Jueces y Tribunales de la causa primigenia tienen el deber de mandar a proceder de oficio en contra de los falsos denunciante o acusadores, siempre que existiesen indicios suficientes de la falsedad de la imputación, en la práctica judicial no suelen ordenar la deducción del testimonio, con lo que, muchos de estos casos, de ser perseguibles únicamente a condición de la deducción del testimonio de dichos órganos jurisdiccionales, hubiesen quedado impunes debido a la inacción de aquellos.

Para ser precisos, aproximadamente el 84 % (455) del total de procesos por el delito de acusación y denuncia falsas que fenecieron durante los años 2011-2015 se originaron a partir de la denuncia previa del ofendido.

La aceptación tanto de la persecución previa denuncia del ofendido como del cumplimiento del primer requisito de procedibilidad exigido por el art. 456.2 CP mediante los autos de sobreseimiento provisional firmes han permitido que se persiga este delito de una manera más eficiente.

§ 9. PRINCIPALES DELITOS IMPUTADOS FALSAMENTE

I.- INTRODUCCIÓN

El nacimiento de un proceso penal por la comisión de un delito de acusación y denuncia falsas tiene como antecedente el que se haya instaurado previamente una “causa principal” en la cual se haya ventilado los aspectos referidos a una imputación “falsa” de una infracción penal en contra de otra persona.

Dicho primer proceso para que pueda dar inicio a un proceso penal por el delito estudiado tiene que tener la particularidad de haber concluido con la emisión de una sentencia firme o auto también firme, de sobreseimiento o archivo del Juez o Tribunal que haya conocido dicha infracción imputada, ello acorde con la exigencia del primer requisito de procedibilidad estipulado en el art. 456.2 CP.

Debido a la necesidad de la existencia de la instauración de un proceso penal previo a consecuencia de la imputación falsa para que pueda efectuarse una persecución posterior por el delito de acusación y denuncia falsas, se convierte en necesaria la realización de una investigación a fin de determinar cuáles son las infracciones penales que usualmente las personas que acusan o denuncian falsamente suelen imputar.

Sobre los delitos falsamente imputados se ha dicho mucho, en las últimas décadas se ha propalado la idea en la sociedad de que un gran porcentaje de los delitos falsamente atribuidos se encuentran vinculados a acusaciones o denuncias falsas sobre violencia de género.

Para contrarrestar esta creencia, se han realizado informes como los presentados por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del CGPJ, en donde se ha demostrado que la incidencia de acusaciones y denuncias falsas vinculadas a este tipo de violencia es mínima.

Ahora bien, si se tiene en cuenta que la imputación falsa –realizada con conocimiento de su falsedad o con temerario desprecio hacia la verdad– de cualquier infracción penal puede dar lugar a un proceso penal por el delito estudiado, sin necesidad de realizar un análisis estadístico previo, es evidente que el porcentaje de incoación de procesos por el

delito de acusación y denuncia falsas es bastante reducido frente al porcentaje de incoación de procesos penales instaurados por el resto de los demás delitos contemplados en el CP.

Con lo que, analizados desde la perspectiva de cada una de esas otras infracciones penales, se tendrá que el porcentaje de procesos instaurados por imputaciones falsas sobre esas infracciones penales es mínimo, ello con independencia del tipo de infracción penal que se analice.

Siendo ello así, los objetivos principales de este capítulo son mostrar lo que la doctrina ha señalado al respecto y confrontar ello con los datos obtenidos a través del estudio empírico que se ha realizado sobre 542 sentencias firmes vinculadas a este delito emitidas durante los años 2011 y 2015, así como también, determinar cuáles son las infracciones penales que más falsamente se denuncian y establecer si existe algún fenómeno particular vinculado a la incidencia de imputaciones falsas respecto a un delito en especial.

II.- POSICIONES DOCTRINARIAS

Hoy en día, probablemente, en la idea del colectivo social se considera que existe un número importante de imputaciones falsas vinculadas a delitos de violencia de género, y que muchas de ellas quedan impunes debido a que no se suelen perseguir las imputaciones falsas vinculadas a este tipo de delitos, salvo que la falsedad de aquellas sea manifiesta⁵³⁷.

Asimismo, se cree también que son frecuentes las presentaciones de denuncias falsas por delitos sexuales en casos de separaciones matrimoniales y divorcios, debido a que con la formulación de dichas imputaciones se pretende conseguir, entre otras cosas, la custodia de los hijos en común. Incluso se destaca también que, en muchas otras ocasiones, los progenitores aprovechándose de sus hijos, los utilizan para que estos

⁵³⁷ SOTO RODRÍGUEZ, *Diario La Ley*, núm. 7977, de fecha 3 de diciembre de 2012.

imputen al otro progenitor la comisión no sólo de delitos de malos tratos sino también de delitos sexuales en contra de ellos⁵³⁸.

Algunas de estas ideas, especialmente las referidas a las imputaciones de delitos de violencia de género, se fundamentan en el hecho de que las víctimas se retractan, lo cual conlleva a que a falta de otras pruebas de cargo se tenga que absolver al presunto maltratador y, a que se deduzca testimonio de las palabras de la víctima⁵³⁹.

Ahora bien, este fenómeno de la retractación de la imputación dada en imputaciones vinculadas con delitos de violencia de género no puede ser analizado a la ligera, y es que, en estos casos, para determinar la “veracidad” del contenido de la retractación deberá tenerse en cuenta la actuación de las otras pruebas obrantes en el proceso para determinar si aquélla fue espontánea y en honesto reconocimiento de la falsedad de lo manifestado o si, por el contrario, existen indicios de que esa retractación se produjo debido a un nuevo acto de violencia, una concepción errónea del perdón hacia su agresor, o, por el mero deseo de evitar una condena para su victimario⁵⁴⁰.

En cuanto a las denuncias falsas en donde uno de los progenitores manipula a su hijo para que impute al otro progenitor haberle realizado malos tratos o peor aún agredido sexualmente, se considera que no son poco comunes la realización de este tipo de denuncias, en especial en los casos en donde los padres del menor han pasado por separaciones o divorcios conflictivos.

Usualmente se identifica que el fin perseguido mediante ese tipo de denuncias es que se le prive al otro progenitor de la custodia o de la visita, ello a costa de todas las repercusiones negativas que podría sufrir el menor al verse inmerso indebidamente en un proceso penal como víctima.

⁵³⁸ PEDREIRA GONZÁLEZ, en *Libro Homenaje al Profesor Luis Rodríguez Ramos*, p. 824.

⁵³⁹ SECCIÓN CORRESPONSALÍA AUTONÓMICA, *Diario La Ley*, núm. 7979, de fecha 5 de diciembre de 2012.

⁵⁴⁰ Sobre la violencia de género, las retractaciones y estadística judicial, véase: MARTÍN LÓPEZ, *Themis. Revista de Jurídica de Igualdad de Género*, núm. 7, 2009, p. 52.

Algunas de las consecuencias negativas que podría sufrir el menor son la creación de falsos recuerdos, evidentemente de índole traumática, los cuales podrían encuadrarse dentro de un síndrome de alienación parental⁵⁴¹.

Frente a ideas como las antes mencionadas, el Estado mediante distintas entidades ha elaborado informes con el fin de destacar que la incidencia de este tipo de denuncias falsas es residual.

Así, el Grupo de expertos y expertas en violencia doméstica y de género del CGPJ elaboró un estudio sobre la aplicación integral contra la violencia de género por las Audiencias Provinciales en el año 2009 en función a 530 sentencias estudiadas vinculadas a la imputación de delitos de violencia de género, en él determinó que tan sólo una –equivalente a un 0,19% del total– se refería a un supuesto que podría encuadrarse en un supuesto de una denuncia falsa, sin perjuicio de que pudiesen existir otras lecturas posibles al respecto⁵⁴².

En dicho caso se produjo una deducción de testimonio debido a que la denunciante se retractó de su imputación manifestando que al momento de interponer la denuncia tergiversó los hechos y los exageró puesto que se encontraba muy enfadada con el acusado. Al respecto el mencionado grupo de expertos destaca que la conducta procesal de las víctimas de violencia de género debe de analizarse acorde la especificidad que ellas poseen, y es que, en tanto las víctimas no logre salir definitivamente del círculo de la violencia, su conducta se seguirá desarrollando en el marco de una agresión-denuncia-arrepentimiento-agresión⁵⁴³.

⁵⁴¹ CARRETERO SÁNCHEZ, *Diario La Ley*, núm. 6261, de fecha 5 de mayo de 2005.

⁵⁴² GRUPO DE EXPERTOS Y EXPERTAS EN VIOLENCIA DOMÉSTICA Y DE GÉNERO DEL CGPJ, *Estudio sobre la aplicación de la ley integral contra la violencia de género por las Audiencias Provinciales*, 2009, p. 88. Similares resultados se mostraron en el informe presentado por este grupo de expertos en el año 2016, en donde, de 497 sentencias revisadas encontraron que sólo en dos de ellas se habían mandado a deducir testimonio, es decir, en tan sólo un 0,4% del total de ellas. GRUPO DE EXPERTOS Y EXPERTAS EN VIOLENCIA DOMÉSTICA Y DE GÉNERO DEL CGPJ, *Estudio sobre la aplicación de la ley integral contra la violencia de género por las Audiencias Provinciales*, 2013, p. 170.

⁵⁴³ GRUPO DE EXPERTOS Y EXPERTAS EN VIOLENCIA DOMÉSTICA Y DE GÉNERO DEL CGPJ, *Estudio sobre la aplicación de la ley integral contra la violencia de género por las Audiencias Provinciales*, 2009, pp. 87-89.

De este modo, se entiende que lo que intenta destacar el mencionado grupo de expertos es que las retractaciones en estos casos o el acogimiento de la dispensa de la obligación de declarar prevista en el art. 418 LECrim deben analizarse cuidadosamente, a fin de que no necesariamente se ordene deducir testimonio en todas las ocasiones, y, a que se evalúe dicha actitud de manera conjunta con los demás medios probatorios, pues sólo de esa forma se podrá intuir si la retractación es acorde a la realidad o se ha realizado con el afán de proteger al victimario.

Para ejemplificar esta situación, mencionan algunas sentencias como por ejemplo, la sentencia nº 797/2017, de fecha 8 de octubre de 2007. emitida por la sección 27 de la Audiencia Provincial de Madrid, en la cual se confirmó la condena por un delito vinculado a la violencia de género a pesar de que la víctima realizó una declaración exculpatoria posterior, debido a que se contaba con material probatorio que hacía percibir la veracidad de la imputación inicial⁵⁴⁴.

Por otro lado, en cuanto a las denuncias falsas de mujeres a sus ex parejas por abusos sexuales hacia sus hijos en el contexto de disputas legales por la custodia de los menores, el grupo de trabajo de investigación sobre el llamado síndrome de alienación parental del Observatorio Estatal de violencia sobre la mujer realizó un informe en donde acogiendo datos de reconocidos expertos norteamericanos sostienen que este tipo de denuncias no constituyen una epidemia pues su incidencia es muy reducida, de alrededor de un 1% y 5% de las denuncias realizadas por este tipo de situaciones⁵⁴⁵.

Asimismo, dicho grupo ha destacado, siguiendo los datos obtenidos por aquellos expertos foráneos que, es más frecuente encontrar denuncias falsas por parte de los padres que de las madres, entendiendo que sólo 22,3% de las denuncias interpuestas sobre agresiones sexuales hacia los hijos eran falsas, de las cuales 1,3% habían sido

⁵⁴⁴ GRUPO DE EXPERTOS Y EXPERTAS EN VIOLENCIA DOMÉSTICA Y DE GÉNERO DEL CGPJ, *Estudio sobre la aplicación de la ley integral contra la violencia de género por las Audiencias Provinciales*, 2009, p. 90.

⁵⁴⁵ MSPSI, *Informe del grupo de trabajo de investigación sobre el llamado síndrome de alienación parental*, 2010, p. 90.

formuladas por las madres, mientras que, un 21% habían sido presentadas por los padres⁵⁴⁶.

De esta forma, se tiene por un lado el pensamiento que ronda en la comunidad y en un sector doctrinario sobre un porcentaje elevado de denuncias falsas vinculadas a la violencia de género y al síndrome de alienación parental, y, por el otro, al Estado, que por medio de informes de grupos de expertos intentan desmontar ese supuesto “mito de denuncias falsas” sobre esos temas en particular.

Siendo ello así, corresponde exponer los datos obtenidos del estudio de 542 sentencias firmes sobre este delito obtenidas mediante el buscador del CENDOJ que fueron emitidas durante los años 2011 y 2015, a fin de comprobar si la doctrina y comunidad tienen razón, o si por el contrario, la tiene el Estado.

III.- ESTUDIO EMPÍRICO

Para realizar este estudio, se ha recurrido a la información obtenible por medio del buscador de jurisprudencia del CENDOJ, con el fin de poder realizar un estudio en base a las sentencias firmes vinculadas al delito de acusación y denuncia falsas emitidas durante el periodo comprendido entre los años 2011 y 2015.

Se optó por limitar el estudio únicamente a las sentencias que tuviesen la condición de firmes debido a que permiten obtener un dato definitivo⁵⁴⁷.

El tamaño de la muestra es de 542 sentencias firmes sobre este delito emitidas durante el periodo 2011-2015.

A continuación, se expondrán los datos obtenidos vinculados a los delitos que con mayor incidencia son imputados falsamente.

⁵⁴⁶ MSPSI, *Informe del grupo de trabajo de investigación sobre el llamado síndrome de alienación parental*, 2010, p. 90.

⁵⁴⁷ La base de datos es la misma que la empleada para la realización del estudio del capítulo octavo de este trabajo, por tanto, las especificaciones técnicas sobre el modo en que se delimitó la recolección de estos datos son las mismas.

1. Con relación a procesos fenecidos en el 2011

En el año 2011 se emitieron 90 sentencias firmes vinculadas al delito de acusación y denuncia falsas.

Principales delitos imputados	Número de casos
De las lesiones <ul style="list-style-type: none"> • Lesiones • Malos tratos 	5 3
Contra la libertad: <ul style="list-style-type: none"> • Detenciones ilegales • Amenazas 	2 5
Contra la libertad e indemnidad sexual <ul style="list-style-type: none"> • Agresiones sexuales 	12
Contra las relaciones familiares	2
Contra el patrimonio <ul style="list-style-type: none"> • Hurtos • Robos • Estafas • Administración desleal • Daños 	4 3 2 1 2
De las falsedades <ul style="list-style-type: none"> • Falsedades documentales 	8
Contra la Administración de Justicia <ul style="list-style-type: none"> • Quebrantamiento de condena 	2
Otros	7

De ellas sólo 48 fueron sentencias condenatorias firmes, por ese motivo, se limitará el estudio a esas sentencias, dado que son las únicas en las que se ha acreditado fehacientemente que la imputación de la infracción penal ha sido falsa⁵⁴⁸.

⁵⁴⁸ Según los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) referida a la Estadística de condenados en el año 2011, 1364 personas mayores de 18 años fueron condenadas firmemente por el delito de acusación y denuncia falsas, de los cuáles 834 fueron varones y 530 mujeres. Ahora bien, en dicha sección se consideraron no solamente los delitos de acusación y denuncia falsas, sino también los de simulación de delitos. Por ello, confrontando esta información con la obtenida del “Compendios Delitos – año 2011” elaborado en función de los datos expresados en la Memoria anual de la Fiscalía general del Estado –en donde se expresa que en el año 2011 se emitieron 1258 sentencias condenatorias por el delito de acusación y denuncia falsas y el delito de simulación de

Debe precisarse que, debido a que en algunos procesos no sólo se ha imputado falsamente un delito, sino también a su vez otros, se ha optado por agruparlos en categorías, sin perjuicio de que en el caso de que los delitos imputados no pertenezcan a la misma categoría se consignen ambas imputaciones en las categorías correspondientes, a fin de presentar los datos de la manera más fiel posible.

De los datos expuestos en la tabla precedente, puede observarse que los grupos de delitos que más falsamente se suelen denunciar son los que atacan contra el patrimonio y contra la libertad e indemnidad sexual. El número de incidencia de cada uno de esos grupos de delitos fue de 12 procesos penales fenecidos mediante sentencias condenatorias firmes en el año 2011.

Si bien es cierto, los delitos patrimoniales ocupan uno de los grupos que más falsamente suelen denunciarse, no es menos cierto, que hay ciertos delitos que se encuentran en distintas rúbricas pero que se pueden cometer todos ellos en el marco de la violencia de género.

Así pues, de las 48 sentencias condenatorias firmes que se emitieron en el año 2011 por el delito de acusación y denuncia falsas 10 de ellas giraron en torno a la imputación de delitos producidos en un contexto de violencia de género –con un total de 13 delitos imputados–, es decir, aproximadamente un 21% del total de aquellas.

Es un porcentaje medianamente alto desde la perspectiva de este delito, pero pequeño si se tiene en cuenta la cantidad de denuncias que se hacen y procesos penales que se instauran vinculados a este tipo de violencia.

delitos, de los cuales 244 corresponden al ilícito estudiado en este trabajo, mientras que 1014 se refieren al segundo de los delitos mencionados– puede determinarse que, aproximadamente un 20% del total de las sentencias emitidas sobre el grupo de acusación y denuncia falsas se refieren concretamente al delito de acusación y denuncia falsas (aunque no se tiene una cifra exacta se proyecta que el total de las sentencias referidas al delito objeto de estudio se encontrarán en el rango de 244 a 277 sentencias). Así pues, dado que sólo se ha podido acceder a la lectura de 48 de las sentencias condenatorias emitidas ese año se ha podido determinar que el tamaño de la muestra estudiada (48 sentencias condenatorias) tiene un nivel de confianza de un 90% y los datos expuestos admiten un margen de error máximo aproximado de 10.7%. El contenido de los datos estadísticos presentados por el INE se encuentra disponible en: <http://www.ine.es/jaxi/Datos.htm?path=/t18/p466/a2011/10/&file=01001.px>.

Al respecto, la Fiscalía General del Estado desde el año 2009 viene incluyendo en sus Memorias un apartado referido a las acusaciones y denuncias falsas vinculados a la violencia de género, todas ellas en el marco de retiradas de acusaciones producidas en procesos relacionados a la violencia de género, año tras año, publican cifras entre las que incluyen datos como sentencias condenatorias con conformidad (vinculadas a procesos penales por delitos de acusación y denuncia falsas en el marco de la violencia de género).

Por ejemplo, en la Memoria de la Fiscalía General del Estado sobre el año 2011 consignaron que, al cierre de ese año, se habían emitido 1 sentencia condenatoria sin conformidad y 1 sentencia condenatoria con conformidad⁵⁴⁹.

Para realizar dicho análisis la Fiscalía General del Estado tomó como base las deducciones de testimonio originadas en el marco del retiro de las acusaciones por parte de las mujeres que denunciaban haber sido víctimas de un delito que se enmarca en la violencia de género, probablemente ese sea el motivo por el cual sólo consideran la existencia de tan pocas denuncias falsas generadas en este tipo de condiciones, y es que, como se expuso en el octavo capítulo de este trabajo, los procesos que inician por deducciones de testimonio no son muchos.

A propósito de la información brindada por la Fiscalía General del Estado en sus memorias del año 2011 sobre la existencia de una sentencia condenatoria con conformidad, debe indicarse que, debido a que la plataforma empleada para la búsqueda de las sentencias vinculadas al delito estudiado no consigna muchas sentencias emitidas por los Juzgados Penales, no se han podido manejar —en su mayoría— los datos de las sentencias emitidas por el delito de acusación y denuncia falsas que no hayan sido recurridas.

⁵⁴⁹ MEMORIA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DEL AÑO 2011, vol. I, p. 645. La Memoria de la Fiscalía General del Estado del año 2016 consignó que desde el 2009 hasta el 2015 se emitieron 63 sentencias condenatorias por denuncias falsas en esa materia, de las cuales 35 lo habían sido por conformidad de la acusada. MEMORIA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DEL AÑO 2015, vol. I, p. 407.

Si bien es cierto, existe una limitación en ese sentido, la aleatoriedad de la información de las sentencias que se pueden obtener mediante el CENDOJ y el tamaño de la muestra permiten que se obtenga unos datos confiables, con lo que, se reconoce que existen fácticamente muchos más casos en el año 2011 que se pueden enmarcar en imputaciones falsas de delitos vinculados a la violencia de género –como, por ejemplo, los reconocidos por la misma Fiscalía General como condenados con conformidad–, sin embargo, se considera que el porcentaje de la incidencia de este tipo de casos se mantendría dentro de los parámetros expuestos en este trabajo, pues de conocer todo el universo de los procesos por denuncias falsas, se tendrían más casos de imputaciones falsas de delitos ubicables dentro de este tipo de violencia, y a su vez también, más casos de imputaciones falsas de delitos patrimoniales, etc.; de esta forma, aun cuando hubiese fácticamente un número mayor de procesos de este tipo también se incrementarían las imputaciones falsas de los otros delitos, manteniendo de cierta modo, las proporciones porcentuales expuestas.

Lo antes mencionado, no debe interpretarse en el sentido de que se considera que existe una cantidad exorbitante de procesos penales sobre este delito que se generan por este tipo de imputaciones falsas, sino más bien, deberá entenderse que lo que se pretende resaltar es que existen más procesos penales por este delito que se han generado a consecuencia de imputaciones falsas de delitos encuadrables en supuestos de violencia de género, puesto que además de las deducciones de testimonio, estos procesos penales pueden iniciarse previa denuncia del ofendido, con lo que, para poder tener un real conocimiento sobre cuántos procesos penales por este tipo de imputaciones falsas se han iniciado y han concluido con una sentencia condenatoria firme se tendría que evaluar también aquellos que fueron iniciados previa denuncia del ofendido.

Cabe precisar que, acorde con las sentencias revisadas, los delitos falsamente imputados que se dieron en el marco de un acto vinculado a la violencia de género y cuya falsedad fue plasmada mediante el dictado de sentencias condenatorias firmes por el delito de acusación y denuncia falsas, fueron: dos imputaciones sobre incumplimiento de orden de alejamiento (quebrantamiento

de condena); una imputación de un delito de detención ilegal; cuatro delitos de amenazas; dos delitos de malos tratos; tres delitos de lesiones; y una falta de injurias.

En base a los datos expuestos, es pertinente destacar que, de las sentencias revisadas vinculadas a imputaciones falsas sobre delitos vinculados a la violencia de género, ninguna de ellas giró en torno a delitos contra la libertad sexual.

Debiendo acotarse a su vez que, sobre los delitos contra la libertad e indemnidad sexual falsamente imputados, dos de ellos se refieren a imputaciones falsas realizadas por mujeres sobre supuestas agresiones sexuales cometidas por ex maridos en agravio de sus hijos menores en común.

2. Con relación a procesos fenecidos en el 2012

En el año 2012 se emitieron 104 sentencias firmes vinculadas al delito de acusación y denuncia falsas, de las cuales 62 fueron sentencias condenatorias firmes⁵⁵⁰.

⁵⁵⁰ Según los datos proporcionados por el INE referida a la estadística de condenados del año 2012, 1905 personas mayores de 18 años fueron condenadas firmemente por el delito de acusación y denuncia falsas, de los cuáles 1050 fueron varones y 855 mujeres. Al igual que con los datos expuestos por el INE sobre la estadística de condenados del año 2011 se consignó dentro del delito de acusación y denuncia falsas tanto a las sentencias emitidas por el delito de acusación y denuncia falsas (en estricto) y al delito de simulación de delitos. Por ello, confrontando esta información con la obtenida del “Compendios Delitos – año 2012” elaborado en función de los datos expresados en la Memoria anual de la Fiscalía general del Estado –en donde se expresa que en el año 2012 se emitieron 2090 sentencias condenatorias por el delito de acusación y denuncia falsas y el delito de simulación de delitos, de los cuales 392 corresponden al ilícito estudiado en este trabajo, mientras que 1698 se refieren al segundo de los delitos mencionados– puede determinarse que, aproximadamente un 20% del total de las sentencias emitidas sobre el grupo de acusación y denuncia falsas se refieren concretamente al delito de acusación y denuncia falsas (aunque no se tiene una cifra exacta se proyecta que el total de las sentencias referidas al delito objeto de estudio se encontrarán en el rango de 355 a 392 sentencias). Así pues, dado que sólo se ha podido acceder a la lectura de 62 de las sentencias condenatorias emitidas ese año se ha podido determinar que el tamaño de la muestra estudiada (62 sentencias condenatorias) tiene un nivel de confianza de un 90% y los datos expuestos admiten un margen de error máximo aproximado de 9.5%. El contenido de los datos estadísticos presentados por el INE se encuentra disponible en: <http://www.ine.es/jaxi/Datos.htm?path=/t18/p466/a2012/10/&file=01001.px>.

El presente estudio se limitará a realizar un análisis sobre esas sentencias, dado que son las únicas en las que se ha acreditado fehacientemente que la imputación de la infracción penal ha sido falsa.

Al igual que como se hizo con los datos del año 2011, se incluirán en la relación de todos los delitos imputados, a fin de presentar los datos de la manera más fiel posible.

Principales delitos imputados	Número de casos
De las lesiones <ul style="list-style-type: none"> • Lesiones • Malos tratos 	11 14
Contra la libertad: <ul style="list-style-type: none"> • Detenciones ilegales • Amenazas • Coacciones 	1 7 1
Contra la libertad e indemnidad sexual <ul style="list-style-type: none"> • Agresiones sexuales 	8
Contra el patrimonio <ul style="list-style-type: none"> • Hurtos • Robos • Estafas • Apropiación indebida 	4 4 3 1
De las falsedades <ul style="list-style-type: none"> • Falsedades documentales 	9
Otros	12

De los datos expuestos en la tabla precedente, puede observarse que en el 2012 los delitos que más falsamente se denunciaron son los que se enmarcaron en el ámbito de las lesiones, con una incidencia de 25 delitos imputados. En segundo lugar, se tiene a los delitos contra el patrimonio con una incidencia de 11 imputaciones delictivas.

Al igual como se realizó con los datos del año anterior, se mencionarán cuantas de esas imputaciones falsas se produjeron en el marco de un supuesto acto de violencia de género.

Así pues, de las 62 sentencias condenatorias firmes que se emitieron en el año 2012 por el delito de acusación y denuncia falsas 22 de ellas giraron en torno a la imputación de delitos producidos en un contexto de violencia de género, es decir, aproximadamente un 35% del total de aquéllas.

Es un porcentaje más pronunciado que el que se obtuvo en el año 2011, pues se duplicó la ocurrencia de este tipo de falsas imputaciones.

Los delitos falsamente imputados que se dieron en el marco de un acto vinculado a la violencia de género y cuya falsedad fue plasmada mediante el dictado de sentencias condenatorias firmes por el delito de acusación y denuncia falsas, fueron: una falta de lesiones; tres delitos de lesiones; cuatro imputaciones falsas de amenazas, doce imputaciones falsas de malos tratos; y, dos delitos de agresión sexual.

En este año, a diferencia del anterior se produjeron dos denuncias falsas de la comisión de un delito contra la libertad sexual en el marco de la violencia de género.

Cabe mencionar que, de las 8 agresiones sexuales falsamente imputadas, 2 fueron interpuestas por madres de menores en contra de ex parejas, y 2 fueron interpuestas por padres de menores en contra de nuevas parejas de ex esposas y familiar de ex pareja.

Así pues, la mitad de esas imputaciones falsas tuvieron como presuntos agredidos a menores de edad, que como se acreditó en el proceso no habían sufrido ningún tipo de agresión.

La imputación falsa de un delito contra la libertad o indemnidad sexual, es una imputación de un delito grave que de por sí podría acarrear desde un primer momento la toma de medidas cautelares personales a fin de que el sujeto imputado no pueda sustraerse del proceso, si la imputación falsa fuera sobre un abuso o agresión sexual a un menor de trece años es aún más grave, ya que

no sólo se estaría ante un delito grave, sino también ante una instrumentalización del menor con el fin de hacer daño a un tercero.

De las 8 agresiones sexuales falsamente imputadas, el 50% fueron interpuestas por los padres de los menores supuestamente agraviados, esto representa un porcentaje bastante alto en cuanto a este grupo de delitos falsamente imputados y un 6,5% del total de los procesos que tuvieron como resultado la emisión de sentencias absolutorias firmes.

3. Con relación a procesos fenecidos en el 2013

En el año 2013 se emitieron 119 sentencias firmes vinculadas al delito de acusación y denuncia falsas, de las cuales 60 fueron sentencias condenatorias firmes⁵⁵¹.

El presente estudio se limitará a realizar un análisis sobre esas sentencias, dado que son las únicas en las que se ha acreditado fehacientemente que la imputación de la infracción penal ha sido falsa.

Al igual que como se hizo con los datos de años anteriores, se incluirán en la relación de todos los delitos imputados, a fin de presentar los datos de la manera más fiel posible.

Principales delitos imputados	Número de casos
De las lesiones	
• Lesiones	8
• Malos tratos	8

⁵⁵¹ Según los datos proporcionados por el INE referida a la estadística de condenados del año 2013, 500 personas mayores de 18 años fueron condenadas firmemente por el delito de acusación y denuncia falsas (en concreto, al contrario de los años anteriores), de los cuáles 279 fueron varones y 221 mujeres. Así pues, dado que sólo se ha podido acceder a la lectura de 60 de las sentencias condenatorias emitidas ese año se ha podido determinar que el tamaño de la muestra estudiada (60 sentencias condenatorias) tiene un nivel de confianza de un 90% y los datos expuestos admiten un margen de error máximo de 10%. El contenido de los datos estadísticos presentados por el INE se encuentra disponible en: <http://www.ine.es/jaxi/Datos.htm?path=/t18/p466/a2013/10/&file=01009.px>.

Contra la libertad:	
• Amenazas	7
• Coacciones	1
Contra la libertad e indemnidad sexual	
• Agresiones sexuales	19
Contra las relaciones familiares	2
Contra el patrimonio	
• Hurtos	1
• Robos	2
• Estafas	2
• Apropiación indebida	1
• Daños	2
De las falsedades	
• Falsedades documentales	6
Contra la Administración de Justicia	
• Quebrantamiento de condena	2
Otros	12

De los datos expuestos en la tabla precedente, puede observarse que en el año 2013 los delitos que más falsamente se denunciaron son los que se enmarcaron en el ámbito de las lesiones, con una incidencia de 16 delitos imputados. En segundo lugar, se tiene a los delitos contra la libertad sexual e indemnidad sexual con una incidencia de 9 imputaciones delictivas.

De las 60 sentencias condenatorias firmes que se emitieron en el año 2013 por el delito de acusación y denuncia falsas, 20 de ellas giraron en torno a la imputación de delitos producidos en un contexto de violencia de género —se imputaron 22 delitos—, es decir, aproximadamente un 33% del total de aquellas.

Es un porcentaje un poco menor que el que se obtuvo durante el año 2012, pero sigue siendo uno considerable desde la perspectiva del delito estudiado.

Los delitos falsamente imputados que se dieron en el marco de un acto vinculado a la violencia de género y cuya falsedad fue plasmada mediante el dictado de sentencias condenatorias firmes por el delito de acusación y

denuncia falsas, fueron: cuatro delitos de lesiones; cinco imputaciones falsas de amenazas, 7 imputaciones falsas de malos tratos; dos imputaciones sobre incumplimiento de orden de alejamiento (quebrantamiento de condena); y, cinco delitos de agresión sexual.

En este año, hubo un incremento de denuncias falsas de delitos contra la libertad sexual en el marco de la violencia de género, ya que se produjeron tres casos más que en el año 2012.

Cabe mencionar que, de las 9 agresiones sexuales falsamente imputadas, 1 fue interpuesta por madre de menor en contra de ex pareja padre del menor, y 1 fue interpuesta por padres de los menores en contra de nuevas parejas de ex esposas.

Así pues, un 22% de ese tipo de imputaciones falsas tuvieron como presuntos agredidos a menores de edad, que como se acreditó en el proceso no habían sufrido ningún tipo de agresión.

4. Con relación a procesos fenecidos en el 2014

En el año 2014 se emitieron 118 sentencias firmes vinculadas al delito de acusación y denuncia falsas, de las cuales 67 fueron sentencias condenatorias firmes⁵⁵².

El presente estudio se limitará a realizar un análisis sobre esas sentencias, dado que son las únicas en las que se ha acreditado fehacientemente que la imputación de la infracción penal ha sido falsa.

⁵⁵² Según los datos proporcionados por el INE referida a la estadística de condenados del año 2014, 585 personas mayores de 18 años fueron condenadas firmemente por el delito de acusación y denuncia falsas (en concreto), de los cuáles 317 fueron varones y 268 mujeres. Así pues, dado que sólo se ha podido acceder a la lectura de 67 de las sentencias condenatorias emitidas ese año se ha podido determinar que el tamaño de la muestra estudiada (67 sentencias condenatorias) tiene un nivel de confianza de un 90% y los datos expuestos admiten un margen de error máximo de 9.5%. El contenido de los datos estadísticos presentados por el INE se encuentra disponible en: <http://www.ine.es/jaxi/Datos.htm?path=/t18/p466/a2014/10/&file=01009.px>

La tabla expuesta a continuación incluye la relación de todos los delitos imputados, a fin de presentar los datos de la manera más fiel posible.

Principales delitos imputados	Número de casos
De las lesiones <ul style="list-style-type: none"> • Lesiones • Malos tratos 	12 6
Contra la libertad: <ul style="list-style-type: none"> • Detenciones ilegales • Amenazas • Coacciones 	1 6 2
Contra la libertad e indemnidad sexual <ul style="list-style-type: none"> • Agresiones sexuales 	10
Contra el patrimonio <ul style="list-style-type: none"> • Hurtos • Robos • Estafas • Apropiación indebida • Daños 	5 2 3 3 2
De las falsedades <ul style="list-style-type: none"> • Falsedades documentales 	13
Contra la Administración de Justicia <ul style="list-style-type: none"> • Quebrantamiento de condena 	5
Otros	7

De los datos arrojado en la tabla precedente, puede observarse que en el año 2014 los delitos que más falsamente se denunciaron son los que se enmarcaron en el ámbito de las lesiones, con una incidencia de 20 delitos imputados. En segundo lugar, se tiene a los delitos contra el patrimonio con una incidencia de 15 imputaciones delictivas.

De las 67 sentencias condenatorias firmes que se emitieron en el año 2014 por el delito de acusación y denuncia falsas 18 de ellas giraron en torno a la imputación de delitos producidos en un contexto de violencia de género –se imputaron 19 delitos–, es decir, aproximadamente un 27% del total de aquellas.

Es un porcentaje menos pronunciado que el que se obtuvo en los años 2012 y 2013, sin embargo, siguen representando aproximadamente la tercera parte de las sentencias condenatorias emitidas durante el año 2014.

Los delitos falsamente imputados que se dieron en el marco de un acto vinculado a la violencia de género y cuya falsedad fue plasmada mediante el dictado de sentencias condenatorias firmes por el delito de acusación y denuncia falsas, fueron: tres delitos de lesiones; tres imputaciones falsas de amenazas, cinco imputaciones falsas de malos tratos; cinco imputaciones sobre incumplimiento de orden de alejamiento (quebrantamiento de condena); y, tres delitos de agresión sexual.

En este año, las denuncias falsas de la comisión de un delito contra la libertad sexual en el marco de la violencia de género se redujeron a tres.

Cabe mencionar que, de las 10 agresiones sexuales falsamente imputadas, 3 fueron interpuestas por madres de menores en contra de sus ex maridos.

Así, un 33% de ese tipo imputaciones falsas tuvieron como presuntos agredidos a menores de edad y como presuntos agresores a sus padres.

5. Con relación a procesos fenecidos en el 2015

En el año 2015 se emitieron 111 sentencias firmes vinculadas al delito de acusación y denuncia falsas, de las cuales 64 fueron sentencias condenatorias firmes⁵⁵³.

⁵⁵³ Según los datos proporcionados por el INE referida a la estadística de condenados del año 2015, 560 personas mayores de 18 años fueron condenadas firmemente por el delito de acusación y denuncia falsas (en concreto), de los cuáles 295 fueron varones y 265 mujeres. Así pues, dado que sólo se ha podido acceder a la lectura de 64 de las sentencias condenatorias emitidas ese año se ha podido determinar que el tamaño de la muestra estudiada (64 sentencias condenatorias) tiene un nivel de confianza de un 90% y los datos expuestos admiten un margen de error máximo de 9.7%. El contenido de los datos estadísticos presentados por el INE se encuentra disponible en: <http://www.ine.es/jaxi/Datos.htm?path=/t18/p466/a2015/10/&file=01009.px>.

Al igual que como se hizo con los datos de años anteriores, se incluirán en la relación todos los delitos imputados, a fin de presentar los datos de la manera más fiel posible.

Principales delitos imputados	Número de casos
De las lesiones <ul style="list-style-type: none"> • Lesiones • Malos tratos 	13 10
Contra la libertad: <ul style="list-style-type: none"> • Detenciones ilegales • Amenazas • Coacciones 	1 7 1
Contra la libertad e indemnidad sexual <ul style="list-style-type: none"> • Agresiones sexuales 	6
Contra el patrimonio <ul style="list-style-type: none"> • Hurtos • Estafas • Daños 	6 1 3
De las falsedades <ul style="list-style-type: none"> • Falsedades documentales 	10
Contra la Administración de Justicia <ul style="list-style-type: none"> • Quebrantamiento de condena 	2
Otros	8

De los datos expuestos en la tabla precedente, puede observarse que en el año 2015 los delitos que más falsamente se denunciaron son los que se enmarcaron en el ámbito de las lesiones, con una incidencia de 23 delitos imputados. En segundo lugar, se tiene a los delitos contra el patrimonio y de las falsedades con una incidencia de 10 imputaciones delictivas respectivamente.

De las 64 sentencias condenatorias firmes que se emitieron en el año 2015 por el delito de acusación y denuncia falsas 14 de ellas giraron en torno a la imputación de delitos producidos en un contexto de violencia de género –se imputaron 19 delitos en total–, es decir, aproximadamente un 22% del total de aquéllas.

Los delitos falsamente imputados que se dieron en el marco de un acto vinculado a la violencia de género y cuya falsedad fue plasmada mediante el dictado de sentencias condenatorias firmes por el delito de acusación y denuncia falsas, fueron: cuatro delitos de lesiones; una falta de lesiones; cinco imputaciones falsas de amenazas, cinco imputaciones falsas de malos tratos; dos imputaciones sobre incumplimiento de orden de alejamiento (quebrantamiento de condena); y, dos delitos de agresión sexual.

Como es de observarse no son pocos los delitos falsamente imputados que se vinculan a imputaciones delictivas en el marco de la violencia de género

De las 6 agresiones sexuales falsamente imputadas, 2 fueron interpuestas por madres de menores en contra de ex parejas padres de los menores, y 1 fue interpuesto por un padre de un menor en contra de nueva pareja de ex esposa. Así pues, la mitad de esas imputaciones falsas tuvieron como presuntos agredidos a menores de edad, que como se acreditó en el proceso no habían sufrido ningún tipo de agresión.

6. Resumen de datos obtenidos

De los datos obtenidos se pueden extraer las siguientes ideas principales:

- a) Los delitos que más falsamente se imputan se encuentran relacionados a los de las lesiones, más precisamente, imputaciones falsas sobre lesiones e imputaciones falsas sobre malos tratos.

Ambas imputaciones delictivas representan aproximadamente el 26% del total de los delitos imputados falsamente que fueron tenidos por tales mediante el dictado de sentencias condenatorias firmes por el delito estudiado durante los años 2011 y 2015.

- b) El segundo grupo de delitos que más falsamente se suelen imputar son los vinculados a delitos contra el patrimonio. Dichas

imputaciones falsas representan aproximadamente un 17% del total de los delitos imputados falsamente que fueron tenidos por tales mediante el dictado de sentencias condenatorias firmes por el delito estudiado durante los años 2011 y 2015.

- c) Los delitos contra la libertad e indemnidad sexual representan también un grupo importante de los delitos falsamente imputados. Aproximadamente, un 13% de las sentencias condenatorias por el delito estudiado que fueron emitidas durante los años 2011 y 2015 se encontraban vinculadas a imputaciones falsas de atentados contra la libertad e indemnidad sexual.

De este tipo de imputaciones falsas, un 31,1% se referían a supuestas agresiones sexuales hacia menores denunciadas por uno de los progenitores en contra del otro o de su nueva pareja o familiar cercano. Es decir, por este tipo de imputaciones se emitieron aproximadamente el 4% de las sentencias condenatorias por el delito de acusación y denuncia falsas emitidas durante los años 2011 y 2015.

- d) En cuanto a las imputaciones falsas vinculadas a delitos de violencia de género, éstas representaron el 31% de todos los delitos imputados falsamente que conllevaron a la emisión de sentencias condenatorias por el delito de acusación y denuncia falsas durante los años 2011 y 2015.

Dichas imputaciones conllevaron aproximadamente al 29,5% de las instauraciones de las causas penales por el delito de acusación y denuncia falsas durante el período de tiempo antes señalado. Es decir, uno de cada tres procesos penales en los que se emitió una sentencia condenatoria tenía relación con la imputación falsa de un delito vinculado a la violencia de género

- e) Finalmente, cabe mencionar que de las sentencias estudiadas se ha podido observar un número importante de imputaciones falsas vinculadas a las falsedades documentales. Así, éstas han representado aproximadamente un 13,4% de las imputaciones realizadas en los procesos por el delito estudiado que culminaron mediante las sentencias condenatorias emitidas durante los años 2011 y 2015.

IV.- ANÁLISIS VALORATIVO

Habiendo concluido con la exposición de los datos obtenidos corresponde determinar si lo sostenido por la población y la doctrina se encuentra acorde a la realidad o si por el contrario, lo es lo sostenido por el Estado.

De la evaluación de los datos puede corroborarse que ninguno de los dos extremos es acertado en términos absolutos, ya que ni existe una epidemia de denuncias falsas vinculadas a la violencia de género, ni existe un número tan reducido de estos casos que permitan tenerlos por casi inexistentes.

No es una epidemia debido a que el punto de comparación en este aspecto se vincula con la totalidad de las denuncias por violencia de género; así pues, tan sólo un porcentaje pequeño del cúmulo de ellas son falsas, mientras que, la gran mayoría son verdaderas.

Tampoco puede afirmarse que son inusuales las presentaciones de denuncias o acusaciones falsas por este tipo de delitos, ya que, confrontando esa idea con los datos obtenidos, puede observarse que casi un 30% de las causas penales fenecidas entre los años 2011 y 2015 en las que se emitieron sentencias condenatorias se encontraban vinculadas a imputaciones falsas sobre delitos vinculados a la violencia de género.

Así pues, ninguna de esas dos afirmaciones es absolutamente verdadera, pues depende mucho de la perspectiva desde donde se la interprete. De este modo se tiene que, en función de la totalidad del universo de las denuncias por violencia de género, la

incidencia de denuncias falsas por este tipo de delitos es pequeña, mientras que, desde la perspectiva propia del delito de acusación y denuncia falsas, la incidencia de imputaciones falsas vinculadas a delitos de violencia de género es considerable⁵⁵⁴.

Siendo ello así, la realización de estudios referidos a las denuncias o acusaciones falsas sobre delitos vinculados a la violencia de género desde la perspectiva del delito de acusación y denuncia falsas podría resultar interesante para fines no sólo de investigación jurídica sino también sociológica.

Claro está, esa labor no podrá ser realizada en este trabajo debido a que éste trata sobre el delito de acusación y denuncia falsas en general y no sobre este tipo de conducta delictiva vinculada a la imputación de un delito en específico. Pretender realizar un trabajo sobre las imputaciones falsas sobre delitos vinculados a la violencia de género implicaría analizar previamente a la violencia de género como fenómeno social, algo que desde luego escapa a los fines de éste trabajo, y que por su extensión podría por sí sola constituir una investigación independiente.

Por otro lado, en cuanto a las denuncias falsas de alguno de los progenitores a sus ex parejas por abusos sexuales hacia los hijos en común, ha de indicarse que, acorde con los datos obtenidos el 4% de los casos penales que dieron lugar a sentencias condenatorias por el delito de acusación y denuncia falsas emitidas durante los años 2011 y 2015 se encontraban vinculados a este tipo de imputaciones delictivas.

De las 14 imputaciones falsas de abusos sexuales contra menores de edad interpuestas por uno de los progenitores, 10 fueron interpuestas por las madres de los menores en contra de los padres, es decir un 71% de las denuncias de ese tipo.

⁵⁵⁴ Cabe precisar que debe reconocerse que respecto al delito estudiado se sabe que existe una cifra negra alta, ya que como se ha expuesto, es poco el porcentaje de procesos penales que logran instaurarse debido a una deducción de testimonio y por otro lado, a veces, las personas que han sido falsamente acusadas o denunciadas no denuncian por la comisión de ese delito debido a que lo único que desean es salir del proceso penal que se instauró “indebidamente” en su contra. Con respecto a los procedimientos por violencia de género y la posibilidad de existencia de una cifra mayor de acusaciones y denuncias falsas véase: Gimbernat Ordeig, GIMBERNAT ORDEIG, *Diario El Mundo*, núm. 9497, de fecha 23 de diciembre de 2015.

Así pues, al menos, en función de los datos obtenidos las madres suelen denunciar más que los padres por este delito.

Además de “falsos” abusos sexuales, los progenitores suelen denunciarse por delitos de malos tratos en agravio de sus menores hijos, lesiones, entre otros.

Esas imputaciones falsas de violencia familiar contra los menores, las interponen tanto los padres como las madres en casi igual medida, pues de los datos revisados se tienen 4 procesos penales instaurados por denuncias formuladas por padres y 4 procesos penales instaurados por denuncias formuladas por madres.

Debe mencionarse que, en estos casos los padres no suelen denunciar solamente a las madres, sino que también, en muchas de esas ocasiones denuncian también a las nuevas parejas de sus ex parejas como autores de esos delitos, mientras que, las imputaciones de las madres usualmente sólo suelen referirse a supuestos actos cometidos únicamente por los padres.

Finalmente, en cuanto a las imputaciones falsas de delitos de lesiones, muchas de ellas además de encontrarse vinculadas con supuestos delitos de violencia de género, se encuentran también relacionadas con supuestas lesiones ocurridas en el escenario de accidentes automovilísticos ficticios.

Lo que sucede en estos casos, es que las personas simulan, en connivencia con otras, la ocurrencia de un accidente automovilístico con el fin de que la empresa aseguradora del vehículo otorgue una indemnización por los supuestos daños ocasionados, así pues, en no pocas ocasiones, el seguro se niega a entregar monto alguno debido a la sospecha de simulación del accidente, lo cual obliga a que el supuesto accidentado interponga una denuncia contra la persona que supuestamente ocasionó el accidente automovilístico y contra la empresa aseguradora.

Lo que suele ocurrir después, es que se logra determinar la falsedad de la imputación y con ello se dan las condiciones para que se pueda proceder a denunciar al supuesto accidentado por un delito de acusación y denuncia falsas y uno de estafa en grado de tentativa.

Para finalizar, sólo queda reiterar que la imputación falsa de cualquier delito –en las condiciones establecidas por el art. 456 CP– puede dar lugar a la apertura de un proceso penal por un delito de acusación y denuncia falsas.

No existe un delito en específico que destaque como el que más se imputa falsamente, sino más bien, existen grupos de delitos que usualmente se denuncian falsamente y estos sobre todo tienen vinculación con los delitos vinculados a las lesiones, a las falsedades, los delitos contra el patrimonio, y los delitos contra la libertad e indemnidad sexual.

Ello no implica que exista una alta tasa de esos delitos denunciados falsamente, ya que, como se ha sostenido en la introducción, las imputaciones verdaderas de cada uno de los delitos estipulados en el CP son superiores en número a las imputaciones falsas realizadas por cada uno de ellos.

§ 10. SENTIDO DEL FALLO

I.- INTRODUCCIÓN

Hasta este punto se ha estudiado teóricamente la esencia de este delito, la cual como se ha expuesto gira en torno a la falsedad de la imputación y el conocimiento que sobre ella el sujeto pueda haber tenido –si este último se enmarca en un alto grado probabilidad o una certeza, se referirá a un conocimiento de la falsedad y si es en uno menor, se estaría ante un escenario de temerario desprecio hacia la verdad–.

Se ha indicado también que ambos elementos esenciales de esta figura delictiva son a veces difíciles de probar, ya sea porque los delitos supuestamente falsamente imputados se producen en un escenario donde el único testigo es la víctima y al no existir más medios probatorios incriminatorios se opta absolver o porque por la situación particular en la que se ha producido el hecho no permite que se pueda tener por acreditado que el sujeto conocía de la falsedad de la imputación o tenía al menos la idea de la existencia de probabilidad de aquélla al momento de realizar la imputación.

Teniendo en cuenta lo antes señalado, se convierte en necesario –tal como se ha hecho en el capítulo precedente y en el octavo capítulo de este trabajo– realizar un estudio pragmático, en este caso, sobre el porcentaje de condenas y absoluciones firmes que se han emitido sobre este delito durante los años 2011 y 2015. Todo ello bajo los mismos parámetros técnicos expresados en el capítulo anterior.

Asimismo, dado que en el capítulo noveno se han analizado los principales delitos falsamente imputados a partir de las sentencias condenatorias firmes, se tiene en claro que respecto a esos casos, se ha tenido por acreditado, entre otras cosas, la falsedad de la imputación y el conocimiento que sobre ella tenía la persona que la realizó.

Por ello, a fin de tener una visión panorámica de lo que sucede en la práctica con este delito, se ha decidido también realizar un estudio en función de las sentencias absolutorias con el fin de conocer cuál es el motivo principal por el que se suelen emitir pronunciamientos en ese sentido.

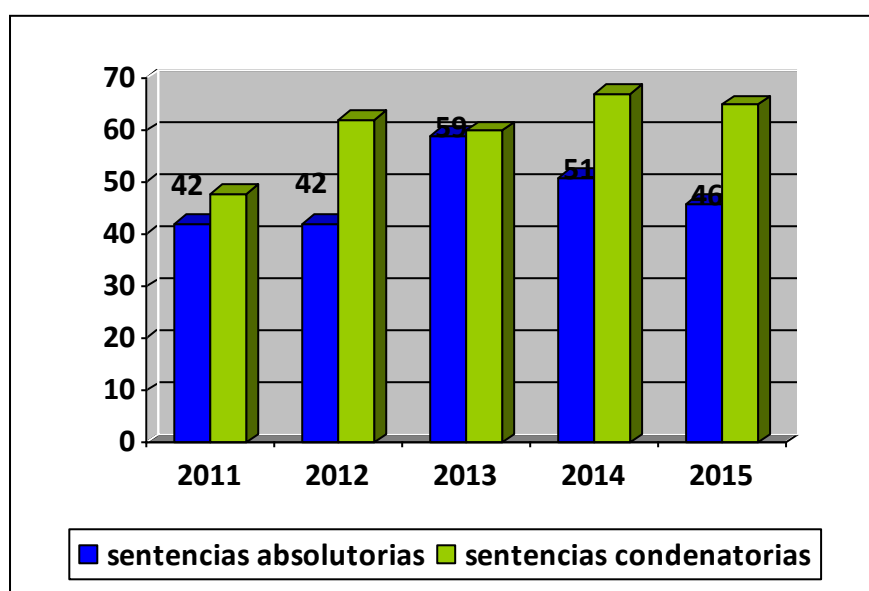
Una vez expuesta toda esa información aunada a los conocimientos obtenidos en función del contenido de las dos primeras partes de este trabajo se estará en la capacidad de dar respuesta a la interrogante planteada como título de esta tesis doctoral.

Y es que, para determinar si un delito es inoperante o no, se debe estudiar la teoría referida a aquél y observar cómo se desenvuelve éste en la práctica judicial, ya que sólo de esa forma se podrá emitir una opinión de manera responsable.

II.- CON RELACIÓN A LOS SENTIDOS DE FALLO DE LOS PROCESOS FENECIDOS DURANTE LOS AÑOS 2011-2015

En este apartado se expondrá mediante el siguiente gráfico de barras los sentidos de los fallos emitidos durante los años 2011-2015 sobre procesos vinculados a este delito en los que se emitieron sentencias firmes.

Este tipo de gráfico permitirá que se pueda observar de forma comparada la cantidad de absoluciones y condenas que se han producido durante esos años.



Se puede percibir claramente que en este delito se emiten más sentencias condenatorias firmes que absolutorias.

De los datos se obtiene que durante el período 2011-2015 se emitieron 302 sentencias condenatorias firmes y 240 sentencias absolutorias firmes, es decir, de las 542 causas penales fenecidas en esos años, aproximadamente el 56% de ellas culminaron con sentencias condenatorias y 44% con absolutorias firmes.

En el año 2011, de las 90 causas penales fenecidas por este delito, 53% culminaron con condena firmes y 47% con absoluciones también firmes.

En el año 2012, de las 104 causas penales fenecidas por este delito, un 60% culminaron mediante sentencias condenatorias, mientras que, un 40% lo hicieron mediante sentencias absolutorias firmes.

En el año 2013, de las 119 causas penales fenecidas por este delito, aproximadamente un 50% culminaron con sentencias condenatorias, y el otro 50% con absolutorias.

En el año 2014, de las 118 causas penales fenecidas por este delito, aproximadamente un 57% culminaron con sentencias condenatorias, mientras que el restante 43% lo hicieron por sentencias absolutorias.

Finalmente, en el año 2015, de las 111 causas penales fenecidas por este delito, 59% culminaron mediante sentencias absolutorias firmes, mientras que 41% lo hicieron por absolutorias.

Los datos obtenidos muestran que se emiten más sentencias condenatorias firmes que absolutorias también firmes, lo cual podría preliminarmente llevar a que se pensase que este delito efectivamente se persigue y se sanciona.

Acorde con la información mostrada, todos los años se emitieron más sentencias condenatorias que absolutorias, incluso en el año 2013, a pesar de que porcentualmente arroja un equilibrio entre ambos tipos de sentencias, en número, se emitió una sentencia más de las condenatorias.

En el año 2014 se emitieron en número muchas más sentencias condenatorias que en los otros años, mientras que, porcentualmente es en el año 2012 en donde se emitieron con mayor diferencia porcentual más sentencias condenatorias que absolutorias.

Ahora bien, a pesar de que en la práctica se emiten más sentencias condenatorias firmes que absolutorias, no puede pasar por desapercibido el hecho de que el porcentaje de absoluciones es también alto, representa un 44% del total de sentencias firmes emitidas durante los años 2011 y 2015.

Dicha cantidad de absoluciones conlleva a que se infiera que, en la práctica, aproximadamente uno de cada dos procesos por este delito que llegaron hasta la etapa de emisión de la sentencia culminaron mediante una absolución.

Esto podría hacer cambiar la idea preliminar que se tenía, y que se pensase que, debido a ese alto porcentaje de absoluciones, éste delito no se persigue y sanciona como se debe.

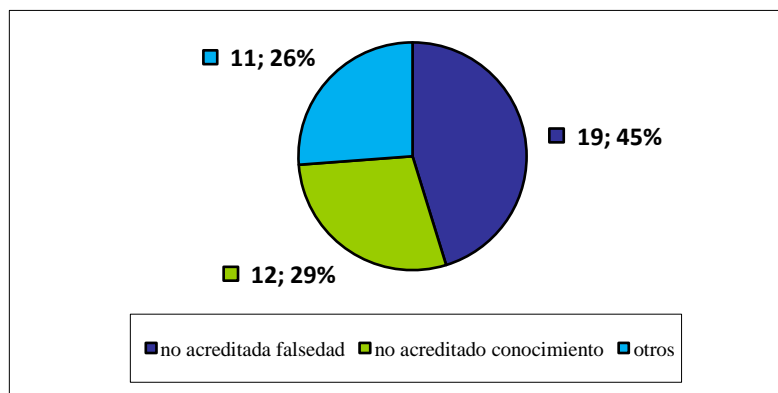
Pues bien, a efectos de determinar la eficacia de la persecución y sanción de este delito, es necesario que se incida sobre el porcentaje de absoluciones firmes emitidas con relación a este delito, más precisamente, que se analice cuáles fueron los principales motivos por los que el órgano jurisdiccional optó por la absolución de los procesados, para así poder contar con las herramientas necesarias para determinar si este delito cumple su rol en el sistema penal o si su regulación en el CP es meramente simbólica.

III.- CON RELACIÓN A LAS ABSOLUCIONES FIRMES DICTADAS

A continuación, se realizará un estudio sobre los principales motivos por los que se absolviere firmemente en los procesos por este delito que fenecieron durante el período comprendido entre los años 2011 y 2015.

1. Datos obtenidos respecto a procesos fenecidos en el año 2011

En el año 2011 se emitieron 90 sentencias firmes referidas al delito estudiados de las cuales 42 fueron absolutorias.



Para interpretar adecuadamente los datos debe tenerse en cuenta que el órgano jurisdiccional en este tipo de procesos evalúa en un primer nivel de análisis si la imputación es objetivamente falsa o no. Si no lo es, evidentemente procederá a dictaminar el sobreseimiento firme o, en este caso, una sentencia absolutoria; si lo es, procederá a realizar un segundo nivel de análisis referido a la determinación de si la imputación objetivamente falsa fue o no realizada con conocimiento de su falsedad o con temerario desprecio hacia la verdad.

Así pues, la primera de las variables evaluadas atiende a la falsedad objetiva de la imputación, mientras que, la segunda se vincula al conocimiento de la falsedad de aquélla o al temerario desprecio hacia la verdad.

Adicionalmente, se ha considerado la inclusión de una tercera variable vinculada a otros factores –ajenos a los dos primeros– por los que el órgano jurisdiccional puede haber optado por dictaminar la absolución firme del procesado.

De esta forma se tiene que, en 19 de las 42 causas penales fenecidas por este delito en el año 2011 se decretó la absolución debido a que no se pudo

acreditar la falsedad de la misma. Esto representó el 45% de las absoluciones realizadas ese año.

En 12 de las 42 causas penales fenecidas por este delito en el año 2011 se dictaminó la absolución debido a que, a pesar de estar acreditada la falsedad de la imputación, no se pudo acreditar que la persona tenía conocimiento de la misma. Esto representó el 29% del total de las sentencias absolutorias por este delito emitidas ese año.

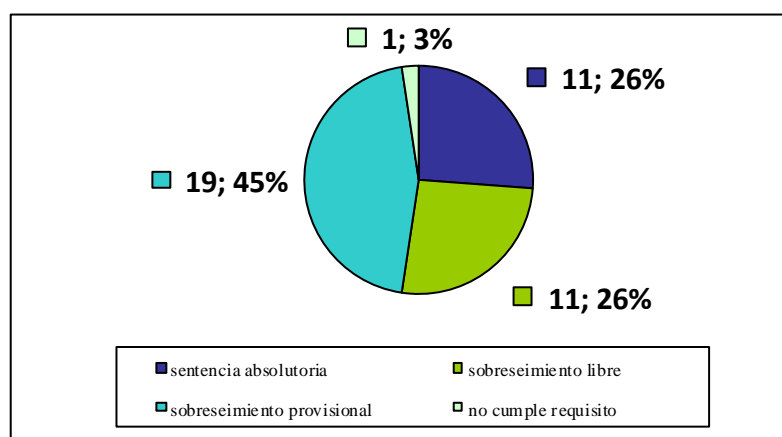
Finalmente, el órgano jurisdiccional en 11 de las causas penales fenecidas por este delito en el año 2011 optó por la absolución debido a que: i) la acusación particular en un proceso vulneró lo dispuesto en el art. 790 LECrim al momento de interponer la apelación (la absolución en primera instancia se produjo porque no se acreditó la falsedad de la imputación), ii) en un caso ya existía otro proceso anterior por los mismos hechos (cosa juzgada vinculada a una sentencia condenatoria por otro delito de acusación y denuncia falsas); iii) en tres procesos, las sentencias de primera instancia se basaron en pruebas personales, las cuales no podían ser valoradas nuevamente por el tribunal debido a que no había inmediación (en las primeras sentencias de estos procesos se había absuelto debido a que no se había acreditado el conocimiento de la falsedad de la imputación); iv) en un proceso el tipo penal que debía de haber sido imputado era el de simulación de delitos y no el de acusación y denuncia falsas, por lo que en virtud del principio acusatorio tuvieron que absolver; v) en un proceso la acción imputada no era constitutiva de una infracción penal; vi) en un caso la acusación particular procedió a retirar su acusación por ese delito; vii) en un caso hubieron irregularidades formales al momento en que la acusación particular intentó formular acusación por este delito; viii) en una causa no se cumplía con el requisito de procedibilidad; y, ix) en un proceso ya había prescrito el delito. Las sentencias absolutorias dictadas por los motivos antes mencionados representan un 26% del total de las sentencias absolutorias emitidas durante ese año.

Pues bien, puede observarse que en casi la mitad de los procesos se tuvo que absolver debido a que no se pudo acreditar la falsedad objetiva de la imputación.

Al respecto, si se tiene en cuenta que la falsedad objetiva de la imputación se suele acreditar mediante indicios que pueden extraerse del proceso primigenio, cabría analizar cuántas de las sentencias absolutorias firmes emitidas en procesos fenecidos por este delito tuvieron su origen en sobreseimientos provisionales, en sobreseimientos libres y en sentencias absolutorias firmes vinculados al proceso primigenio para así poder determinar cuáles son las resoluciones judiciales vinculadas a los procesos primigenios que más problemas generan para la acreditación de las variables antes mencionadas.

Y es que, así como existen procesos primigenios que culminan con ciertas resoluciones judiciales que permiten la obtención de indicios sobre la falsedad de la imputación y el conocimiento sobre éste, por ejemplo, los que culminan con autos de sobreseimiento libre, existen también procesos primigenios que culminan con ciertas resoluciones judiciales que por la naturaleza de aquéllas dificultan la obtención de indicios sobre las variables indicadas.

De las 42 sentencias absolutorias se tiene la siguiente distribución:



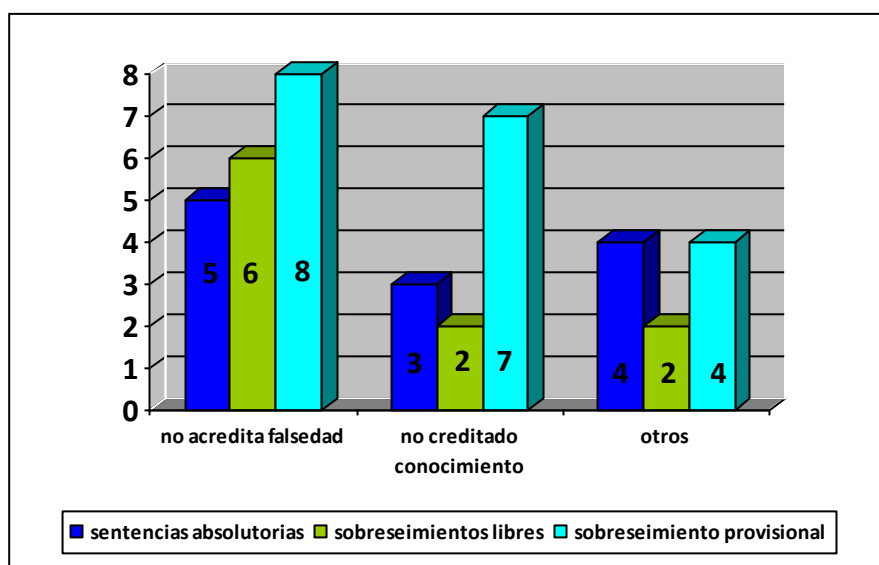
Como puede observarse de las sentencias absolutorias emitidas con relación a este delito en el año 2011: 11 (26%) se encontraron vinculadas en su origen a

sentencias absolutorias firmes del proceso primigenio; 11 (26%) se encontraron vinculadas en su origen a autos de sobreseimiento libre sobre el proceso primigenio; 19 (45%) se encontraron vinculadas en su origen a autos de sobreseimiento provisional sobre el proceso primigenio; y, 1 (3%) se emitió de esa forma porque no cumplía con el primer requisito de procedibilidad exigido por el art. 456.2 CP.

De la interpretación preliminar de estos datos, podría pensarse que existe una vinculación necesaria entre la falta de acreditación de la falsedad objetiva de la imputación y los autos de sobreseimiento provisional emitidos en el proceso primigenio.

Para confirmar la existencia o no de una vinculación entre ambos factores, se procederá a la evaluación de la relación del fundamento de las sentencias absolutorias y su vinculación con el tipo de resolución judicial del proceso primigenio.

Se ha podido establecer la siguiente relación en función de las 41 sentencias absolutorias relevantes⁵⁵⁵:



⁵⁵⁵ Son 41 sentencias absolutorias y no 42 debido a que una de ellas no cumplió con el requisito de procedibilidad y por tanto no se encuentra vinculada en su origen con ninguna resolución judicial previa.

De las 19 sentencias absolutorias que se emitieron porque no se encontraba acreditada la falsedad de la imputación, 8 (42%) se hallaban vinculadas en su origen con autos de sobreseimiento provisional en el proceso primigenio, 6 (32%) se hallaban vinculadas en su origen con autos de sobreseimiento libre y sólo 5 (26%) se encontraban vinculadas a sentencias absolutorias firmes.

Como se recuerda, la emisión de un auto de sobreseimiento libre y de una sentencia absolutoria firme no necesariamente conllevan a que se tenga por falsa a la imputación realizada, sin embargo, es cierto que más fácilmente –en especial en el caso de los autos de sobreseimiento libre– proporcionan o brindan cierta información que permite más fácilmente obtener indicios sobre la falsedad objetiva de la imputación

Ahora bien, de los datos expuestos puede observarse que el 58% de las absoluciones por falta de acreditación de la falsedad objetiva se produjeron en procesos penales en los que su origen se encontraba vinculado a sentencias absolutorias firmes y a autos de sobreseimiento libre producidos en las causas primigenias, y, el 42% restante de las absoluciones por este motivo se encontraban vinculadas en su origen a autos de sobreseimiento provisional firmes recaídos en los procesos primigenios.

Así pues, si bien es cierto, un gran porcentaje de los procesos penales por este delito que fenecieron en el año 2011 mediante una sentencia absolutoria firme producida por la falta de acreditación de la falsedad objetiva de la imputación tienen vinculación en su origen con procesos primigenios que culminaron con autos de sobreseimiento provisional firmes, no es menos cierto, que también existen procesos culminados mediante una absolución por falta de acreditación de la falsedad objetiva de la imputación que se encuentran vinculados en su origen con sentencias absolutorias o autos de sobreseimiento libre firmes recaídos en los procesos primigenios.

Lo antes mencionado permite que se propongan dos hipótesis que se corroborarán o descartarán según la verificación que se pueda realizar sobre los datos de los demás años:

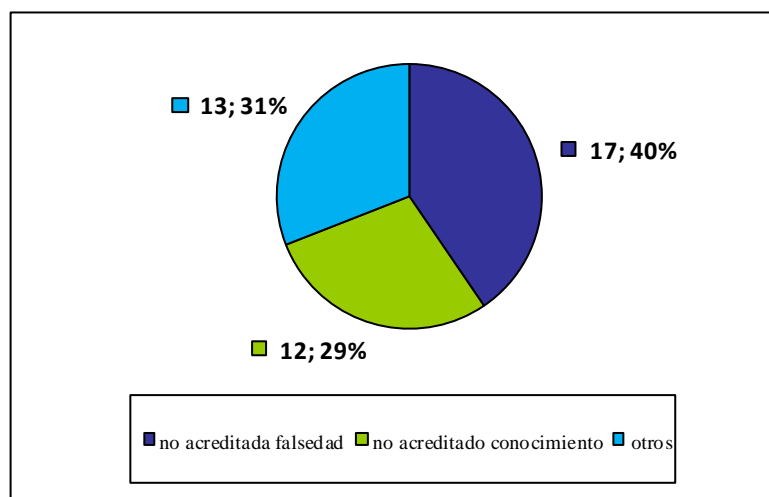
- a) Que no necesariamente todos los procesos por acusación y denuncia falsas que tengan como antecedente a una sentencia absolutoria firme o un auto también firme de sobreseimiento libre emitido en la causa primigenia tendrán de por sí acreditada la falsedad objetiva de la imputación.
- b) Que, visto de manera individual, las causas primigenias que culminan con autos de sobreseimiento provisional por la supuesta imputación falsa de un delito, tienen mayor posibilidad de generar procesos penales por el delito de acusación y denuncia falsas que culminen con sentencias absolutorias firmes, ello debido a la dificultad que arrastran del primer proceso vinculada a la dificultad para acreditar la veracidad o la falsedad de la imputación –que hubiera generado que se pasase a juicio oral o se emitiese un auto de sobreseimiento libre, respectivamente– y, a la dificultad derivada de ella de poder acreditar la falsedad de la imputación en el segundo proceso –el instaurado por el delito de acusación y denuncia falsas –.

Por otro lado, en cuanto a las 12 sentencias absolutorias que se emitieron porque no se encontraba acreditado el conocimiento sobre la falsedad de la imputación, 7 (58%) se hallaban vinculadas en su origen con autos de sobreseimiento provisional en el proceso primigenio, 2 (17%) se hallaban vinculadas en su origen con autos de sobreseimiento libre y sólo 3 (25%) se encontraban vinculadas a sentencias absolutorias firmes.

Así, un 58% de las sentencias absolutorias que se emitieron porque no se tenía por acreditada la falsedad se encontraban vinculadas a autos firmes de sobreseimiento provisional recaídos sobre el proceso primigenio, de ello puede inferirse que, en cuanto a la acreditación del conocimiento de la falsedad de la imputación, aquellos procesos que se hallaban vinculados a autos de sobreseimiento provisional de las causas primigenias presentaron una mayor dificultad para la acreditación de dicho elemento.

2. Datos obtenidos respecto a procesos fenecidos en el año 2012

En el año 2012 se emitieron 104 sentencias firmes referidas al delito estudiados de las cuales 42 fueron absolutorias.



En 17 de las 42 causas penales fenecidas por este delito en el año 2012 se decretó la absolución debido a que no se pudo acreditar la falsedad de la misma. Esto representó el 40% de las absoluciones realizadas ese año.

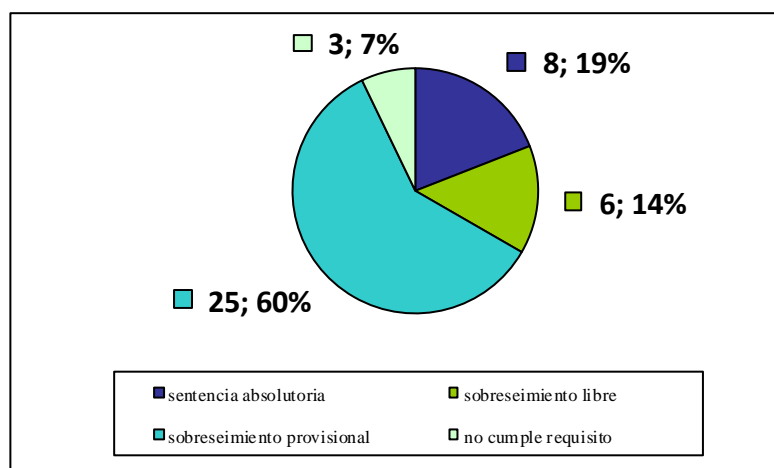
En 12 de las 42 causas penales fenecidas por este delito en el año 2012 se dictaminó la absolución debido a que a pesar de estar acreditada la falsedad de la imputación, no se pudo acreditar que la persona que la realizó tenía conocimiento de la misma. Esto representó el 29% del total de las sentencias absolutorias por este delito emitidas ese año.

Finalmente, el órgano jurisdiccional en 13 de las causas penales fenecidas por este delito en el año 2012 optó por la absolución debido a que: i) en tres de los casos no se cumplió con el primer requisito de procedibilidad exigido por el art. 456.2 CP; ii) en cuatro procesos se sostuvo que en segunda instancia no se podrá evaluar el material probatorio (en las sentencias de primera instancia no se había acreditado la falsedad de la imputación); iii) en una causa la acusación particular retiró la acusación por el delito de acusación y denuncia falsas; iv) en

dos casos la sentencia de primera instancia se basó en prueba personal, las cuales no podían ser valoradas nuevamente por el tribunal debido a que no había inmediación (en las sentencias de primera instancia de este proceso se había absuelto ya que no se había acreditado el conocimiento de la falsedad de la imputación); v) en dos de los casos no se cumplieron con el segundo requisito de procedibilidad exigido por el art. 456.2 CP; y, vi) en un proceso hubieron irregularidades formales al momento en que se intentó formular acusación por este delito. Las sentencias absolutorias emitidas por los motivos antes mencionados representaron un 31% del total de las sentencias absolutorias emitidas en el año 2012.

En este año al igual que en el anterior, el motivo principal por el que se absolvió en esos procesos fue por la falta de acreditación de la falsedad objetiva de la imputación.

En cuanto a las 42 sentencias absolutorias y su vinculación con las resoluciones judiciales firmes recaídas en los procesos primigenios se tiene la siguiente distribución:



Como puede observarse de las sentencias absolutorias emitidas sobre este delito en el año 2012 se tiene que: 8 (19%) se encontraron vinculadas en su origen a sentencias absolutorias firmes del proceso primigenio; 6 (14%) se encontraron vinculadas en su origen a autos de sobreseimiento libre sobre el proceso primigenio; 25 (60%) se encontraron vinculadas en su origen a autos

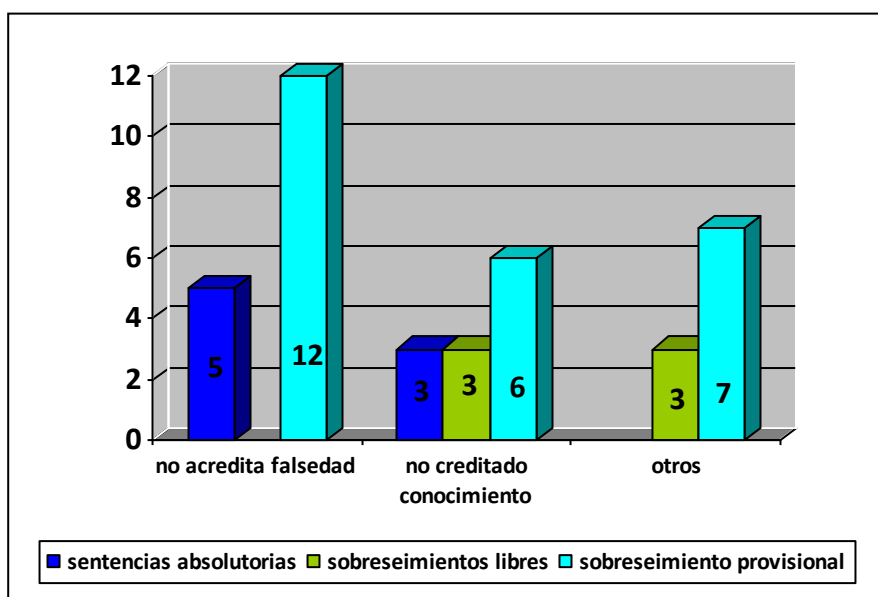
de sobreseimiento provisional sobre el proceso primigenio; y, 3 (7%) no cumplían con el primer requisito de procedibilidad exigido por el art. 456.2 CP.

De esta forma, se constata que la mayoría de los procesos penales en los que se emitieron absoluciones firmes por este delito en el año 2012, se vincularon principalmente a autos de sobreseimiento provisional.

Ello tiene una particular relevancia ya que, como se ha sostenido, a través de la emisión de ese tipo de resoluciones lo que se expone es la duda del órgano jurisdiccional, duda sobre la veracidad objetiva de la imputación o sobre la falsedad de la misma, con lo que, de el resultado de aquellos procesos primigenios no se suelen extraer, en principio, indicios suficientes como para tener por acreditada la falsedad o veracidad de la imputación.

Al igual que como se hizo con los datos del año 2011, se realizará una evaluación de la relación del fundamento de las sentencias absolutorias y su vinculación con la resolución judicial del proceso primigenio.

Se ha podido establecer la siguiente distribución en función de las 39 sentencias absolutorias⁵⁵⁶ relevantes :



⁵⁵⁶ Son 39 sentencias absolutorias y no 42 debido a que tres de ellas no cumplieron con el primer requisito de procedibilidad y por tanto no se encuentran vinculadas en su origen con ninguna resolución judicial previa.

De las 17 sentencias absolutorias que se emitieron porque no se encontraba acreditada la falsedad de la imputación, 12 (71%) se hallaban vinculadas en su origen con autos de sobreseimiento provisional en el proceso primigenio y 5 (29%) se encontraban vinculadas a sentencias absolutorias firmes.

En este año el porcentaje de procesos penales que culminaron con una absolución por falta de acreditación de la falsedad objetiva de la imputación que se encontraban vinculados en su origen con autos de sobreseimiento provisional firmes recaídos en los procesos primigenios se incrementó considerablemente, ya que en el año 2012 representaron un 71% del total de sentencias absolutorias emitidas por ese motivo.

Los datos obtenidos hasta este punto validan las hipótesis formuladas en el apartado precedente referido a que las causas primigenias que culminan con autos de sobreseimiento provisional por la supuesta imputación falsa de un delito tienen mayor posibilidad de generar procesos penales por el delito de acusación y denuncia falsas que culminen con sentencias absolutorias firmes, ello debido a la dificultad probatoria que existe para acreditar la falsedad o veracidad de la imputación.

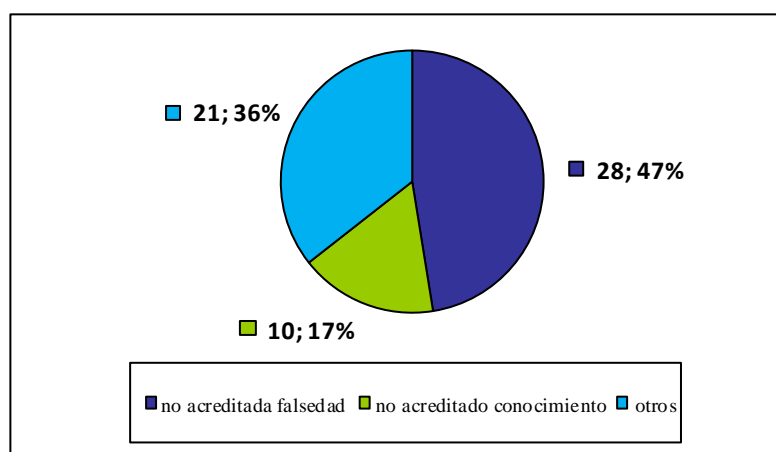
En cuanto a las 12 sentencias absolutorias que se emitieron porque no se encontraba acreditado el conocimiento de la falsedad de la imputación, 6 (50%) se hallaban vinculadas en su origen con autos de sobreseimiento provisional en el proceso primigenio, 3 (25%) se encontraban vinculadas a sentencias absolutorias firmes, y 3 (25%) se vinculaban en su origen a autos de sobreseimiento libre.

Los datos obtenidos al respecto son similares a los que se obtuvieron en el año 2011, pues al menos la mitad de los procesos que culminaron con una sentencia absolutoria por falta de acreditación del conocimiento de la falsedad de la imputación se encontraban vinculados en su origen con autos de sobreseimiento provisional firmes recaídos sobre los procesos primigenios. Esto valida también la hipótesis que se planteó sobre la dificultad probatoria de este aspecto subjetivo del tipo penal con la que se encuentran los procesos por

el delito de acusación y denuncia falsas que se vinculan en su origen con autos de sobreseimiento provisional recaídos en las causas primigenias.

3. Datos obtenidos respecto a procesos fenecidos en el año 2013

En el año 2013 se emitieron 119 sentencias firmes referidas al delito estudiados de las cuales 59 fueron absolutorias.



En 28 de las 59 causas penales fenecidas por este delito en el año 2013 se decretó la absolución debido a que no se pudo acreditar la falsedad de la misma. Esto representó el 47% de las absoluciones realizadas ese año.

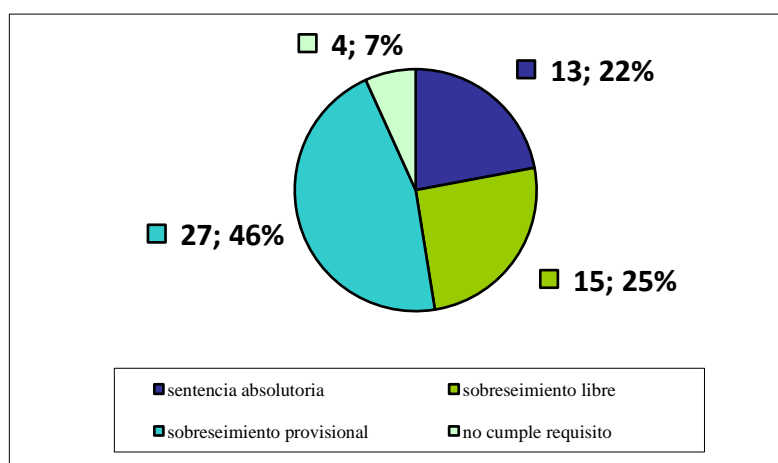
En 10 de las 42 causas penales fenecidas por este delito en el año 2013 se dictaminó la absolución debido a que a pesar de estar acreditada la falsedad de la imputación, no se pudo acreditar que la persona tenía conocimiento de la misma. Esto representó el 17% del total de las sentencias absolutorias por este delito emitidas ese año.

Finalmente, en 21 de las causas penales fenecidas por este delito en el año 2013 el órgano jurisdiccional optó por la absolución debido a que: i) en cuatro de los casos no se cumplió con el primer requisito de procedibilidad exigido por el art. 456.2 CP; ii) en siete procesos se sostuvo que en segunda instancia no se puede evaluar el material probatorio (en las sentencias de primera

instancia no se había acreditado la falsedad de la imputación); iii) en cuatro procesos, la sentencia de primera instancia se basó en prueba personal, las cuales no podían ser valoradas nuevamente por el tribunal debido a que no había inmediación (en las sentencias de primera instancia de este proceso se había absuelto ya que no se había acreditado el conocimiento de la falsedad de la imputación); iv) en un caso se imputó tanto un delito de falsedad como un delito de acusación y denuncia falsas, se absolvió por la falsedad de la denuncia pues quedó absorbida por el delito de falsedad; v) en un caso se aplicó una eximente completa por alteración psíquica; y, vi) en un caso lo imputado no constituía una infracción penal. Las sentencias absolutorias emitidas por los motivos antes mencionados representaron un 36% del total de las sentencias absolutorias emitidas en el año 2013.

Al igual que en años anteriores, el motivo principal por el que se absolvió fue por la falta de acreditación de la falsedad objetiva de la imputación.

De las 42 sentencias absolutorias y su vinculación con las resoluciones judiciales firmes respecto al proceso primigenio, se tiene la siguiente distribución:

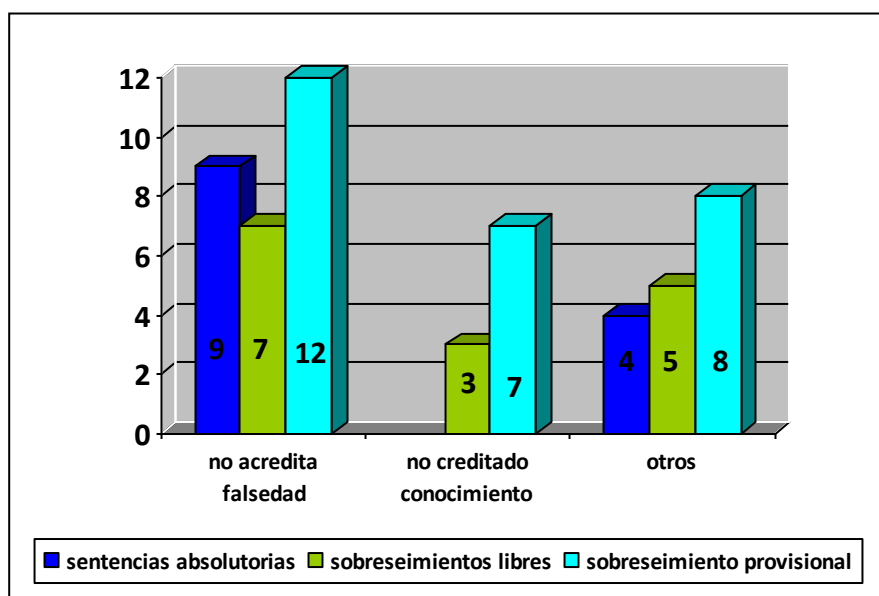


Como puede observarse de las sentencias absolutorias emitidas en el año 2013 sobre este delito: 13 (22%) se encontraron vinculadas en su origen a sentencias absolutorias firmes del proceso primigenio; 15 (25%) se encontraron vinculadas en su origen a autos de sobreseimiento libre sobre el proceso

primigenio; 27 (46%) se encontraron vinculadas en su origen a autos de sobreseimiento provisional sobre el proceso primigenio; y, 4 (7%) no cumplían con el primer requisito de procedibilidad exigido por el art. 456.2 CP.

Al igual que en los años precedentes, se puede constatar que la mayoría de los procesos penales en los que se emitieron absoluciones firmes por este delito en el año 2013 se vincularon principalmente a autos de sobreseimiento provisional.

De la evaluación de la relación del fundamento de las sentencias absolutorias y su vinculación con la resolución judicial del proceso primigenio, se ha podido establecer la siguiente distribución de las 55 sentencias absolutorias⁵⁵⁷ que se encontraron vinculadas en su origen a una resolución judicial que puso fin al proceso primigenio:



De las 28 sentencias absolutorias que se emitieron porque no se encontraba acreditada la falsedad de la imputación, 12 (43%) se hallaban vinculadas en su origen con autos de sobreseimiento provisional en el proceso primigenio, 9

⁵⁵⁷ Son 55 sentencias absolutorias y no 59 debido a que cuatro de ellas no cumplieron con el primer requisito de procedibilidad y por tanto no se encuentran vinculadas en su origen con ninguna resolución judicial previa.

(32%) se encontraban vinculadas a sentencias absolutorias firmes, y, 7 (25%) se encontraban vinculadas a autos de sobreseimiento libre.

Los datos arrojados este año mantienen la tendencia de los años precedentes, en los que el mayor porcentaje de procesos penales que culminaron con una absolución por falta de acreditación de la falsedad objetiva de la imputación se encontraban vinculados en su origen con autos de sobreseimiento provisional firmes recaídos en los procesos primigenios.

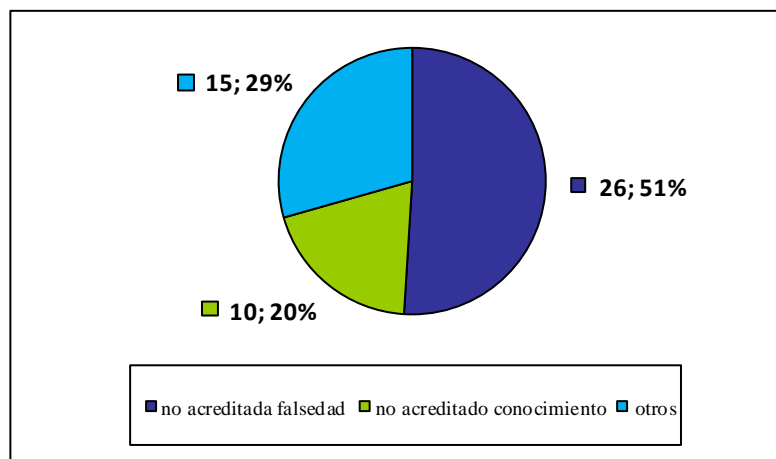
Los datos obtenidos permiten que se sigan validando las hipótesis propuestas en el primer punto de este apartado.

En cuanto a las 10 sentencias absolutorias que se emitieron porque no se encontraba acreditado el conocimiento de la falsedad de la imputación, 7 (70%) se hallaban vinculadas en su origen con autos de sobreseimiento provisional en el proceso primigenio y 3 (30%) se vinculaban en su origen a autos de sobreseimiento libre.

Los datos obtenidos al respecto son similares a los que se obtuvieron en los años anteriores, pues al menos la mitad –en este caso más de la mitad– de los procesos que culminaron con una sentencia absoluta por falta de acreditación del conocimiento de la falsedad de la imputación se encontraban vinculados en su origen con autos de sobreseimiento provisional firmes recaídos sobre los procesos primigenios. Esto sigue validando también la hipótesis que se planteó sobre la dificultad probatoria de este aspecto subjetivo del tipo penal con la que se encuentran los procesos por el delito de acusación y denuncia falsas que se encuentran vinculados en su origen con autos de sobreseimiento provisional recaídos en las causas primigenias.

4. Datos obtenidos respecto a procesos fenecidos en el año 2014

En el año 2014 se emitieron 118 sentencias firmes referidas al delito estudiados de las cuales 51 fueron absolutorias.



En 26 de las 51 causas penales fenecidas por este delito en el año 2014 se decretó la absolución debido a que no se pudo acreditar la falsedad de la misma. Esto representó el 51% de las absoluciones realizadas ese año.

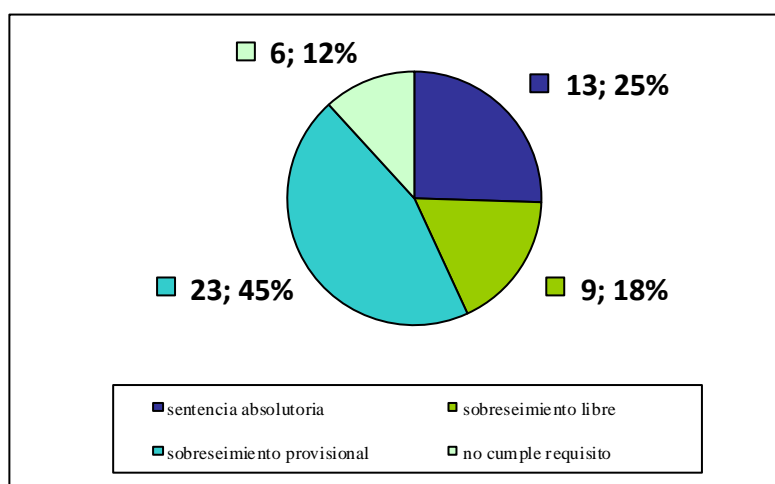
En 10 de las 51 causas penales fenecidas por este delito en el año 2014 se dictaminó la absolución debido a que a pesar de estar acreditada la falsedad de la imputación, no se pudo acreditar que la persona tenía conocimiento de la misma. Esto representó el 20% del total de las sentencias absolutorias por este delito emitidas ese año.

Finalmente, en 15 de las causas penales fenecidas por este delito en el año 2014 el órgano jurisdiccional optó por la absolución debido a que: i) en seis de los casos no se cumplió con el primer requisito de procedibilidad exigido por el art. 456.2 CP; ii) en dos procesos se declaró exento de responsabilidad al procesado por inimputable; iii) en dos procesos el delito ya había prescrito; iv) en dos procesos el hecho imputado no constituía delito; v) en un caso la sentencia de primera instancia se basó en prueba personal, la cual no podía ser valorada nuevamente por el tribunal debido a que no había inmediación (en la sentencia de primera instancia de este proceso se había absuelto debido a que no se había acreditado el conocimiento de la falsedad de la imputación); y, vi) en un proceso se sostuvo que en segunda instancia no se puede evaluar el material probatorio (en la sentencia de primera instancia no se había acreditado la falsedad de la imputación). Las sentencias absolutorias emitidas por los

motivos antes mencionados representaron un 19% del total de las sentencias absolutorias emitidas en el año 2014

Al igual que los años anteriores, el motivo principal por el que se absolvió en esos procesos fue por la falta de acreditación de la falsedad objetiva de la imputación.

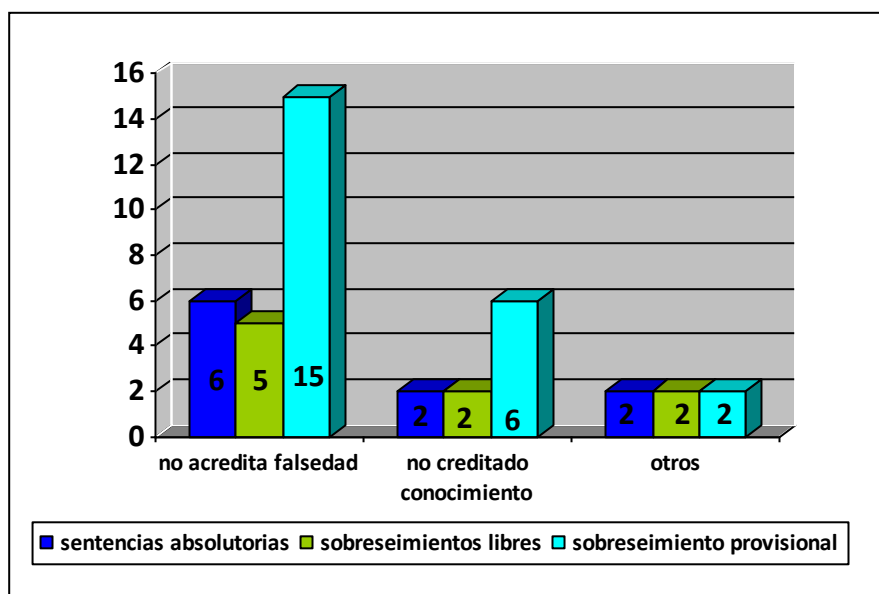
En cuanto a las 51 sentencias absolutorias y su vinculación con las resoluciones judiciales firmes respecto al proceso primigenio se tiene la siguiente distribución:



Como puede observarse de las sentencias absolutorias emitidas en el año 2014 sobre este delito: 13 (25%) se encontraron vinculadas en su origen a sentencias absolutorias firmes del proceso primigenio; 9 (18%) se encontraron vinculadas en su origen a autos de sobreseimiento libre sobre el proceso primigenio; 23 (45%) se encontraron vinculadas en su origen a autos de sobreseimiento provisional sobre el proceso primigenio; y, 6 (12%) no cumplían con el primer requisito de procedibilidad exigido por el art. 456.2 CP.

Al igual que en los años anteriores, se sigue confirmando la tendencia de que la mayoría de los procesos penales en los que se emitieron absoluciones firmes por este delito en el año 2014 se vincularon a principalmente a autos de sobreseimiento provisional.

De la evaluación de la relación del fundamento de las sentencias absolutorias y su vinculación con la resolución judicial del proceso primigenio se ha podido establecer la siguiente distribución de las 45 sentencias absolutorias⁵⁵⁸ que se encontraron vinculadas en su origen a una resolución judicial que puso fin al proceso primigenio:



De las 26 sentencias absolutorias que se emitieron porque no se encontraba acreditada la falsedad de la imputación, 15 (58%) se hallaban vinculadas en su origen con autos de sobreseimiento provisional en el proceso primigenio, 6 (23%) se encontraban vinculadas a sentencias absolutorias firmes, y, 5 (19%) se encontraban vinculadas a autos de sobreseimiento libre.

Al igual que en los años precedentes, el mayor porcentaje de procesos penales que culminaron con una absolución por falta de acreditación de la falsedad objetiva de la imputación se encontraban vinculados en su origen con autos de sobreseimiento provisional firmes recaídos en los procesos primigenios.

Los datos obtenidos permiten que se sigan validando las hipótesis propuestas en el primer punto de este apartado.

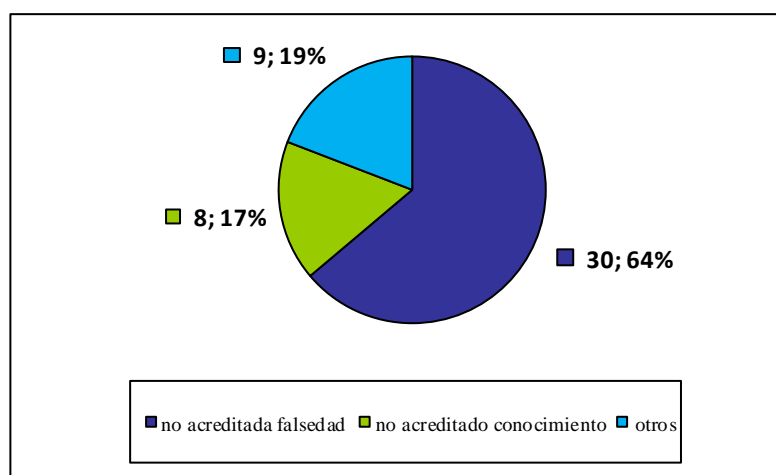
⁵⁵⁸ Son 45 sentencias absolutorias y no 51 debido a que cuatro de ellas no cumplieron con el primer requisito de procedibilidad y por tanto no se encuentran vinculadas en su origen con ninguna resolución judicial previa.

En cuanto a las 10 sentencias absolutorias que se emitieron porque no se encontraba acreditado el conocimiento de la falsedad de la imputación, 6 (60%) se hallaban vinculadas en su origen con autos de sobreseimiento provisional en el proceso primigenio; 2 (20%) se encontraban vinculadas a sentencias absolutorias firmes, y, 2 (20%) se encontraban vinculadas a autos de sobreseimiento libre.

Los datos obtenidos al respecto son similares a los que se obtuvieron en los años anteriores, pues más de la mitad de los procesos que culminaron con una sentencia absolutoria por falta de acreditación del conocimiento de la falsedad de la imputación se encontraban vinculados en su origen con autos de sobreseimiento provisional firmes recaídos sobre los procesos primigenios. Esto sigue validando también la hipótesis que se planteó sobre la dificultad probatoria de este aspecto subjetivo del tipo penal con la que se encuentran los procesos por el delito de acusación y denuncia falsas que se encuentran vinculados en su origen con autos de sobreseimiento provisional recaídos en las causas primigenias.

5. Datos obtenidos respecto a procesos fenecidos en el año 2015

En el año 2015 se emitieron 111 sentencias firmes referidas al delito estudiados de las cuales 47 fueron absolutorias.



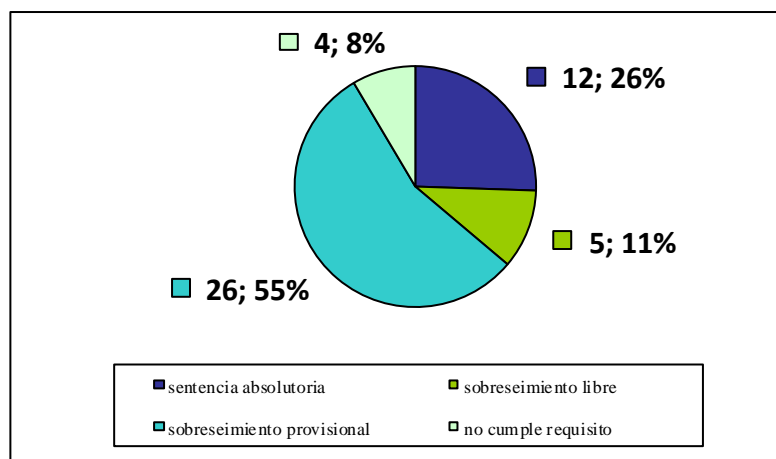
En 30 de las 47 causas penales fenecidas por este delito en el año 2015 se decretó la absolución debido a que no se pudo acreditar la falsedad de la misma. Esto representó el 64% de las absoluciones realizadas ese año.

En 8 de las 47 causas penales fenecidas por este delito en el año 2015 se dictaminó la absolución debido a que a pesar de estar acreditada la falsedad de la imputación, no se pudo acreditar que la persona tenía conocimiento de la misma. Esto representó el 17% del total de las sentencias absolutorias por este delito emitidas ese año.

Finalmente, en 9 de las causas penales fenecidas por este delito en el 2015 el órgano jurisdiccional optó por la absolución debido a que: i) en cuatro de los casos no se cumplió con el primer requisito de procedibilidad exigido por el art. 456.2 CP; ii) en uno de los casos ya había prescrito el delito; iii) en un caso lo imputado no constituía una infracción penal; iv) en un proceso la sentencia de primera instancia se basó en prueba personal, la cual no podía ser valoradas nuevamente por el tribunal debido a que no había inmediación (en las sentencias de primera instancia de este proceso se había absuelto debido a que no se había acreditado el conocimiento de la falsedad de la imputación); y, v) en dos casos ya existían sentencias por los mismos hechos. Las sentencias absolutorias emitidas por los motivos antes mencionados representaron un 19% del total de las sentencias absolutorias emitidas en el año 2015.

Puede observarse que en este año también el motivo principal por el que se absolvió fue por la falta de acreditación de la falsedad objetiva de la imputación.

De las 47 sentencias absolutorias y su vinculación con las resoluciones judiciales firmes se tiene la siguiente distribución:

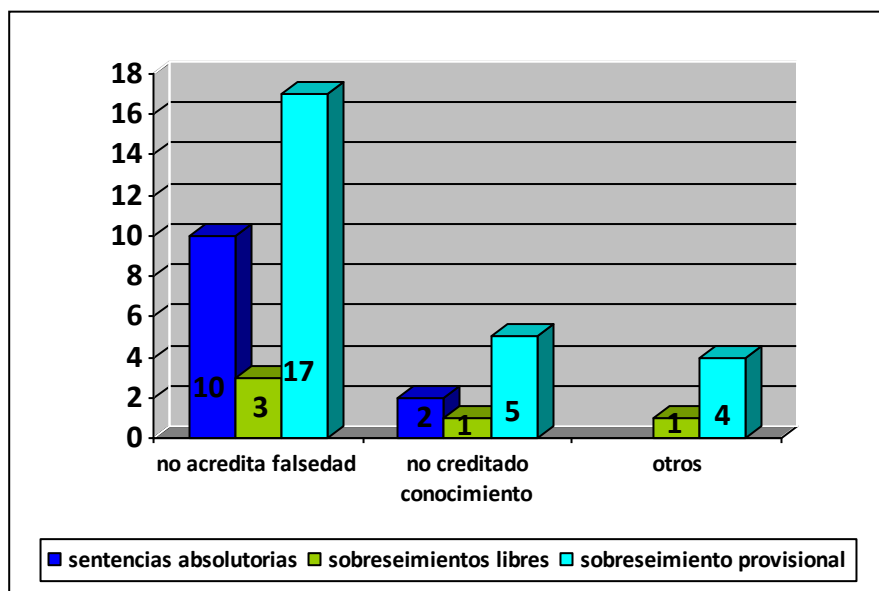


Como puede observarse de las sentencias absolutorias emitidas sobre este delito en el año 2015: 12 (26%) se encontraron vinculadas en su origen a sentencias absolutorias firmes del proceso primigenio; 5 (11%) se encontraron vinculadas en su origen a autos de sobreseimiento libre sobre el proceso primigenio; 26 (55%) se encontraron vinculadas en su origen a autos de sobreseimiento provisional sobre el proceso primigenio; y, 4 (8%) no cumplían con el primer requisito de procedibilidad exigido por el art. 456.2 CP.

Al igual que en los años precedentes, se puede constatar que la mayoría de los procesos penales en los que se emitieron absoluciones firmes por este delito en el año 2015, se vincularon principalmente a autos de sobreseimiento provisional.

De la evaluación de la relación del fundamento de las sentencias absolutorias y su vinculación con la resolución judicial del proceso primigenio, se ha podido establecer la siguiente distribución de las 43 sentencias absolutorias⁵⁵⁹ que se encontraron vinculadas en su origen a una resolución judicial que puso fin al proceso primigenio:

⁵⁵⁹ Son 55 sentencias absolutorias y no 59 debido a que cuatro de ellas no cumplieron con el primer requisito de procedibilidad y por tanto no se encuentran vinculadas en su origen con ninguna resolución judicial previa.



De las 30 sentencias absolutorias que se emitieron porque no se encontraba acreditada la falsedad de la imputación, 17 (57%) se hallaban vinculadas en su origen con autos de sobreseimiento provisional en el proceso primigenio, 10 (33%) se encontraban vinculadas a sentencias absolutorias firmes, y, 3 (10%) se encontraban vinculadas a autos de sobreseimiento libre.

Los datos arrojados este año mantienen la tendencia de los cuatro años precedentes, en los que el mayor porcentaje de procesos penales que culminaron con una absolución por falta de acreditación de la falsedad objetiva de la imputación se encontraban vinculados en su origen con autos de sobreseimiento provisional firmes recaídos en los procesos primigenios.

Por tanto se ha confirmado la hipótesis propuesta sobre que las causas primigenias que culminan con autos de sobreseimiento provisional por la supuesta imputación falsa de un delito, tienen mayor posibilidad de generar procesos penales por el delito de acusación y denuncia falsas que culminen con sentencias absolutorias firmes, ello debido a la dificultad que existió en el primer proceso de poder acreditar la veracidad o la falsedad de la imputación – que hubiera generado que se pasase a juicio oral o se emitiese un auto de sobreseimiento libre, respectivamente– y, en el segundo, a la dificultad que existió para acreditar la falsedad de aquella.

Asimismo, también se ha corroborado que el hecho de que un proceso culmine con una sentencia absolutoria o un auto de sobreseimiento libre no implica necesariamente que se tenga por acreditada la falsedad objetiva de esa imputación, pues como se ha comprobado existen sentencias absolutorias por el delito de acusación y denuncia falsas que tienen vinculación en su origen con sentencias absolutorias y autos de sobreseimiento libre firmes recaídos en los procesos primigenios.

En cuanto a las 8 sentencias absolutorias que se emitieron porque no se encontraba acreditado el conocimiento de la falsedad de la imputación, 5 (63%) se hallaban vinculadas en su origen con autos de sobreseimiento provisional en el proceso primigenio, 2 (25%) se encontraban vinculadas a sentencias absolutorias firmes, y, 1 (12%) se encontraban vinculadas a autos de sobreseimiento libre.

Los datos obtenidos al respecto son similares a los que se obtuvieron en los cuatro años anteriores, pues la mitad o, como en este caso, más de la mitad de los procesos que culminaron con una sentencia absolutoria por falta de acreditación del conocimiento de la falsedad de la imputación se encontraban vinculados en su origen con autos de sobreseimiento provisional firmes recaídos sobre los procesos primigenios.

Esto confirma la hipótesis que se postuló sobre la dificultad probatoria de este aspecto subjetivo del tipo penal con la que se encuentran los procesos por el delito de acusación y denuncia falsas que se hayan vinculados en su origen con autos de sobreseimiento provisional recaídos en las causas primigenias, la cual hace que se tenga que optar por la absolución.

IV.- ¿INOPERANCIA DEL DELITO?

Llegados a este punto puede procederse a dar respuesta a la interrogante formulada como título de esta investigación.

Es cierto que existe una alta tasa de sentencias absolutorias que se emiten en este tipo de delito, pero ello no debe llevar a pensar, tal como sostiene un sector doctrinario, que este tipo de delitos “rara vez se persigue y se castiga”⁵⁶⁰, puesto que el hecho de que exista una gran tasa de absolución –por cierto, menor que las condenas– se debe en a las dificultades probatorias existentes en cuanto a la acreditación de la falsedad de la imputación y el conocimiento de ella por parte del sujeto que la ha realizado.

Esa dificultad conlleva a que el órgano jurisdiccional, respetuoso de las garantías y principios procesales, opte por absolver al sujeto imputado como acusador o denunciante de una imputación falsa, y es que, si existen dudas sobre la posibilidad de la ocurrencia verdadera de un hecho o sobre el conocimiento que el sujeto pudo haber tenido respecto de la falsedad se deberá absolver en virtud del *in dubio pro reo*, mientras que, si no se ha contado con material probatorio suficiente que si quiera haya generado dudas sobre la posibilidad de falsedad de la imputación, se absolverá en virtud de la no enervación de la presunción de inocencia⁵⁶¹.

La acreditación de la falsedad y del conocimiento que sobre ella tiene el sujeto que realizó la imputación es algo que debe de realizarse en el proceso posterior por el delito de acusación y denuncia falsas, es cierto que pueden existir indicios que se pueden obtener del proceso inicial acerca de la falsedad o veracidad de la imputación, pero como se reitera ésta se determinará finalmente en el proceso por el delito de acusación y denuncia falsas. Es importante tener en claro esto, dado que ello permite que se sepa

⁵⁶⁰ PEDREIRA GONZÁLEZ, en *Libro Homenaje al Profesor Luis Rodríguez Ramos*, p. 824.

⁵⁶¹ Al respecto, es pertinente destacar que ambos conceptos son distintos, pues por un lado, el principio *in dubio pro reo* protege la necesidad de absolver a todo aquella persona frente a la que no exista la certeza de que sea autora del hecho imputado, mientras que, por el otro, la presunción de inocencia protege no sólo la necesidad antes mencionada sino también la necesidad de que exista prueba en sentido objetivo para poder ser condenado y que la misma se encuentre rodeada de todas las garantías legales. ASCENCIO MELLADO, *Derecho Procesal Penal*, p. 303. Sobre la presunción de inocencia, Moreno Catena ha sostenido que para poder destruirla es necesaria la existencia de una mínima actividad probatoria de cargo de la que pueda deducirse la culpabilidad del acusado. MORENO CATENA, en *Derecho Procesal Penal*, pp. 429-430. En cuando al *in dubio pro reo*, el Sánchez-Vera Gómez-Trelles apunta que no cualquier duda será merecedora de la aplicación de este principio, pues habrán dudas que son inevitables por la propia capacidad del limitada de conocimiento del hombre, en este caso, del juzgador, y existirán también otras dudas esenciales referidas a particularidades del caso a enjuiciar que impiden que éste pueda lograr un convencimiento, siendo este último tipo de dudas las que permiten la aplicación del mencionado principio, y con ella la absolución del procesado. SÁNCHEZ-VERA GÓMEZ-TRELLES, en *Libro Homenaje al Profesor Luis Rodríguez Ramos*, p. 1102.

que no toda sentencia absolutoria o auto de sobreseimiento libre *per se* conducirán a que se tenga por acreditada la falsedad de la imputación, ni mucho menos, su conocimiento.

Así pues, la dificultad probatoria existente respecto a esos dos elementos y el respeto por las garantías y principios procesales antes mencionados conllevan a que se emita un porcentaje tan elevado de sentencias absolutorias por este delito.

Si se extremasen los criterios de valoración de la ocurrencia de dichos elementos, se obtendría una mayor tasa de condenas, pero con el riesgo de generar en la población un temor a denunciar por el miedo a que posteriormente se puede iniciar un proceso penal en su contra si es que no quedase firmemente acreditada la ocurrencia de los hechos imputados.

Por ejemplo, ello ocurriría si tuviese por acreditaba la falsedad de la imputación por el mero hecho de la emisión de un sobreseimiento libre emitido en la causa primigenia.

Para el Estado sería más costoso el endurecimiento de los criterios de valoración de la concurrencia de esos dos elementos esenciales en el delito estudiado, pues además del efecto negativo antes mencionado, se correría también el riesgo de sancionar indebidamente a personas inocentes, lo cual generaría además de esa situación injusta, que la sociedad tuviese una sensación de inseguridad y desconfianza en el funcionamiento del funcionamiento del sistema penal y procesal penal.

Siendo ello así, a pesar de lo que pudiera creerse, el delito de acusación y denuncia falsas funciona bien en el ordenamiento español, pues de los procesos penales que se instauren para su persecución se sancionarán sólo aquellas denuncias o acusaciones que se demuestren que son falsas, es decir, aquéllas en las que se pueda acreditar la falta de veracidad objetiva de la imputación y que, a su vez, permitan inferir de los hechos que el sujeto sí tenía conocimiento de la falsedad objetiva de aquélla o que al menos, sospechaba que su imputación podía ser objetivamente falsa y a pesar de ello la realizó de ese modo.

De esta forma, sólo cuando aparecen acreditados dichos elementos y concurren los demás exigidos por el art. 456 CP se procede a sancionar mediante una sentencia condenatoria dicha conducta.

CONCLUSIONES

CONCLUSIONES

I

Del estudio de los antecedentes históricos de este delito se ha podido determinar que, en un principio, con la persecución de estas conductas se intentaba proteger el honor del falsamente acusado. Para posteriormente, con el devenir del tiempo y con las diversas regulaciones que se dictaron a lo largo de los años sobre la materia, pasar de una protección individualista a una pluralista, buscando ya no sólo la protección del honor, sino también, la de la Administración de Justicia.

II

Mediante la persecución de las conductas contenidas en el Título XX del CP lo que se intenta proteger es la correcta Administración de Justicia vista desde una vertiente dinámica, es decir, en torno a su materialización a través del ejercicio de la función jurisdiccional mediante los distintos órganos jurisdiccionales.

III

En cuanto al bien jurídico protegido en este delito, se ha determinado que el correcto funcionamiento de la Administración de Justicia no puede ser el único bien jurídico protegido en el delito de acusación y denuncia falsas, ya que: i) el honor del falsamente acusado no es un instrumento mediato del cual se vale el sujeto activo para lesionar la Administración de Justicia, sino por el contrario, es un bien jurídico protegido en el delito estudiado, el cual junto con la correcta Administración se ve lesionado de manera simultánea ante la comisión de la conducta delictiva estudiada; ii) al permitirse la persecución de este delito previa denuncia del ofendido, existe un reconocimiento del ofendido como sujeto pasivo del delito; y, iii) tal como se ha mencionado,

históricamente este delito ha sido estructurado como un delito contra el honor del imputado falsamente, pues sin la imputación falsa de una infracción penal en su contra, no cabría la posibilidad de existencia de un delito de acusación y denuncia falsas.

Tampoco lo puede ser el honor en exclusiva debido a que: i) para afectar solamente el honor de la persona imputada falsamente con una infracción penal no es necesario que la imputación revista de visos de veracidad (idoneidad) que permita la instauración de un proceso penal, lo cual claro está va en contra de la estructura del delito de acusación y denuncia falsas que requiere que la imputación falsa sea idónea para la apertura de un proceso penal; y, ii) el honor al ser un bien jurídico disponible por su titular trae como consecuencia que su afectación penal sea sólo perseguible a instancia de parte, algo que claro está no sucede con el delito de acusación y denuncia falsas ya que es un delito público que incluso puede ser iniciado mediante una deducción de testimonio.

Así pues, se ha concluido que ambos –y no solamente uno de ellos– son los bienes jurídicos protegidos en este delito. Y es que, cuando alguien imputa falsamente a otro la comisión de una infracción penal, a pesar de conocer la falsedad de lo manifestado u obrando con temerario desprecio a la verdad, afecta el honor de la persona, colocándolo en un estado de zozobra y aflicción, incidiendo en el papel que desempeña en la sociedad, y, al estipular que dicha imputación para ser considerada como constitutiva de este delito debe realizarse ante un funcionario judicial o administrativo que en razón de su cargo tenga el deber de proceder a la averiguación de los hechos, destaca la necesidad de protección del correcto funcionamiento de la Administración de Justicia frente a ataques producidos a consecuencia del ejercicio injustificado del derecho a la tutela judicial efectiva.

IV

Sobre el criterio interpretativo que debe emplearse para entender la esencia de la naturaleza de la falsedad de la imputación en el delito de acusación y denuncia falsas, se ha optado por la perspectiva objetivista, ya que, se considera que el eje central de la conducta delictiva estudiada es la falsedad objetiva de la imputación, pues sin ella, no se podrían lesionar los bienes jurídicos protegidos en este delito –el correcto

funcionamiento de la Administración de Justicia y el honor del acusado o denunciado falsamente—.

La falsedad objetiva de la imputación se constituye como un elemento objetivo del tipo penal, sin el cual no podría existir el delito de acusación y denuncia falsas. Esto se deduce también de la propia redacción del tipo penal, pues si bien ya no se hace mención expresa a la falsedad de la imputación —como sí se hacía con el CP de 1944—, se sigue manteniendo la expresión “hechos que, de ser ciertos”, con lo que, indirectamente se hace referencia a que los hechos imputados deben ser falsos. Así pues, si los hechos imputados fuesen verdaderos, la conducta sería atípica.

La falsedad de la imputación, como en el caso de todos los elementos objetivos del tipo penal, debe encontrarse abarcada por el dolo del sujeto.

Para que una denuncia o acusación pueda ser considerada a nivel probatorio como falsa debe excluir la posibilidad de que ésta sea veraz, y en caso de que no se la pueda excluir, el órgano jurisdiccional teniendo en cuenta el principio de *in dubio pro reo* deberá fallar absolviendo al procesado por el delito de acusación y denuncia falsas.

La falsedad de la imputación debe emerger de los hechos denunciados y no deducirse de la sentencia absolutoria o auto de sobreseimiento emitido en el proceso inicial, lo que se necesita acreditar es la falsedad objetiva de lo imputado, no la falta de probanza de la imputación inicial que dio lugar a la emisión de esa resolución judicial favorable al supuesto falso acusado o denunciado.

V

El que en la redacción del tipo penal se haya consignado una referencia al “conocimiento de la falsedad” de la imputación no debe interpretarse como una exigencia de un elemento subjetivo distinto del dolo, sino más bien como una “particular” técnica de redacción que empleó el legislador para resaltar que el hecho imputado debe ser falso —recordando con ello que la esencia de este delito radica en la falsedad de la imputación— y que es necesario que el sujeto conozca de la falsedad del hecho imputado.

La falsedad objetiva de la imputación debe ir acompañada del conocimiento de ésta por parte del sujeto activo del delito, y es que, sin la consciencia de ella, la acción sería atípica debido a la falta del dolo.

El conocimiento de la falsedad hace referencia a un dolo directo. El conocimiento posterior de la falsedad objetiva de la imputación es perfectamente subsumible dentro del delito de acusación y denuncia falsas, siempre y cuando exista una persistencia de la imputación después de habersele obtenido.

El temerario desprecio hacia la verdad debe interpretarse como una referencia a la admisión de un dolo eventual, y no a la inclusión de la posibilidad de punición de una conducta imprudente.

Y es que, al contrario del CP de 1944, el CP de 1995 requiere en su art. 12 que las conductas imprudentes sean consignadas expresamente como tales. En ese sentido, observando la redacción del art. 456 CP se puede desprender que ésta no hace referencia expresa a la admisión de una conducta imprudente, con lo que, en virtud de la taxatividad exigida por el propio CP puede concluirse que el tipo penal estudiado no admite la comisión imprudente del delito estudiado.

VI

La norma penal exige que para que pueda procederse contra el denunciante o acusador exista previamente una “sentencia firme” o auto también firme, de sobreseimiento o archivo del Juez o Tribunal que ha conocido de la infracción imputada.

Así, a pesar que el art. 456.2 CP no expresa que esa sentencia debe ser absolutoria, el carácter de ésta se sobreentiende, ya que la esencia delictiva de esta conducta se enfoca en la falsedad de la imputación.

El hecho de que se emita una sentencia absolutoria firme por un delito que un sujeto imputó a otro no implica que se tenga por acreditada la falsedad de la imputación, ya que esa labor de corroboración corresponde realizarse en el proceso posterior, en el cual se evaluará si hubo o no realmente cierto sustrato fáctico al hacer la denuncia.

En cuanto a los autos de sobreseimiento libre firmes, si estos se han emitido por falta de elemento fáctico, pueden perfectamente dar cabida a un proceso de acusación y denuncia falsa, claro está, siempre y cuando, la persona que realizó la acusación haya tenido conocimiento de la falsedad objetiva de lo imputado.

Si se hubiesen emitido por falta de elemento jurídico, la situación se complica un poco más, dado que si la base fáctica de la imputación es verdadera objetivamente y el error radica en la calificación de tales realizada por el sujeto que formuló la imputación, en principio, no debería dar lugar a que prosperase la denuncia por delito de acusación y denuncia falsas, dado que los hechos denunciados inicialmente fueron verdaderos fácticamente. Ahora bien, si existiese una base fáctica verdadera, pero se deformase ciertos aspectos de ella con el fin de hacer parecer como delictivos los hechos descritos, podría iniciarse un proceso penal por el delito estudiado que probablemente podría conllevar a una sentencia condenatoria del sujeto que realizó aquella imputación.

En el caso de que el sobreseimiento libre se hubiese producido por falta de elemento personal, podría iniciarse un proceso por el delito estudiado, pero difícilmente éste prosperaría, ya que el sustrato fáctico sería verdadero objetivamente, lo cual claro está, excluye de por sí el elemento falsedad objetiva que requiere el delito de acusación y denuncia falsas para poder sancionarse.

Sobre los sobreseimientos provisionales firmes, estos perfectamente permiten cumplir con el requisito de procedibilidad exigido por el tipo penal, pero, en la práctica tienen dificultades para poder sustentar procesos penales por el delito de acusación y denuncia falsas, ya que un proceso que ha culminado mediante el dictado de una resolución judicial de ese tipo se ha producido en el marco de un proceso penal en el cual no se ha podido ni acreditar la certeza ni la falsedad de los hechos imputados, con lo que, suelen ser menos los indicios de falsedad que podrían obtenerse a partir de aquel proceso primigenio.

VII

Un 41,5% (225) del total de procesos penales por el delito de acusación y denuncia falsas que fenecieron durante los años 2011-2015 se originaron a partir de autos de

sobreseimiento provisional firmes. Lo cual muestra la importancia de la admisión de la posibilidad de que éste tipo de resoluciones puedan dar lugar a que se tenga por cumplido con el primer requisito de procedibilidad exigido por el art. 456.2 CP.

Además de la indiscutible importancia de la inclusión en el CP vigente de la posibilidad de que este delito pueda ser perseguido previa denuncia del ofendido, respecto al reconocimiento que conlleva ella de la pluriofensividad de este delito, en la práctica judicial también se ha visto reflejada en el hecho de que un 84% de los procesos penales instaurados por este delito durante los años 2011-2015 iniciaron a consecuencia de la previa denuncia del ofendido.

VIII

En cuanto a las denuncias falsas sobre delitos vinculados a la violencia de género, se puede afirmar que no son una epidemia debido a que el punto de comparación en este aspecto se vincula con la totalidad de las denuncias por violencia de género; así pues, tan sólo un porcentaje pequeño del cúmulo de ellas son falsas, mientras que, la gran mayoría son verdaderas.

Tampoco puede afirmarse que son inusuales las presentaciones de denuncias o acusaciones falsas por este tipo de delitos, ya que, confrontando esa idea con los datos obtenidos, puede observarse que casi un 30% de las causas penales fenecidas entre los años 2011 y 2015 en las que se emitieron sentencias condenatorias se encontraban vinculadas a imputaciones falsas sobre delitos vinculados a la violencia de género.

Así pues, ninguna de esas dos afirmaciones es absolutamente verdadera, pues depende mucho de la perspectiva desde donde se la interprete. De este modo se tiene que, en función de la totalidad del universo de las denuncias por violencia de género, la incidencia de denuncias falsas por este tipo de delitos es pequeña, mientras que, desde la perspectiva propia del delito de acusación y denuncia falsas, la incidencia de imputaciones falsas vinculadas a delitos vinculados a la violencia de género es considerable.

IX

En términos generales se suelen emitir más sentencias condenatorias que absolutorias por este delito. Sin embargo, existe un porcentaje alto de sentencias absolutorias, lo cual puede hacer que se piense que este delito difícilmente se sanciona.

Después de haber realizado en estudio empírico se ha podido observar que en realidad las absoluciones no se han producido de manera caprichosa sino más bien dentro del marco de un proceso penal realizado con respeto de las garantías procesales.

Y es que, de la evaluación de los datos, se ha podido corroborar que las absoluciones, en su mayoría, se producen debido a las dificultades probatorias que se tienen para acreditar la falsedad de la imputación y el conocimiento de ésta.

Con lo que, al no poder demostrarse la concurrencia de dichos elementos esenciales de la conducta delictiva estudiada, no le queda otra alternativa al órgano jurisdiccional más que dictaminar la absolución.

X

A pesar del gran porcentaje de absoluciones, existe un porcentaje aún mayor de condenas. Ello aunado al hecho de que no pueden extremarse los criterios interpretativos en cuanto a la valoración de la acreditación indiciaria de la falsedad de la imputación en el proceso inicial y el conocimiento que sobre ella tenía el sujeto que realizó la imputación supuestamente falsa –pues el efecto que se conseguiría con ello sería perjudicial, ya que se podría generar que la población sintiese miedo de denunciar, aun cuando los hechos imputados fueran verdaderos, por el temor a que en caso de que quedase improbadada dicha imputación se les pudiese procesar como autores de un delito de acusación y denuncia falsas– permite que podamos concluir que la persecución de esta figura delictiva es, en la medida de lo posible, eficiente.

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA

BIBLIOGRAFÍA

- ACADEMIA FORO, *Auxiliares Administrativos de la Junta de Andalucía. Temario Área Jurídico Administrativa General*, vol. I, Sevilla (Rodio), 2015.
- AGUIAR DE LUQUE, “Las recientes reformas en materia de Poder Judicial en su dimensión orgánica”, en REVENGA SÁNCHEZ (coord.), *El Poder Judicial. VI Congreso de la asociación de constitucionalistas de España*, Valencia (Tirant lo Blanch), 2009.
- AGUIRRE GUZMÁN, “El derecho a la tutela judicial efectiva: una aproximación a su aplicación por los tribunales ecuatorianos”, en *Foro: Revista de Derecho*, núm. 14, 2010.
- ALMEMA, “In tema di simulazione di reato, di calunnia e di frode processuale”, *Annali di diritto e procedura penale*, año IV, fasc. 1, 1935.
- ALMEMA, “Osservazioni sul delitto di calunnia”, *Rivista italiana di diritto penale*, año VII, núm. 1, 1936.
- ALONSO ÁLAMO, “Aproximación al bien jurídico protegido en los delitos contra el honor”, en QUINTERO OLIVARES/MORALES PRATS (coords.), *El nuevo Derecho penal español. Estudios penales en memoria del Profesor José Manuel Valle Muñoz*, Navarra (Aranzadi), 2001.
- ÁLVAREZ GARCÍA, *El derecho al honor y las libertades de información y expresión*, Valencia (Tirant lo Blanch), 1999.
- ÁLVAREZ GARCÍA, “Introducción a los delitos contra la Administración de Justicia», en ÁLVAREZ GARCÍA (dir), *Tratado de Derecho Penal Español. Parte Especial III*, Valencia (Tirant lo Blanch), 2013.

- ALVARO DE OLIVEIRA, “El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva desde la perspectiva de los derechos fundamentales”, en *Revista de Derecho*, vol. XXII, núm. 1, 2009.
- AMATO, *Lineamenti dommatici del delitto di calunnia*, Mercato San Severino (Moriniello), 1970.
- ANDALUZ VEGACENTENO, “La posición constitucional del Poder Judicial”, en *Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso*, núm. XXXV, 2010.
- ANDRADE UBIDIA, “La Función Judicial y la nueva Constitución Política de la República”, en *FORO. Revista de Derecho*, núm. 7, 2007.
- ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, vol. II, 15ª ed., Milano (GIUFFRÈ), 2008.
- APARISI MIRALLES, “Aproximación histórica al problema del bien jurídico protegido por el delito de acusación y denuncia falsa”, en *Estudios Jurídicos en memoria del profesor Dr. D. José Ramón Casabó Ruiz*, vol. I, Valencia (Universitat de Valencia Institut de Criminología), 1997.
- ARAUJO-OÑATE, “Acceso a la justicia y tutela judicial efectiva. Propuesta para fortalecer la justicia administrativa. Visión de derecho comparado”, en *Revista Estudios Socio-Jurídicos*, vol. 13, núm. 1, 2011.
- ARMENDÁRIZ LEÓN, “La naturaleza jurídica de la ‘exceptio veritatis’ en el delito de calumnia”, en ÁLVAREZ GARCÍA [*et al.*] (coords.), *Libro Homenaje al Profesor Luis Rodríguez Ramos*, Valencia (Tirant lo Blanch), 2013.
- ARMIENTA CALDERÓN, “Los conceptos de jurisdicción y competencia”, en *Revista de la Facultad de Derecho de México*, número conmemorativo, 1991.

- ASENCIO MELLADO, *Derecho Procesal Penal*, 7ª ed., Valencia (Tirant lo Blanch), 2015.
- ASENCIO MELLADO, *Introducción al Derecho Procesal*, 6ª ed., Valencia (Tirant lo Blanch), 2015.
- BACIGALUPO ZAPATER, *Teoría y práctica del Derecho Penal*, t. II, Madrid (Marcial Pons), 2009.
- BALSAMO, “I delitti contro l'amministrazione della giustizia”, en LATTANZI/LUPO (dirs.)/GAMBARDELLA (coord.), *Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, vol. V, 22ª ed., Milano (GIUFFRÈ), 2016.
- BELLATONI, “Lesione all'onore come illecito penale”, en BELLATONI/BENIGNI, *Lesione dei diritti della persona*, 2ª ed., Padova (CEDAM), 2007.
- BENLLOCH PETIT, “Tema 17: Delitos contra la Administración de Justicia”, en SILVA SÁNCHEZ (dir.), *Lecciones de Derecho Penal. Parte Especial*, 2ª ed., Barcelona (Atelier), 2009.
- BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, “Revisión del contenido del bien jurídico honor”, en BUSTOS RAMÍREZ/BERGALLI, R. (coords.), *El poder penal del Estado: homenaje a Hilde Kaufmann*, Buenos Aires (Depalma), 1985.
- BERNAL DEL CASTILLO, *Honor, verdad e información*, Oviedo (Servicio de Publicaciones de la Universidad de Oviedo), 1994.
- BERTONI, EDUARDO ANDRÉS, “‘New york Times Vs. Sullivan’ y la malicia real de la doctrina”, en INSTITUTO INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS, *Estudios básicos de Derechos Humanos X*, San José (Mars Editores SA), 2000.
- BLANCO LOZANO, *Tratado de Derecho Penal Español*, t. II, vol. I, Barcelona (Bosch), 2005.

- BLANCO LOZANO, *Tratado de Derecho Penal Español*, t. II, vol. II, Barcelona (Bosch), 2005.
- BLUME, *Edictus Ceteraeque Langobardorum Leges*, Hannover (Impensis Bibliopolii Hahniani, 1869.
- BOLEA BARDÓN, “Delitos contra el Honor”, en CORCOY BIDASOLO (dir.), *Derecho Penal. Parte Especial*, t. I, Valencia (Tirant lo Blanch), 2011.
- BOLEA BARDÓN, “Título XI: Delitos contra el honor”, en CORCOY BIDASOLO/MIR PUIG (dirs.), *Comentarios al Código Penal LO 5/2010*, Valencia (Tirant lo Blanch), 2011.
- BOSCARELLI, “Il delitto di calunnia verbale”, *Annali della Facoltà Giuridica*, vol. XXVII, 1961.
- CAFFERATA NORES, *La prueba en el proceso penal*, 3ª ed., Buenos Aires (Depalma), 1998.
- CALBI, “Falsa incolpazione di persona deceduta e impossibilità del delitto di calunnia”, *La Giustizia Penale – Rivista mensile di doctrina, giurisprudenza e legislazione*, año LXXX, núm. 2, 1975.
- CALCAGNO, “La calunnia”, en GROSSO/PADOVANI/PAGLIARO (dirs.)/PISA (coord.), *Reati contro l'amministrazione della giustizia*, vol. VII, Milano (GIUFFRÈ), 2009.
- CALDERÓN CEREZO/CHOCLÁN MONTALVO, *Derecho Penal*, t. II, 2ª ed., Barcelona (Bosch), Barcelona, 2001.
- CALLEJO CARRIÓN, *El derecho al honor. El honor como objeto del proceso civil de amparo especial*, Madrid (Difusión), 2006.

- CANCIO MELIÁ, “Sección 5. Acusación y denuncia falsas y simulación de delitos”, en MOLINA FERNÁNDEZ (coord.), *Memento Penal 2016*, Madrid (Francis Lefebvre), 2015.
- CANTARERO BANDRÉS, *Administración de Justicia y Obstruccionismo Judicial*, Madrid (Trotta), 1995.
- CARDENAL MURILLO/SERRANO GONZÁLEZ DE MURILLO, *Protección penal del honor*, Madrid (Civitas), 1993.
- CARLOMAGNO, *Las Capitulares de Carlomagno*, (trad. BAZZANO/ DOMÍNGUEZ), Mar del Plata (Grupo de Investigación y Estudios Medievales de la Universidad Nacional de Mar del Plata), 2014.
- CARMONA SALGADO, “Delitos contra el Honor”, en COBO DEL ROSAL (coord.), *Derecho Penal. Parte Especial*, 2ª ed., Madrid (Dykinson), 2005.
- CARMONA SALGADO, “Medios de comunicación y derecho al honor: interrelaciones y límites recíprocos”, en GARCÍA VALDÉS, C. [et. al.] (coords.), *Estudios Penales en Homenaje a Enrique Gimbernat*, t. II, Madrid (EDISOFER), 2008.
- CARMONA SALGADO, *Calumnias, injurias y otros atentados al honor. Perspectiva doctrinal y jurisprudencial*, Valencia (Tirant lo Blanch), 2012.
- CAROSIO, *Se sussista reato di calunnia qualora l'incolpato sia persona non imputabile*, Milano (Fratelli Bocca Editori), 1939.
- CARRETERO SÁNCHEZ, “Algunos aspectos penales del maltrato infantil”, en *Diario La Ley*, núm. 6261, de fecha 26 de mayo de 2005.
- CARUSO FONTÁN, *El delito de calumnias y la protección del honor*, Madrid (Difusión Jurídica), 2008.

- CARVAJAL PÉREZ, “El Derecho a la acción y el acceso a la Justicia Constitucional en Costa Rica”, en *Revista de Derecho*, núm. 8, 2004.
- CASTILLO GONZÁLEZ, *Denuncia calumniosa, simulación y autocalumnia*, San José de Costa Rica (Pasdiana), 1982.
- CASTIÑEIRA PALOU, "Tema 8: Delitos contra el Honor", en SILVA SÁNCHEZ (dir.), *Lecciones de Derecho Penal. Parte Especial*, 2ª ed., Barcelona (Atelier), 2009.
- DE CASTRO-CAMERO, *El crimen maiestatis a la luz del senatus consultum de Cn. Pisone Patre*, Sevilla (Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla), 2000.
- CEA EGAÑA, “Función jurisdiccional y Poder Judicial”, en *Revista chilena de Derecho*, vol. 6, núm. 1-4, 1979.
- CENTRO INTERNACIONAL PARA LA JUSTICIA TRANSICIONAL, *El proceso penal de justicia y paz*, Bogotá (Opciones Gráficas Editores Ltda.), 2009.
- CHARRUPI HERNÁNDEZ, “Tutela del derecho al honor en la actual sociedad de la información”, en *Revista de Derecho Privado*, núm. 10, 2006.
- CIEZA MORA, “La responsabilidad civil por denuncia calumniosa y el abuso del denominado ‘ejercicio regular de un derecho’”, en *Diálogo con la jurisprudencia*, núm. 165, 2012.
- COBOS GÓMEZ DE LINARES, “Delitos contra el Honor”, en COBOS GÓMEZ DE LINARES/RODRÍGUEZ RAMOS/SÁNCHEZ TOMÁS, *Derecho Penal. Parte Especial*, t. II, Madrid (Servicio Publicaciones Facultad Derecho UCM), 1997.
- COLEGIO DE NOTARIOS DEL ESTADO DE JALISCO, *Las siete partidas de Alfonso el sabio: Séptima Partida*, Jalisco (Equilátero), 2009.

- COLÍN GARCÍA/MONTEERRUBIO CORDERO, “La subjetividad como factor determinante en el sentido de una sentencia penal”, en *Ciencia Ergo Sum*, vol. 17, núm. 2, 2010.
- CONDE-PUMPIDO FERREIRO, *Contestaciones de Derecho Penal al Programa de Judicatura. Parte Especial*, 4ª ed., Madrid (Colex), 2004.
- CORREA LABRA, “El Poder Judicial y el Estado de Derecho”, en *Revista Chilena de Derecho*, vol. 10, núm. 2, 1983.
- CORTÉS DOMÍNGUEZ, “Lección 8: La acusación y la investigación”, en MORENO CATENA/CORTÉS DOMÍNGUEZ, *Derecho Procesal Penal*, 7ª ed., Valencia (Tirant lo Blanch), 2015.
- CORTÉS DOMÍNGUEZ, “Lección 12: Modos de iniciación del proceso penal”, en MORENO CATENA/CORTÉS DOMÍNGUEZ, *Derecho Procesal Penal*, 7ª ed., Valencia (Tirant lo Blanch), 2015.
- CORTÉS DOMÍNGUEZ, “Lección 22: La fase intermedia”, en MORENO CATENA/CORTÉS DOMÍNGUEZ, *Derecho Procesal Penal*, 7ª ed., Valencia (Tirant lo Blanch), 2015.
- CORTES GENERALES, *Ley Orgánica del Código Penal. Trabajos Parlamentarios*, vol. I, Madrid (Publicaciones de las Cortes Generales), 1996.
- DE COSSÍO MARTÍNEZ, *Derecho al honor. Técnicas de protección y límites*, Valencia (Tirant lo Blanch), 1993.
- DÍAZ MORENO, “El sentido y alcance de la plenitud jurisdiccional con referencia al derecho español (tutela de los derechos)”, en *Opinión Jurídica*, vol. 12, núm. 24, 2013.

- DÍAZ PITA, *El Delito de Acusación y Denuncia Falsas: Problemas Fundamentales*, Barcelona (PPU SA), 1996.
- DOMÍNGUEZ IZQUIERDO, *El falso testimonio de testigos, peritos e intérpretes*, Madrid (De Derecho Reunidas SA), 2002.
- FARALDO CABANA, “Falsas condiciones objetivas de punibilidad en los delitos contra la Administración de Justicia”, en QUINTERO OLIVARES/MORALES PRATS (coords.), *El nuevo Derecho penal español. Estudios penales en memoria del Profesor José Manuel Valle Muñiz*, Navarra (Aranzadi), 2001.
- FERNÁNDEZ-ESPINAR, “La acusación y denuncia falsas en el marco de los delitos contra la Administración de Justicia”, en *Revista Actualidad Penal*, núm. 28, 1997.
- FEROCI, “In tema di calunnia”, *Rivista italiana di diritto penale*, año III, núm. 3-4, 1931.
- FERRAJOLI, *Derecho y razón. Teoría del garantismo penal*, Madrid (Trotta), 1995.
- FERRER SAMA, “El delito de acusación o denuncia falsa”, en *Homenaje a D. Nicolás Pérez Serrano*, t. II, Madrid (Reus), 1959.
- FIGUEROA NAVARRO/GARCÍA VALDÉS/MESTRE DELGADO, *Lecciones de Derecho Penal. Parte Especial*, Madrid (Edisofer), 2011.
- FRANCO, “Las leyes de Hammurabi. Versión española, traducción y anotaciones”, en *Revista de Ciencias Sociales*, vol. VI, núm. 3, 1962.

- FROSALI, “La calunnia continuata, nel caso di incolpazione plurima contestuale”, *Scuola Positiva – Rivista di diritto e procedura penale*, año XXII, fasc. 9-10, 1942.
- FUENTES MARTÍNEZ, “Montesquieu: Teoría de la distribución social del poder”, en *Revista de Ciencia Política*, vol. 31, núm. 1, 2011.
- FUENTES OSORIO, “El bien jurídico honor”, en *Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales*, núm. LX, 2007.
- GARCÍA ARÁN, “Obstrucción a la justicia y deslealtad profesional en el Código Penal de 1995”, en CADENAS CORTINA (dir.), *Delitos contra la Administración de Justicia*, Madrid (Consejo General del Poder Judicial), 1997.
- GARCÍA SOLÉ, *El Delito de acusación y denuncia falsas*, Barcelona (Atelier), 2002.
- GARCÍA VITORIA, *Actividad pericial y proceso penal*, Valencia (Tirant lo Blanch), 2009
- GIMBERNAT ORDEIG, “Ciudadanos y la violencia de género”, en *Diario El Mundo*, núm. 9497, de fecha 23 de diciembre de 2015.
- GIMÉNEZ PERICÁS, “Sobre la prueba ilícitamente obtenida”, en *Revista Eguzkilore: Cuaderno del Instituto Vasco de Criminología*, núm. 6, 1992.
- GÓMEZ COLOMER [et al.], *Introducción al Derecho Procesal (Parte General del Derecho Jurisdiccional)*, Castellón de la Plana (Ed. Publicacions de la Universitat Jaume I), 2010.

- GÓMEZ COLOMER, “Extensión y límites de la jurisdicción y competencia”, en BARONA VILAR/GÓMEZ COLOMER/MONTERO AROCA, *Derecho Jurisdiccional I. Parte General*, 23ª ed., Valencia (Tirant lo Blanch), 2015.
- GÓMEZ COLOMER, “Lección Sexta: La instrucción del proceso: Su estructura esencial”, en MONTERO AROCA [et. al.], *Derecho Jurisdiccional III. Proceso Penal*, 23ª ed., Valencia (Tirant lo Blanch), 2015.
- GÓMEZ COLOMER, “Lección Décimo octava: La terminación del proceso penal”, en MONTERO AROCA [et. al.], *Derecho Jurisdiccional III. Proceso Penal*, 23ª ed., Valencia (Tirant lo Blanch), 2015.
- GÓMEZ RIVERO, “A vueltas con el honor”, en MUÑOZ CONDE (dir.), *Problemas actuales del Derecho Penal y de la Criminología. Estudios penales en memoria de la Profesora Dra. María del Mar Díaz Pita*, Valencia (Tirant lo Blanch), 2008.
- GONZÁLEZ CRUZ, “Valores y principios de la Constitución”, en *Provincia Revista venezolana de estudios territoriales*, núm. especial, 2005.
- GONZÁLEZ PÉREZ, *La degradación del derecho al honor (honor y libertad de información)*, Madrid (Civitas), 1993.
- GONZÁLEZ PÉREZ, *El Derecho a la Tutela Judicial Efectiva*, 3ª ed., Madrid (Civitas), 2001.
- GONZÁLEZ RUS, “Delitos contra la Administración de Justicia. Acusación y denuncia falsas. Delitos contra la Libertad de las partes. Falso Testimonio”, en COBO DEL ROSAL (dir.), *Manual de Derecho Penal. Parte Especial*, Madrid (De Derecho Reunidas SA), 1994.

- GONZÁLEZ RUS, “Delitos contra la Administración de Justicia (I)”, en COBO DEL ROSAL (dir.), *Derecho Penal. Parte Especial*, 2ª ed., Madrid (Dykinson), 2005.
- GONZÁLEZ-TREVIJANO, *La España constitucional*, Valencia (Tirant lo Blanch), 2005.
- GORDILLO, *Tratado de Derecho Administrativo y obras selectas*, t. I, Buenos Aires (Fundación de Derecho Administrativo), 2013.
- GOYENA HUERTA, “Acusación y denuncias falsas, y simulación de delitos”, en GOYENA HUERTA [et al.], *Los Delitos contra la Administración de Justicia*, Navarra (Aranzadi), 2002.
- GRANADOS PÉREZ, “Jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen”, en TORRES-DULCE LIFANTE (dir.), *Derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen II*, Madrid (Consejo General del Poder Judicial), 1999.
- GULLO, Luigi, *Il delitto di calunnia*, Milano (GIUFFRÈ), 1946.
- GULLO, Luigi, *Saggi di Diritto penale. calunnia–tentativo*, Milano (GIUFFRÈ), 1955.
- GUZMÁN DALBORA, “La Administración de Justicia como objeto de protección Jurídica. (Observaciones preliminares a los delitos que la ofenden)”, en MESSUTI/SAMPEDRO ARRUBLA (comps.), *La Administración de Justicia. En los albores del tercer milenio*, Buenos Aires (Universidad), 2001.
- HASSEMER, *Verdad y búsqueda de la verdad en el proceso penal. La medida de la Constitución*, México DF (UBIJUS), 2009.

- HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, *El honor, la intimidad y la imagen como derechos fundamentales*, Madrid (Colex), 2009.
- HERRERA VÁSQUEZ, *Función Jurisdiccional*, Lima (AMAG), 2000.
- IGLESIA CATÓLICA, *Corpus Iuris Canonici*, vol. II, Halle (Impensis Orphnotrophei), 1747.
- IÑESTA PASTOR, *El Código Penal Español de 1848*, Valencia (Tirant lo Blanch), 2011.
- JIMÉNEZ GÁLVEZ, “El precio de mentir al juez”, en *Diario El País*, núm. 14544, de fecha 3 de mayo de 2017.
- JUDEL PRIETO/PIÑOL RODRÍGUEZ/SUÁREZ-MIRA RODRÍGUEZ, “Delitos contra la Administración de Justicia: prevaricación”, en SUÁREZ-MIRA RODRÍGUEZ (coord.), *Manual de Derecho Penal. Parte Especial*, t. II, 6ª ed., Navarra (Thomson Reuters), 2011.
- JUDEL PRIETO/PIÑOL RODRÍGUEZ/SUÁREZ-MIRA RODRÍGUEZ, “Acusación y Denuncias Falsas”, en SUÁREZ-MIRA RODRÍGUEZ (coord.), *Manual de Derecho Penal. Parte Especial*, t. II, 6ª ed., Navarra (Thomson Reuters), 2011.
- JUSTICIA VIVA, *Manual del sistema peruano de justicia*, 2ª ed., Lima (Ali arte gráfico publicaciones SRL), 2003.
- Kelsen, *¿Qué es la justicia?*, México DF (Fontamara), 2007.
- LAFFERTY, *Law and Society in the Age of Theoderic the Great. A Study of the Edictum Theoderici*, Cambridge (Cambridge University Press), 2013.

- LANDA ARROYO, *El derecho al debido proceso en la jurisprudencia*, vol. I, Lima (Diskcopy SAC), 2012.
- LAUDAN, *Verdad, error y proceso penal. Un ensayo sobre epistemología jurídica*, Madrid (Marcial Pons), 2013.
- LAURENZO COPELLO, *Delitos contra el Honor*, Valencia (Tirant lo Blanch), 2002.
- LIBANO BERISTAIN, *Los delitos semipúblicos y privados. Aspectos sustantivos y procesales. Adaptado a la reforma del Código Penal introducida por la Ley Orgánica 5/2010*, Barcelona (Bosch), 2011.
- LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, “Acusación y denuncias falsas”, en LÓPEZ BARJA DE QUIROGA/GRANADOS PÉREZ (coords.), *Contestaciones al programa de Derecho Penal Partem Especial para acceso a las carreras judicial y fiscal*, t. II, 6ª ed, Valencia (Tirant lo Blanch), 2015.
- LÓPEZ DÍAZ, *El derecho al honor y el derecho a la intimidad. Jurisprudencia y Doctrina*, Madrid (Dykinson), 1996.
- LORCA NAVARRETE, *Poder Judicial ¿garantía de la potestad jurisdiccional constitucional? ¿no invocar el Poder Judicial en vano!*, San Sebastián (DIJUSA), 2009.
- LOSING, “Independencia y función del Poder Judicial en el Estado democrático de derecho”, en *Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano*, año XVII, 2011.
- LOUSTEAU HEGUY, “¿Qué es democracia? ¿Qué es justicia?»”, en *Revista Perspectiva*, núm. 24, 2010.

- LUZÓN CUESTA, *Compendio de Derecho Penal. Parte Especial*, 18ª ed., Madrid (Dykinson), 2011.
- LUZÓN PEÑA, *Lecciones de Derecho Penal. Parte General*, 3ª ed., Valencia (Tirant lo Blanch), 2016.
- MACIÁ GÓMEZ, *El delito de injuria*, Barcelona (CEDECS), 1997.
- MAGALDI PATERNOSTRO/GARCÍA ARÁN, “Los delitos contra la Administración de Justicia en la Reforma Penal”, en *Documentación Jurídica*, vol. 2, núms. 37-40, 1983.
- MAGALDI PATERNOSTRO, “Aspectos esenciales de la acusación y denuncia falsa”, en *Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales*, fasc. 1, 1987.
- MANZINI, *Tratado de Derecho Penal*, t. 10, vol. V, Buenos Aires (EDIAR), 1961.
- MANZINI, Vincenzo, *Trattato di Diritto penale italiano*, t. V, 5ª ed., Torino (UTET), 1982.
- MAQUEDA ABREU, *Acusación y Denuncia Falsas*, Valencia (Tirant lo Blanch), 1999.
- MAQUEDA ABREU, “El delito de acusación y denuncia falsas en la reforma penal: Algunos aspectos de su relación con la calumnia”, en CEREZO MIR [et al.] (eds.), *El nuevo Código Penal: presupuestos y fundamentos. Libro Homenaje al Profesor Doctor Don Ángel Torío López*, Granada (Comares), 1999.
- MARCIANO, Gennaro, “In tema di calunnia”, en MARCIANO, Gennaro (dir.), *Questioni di diritto*, Nápoles (Alberto Morano Editore), 1926.

- MARCIANO, Gennaro, “In tema di calunnia. Fatto vero e circostanze false”, *Scuola Positiva – Rivista di diritto e procedura penale*, año XIII, fasc. 3-4, 1933.
- MARES ROGER/MARTÍNEZ LLUESMA, “Delitos contra la Administración de Justicia. Título XX”, en GANZENMÜLLER ROIG/ESCUDERO MORATALLA/FRIGOLA VALLINA (coords.), *Delitos contra la Administración Pública, contra la Administración de Justicia y contra la Constitución*, Barcelona (Bosch), 1998.
- MARTÍN LÓPEZ, “Las falsas denuncias falsas y la libertad de expresión”, *Themis. Revista de Jurídica de Igualdad de Género*, núm. 7, 2009.
- MARTÍN BERNAL, “Administración de Justicia y Justicia como valor en la España de hoy”, en *Boletín del Ministerio de Justicia*, núm. 1313, 1983.
- MARTÍN GONZÁLEZ, “La simulación del delito”, en SERRANO BUTRAGUEÑO (coord.), *Delitos contra la Administración de Justicia art. 325 a 338 bis del Código Penal (acusación y denuncia falsa, falso testimonio y otros delitos)*, Granada (Comares), 1995.
- MARTÍNEZ ATIENZA, *Comentarios al Código Penal. Estudio sistematizado*, Barcelona (Vlex), 2014.
- MARTÍNEZ HUERTA, *Ética con los clásicos*, México DF (Ed. Plaza y Valdés), 2003.
- MASERA, Luca, *Contributo allo studio del delitto di calunnia*, Brescia (BiblioFabbrica), 2012.
- MESTRE DELGADO, “Delitos contra la Administración de Justicia”, en LAMARCA PÉREZ (coord.), *Derecho Penal. Parte Especial*, 6ª ed., Madrid (Colex), 2011.

- MESTRE DELGADO, “Delitos contra el Honor”, en LAMARCA PÉREZ (coord.), *Derecho Penal. Parte Especial*, 6ª ed., Madrid (Colex), 2011.
- MILLÁN GARRIDO, “El delito de acusación y denuncia falsas”, en *Revista de Información Jurídica*, núm. 317, 1973.
- DE MIRANDA VÁZQUEZ, “Acusación y denuncia falsas (456 CP)”, en De Miranda Vázquez (coord.), *Probática Penal 1. La prueba en los delitos contra la Administración de Justicia*, Madrid (La Ley), 2012.
- MOLINA FERNÁNDEZ, “Sección 2. Calumnia”, en MOLINA FERNÁNDEZ (coord.), *Memento Penal 2016*, Madrid (Francis Lefebvre), 2015.
- MOLINA FERNÁNDEZ, “Delitos contra el honor”, en BAJO FERNÁNDEZ (dir.), *Compendio de Derecho Penal (Parte Especial)*, vol. II, Madrid (Centros de Estudios Ramón Areces), 1998.
- MOMMSEN, *Derecho Penal Romano*, t. I, Madrid (La España moderna), 1898.
- MONTERO AROCA, “El gobierno del Poder Judicial”, en BARONA VILAR/GÓMEZ COLOMER/MONTERO AROCA, *Derecho Jurisdiccional I. Parte General*, 23ª ed., Valencia (Tirant lo Blanch), 2015.
- MONTERO AROCA, “Los principios políticos del Poder Judicial”, en BARONA VILAR/GÓMEZ COLOMER/MONTERO AROCA, *Derecho Jurisdiccional I. Parte General*, 23ª ed., Valencia (Tirant lo Blanch), 2015.
- MONTERO AROCA, “Lección Tercera: Las partes acusadoras”, en MONTERO AROCA [et al.], *Derecho Jurisdiccional III. Proceso Penal*, 23ª ed., Valencia (Tirant lo Blanch), 2015.

- MONTERO AROCA, “Lección Cuarta: La parte acusada y las partes civiles”, en MONTERO AROCA [et al.], *Derecho Jurisdiccional III. Proceso Penal*, 23ª ed., Valencia (Tirant lo Blanch), 2015.
- MORA MORA, “La independencia del juez en la jurisprudencia de la Sala Constitucional Costarricense”, en *Anuario Iberoamericano de justicia Constitucional*, núm. 3, 1999.
- MORALES ANDRADE, *El Delito de Acusación o Denuncia Calumniosa*. Santiago de Chile (Jurídica de Chile), 1993.
- MORENO CATENA, “El Poder Judicial”, en CORTÉS DOMÍNGUEZ/MORENO CATENA, *Introducción al Derecho Procesal*, 8ª ed., Valencia (Tirant lo Blanch), 2015.
- MORENO CATENA, “La exigencia constitucional del ejercicio de la jurisdicción: la exclusividad”, en CORTÉS DOMÍNGUEZ/MORENO CATENA, *Introducción al Derecho Procesal*, 8ª ed., Valencia (Tirant lo Blanch), 2015.
- MORENO CATENA, “La jurisdicción y el Poder Judicial”, en CORTÉS DOMÍNGUEZ/MORENO CATENA, *Introducción al Derecho Procesal*, 8ª ed., Valencia (Tirant lo Blanch), 2015.
- MORENO CATENA, “La competencial”, en CORTÉS DOMÍNGUEZ/MORENO CATENA, *Derecho Procesal Civil. Parte general*, 8ª ed., Valencia (Tirant lo Blanch), 2015.
- MORENO CATENA, “Lección 5: Las partes procesales. Las partes acusadoras”, en CORTÉS DOMÍNGUEZ/MORENO CATENA, *Derecho Procesal Penal*, 7ª ed., Valencia (Tirant lo Blanch), 2015.

- MORENO CATENA, “Lección 24: El desarrollo del juicio oral, La prueba”, en CORTÉS DOMÍNGUEZ/MORENO CATENA, *Derecho Procesal Penal*, 7ª ed., Valencia (Tirant lo Blanch), 2015.
- MORETÓN TOQUERO, “Planteamiento: el Título 11 del Código Penal, y el honor como bien jurídicamente protegido”, en *Biblioteca Online Bosch*. Fecha de Consulta: el 16 de junio de 2014.
- MORÓN LERMA, “Acusación y denuncia falsas. Simulación de delitos”, en ÁLVAREZ GARCÍA (dir.), *Tratado de Derecho Penal Español. Parte Especial III*, Valencia (Tirant lo Blanch), 2013.
- MUERZA ESPARZA, “El delito de acusación y denuncia falsa (art. 325 CP) en la jurisprudencia del Tribunal Supremo”, en *La Ley Revista Jurídica Española de doctrina, jurisprudencia y Bibliografía*, núm. 4, 1986.
- MUÑOZ CONDE, “La búsqueda de la verdad en el proceso penal”, en *Diario El País*, de fecha 28 de septiembre de 2003.
- MUÑOZ CONDE, *Derecho Penal. Parte Especial*, 20ª ed., Valencia (Tirant lo Blanch), 2015.
- MUÑOZ CONDE/GARCÍA ARÁN, *Derecho Penal. Parte General*”, 9ª ed., Valencia (Tirant lo Blanch), 2015.
- MUÑOZ LORENTE, *Libertad de información y derecho al honor en el Código Penal de 1995*, Valencia (Tirant lo Blanch), 1999.
- NADER KURI, “Principios de la función judicial”, en GARCÍA RAMÍREZ/GONZÁLEZ MARISCAL (coords.), *La situación actual del sistema penal en México. XI Jornadas sobre justicia penal*, México DF (INACIPE), 2011.

- NAMEN VARGAS, “Coherencia, seguridad y autonomía judicial”, en *Revista de la Corte Superior de Justicia de Colombia*, núm. 28, 2010.
- NAVARRO DOLMESTCH, “Propuesta para una construcción jurídica del honor como método de reducción de las hipótesis de conflicto con la libertad de comunicación (primera parte)”, en *Ius et Praxis*, vol. 8, núm. 2, 2002.
- NOGUEIRA ALCALÁ, “El derecho a la libertad personal individual en el ordenamiento jurídico chileno”, en *Ius et praxis*, vol. 5, núm. 1, 1999.
- PAGLIARO, Antonio, *Il delitto di calunnia*, Palermo (Gaetano Priulla Editore), 1961.
- PAGLIARO, Antonio, *Il delitto di calunnia*, Palermo (Gaetano Priulla Editore), 1967.
- PIFFER, Guido, “I delitti contro L’amministrazione della giustizia” en MARINUCCI/DOLCINI (dir.), *Trattato di Diritto penale. Parte speciale*, vol. IV, t. I, Padova (CEDAM), 2005.
- PISA, Paolo, “I delitti contro l’amministrazione della giustizia”, en BRICOLA, Franco/ZAGREBELSKY, Vladimiro (dirs.), *Codice Penale. Parte speciale*, t. IV, 2ª ed., Torino (UTET), 1996.
- OCANDO OCANDO/PIRELA ISARRA, “El Estado social de derecho y de justicia nuevo paradigma del Estado venezolano. Comentarios a la Sentencia N° 85, Expediente N° 01-1274 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de la Justicia de fecha 24/Enero/2002”, en *Frónesis*, vol. 15, núm. 2, 2008.
- ORDEIG ORERO, *El Delito de Acusación y Denuncia Falsas*, Madrid (Marcial Pons), 2000.

- ORMAZABAL SÁNCHEZ, *Introducción al Derecho Procesal*, 4ª ed., Madrid (Marcial Pons), 2010.
- ORTEGA MEDINA, “La función jurisdiccional del Estado”, en *Revista de la Facultad de Derecho de México*, tomo XL, núms. 172-173-174, 1990.
- ORTELLS RAMOS, “Aproximación al concepto de potestad jurisdiccional en la Constitución Española”, en *Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad de Extremadura*, núm. 3, 1984-1985.
- ORTS BERENGUER, “Lección XXXIX: Delitos contra la Administración de Justicia”, en GONZÁLEZ CUSSAC (coord.), *Derecho Penal. Parte Especial*, 4ª ed., Valencia (Tirant lo Blanch), 2015.
- ORTS BERENGUER/GONZÁLEZ CUSSAC, *Compendio de Derecho Penal. Parte General*, 5ª ed., Valencia (Tirant lo Blanch), 2015.
- OTERO GONZÁLEZ, “Delitos contra el honor. Cuestiones generales. Calumnias”, en ÁLVAREZ GARCÍA (dir.), *Derecho Penal Español. Parte Especial II*, Valencia (Tirant lo Blanch), 2011.
- OTERO PRAGA, División de Poderes. Antes y ahora, en *Boletín de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago*, núm. 12, 1997.
- PALMA HERRERA, *Los Actos Copenados*, Madrid (Dykinson), 2004.
- PALOMO DEL ARCO, “Acusación y denuncias falsas. Nueva regulación. Examen de estos delitos. Especial referencia a la simulación de delitos dentro de este capítulo”, en CADENAS CORTINA (dir.), *Delitos contra la Administración de Justicia*, Madrid (Consejo General del Poder Judicial), 1997.

- PAREJA VALLEJO, *El Poder Judicial y las Comunidades Autónomas. Especial Referencia a Andalucía*, Córdoba (Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba), 2013.
- PEDREIRA GONZÁLEZ, “Principales problemas sustantivos y procesales del delito de acoso sexual (Doctrina y Jurisprudencia)”, en ÁLVAREZ GARCÍA [et al.] (coords.), *Libro Homenaje al Profesor Luis Rodríguez Ramos*, Valencia (Tirant lo Blanch), 2013.
- PERELMAN, *De la Justicia*, México DF (Centro de Estudios Filosóficos de la UNAM), 1964.
- PÉREZ RÚA, *La Acusación y Denuncia Falsas*, 2ª ed., Navarra (Aranzadi), 2007.
- PRIETO-CASTRO Y FERRANDIZ, “La Administración de Justicia”, en *Separata de El Estado y la Política*, vol. 3 de la España de los años 70, 1974.
- PLASENCIA VILLANUEVA, “Los medios de prueba en materia penal”, en *Boletín Mexicano de Derecho Comparado*, núm. 83, 1995.
- PLATÓN, *Obras completas*, (trad. de Azcárate), t. I, Madrid (Medina y Navarro), 1881.
- POLAINO NAVARRETE, “Lección 15: Injuria y Calumnia”, en POLAINO NAVARRETE (dir), *Derecho Penal. Parte Especial*, t. I, Madrid (Tecnos), 2010.
- POLAINO-ORTS, “Delitos contra la Administración de Justicia una introducción a la regulación de algunas figuras en el Código Penal Español”, en *Revista Oficial del Poder Judicial*, año 4-5, núm. 6-7, 2010-2011.
- QUERALT JIMÉNEZ, *Derecho Penal Español. Parte Especial*, 6ª ed., Barcelona (Atelier), 2010.

- QUERALT JIMÉNEZ, *Derecho Penal Español. Parte Especial*, 7ª ed., Valencia (Tirant lo Blanch), 2015.
- QUINTANAR DÍEZ/ORTIZ NAVARRO, *Elementos del Derecho Penal. Parte General*. 2ª ed., Valencia (Tirant lo Blanch), 2015.
- QUINTERO OLIVARES, “Los delitos contra la Administración de Justicia”, en *Revista Jurídica de Catalunya*, vol. 79, núm. extraordinario, 1980.
- RAGUÉS I VALLES, “Consideraciones sobre la prueba del dolo”, *REJ - Revista de Estudios de la Justicia*, núm. 4, 2004.
- RECASÉNS SICHES, *Tratado General de Filosofía del Derecho*, México DF (Porrúa), 1965.
- DE LA REGUERA VALDELOMAR, *Extracto de las Leyes del Fuero Real*, Madrid (Imp. De la Viuda e Hijo de Marín), 1798.
- RINCÓN HERRANZ, *Delito de acusación y denuncia falsas en el Código Penal español*, Madrid (Servicio Publicaciones Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid), 2015.
- RÍOS ÁVALOS, “Autarquía e independencia del Poder Judicial (2)”, en *Revista da EMERJ*, vol. 1, núm. 4, 1998.
- RIPOLLÉS SERRANO, “El Poder Judicial”, en ÁLVAREZ VÉLEZ (coord.), *Lecciones de Derecho Constitucional*, 4ª ed., Valencia (Tirant lo Blanch), 2014.
- RODRÍGUEZ LÓPEZ/SOBRINO MARTÍNEZ, *Delitos Contra la Administración de Justicia*, Barcelona (Bosch), 2008.

- ROJAS CHACÓN/SÁNCHEZ ROMERO, *Teoría del Delito. Aspectos Teóricos y Prácticos*, t. I, Costa Rica (Poder Judicial, Departamento de Artes Gráficas), 2009.
- ROJAS VARGAS, *Delitos contra la Administración Pública*, 4ª ed., Lima (Grijley), 2007.
- ROMANO, Bartolomeo, *Delitti contro l'amministrazione della giustizia*, 6ª ed., Milano (GIUFFRÈ), 2016.
- RONDÓN DE SANSÓ, “Justicia, Poder Judicial, Sociedad y Seguridad de la Nación”, en *Boletín de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales*, vol. 66, núm. 136, 1999.
- ROPERO CARRASCO, *Abusar de la Justicia. Dimensión del actual delito de acusación y denuncias falsas*, Madrid (Dilex), 2011.
- DE ROS CEREZO, “El Derecho Constitucional a la Tutela Judicial Efectiva y el Requisito de la Legitimación”, en *Revista de Administración Pública*, núm. 98, 1982.
- ROXIN, *Derecho Penal. Parte General*, (trad. Luzón Peña/Díaz y García Conlledo/ de Vicente Remesal), t. I, Madrid (Civitas), 1997.
- RUEDA ROMERO/RUEDA PINTOR, “Los poderes jurisdiccionales ejercidos por el juez y su ámbito de actuación dentro del proceso”, en *Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas*, núm. 2, 2006.
- RUIZ ROBLEDO, “*Compendio de Derecho Constitucional Español*”, 2ª ed., Valencia (Tirant lo Blanch), 2011.

- RUÍZ VADILLO, “Delito de acusación y denuncia falsa”, en SERRANO BUTRAGUEÑO (coord.), *Delitos contra la Administración de Justicia art. 325 a 338 bis del Código Penal (acusación y denuncia falsa, falso testimonio y otros delitos)*, Granada (Comares), 1995.
- RUSCONI, “Principio de inocencia e ‘in dubio pro reo’”, *Jueces para la democracia*, núm. 33, 1998.
- SALAS ARENAS, Jorge, *Acumulación de pretensiones derivadas de la pluriofensividad en el delito de denuncia calumniosa propia*, <http://www.incipp.org.pe/index.php?mod=documento&com=documento-busqueda&secID=1&search=SALAS+ARENAS&catID=0> (última visita: 2 de octubre de 2016).
- SALINAS SICCHA, *Derecho Penal. Parte Especial*, 2ª ed., Lima (Grijley), 2007.
- SÁNCHEZ-VERA GÓMEZ-TRELLES, “In dubio pro reo”, en ÁLVAREZ GARCÍA [et al.] (coords.), *Libro Homenaje al Profesor Luis Rodríguez Ramos*, Valencia (Tirant lo Blanch), 2013.
- SANTANA ARTILLES, *La declaración del imputado como medio de prueba o medio de defensa en el proceso penal dominicano*, Santo Domingo (Centenario), 2011.
- SANTANA VEGA, “Título XX: Delitos contra la Administración de Justicia”, en CORCOY BIDASOLO/MIR PUIG (dirs.), *Comentarios al Código Penal LO 5/2010*, Valencia (Tirant lo Blanch), 2011.
- SANTANA VEGA, “Delitos contra la Administración de Justicia”, en CORCOY BIDASOLO (dir.), *Derecho Penal. Parte Especial*, t. I, Valencia (Tirant lo Blanch), 2011.

- SANTORIELLO, *Calunnia, autocalunnia e simulazione di reato*, Padova (CEDAM), 2004.
- SANZ-DÍEZ DE ULZURRUN LLUCH, “El problema de la obtención ilícita del conocimiento en el delito de calumnia”, en CUERDA RIEZU (dir.), *La respuesta del Derecho penal ante los nuevos retos*, Madrid (Dykinson), 2006.
- SANZ-DÍEZ DE ULZURRUN LLUCH, *Dolo e imprudencia en el Código Penal Español*, Valencia (Tirant lo Blanch), 2007
- SECCIÓN CORRESPONSALÍA AUTONÓMICA: “Uniones de hecho, denuncias falsas y la amortización de plazas judiciales”, en *Diario La Ley*, núm. 7979, de fecha 5 de diciembre de 2012.
- SERRANO BUTRAGUEÑO, “Introducción a los delitos contra la ‘realización’ de la justicia”, en SERRANO BUTRAGUEÑO (coord.), *Delitos contra la Administración de Justicia art. 325 a 338 bis del Código Penal (acusación y denuncia falsa, falso testimonio y otros delitos)*, Granada (Comares), 1995.
- SERRANO GÓMEZ/SERRANO MAÍLLO, *Derecho Penal. Parte Especial*, 16ª ed., Madrid (Dykinson), 2011.
- SERRANO GONZÁLEZ DE MURILLO, “La simulación de delito o falta: ¿Un delito sin bien Jurídico protegido?”, en *Diario La Ley*, núm. 6209, de fecha 14 de marzo de 2005.
- SIMÓN ABRIL, *La ética de Aristóteles*, Albacete (Servicio de Publicaciones de la Diputación de Albacete), 2001.
- SOTO NIETO, “Simulación de delito. Significado de ‘actuación procesal’”, en *Diario La Ley*, núm. 6400, de fecha 16 de enero de 2006.

- SOLIS ESPINOZA, “Visión psicocriminológica del dolo y la imputabilidad (I)”, en *Revista de Derecho UNED*, núm. 4, 2009.
- SOTO RODRÍGUEZ, “La denuncia falsa en el Código Penal español”, en *Diario La Ley*, núm. 7977, de fecha 3 de diciembre de 2012.
- SOTO RODRÍGUEZ, “Protección al honor. La calumnia y la injuria”, en *Diario La Ley*, núm. 7990, de fecha 26 de diciembre de 2012.
- SPENCER, *La Justicia*, 4ª ed., Madrid (La España Moderna), 1890.
- SUÁREZ-MIRA RODRÍGUEZ, “La simulación de delito en el Código Penal de 1995”, en *Estudios Jurídicos en memoria del profesor Dr. D. José Ramón Casabó Ruiz*, vol. I, Valencia (Universitat de Valencia Institut de Criminología), 1997.
- TABOADA TUNDIDOR, *Las denuncia y querella delictivas*, Madrid (REUS), 1930.
- TARUFFO, *La prueba, artículos y conferencias*, Santiago (Metropolitana), 2009.
- TERRAGNI, *Tratado de Derecho Penal*, t. II, Buenos Aires (La Ley), 2012.
- TERRAGNI, *Tratado de Derecho Penal*, t. III, Buenos Aires (La Ley), 2012.
- DEL TORO MARZAL, “La omisión del deber de impedir y denunciar determinados delitos (art. 338 bis CP)”, en SERRANO BUTRAGUEÑO (coord.), *Delitos contra la Administración de Justicia art. 325 a 338 bis del Código Penal (acusación y denuncia falsa, falso testimonio y otros delitos)*, Granada (Comares), 1995.
- TRINCI/FARINI, *Compendio di Diritto penale. Parte speciale*, 2ª ed., Roma (DIKE), 2016.

- UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA, *Código de Hammurabi. Basada en la ed. de Joaquín Sanmartín, Trotta, Barcelona, 1999*, <http://www.unizar.es/hant/POA/hammurabi.pdf> (última visita: 14 de agosto de 2015).
- VALENZUELA SADÍAS, “Presumir responsabilidad: Sobre una relación entre la prisión preventiva y la presunción de inocencia en el Derecho Procesal Chileno”, en *Revista de Estudios de la Justicia*, núm. 14, 2011.
- VARGAS PINTO, “‘Daño del engaño’ en documentos privados. Aproximación al perjuicio en la falsificación de instrumentos privados”, en *Revista de Derecho (Valdivia)*, vol. XXIV, núm. 2, 2011.
- VÁZQUEZ IRUZUBIETA, *Comentarios al Código Penal (Actualizado por las Leyes Orgánicas: 1/2015, 30 de marzo y 2/2015, 30 de marzo)*, Barcelona (Atelier), 2015.
- VENTURA PÜSCHEL, “El encubrimiento”, en ÁLVAREZ GARCÍA (dir), *Tratado de Derecho Penal Español. Parte Especial III*, Valencia (Tirant lo Blanch), 2013.
- VERA VEGA, “Algunas notas sobre la relación entre derecho penal y psicología a la luz de la prueba de los elementos subjetivos del delito”, en *Revista de Psicología de la Universidad Viña del Mar*, vol. I, núm. 1, 2011.
- VIDAL MARÍN, *El derecho al honor y su protección desde la Constitución Española*, Madrid (Boletín Oficial del Estado: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales), 2000.
- VILLADIEGO VASCUÑANA Y MONTOYA, *El Libro de los Jueces o Fuero Juzgo*, Madrid (León Amarita), 1841.

- VIVES ANTÓN, “Lección XVI: Delitos contra el honor”, en GONZÁLEZ CUSSAC (coord.), *Derecho Penal. Parte Especial*, 4ª ed., Valencia (Tirant lo Blanch), 2015.
- VIVES ANTÓN, “Lección XL: Delitos contra la Administración de Justicia”, en VIVES ANTÓN [et al.], *Derecho Penal. Parte Especial*, 3ª ed., Valencia (Tirant lo Blanch), 2010.
- VILLAMARÍN LÓPEZ, *El sobreseimiento provisional en el proceso penal*, Madrid (Editorial Centro de Estudios Ramón Areces SA), 2003.
- ZAFFARONI/ALAGIA/SLOKAR, *Derecho Penal. Parte General*, 2ª ed., Buenos Aires (EDIAR), 2002.
- ZAVALA EGAS, “La unidad jurisdiccional”, en *Iuris Dictio. Revista del Colegio de Jurisprudencia*, núm. 1, 2000.
- ZEPEDA SEGURA, “Ejercicio de las potestades judiciales”, en *Revista Anales de Jurisprudencia*, núm. 234, 1998.
- ZULUAGA GIL, “La función judicial en la Constitución colombiana de 1991”, en *Revista Colombiana de Derecho Constitucional*, núm. 1, 1997.

DOCUMENTOS CONSULTADOS

- BOE núm. 120 –suplemento-, de fecha 20 de mayo de 1983.
- BOE núm. 157, de fecha 2 de julio de 1985.
- BOE núm. 54 –suplemento-, de fecha 4 de marzo de 1987
- BOE núm.281, de fecha 24 de noviembre de 1995.
- BOE núm. 180 –suplemento-, de fecha 28 de julio de 2000.

- CÓDIGO PENAL ESPAÑOL, Madrid (Imprenta Nacional), 1822.
- CÓDIGO PENAL DE ESPAÑA, Madrid (Imprenta Nacional), 1850.
- CÓDIGO PENAL REFORMADO, Madrid (Imprenta del Ministerio de Gracia y Justicia), 1870.
- CÓDIGO PENAL DE 8 DE SEPTIEMBRE DE 1928, Madrid (Augusto Figueroa), 1928.
- CÓDIGO PENAL DE 1944, Madrid (Ministerio de Justicia), 1944.
- FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, *Memoria de la Fiscalía General del Estado*, vol. I, Madrid (Imprenta Nacional de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado), 2012.
- GACETA DE MADRID núm. 310, de fecha 5 de noviembre de 1932
- GRUPO DE EXPERTOS Y EXPERTAS EN VIOLENCIA DOMÉSTICA Y DE GÉNERO DEL CGPJ, *Estudio sobre la aplicación de la ley integral contra la violencia de género por las Audiencias Provinciales*, aprobado el 10 de septiembre de 2009.
- GRUPO DE EXPERTOS Y EXPERTAS EN VIOLENCIA DOMÉSTICA Y DE GÉNERO DEL CGPJ, *Estudio sobre la aplicación de la ley integral contra la violencia de género por las Audiencias Provinciales*, aprobado el 10 de marzo de 2016.
- MSPSI, *Informe del grupo de trabajo de investigación sobre el llamado síndrome de alienación parental*, aprobado el 13 de julio de 2010.
- NOVÍSIMA RECOPIACIÓN DE LAS LEYES DE ESPAÑA, t. IV, París (Librería de Don Vicente Salvá), 1846.
- UNIVERSIDAD DIEGO PORTALES, *Informe anual sobre derechos humanos en Chile 2004. (Hechos 2003)*, mayo de 2004.

JURISPRUDENCIA CONSULTADA

- STC nº 34/1983, de fecha 6 de mayo de 1983.
- STC nº 20/1987, de fecha 19 de febrero de 1987.
- STC nº 56/1990, de fecha 29 de marzo de 1990.

- STC nº 223/1992, de fecha 14 de diciembre de 1992.
- STC nº 181/2000, de fecha 29 de junio de 2000.
- STC nº 297/2000, de fecha 11 de diciembre de 2000.
- STS nº 6174/1993, de fecha 23 de septiembre de 1993.
- STS nº 753/1997, de fecha 21 de mayo de 1997.
- STS nº 1193/2010, de fecha 24 de febrero de 2011.
- STS nº 254/2011, de fecha 29 de junio de 2011.
- SAP Sevilla nº 152/2000, de fecha 6 de marzo de 2000.
- SAP Valladolid nº 130/2006, de fecha 30 de marzo de 2006.
- SAP Valencia nº 310/2006, de fecha 28 de abril de 2006.
- SAP Zaragoza nº 226/2012, de fecha 19 de junio de 2012.
- SAP Murcia nº 80/2012, de fecha 16 de octubre de 2012.
- SAP Tarragona nº 71/2013, de fecha 14 de febrero de 2013.
- SAP Palma de Mallorca nº 8/2016, de fecha 12 de enero de 2016.
- SAP Madrid nº 356/2016, de fecha 20 de junio de 2016.
- SAP Murcia nº 383/2016, de fecha 12 de julio de 2016.
- AAP Sevilla nº 62/2006, de fecha 1 de marzo de 2006.
- Sentencia New York Times Co. vs. Sullivan.
- Sentencia Harte-Hanks Communications Inc. vs. Connaughton.
- Exp. nº 97-264-24255OI-JPO2 Ucayali, de fecha 3 de junio de 1998.
- Ejecutoria Suprema RN nº 4165-96 Lambayeque (Perú) de fecha 1 de octubre de 1997.

ANEXO

RELACIÓN DE SENTENCIAS EMPLEADAS PARA ESTUDIO PRÁGMATICO

A continuación, se consignarán las sentencias firmes revisadas en función del número que el CENDOJ les haya otorgado en el ROJ:

- **Sentencias emitidas en el año 2011**

1. SAP AL 1038/2011	26. SAP SS 136/2011
2. SAP TO 27/2011	27. SAP Z 397/2011
3. SAP S 75/2011	28. SAP VA 524/2011
4. SAP B 84/2011	29. SAP V 1805/2011
5. SAP MU 128/2011	30. SAP J 260/2011
6. SAP AL 764/2011	31. SAP ZA 159/2011
7. SAP J 232/2011	32. SAP Z 818/2011
8. SAP M 732/2011	33. STS 1861/2011
9. SAP TF 551/2011	34. SAP CS 759/2011
10. SAP L 47/2011	35. SAP AB 388/2011
11. SAP SE 1100/2011	36. SAP CR 424/2011
12. SAP BI 210/2011	37. SAP Z 1248/2011
13. SAP Z 890/2011	38. SAP C 1514/2011
14. SAP CO 229/2011	39. SAP Z 1294/2011
15. SAP MA 2334/2011	40. SAP M 6251/2011
16. SAP ZA 81/2011	41. SAP CO 612/2011
17. STS 1095/2011	42. SAP A 3617/2011
18. STS 1089/2011	43. SAP C 1799/2011
19. SAP SE 890/2011	44. SAP GC 1393/2011
20. SAP M 8305/2011	45. SAP SS 809/2011
21. SAP M 4791/2011	46. SAP LO 342/2011
22. SAP SA 199/2011	47. SAP LU 450/2011
23. SAP M 3570/2011	48. SAP M 10819/2011
24. SAP TE 88/2011	49. SAP BA 678/2011
25. SAP B 2775/2011	50. SAP Z 348/2011

51. SAP V 2939/2011	71. SAP CA 2232/2011
52. SAP CR 514/2011	72. SAP BA 1045/2011
53. SAP PO 1991/2011	73. SAP M 15323/2011
54. SAP CC 517/2011	74. SAP SE 3097/2011
55. SAP SA 470/2011	75. SAP GC 2394/2011
56. SAP V 4244/2011	76. SAP TO 872/2011
57. SAP LE 1018/2011	77. SAP M 16524/2011
58. SAP M 9038/2011	78. SAP B 13132/2011
59. STS 4828/2011	79. SAP LE 1442/2011
60. SAP B 8432/2011	80. SAP LU 1123/2011
61. SAP IB 2211/2011	81. SAP V 6141/2011
62. SAP CA 2449/2011	82. SAP J 1026/2011
63. SAP M 10197/2011	83. SAP GU 422/2011
64. SAP CR 739/2011	84. SAP CS 1372/2011
65. STS 6694/2011	85. SAP NA 551/2011
66. SAP PO 2735/2011	86. SAP M 16426/2011
67. SAP TF 3092/2011	87. SAP TF 3023/2011
68. SAP CS 1522/2011	88. SAP C 3927/2011
69. SAP Z 2700/2011	89. SAP S 1790/2011
70. SAP BA 1006/2011	90. SAP Z 3329/2011

- **Sentencias emitidas en el año 2012**

1. SAP CU 68/2012	12. SAP CO 809/2012
2. SAP M 701/2012	13. SAP M 1774/2012
3. SAP SA 63/2012	14. SAP O 357/2012
4. SAP V 547/2012	15. SAP M 2361/2012
5. SAP M 2679/2012	16. SAP LU 186/2012
6. SAP O 788/2012	17. SAP MU 374/2012
7. SAP LO 21/2012	18. SAP S 119/2012
8. SAP C 309/2012	19. SAP MA 702/2012
9. SAP M 613/2012	20. SAP V 534/2012
10. SAP SE 17/2012	21. SAP S 29/2012
11. SAP C 283/2012	22. SAP CA 552/2012

-
- | | |
|----------------------|----------------------|
| 23. SAP C 794/2012 | 57. SAP O 1631/2012 |
| 24. SAP GC 798/2012 | 58. SAP CS 598/2012 |
| 25. SAP MU 891/2012 | 59. SAP TF 1291/2012 |
| 26. SAP SE 768/2012 | 60. SAP B 7818/2012 |
| 27. SAP S 1120/2012 | 61. SAP J 568/2012 |
| 28. SAP M 4758/2012 | 62. SAP C 2148/2012 |
| 29. SAP AL 1074/2012 | 63. SAP Z 1733/2012 |
| 30. SAP V 1552/2012 | 64. SAP B 7815/2012 |
| 31. SAP B 7336/2012 | 65. SAP MA 2229/2012 |
| 32. SAP SO 93/2012 | 66. SAP M 10834/2012 |
| 33. SAP C 1788/2012 | 67. SAP GR 772/2012 |
| 34. SAP C 1559/2012 | 68. SAP GC 1471/2012 |
| 35. SAP B 4113/2012 | 69. SAP B 10240/2012 |
| 36. SAP LU 437/2012 | 70. SAP SE 2800/2012 |
| 37. SAP TF 1058/2012 | 71. SJP 95/2012 |
| 38. SAP J 1058/2012 | 72. SAP Z 1981/2012 |
| 39. SAP B 5871/2012 | 73. SAP LE 1122/2012 |
| 40. SAP MU 1094/2012 | 74. SAP CA 2516/2012 |
| 41. SAP B 3909/2012 | 75. SAP T 1405/2012 |
| 42. SAP M 7869/2012 | 76. SAP CA 1174/2012 |
| 43. SAP SE 1448/2012 | 77. SAP ML 167/2012 |
| 44. SAP AL 1190/2012 | 78. SAP S 1843/2012 |
| 45. SAP VI 983/2012 | 79. SAP B 10273/2012 |
| 46. SAP S 1812/2012 | 80. SAP IB 1726/2012 |
| 47. SAP T 574/2012 | 81. SAP SE 2503/2012 |
| 48. SAP T 600/2012 | 82. SAP IB 2217/2012 |
| 49. SAP LU 509/2012 | 83. SAP V 3690/2012 |
| 50. SAP MU 1172/2012 | 84. SAP CS 990/2012 |
| 51. SAP C 1767/2012 | 85. SAP B 10389/2012 |
| 52. SAP CE 91/2012 | 86. SAP Z 2175/2012 |
| 53. STS 3461/2012 | 87. SAP CC 838/2012 |
| 54. SAP G 1456/2012 | 88. SAP MU 2750/2012 |
| 55. SAP S 137/2012 | 89. SAP CA 2873/2012 |
| 56. SAP SA 525/2012 | 90. SAP MU 2613/2012 |

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 91. SAP M 17253/2012 | 98. SAP AV 473/2012 |
| 92. SAP O 3010/2012 | 99. SAP M 20032/2012 |
| 93. SAP LU 938/2012 | 100. SAP B 13166/2012 |
| 94. SAP M 18751/202 | 101. SAP GC 2608/2012 |
| 95. SAP CR 1374/2012 | 102. SAP PO 334/2012 |
| 96. SAP M 19970/2012 | 103. SAP NA 1318/2012 |
| 97. SAP C 3810/2012 | 104. SAP AB 1032/2012 |

• **Sentencias emitidas en el año 2013**

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. SAP B 917/2013 | 25. SAP A 1815/2013 |
| 2. SAP V 49/2013 | 26. SAP P 117/2013 |
| 3. SAP B 322/2013 | 27. SAP TF 478/2013 |
| 4. SAP B 232/2013 | 28. SAP NA 184/2013 |
| 5. SAP Z 763/2013 | 29. SAP M 5886/2013 |
| 6. SAP MU 106/2013 | 30. SAP OU 259/2013 |
| 7. SAP M 330/2013 | 31. STS 1933/2013 |
| 8. SAP GI 87/2013 | 32. SAP TF 1561/2013 |
| 9. SAP B 1908/2013 | 33. SAP GR 363/2013 |
| 10. SAP CC 133/2013 | 34. SAP P 142/2013 |
| 11. SAP MU 388/2013 | 35. SAP S 640/2013 |
| 12. SAP LU 129/2013 | 36. SAP SE 1026/2013 |
| 13. SAP Z 547/2013 | 37. SAP SE 1196/2013 |
| 14. SAP CA 677/2013 | 38. SAP Z 1303/2013 |
| 15. SAP J 267/2013 | 39. SAP M 11860/2013 |
| 16. SAP MA 115/2013 | 40. SAP CA 1538/2013 |
| 17. SJME L 173/2013 | 41. SAP M 7784/2013 |
| 18. SAP Z 546/2013 | 42. SAP A 4732/2013 |
| 19. STS 744/2013 | 43. SAP LE 814/2013 |
| 20. SAP BI 1891/2013 | 44. SAP GR 805/2013 |
| 21. SAP L 171/2013 | 45. SAP GR 376/2013 |
| 22. SAP V 1946/2013 | 46. SAP M 9724/2013 |
| 23. SAP VA 34/2013 | 47. SAP CR 596/2013 |
| 24. SAP L 174/2013 | 48. SAP OU 399/2013 |

-
- | | | | |
|-----|------------------|------|------------------|
| 49. | SAP V 2237/2013 | 83. | SAP GR 1362/2013 |
| 50. | SAP AL 668/2013 | 84. | SAP M 17836/2013 |
| 51. | STS 2916/2013 | 85. | SAP BA 1158/2013 |
| 52. | SAP C 1760/2013 | 86. | SAP OU 856/2013 |
| 53. | SAP CC 375/2013 | 87. | SAP CC 732/2013 |
| 54. | SAP ML 121/2013 | 88. | SAP CR 1163/2013 |
| 55. | SAP LE 987/2013 | 89. | SAP CS 1188/2013 |
| 56. | SAP O 2007/2013 | 90. | SAP OU 746/2013 |
| 57. | SAP VA 802/2013 | 91. | SAP MA 3254/2013 |
| 58. | SAP CA 1523/2013 | 92. | SAP Z 2306/2013 |
| 59. | SAP BI 940/2013 | 93. | SAP A 3323/2013 |
| 60. | SAP LE 985/2013 | 94. | SAP P 366/2013 |
| 61. | SAP O 1928/2013 | 95. | SAP IB 2092/2013 |
| 62. | SAP LU 432/2013 | 96. | SAP O 3212/2013 |
| 63. | SAP NA 734/2013 | 97. | SAP AB 973/2013 |
| 64. | SAP GC 1755/2013 | 98. | SAP M 15566/2013 |
| 65. | SAP CC 489/2013 | 99. | SAP S 2071/2013 |
| 66. | SAP Z 1586/2013 | 100. | SAP CO 1257/2013 |
| 67. | SAP TF 2264/2013 | 101. | SAP B 16931/2013 |
| 68. | SAP M 20817/2013 | 102. | SAP M 18991/2013 |
| 69. | SAP A 4311/2013 | 103. | SAP CS 1169/2013 |
| 70. | SAP J 1107/2013 | 104. | SAP V 5660/2013 |
| 71. | SAP OU 640/2013 | 105. | SAP IB 2284/2013 |
| 72. | SAP Z 2465/2013 | 106. | SAP Z 2627/2013 |
| 73. | SAP O 3165/2013 | 107. | SAP GU 576/2013 |
| 74. | SAP Z 2428/2013 | 108. | SAP B 15746/2013 |
| 75. | SAP VI 265/2013 | 109. | SAP M 18692/2013 |
| 76. | SAP IB 1661/2013 | 110. | SAP MA 3484/2013 |
| 77. | SAP M 10963/2013 | 111. | SAP SS 710/2013 |
| 78. | SAP GR 1145/2013 | 112. | SAP SA 720/2013 |
| 79. | SAP GR 1123/2013 | 113. | SAP NA 1363/2013 |
| 80. | SAP V 3052/2013 | 114. | SAP H 1310/2013 |
| 81. | SAP V 4377/2013 | 115. | SAP M 1955/2013 |
| 82. | SAP ZA 218/2013 | 116. | SAP M 19667/2013 |

- 117. SAP B 12978/2013
- 118. SAP VA 1523/2013

- 119. STS 6353/2013

- **Sentencias emitidas en el año 2014**

- | | |
|---------------------|----------------------|
| 1. SAP B 97/2014 | 30. SAP A 1097/2014 |
| 2. SAP H 85/2014 | 31. SAP CA 1128/2014 |
| 3. SAP V 247/2014 | 32. SAP V 2867/2014 |
| 4. SAP L 12/2014 | 33. SAP GC 618/2014 |
| 5. SAP C 136/2014 | 34. SAP M 6006/2014 |
| 6. SAP CO 78/2014 | 35. SAP CE 57/2014 |
| 7. SAP IB 170/2014 | 36. SAP M 5225/2014 |
| 8. SAP LU 69/2014 | 37. SAP IB 980/2014 |
| 9. SAP A 88/2014 | 38. SAP O 1037/2014 |
| 10. SAP V 428/2014 | 39. SAP V 2838/2014 |
| 11. SAP M 1224/2014 | 40. SAP M 5777/2014 |
| 12. SAP SS 224/2014 | 41. SAP HU 178/2014 |
| 13. SAP LE 138/2014 | 42. SAP V 1814/2014 |
| 14. SAP B 906/2014 | 43. SAP SE 822/2014 |
| 15. SAP L 77/2014 | 44. SAP V 1732/2014 |
| 16. SAP M 3997/2014 | 45. SAP NA 586/2014 |
| 17. SJP 15/2014 | 46. SAP M 19284/2014 |
| 18. SAP CA 369/2014 | 47. SAP A 2533/2014 |
| 19. SAP B 2211/2014 | 48. SAP IB 994/2014 |
| 20. SAP CU 75/2014 | 49. SAP BA 537/2014 |
| 21. SAP OU 483/2014 | 50. SAP Z 921/2014 |
| 22. SAP CC 168/2014 | 51. SAP AL 1090/2014 |
| 23. SAP GR 713/2014 | 52. SAP M 7310/2014 |
| 24. SAP Z 572/2014 | 53. SAP V 1926/2014 |
| 25. SAP CO 246/2014 | 54. SAP BU 332/2014 |
| 26. SAP GR 558/2014 | 55. SAP IB 1352/2014 |
| 27. SAP T 627/2014 | 56. SAP BU 455/2014 |
| 28. SAP VA 421/2014 | 57. SAP IB 1343/2014 |
| 29. SAP B 3216/2014 | 58. SJP 75/2014 |

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 59. SAP VI 323/2014 | 89. SAP M 15137/2014 |
| 60. SAP MU 1619/2014 | 90. SAP IB 2584/2014 |
| 61. SAP PO 747/2014 | 91. SAP PO 2814/2014 |
| 62. SAP V 2798/2014 | 92. SAP M 16019/2014 |
| 63. SAP O 2074/2014 | 93. SAP NA 898/2014 |
| 64. SAP M 9090/2014 | 94. SAP M 15994/2014 |
| 65. SAP TF 2487/2014 | 95. SAP LO 585/2014 |
| 66. SAP A 1885/2014 | 96. SAP M 14892/2014 |
| 67. SAP L 651/2014 | 97. SAP L 825/2014 |
| 68. SAP GC 1935/2014 | 98. SAP O 2662/2014 |
| 69. SAP M 8422/2014 | 99. SAP GR 2279/2014 |
| 70. SAP M 8675/2014 | 100. SAP B 14930/2014 |
| 71. SAP AB 786/2014 | 101. SAP AB 926/2014 |
| 72. SAP A 3019/2014 | 102. SAP NA 914/2014 |
| 73. SAP BU 491/2014 | 103. SAP P 361/2014 |
| 74. SAP TO 602/2014 | 104. SAP OU 947/2014 |
| 75. SAP LO 385/2014 | 105. SAP LO 610/2014 |
| 76. SAP Z 1577/2014 | 106. SJPL 145/2014 |
| 77. SAP C 517/2014 | 107. SAP O 3227/2014 |
| 78. SAP LO 466/2014 | 108. SAP MU 2891/2014 |
| 79. SAP H 881/2014 | 109. SAP M 15209/2014 |
| 80. SAP CR 944/2014 | 110. SAP S 1132/2014 |
| 81. SAP M 13867/2014 | 111. SAP B 14959/2014 |
| 82. SAP PO 2079/2014 | 112. SAP B 13511/2014 |
| 83. SAP MA 3280/2014 | 113. SAP C 3165/2014 |
| 84. SAP BA 963/2014 | 114. SAP MU 2912/2014 |
| 85. SAP L 768/2014 | 115. SAP TO 1135/2014 |
| 86. SAP B 9034/2014 | 116. SAP B 14250/2014 |
| 87. SAP LO 425/2014 | 117. SAP M 18363/2014 |
| 88. SAP V 3669/2014 | 118. SAP GC 3271/2014 |

- **Sentencias emitidas en el año 2015**

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. SAP SE 41/2015 | 33. SAP M 13945/2015 |
| 2. SAP MA 92/2015 | 34. SAP CC 668/2015 |
| 3. SAP LU 65/2015 | 35. SAP Z 1763/2015 |
| 4. SAP M 964/2015 | 36. SAP M 11616/2015 |
| 5. SAP C 19/2015 | 37. SAP IB 162/2015 |
| 6. SAP A 860/2015 | 38. SAP B 1412/2015 |
| 7. SAP GI 19/2015 | 39. SAP SE 574/2015 |
| 8. SAP VI 167/2015 | 40. SAP J 232/2015 |
| 9. SAP LE 271/2015 | 41. SAP CO 139/2015 |
| 10. SAP Z 579/2015 | 42. SAP B 1457/2015 |
| 11. SAP IB 493/2015 | 43. SAP MA 1369/2015 |
| 12. SAP Z 534/2015 | 44. STS 385/2015 |
| 13. SAP C 778/2015 | 45. SAP GR 397/2015 |
| 14. SAP CA 1415/2015 | 46. SAP H 881/2015 |
| 15. SJP 31/2015 | 47. SAP S 1076/2015 |
| 16. SAP GU 95/2015 | 48. SAP 168/2015 |
| 17. SAP BU 174/2015 | 49. SAP SE 2781/2015 |
| 18. SAP V 2135/2015 | 50. SAP M 13620/2015 |
| 19. SAP Z 595/2015 | 51. SAP HU 255/2015 |
| 20. SAP LE 1142/2015 | 52. SAP C 2361/2015 |
| 21. SAP TF 2416/2015 | 53. SAP NA 498/2015 |
| 22. SAP M 17661/2015 | 54. SAP V 2306/2015 |
| 23. SAP LE 382/2015 | 55. SAP V 2308/2015 |
| 24. SAP H 366/2015 | 56. SAP J 323/2015 |
| 25. SAP NA 184/2015 | 57. SAP SO 82/2015 |
| 26. SAP NA 416/2015 | 58. SAP M 8257/2015 |
| 27. SAP V 3836/2015 | 59. SAP IB 868/2015 |
| 28. SAP J 749/2015 | 60. SAP PO 964/2015 |
| 29. SAP O 2491/2015 | 61. SAP PO 963/2015 |
| 30. SAP B 10606/2015 | 62. SAP B 7853/2015 |
| 31. SAP ML 241/2015 | 63. SAP Z 1219/2015 |
| 32. SAP CO 972/2015 | 64. SAP C 3082/2015 |

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 65. SAP Z 2323/2015 | 89. SAP M 1357/2015 |
| 66. SAP BI 2547/2015 | 90. SAP IB 1449/2015 |
| 67. SAP BI 2257/2015 | 91. SAP IB 1438/2015 |
| 68. SAP Z 391/2015 | 92. SAP V 2567/2015 |
| 69. SAP Z 2268/2015 | 93. SAP CO 451/2015 |
| 70. SAP AL 1218/2015 | 94. SAP B 5606/2015 |
| 71. SAP ZA 388/2015 | 95. SAP TF 1482/2015 |
| 72. SAP O 2886/2015 | 96. SAP M 8517/2015 |
| 73. SAP TF 2121/2015 | 97. SAP B 5899/2015 |
| 74. SAP B 10672/2015 | 98. SAP M 8814/2015 |
| 75. SAP NA 396/2015 | 99. SAP GI 593/2015 |
| 76. SAP Z 1660/2015 | 100. SAP C 1805/2015 |
| 77. SAP ML 176/2015 | 101. SAP ZA 225/2015 |
| 78. SAP O 1621/2015 | 102. SAP M 8948/2015 |
| 79. SAP BI 1356/2015 | 103. SAP BA 625/2015 |
| 80. SAP S 371/2015 | 104. SAP M 9641/2015 |
| 81. SAP IB 1289/2015 | 105. SAP MU 1396/2015 |
| 82. SAP MA 2483/2015 | 106. SAP AL 703/2015 |
| 83. SAP M 11661/2015 | 107. SAP C 1287/2015 |
| 84. SAP IB 1432/2015 | 108. SAP ML 139/2015 |
| 85. SAP B 7789/2015 | 109. SAP BU 447/2015 |
| 86. SAP SA 385/2015 | 110. SAP M 1065/2015 |
| 87. SAP VA 787/2015 | 111. SAP V 4982/2015 |
| 88. SAP MU 1547/2015 | |